



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**  
**PROGRAMA DE POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS**

**FUERZAS ARMADAS Y CONSTRUCCIÓN DE HEGEMONÍA NACIONAL Y LOS  
PROCESOS DE CAMBIO EN AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XXI: BOLIVIA,  
ECUADOR Y VENEZUELA**

**TESIS**

**QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE  
MAESTRO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS**

PRESENTA:

**YETIANI YASEM ROMERO REBOLLO**

**TUTOR**

**DR. DAVID ISRAEL ALBERTO HERRERA SANTANA**  
Facultad de Filosofía y Letras

**Comité tutor y miembros del jurado**

Dra. Ana Esther Ceceña Martorella  
Instituto de Investigaciones Económicas

Dr. Fabian González Luna  
Facultad de Filosofía y Letras

Dr. David Barrios Rodríguez  
Instituto de Investigaciones Económicas

Dra. Sandra Kanety Zavaleta  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX. MAYO 2023



Universidad Nacional  
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**Biblioteca Central**



**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**  
**Tesis Digitales**  
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**  
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.



# Índice

<b>Introducción .....</b>	<b>3</b>
<b>Capítulo 1. Hegemonía, Estado e ideología en América Latina .....</b>	<b>12</b>
<b>1.1 Hegemonía .....</b>	<b>12</b>
1.1.1 El concepto gramsciano de hegemonía .....	12
1.1.2 Hegemonía y poder mundial .....	14
1.1.3 Hegemonía en el contexto latinoamericano .....	18
<b>1.2 El Estado en América Latina .....</b>	<b>26</b>
1.2.1 El Leviatán Criollo.....	26
1.2.2 Fuerzas Armadas y Estado .....	31
1.2.3 El Estado neoliberal.....	37
<b>1.3 Ideología .....</b>	<b>39</b>
1.3.1 Concepto de ideología .....	39
1.3.2 Ideología y fuerzas armadas en América Latina .....	45
<b>2 Antecedentes nacionales .....</b>	<b>51</b>
<b>2.1 Venezuela.....</b>	<b>51</b>
2.1.1 Del periodo independentista a la construcción del Estado .....	51
2.1.2 La Guerra Federal y el triunfo del Liberalismo.....	58
2.1.3 Las dictaduras del siglo XX .....	60
2.1.4 El puntofijismo o la consolidación hegemónica .....	64
<b>2.2 Ecuador .....</b>	<b>69</b>
2.2.1 La guerra de Independencia .....	69
2.2.2 Construcción del Ecuador .....	74
2.2.3 De la Revolución Liberal a la Revolución Juliana .....	82
2.2.4 Inestabilidad y golpes de Estado en el siglo XX .....	85

<b>2.3</b>	<b>Bolivia .....</b>	<b>90</b>
2.3.1	La larga guerra de independencia.....	90
2.3.2	La experiencia boliviana de construcción del Estado-nación .....	98
2.3.3	De la guerra del Pacífico a la guerra del Chaco.....	104
2.3.4	De la generación del Chaco y la Revolución Nacional a los gobiernos militares .....	111
2.3.5	La época neoliberal .....	119
<b>3</b>	<b><i>Gobiernos de izquierda, fuerzas armadas y hegemonía .....</i></b>	<b>124</b>
<b>3.1</b>	<b>Ideología y hegemonía.....</b>	<b>124</b>
3.1.1	Venezuela: del bolivarianismo al Socialismo del siglo XXI .....	125
3.1.2	Ecuador y Bolivia: Socialismo del siglo XXI y Buen Vivir .....	131
3.1.3	Fuerzas Armadas e ideología .....	143
<b>3.2</b>	<b>Fuerzas Armadas y gobiernos de izquierda .....</b>	<b>149</b>
3.2.1	Relaciones entre las Fuerzas Armadas y el poder político .....	150
3.2.2	Bases Materiales.....	161
<b>3.3</b>	<b>Dominación estadounidense.....</b>	<b>174</b>
3.3.1	Seguridad hemisférica y hegemonía estadounidense .....	174
3.3.2	La política estadounidense en una época de cambios en Venezuela, Bolivia y Ecuador .....	179
	<b><i>Conclusiones.....</i></b>	<b>191</b>
	<b><i>Referencias.....</i></b>	<b>197</b>

## Introducción

El papel de las fuerzas armadas en América Latina ha sido de vital importancia a lo largo de la historia. Desde la fundación de los Estados-nación latinoamericanos en el siglo XIX, los militares fueron parte esencial de la construcción del Estado y la hegemonía política. En el siglo XX, la institución castrense jugó constantemente un papel interventor de la política, apoyando y deponiendo gobiernos según sus intereses y su propia visión de soberanía y patria.

A principios del siglo XXI, la llegada de varios gobiernos progresistas a la región cambió el clima geopolítico de América Latina. El estudio de las fuerzas armadas en los gobiernos de izquierda que tuvieron un proceso de reconstrucción del Estado a principios del presente siglo resulta primordial para entender las distintas derivas que tomaron estos países, con la mayoría de ellos revirtiendo los procesos de cambio a partir de la segunda década del siglo XXI.

Los países que interesan a esta investigación por su relevancia son Ecuador, Venezuela y Bolivia. El presente trabajo constituye la continuidad a una tesis de licenciatura que se enfocó en Venezuela. Por otro lado, la elección de Ecuador y Bolivia se debe a que estos países no realizaron procesos de cambio completos al interior de la institución castrense como lo hizo Venezuela, lo que llevó a diferentes derivas en los respectivos procesos.

Por otra parte, es importante tomar en cuenta el factor estadounidense, pues sin él no se pueden explicar otros aspectos de las realidades de América Latina. Estados Unidos también ha jugado un papel histórico con su intervencionismo a lo largo del siglo XX. Resulta trascendental conocer el papel estadounidense para entender la situación política de estos países y de la región en general en la segunda década del siglo XXI.

Un análisis social e interdisciplinario de las fuerzas armadas en estos países resulta una necesidad, entendiendo a la institución castrense como parte de los procesos de transformación social y reconstrucción del Estado. Este análisis debe tomar en cuenta el papel de las fuerzas armadas en su dimensión social, económica, histórica y geopolítica. En

lo que respecta a los tres casos de estudio, cabe resaltar algunos elementos que se abordan a lo largo de la investigación.

Venezuela, con Hugo Chávez iniciando el ciclo de gobiernos de izquierda en 1999, realizó un profundo proceso de transformación en la ahora Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), lo que llevó a los militares a comprometerse con el proyecto político de la Revolución Bolivariana, además de convertir a la Fuerza Armada en parte fundamental del proyecto político bolivariano.

Desde la muerte de Hugo Chávez, la situación venezolana se ha caracterizado por una constante inestabilidad política y económica. A esto se le agrega un asedio diplomático desde 2015 encabezado por Estados Unidos tras declarar a Venezuela como una amenaza a su seguridad nacional.

En Ecuador, tras la llegada al poder de Rafael Correa, se inició la así llamada Revolución Ciudadana, que realizó cambios tímidos en las Fuerzas Armadas del Ecuador debido al poder de los militares. Esos cambios se expresaron en las políticas de seguridad y defensa que se alejaron de las políticas de seguridad impulsadas por Estados Unidos. Sin embargo, no hubo cambios profundos en la estructura de las fuerzas armadas, sobre todo hablando ideológicamente.

El ciclo de la Revolución Ciudadana finalizó en las elecciones de 2017, cuando se eligió como candidato de Alianza País (partido que había sido la plataforma electoral de la Revolución Ciudadana) a Lenin Moreno, quien al ser elegido terminó tomando distancia de Correa, regresando a políticas conservadoras y realizando un nuevo acercamiento a Estados Unidos.

En Bolivia, tras el triunfo de Evo Morales a finales de 2005, se inició el proceso de cambio. Durante el gobierno de Morales, las fuerzas armadas tuvieron una amplia participación en tareas de seguridad ciudadana y labores policiales, además de su participación en tareas de desarrollo, de apoyo a los sistemas de salud y educación y en la protección y control de la explotación de recursos naturales.

El gobierno del MAS sí realizó cambios estructurales e ideológicos a las fuerzas armadas, pero estos vieron sus límites durante el golpe de Estado de 2019, orquestado por la derecha

electoral con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y el alto mando de las fuerzas armadas.

La investigación tuvo tres ejes de análisis. En primer lugar, el elemento ideológico en los tres casos de estudio. Los tres proyectos políticos retoman categorías ideológicas como el bolivarianismo y el socialismo del siglo XXI, pero solo los militares venezolanos asumieron y asimilaron la ideología de la Revolución Bolivariana, mientras que los militares ecuatorianos y bolivianos no tuvieron un proceso de reestructuración profunda, lo que implicó también que no hubo un cambio en la ideología de los militares.

El segundo eje para entender la actuación de los militares, son las bases materiales de las respectivas fuerzas armadas. Se entiende como bases materiales las capacidades tecnológicas de cada una de las instituciones castrenses, sus diferencias en la disciplina militar, sus capacidades de despliegue, el número de reservistas, las reorganizaciones producto de los cambios en las concepciones de seguridad, estrategias específicas en casos de conflictos y doctrinas militares.

Un último aspecto problemático es el identificado en la hegemonía. Se reconoce en Estados Unidos un sujeto imperial y hegemónico. Existen autores que argumentan que América Latina ha estado fuera de la vista de los intereses globales, siendo un área marginal de los temas estratégicos. Este aparente alejamiento del tradicional papel interventor de Estados Unidos ocurrió fundamentalmente durante la administración de Barack Obama. Sin embargo, tan solo por tomar un ejemplo, debe recordarse que fue en la presidencia de Obama que se convirtió a Venezuela en una amenaza a la seguridad interna de Estados Unidos, movido por sus propios intereses económicos y políticos. Además, se debe señalar que Estados Unidos diseña su estrategia de manera global, abarcando todos los rincones del planeta.

Ahora bien, de estos tres aspectos problemáticos surge la necesidad teórico-metodológica por definir lo que se entiende por ideología y hegemonía. De tal manera, se propuso el acercamiento a las fuerzas armadas a partir del concepto de hegemonía. Entendido desde una concepción gramsciana, la hegemonía es el proceso en que un grupo o clase social logra



ejercer dominio sobre el resto de la sociedad mediante la coerción y el consenso. Para Gramsci, la supremacía de un grupo se manifiesta como dominio sobre los grupos adversarios, a los que tiende a liquidar y someter con la fuerza armada, y como dirección intelectual y moral sobre sus grupos afines o aliados (Gramsci, 1999).

Esta concepción vale para los casos nacionales. A esto se le agrega una dimensión más amplia de la hegemonía en la que un sujeto hegemónico ejerce el liderazgo por medio de la fuerza y la razón. En el plano de las relaciones entre estados, Estados Unidos ejerce la hegemonía mundial como dominación a lo largo del planeta (Ceceña, 2002).

Tomando en cuenta a las fuerzas armadas como el sujeto de la investigación, se considera su papel dentro de un bloque histórico en el contexto nacional. Dicho bloque o fuerza política, en el caso de la investigación, se expresa en los gobiernos progresistas de cada caso de estudio que, al llegar al poder, buscan el apoyo de las fuerzas armadas. Por otro lado, se considera a Estados Unidos como un sujeto externo que, mediante su injerencismo, ejercen influencia (o no) en las fuerzas armadas para romper con el bloque histórico.

En cuanto a la ideología, se considera esta como la concepción de mundo que, en el contexto de la hegemonía, es el sentido común, es decir, que permea a la totalidad de la sociedad. Para que una ideología se constituya en sentido común se necesita la construcción de una hegemonía, por lo que ambos conceptos están estrechamente relacionados.

De tal manera, se buscó indagar en cuál fue el papel de las fuerzas armadas en los procesos de transformación política de Venezuela, Ecuador y Bolivia y cómo influyó, tanto en términos de cambios ideológicos, materiales y estratégicos de las fuerzas armadas como en la estrategia de defensa de Estados Unidos en América Latina. Dicha cuestión fue la pregunta de investigación del trabajo, mientras que la hipótesis fue:

Los procesos de transformación política en Venezuela, Ecuador y Bolivia incluyeron nuevas concepciones de seguridad nacional y visiones específicas sobre el papel de las fuerzas armadas expresadas en términos ideológicos, materiales y estratégicos, lo que hace de los militares parte esencial para la continuidad y desarrollo de estos procesos. En Venezuela implicó una transformación profunda en la institución militar, mientras en Bolivia y Ecuador

se realizaron cambios más superficiales. La estrategia de defensa de Estados Unidos hacia América Latina, por ello, también se ha adaptado: en Venezuela se promueve el cambio de régimen “desde fuera”, que se ha visto limitado por la lealtad de los militares al proceso político que no permite penetrar la institución militar; en Ecuador, sin desembocar en una vía militar o de golpe de Estado, los limitados cambios en las fuerzas armadas se hicieron ver tras un reaceramiento a la estrategia estadounidense; en Bolivia, la aparente lealtad institucional de los militares al proyecto político se puso en entredicho tras su apoyo al golpe de Estado de 2019. En ambos casos, se observa una estrategia “desde dentro” de las fuerzas armadas, tradicionalmente cercanas a la estrategia estadounidense, aunque en el caso ecuatoriano, esta estrategia no se desplegó completamente debido al cambio de rumbo del país.

Por su parte, el objetivo general de la investigación fue analizar el papel de las fuerzas armadas en los procesos de transformación política en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Mientras que los objetivos particulares fueron determinar los cambios realizados en las fuerzas armadas y las visiones estratégicas de los tres países y analizar la estrategia de defensa de Estados Unidos para América Latina en general y para Venezuela, Ecuador y Bolivia en particular.

En el desarrollo de la investigación se empleó un método comparativo para acercarse al sujeto principal de la investigación, tomando en cuenta las diferencias, similitudes y especificidades, tanto de cada una de las fuerzas armadas, como de los procesos políticos de los tres casos de estudio. Se utilizó el análisis documental, con perspectiva geopolítica, como técnica de estudio para el acercamiento a los sujetos de investigación. Aunado a esto, fue necesario establecer un análisis histórico del desarrollo de hegemonías y construcción del Estado-nación en cada caso de estudio para comprender los momentos en que se iniciaron los procesos de cambio.

El cuerpo documental estuvo constituido de fuentes primarias, como los son documentos institucionales, tanto de los gobiernos como de las instituciones militares. Es decir, documentos doctrinarios y estratégicos militares que tienen un carácter público, así como leyes relativas a la defensa nacional. También se tomaron en cuenta discursos y textos de

los jefes de Estado de cada país. Igualmente, se revisaron documentos del gobierno de Estados Unidos, como las estrategias del Comando Sur y las políticas del Departamento de Estado hacia América Latina. Por último, las fuentes secundarias de la investigación fueron fuentes hemerográficas, tanto de medios locales como internacionales.

En lo que corresponde al estudio del papel de las fuerzas armadas en la sociedad, en la academia hay un amplio campo de estudios sobre las llamadas relaciones civiles-militares. En América Latina existen trabajos bibliográficos como los de Skkar y Gianella (2014) que dan cuenta de la amplitud de este campo de estudio. Además, también existe producción académica sobre las políticas militares de los gobiernos de izquierda y/o las relaciones entre estos gobiernos y las fuerzas armadas (véase Battaglini, 2015)

En Venezuela, el estudio de las fuerzas armadas empezó a crecer después del intento de golpe de Estado de 1992. A partir de 1999, tras los cambios iniciados en la Fuerza Armada Nacional realizados por el gobierno de Hugo Chávez, el tema ha sido una constante en el estudio del país, tratándose del principal caso de gobiernos progresistas con una fuerte relación con las fuerzas armadas.

Algunos autores que se pueden señalar al respecto son Irwin, que desde una perspectiva histórica y en base a postulados *huntingtonianos*, tiene una gran producción en el tema (véase Irwin y Micett, 2008); Jácome es otra autora interesada en el tema de seguridad y fuerzas armadas en Venezuela (véase Jácome 2011). Sin embargo, los estudios se centran en los cambios realizados durante la primera década del siglo XXI, siendo marginales los estudios de la Fuerza Armada a partir del 2013.

En el caso ecuatoriano, los estudios de las fuerzas armadas se concentran en su papel después de la dictadura de los años setenta y en el periodo anterior al inicio de la Revolución Ciudadana (véase García, 2005, Velasco, 2011 y Jiménez, 2021). Sobre el gobierno de Correa se puede mencionar los trabajos de Saltos (2017), Ordoñez (2016) y Pérez (2018). En este caso, el tema de las fuerzas armadas es visto como parte de la problemática general de gobiernos de izquierda y democracia.

Sobre Bolivia, la producción académica alrededor de los gobiernos del MAS es consideradamente amplia desde la llegada al poder de Evo Morales (Archondo, 2007). Sobre las relaciones con las fuerzas armadas, Molina (2018) expone las políticas del gobierno de Morales sobre los militares desde una perspectiva más periodística. Igualmente, Rocabado (2012 y 2018) analiza la posición de la institución dentro del proyecto del MAS.

Por su parte, el papel de Estados Unidos en América Latina ha sido ampliamente estudiado. Autores como Benítez (2018) reconocen un cambio en las concepciones estadounidenses después de los atentados de 2001 en Nueva York y una actual estrategia enfocada en el combate al terrorismo y el crimen organizado. Otras perspectivas, como la de Ana Esther Ceceña (2018), reconocen una continuidad en las políticas estadounidenses con una estrategia concebida antes de 2001 conocida como dominación de espectro completo.

En Estados Unidos, la región de América Latina es ampliamente estudiada. En general existen dos grandes vertientes. Una ligada a la visión estratégica de las fuerzas armadas estadounidenses y una academia autónoma de esas visiones. El primer caso está ubicado en universidades militares, como el colegio de guerra del ejército (*U.S. Army War College*), el Instituto de Investigación de la Fuerza Aérea (*Air Force Research Institute*) o la Universidad Nacional de Defensa (*National Defense University*). Esta academia militar coincide en la importancia de América Latina en el sentido de que es una región en la que se ubican posibles amenazas como el terrorismo, el crimen organizado y gobiernos de izquierda antiestadounidenses (véase Ellis 2017, y Marcella 2007). La otra academia está ubicada en las universidades civiles estadounidenses y estudia América Latina desde una amplia variedad de temas, disciplinas y posiciones. Entre esta variedad se encuentran las que voltean a ver las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, tanto en su papel histórico como contemporáneo (por ejemplo, Trinkunas, 2005 que estudia el caso venezolano).

El presente trabajo de tesis se dividió en tres capítulos. El primero corresponde a lo que se podría denominar como un capítulo teórico metodológico. De tal manera, se define de manera amplia y bajo la concepción gramsciana el concepto de hegemonía, que conlleva el

de ideología y bloque histórico. Después se extrapola dicho concepto al ámbito del poder mundial, por lo que se explica históricamente la constitución de un sujeto hegemónico cuyo poder tiene su centro en Estados Unidos. Subsiguientemente, se explica la hegemonía en el contexto latinoamericano, tomando en cuenta la constitución del capitalismo latinoamericano, el ejercicio de la hegemonía mundial sobre la región y también la constitución de hegemonías y bloques históricos nacionales. Posteriormente, a manera de reconstrucción histórica, se explica el funcionamiento del Estado-nación en América Latina, desde su constitución en el siglo XIX a su metamorfosis durante el neoliberalismo. En este mismo sentido, se explica el papel de las fuerzas armadas dentro del Estado y como parte esencial del mismo. Finalmente, se explica de manera amplia el concepto de ideología para después explicar el vínculo histórico entre las fuerzas armadas y las ideologías dominantes, es decir, como guardianes del sentido común y, por lo tanto, del orden establecido.

En el segundo capítulo se realizó un análisis histórico de las trayectorias nacionales de cada caso de estudio. Es decir, se revisó los proyectos de hegemonía históricos, la constitución del Estado-nación y la formación y evolución del sector militar dentro de esas trayectorias históricas. En el apartado sobre Venezuela, se señalan momentos clave en la construcción del Estado y de proyectos hegemónicos, como su integración a la República de Colombia (Gran Colombia), la Guerra Federal y la emergencia del Liberalismo, el periodo de dictaduras de la primera mitad del siglo XX y finalmente el periodo democrático de la segunda mitad de dicho siglo.

Sobre Ecuador, se destacan sus vínculos históricos a Perú, su integración al igual que Venezuela a la Gran Colombia, la construcción a lo largo del siglo XIX de dos élites diferenciadas con proyectos hegemónicos distintos en las regiones de la costa y la sierra, el también ascenso de los liberales bajo la Revolución Liberal a inicios del siglo XX, una constante inestabilidad y golpes de Estado durante el siglo XX con periodos en los que gobernaron los militares y finalmente una democracia inestable desde finales de los años setenta que desembocó en una crisis orgánica a inicios del siglo XXI.

En Bolivia, una larga guerra de Independencia y la intervención de caudillos extranjeros dan el inicio al Estado-nación boliviano. Los vínculos históricos con Perú y Argentina fueron

definitorios durante el siglo XIX, pasando por la Confederación Perú-boliviana hasta la Guerra del Pacífico, momento clave en el que Bolivia perdió su litoral, pero también inició un proyecto de hegemonía oligárquico. En el siglo XX, la Guerra del Chaco nuevamente va a terminar con la derrota de Bolivia y a sacudir a las elites y al conjunto de la sociedad, desembocando en un proceso que llevaría a la Revolución Nacional de 1952. Entre este proceso, las fuerzas armadas casi desaparecerían para que finalmente tomaran el poder en la década de 1960. Tras una transición a la democracia y a las políticas neoliberales en los años de la década de 1980, la década de 1990 vería el surgimiento del movimiento indígena junto a una crisis orgánica a inicios del siglo XXI, al igual que en Ecuador.

En el último capítulo se hace una exploración sobre los proyectos políticos de los procesos de cambio en los tres casos de estudio. Se aborda la construcción o no de proyectos de construcción de hegemonía, siendo el caso venezolano el que más se acercó a una transformación de la sociedad en su conjunto, y el ecuatoriano el que no logró la construcción de dicho proyecto. En el mismo sentido, se abordan los preceptos ideológicos de los tres casos de estudio, siendo el *socialismo del siglo XXI* una concepción compartida. Por su parte, en Bolivia y Ecuador las concepciones del *Buen Vivir* también son centrales en los proyectos políticos. Al respecto, también se analiza qué tanto dichas concepciones ideológicas permearon a las fuerzas armadas, siendo nuevamente el caso venezolano el más completo en ese sentido.

Posteriormente, se exploran los cambios en las relaciones entre el poder político y el poder militar, así como en los cambios realizados al interior de las fuerzas armadas de cada caso de estudio. Consecuentemente, se exploran los aspectos de las bases materiales de las fuerzas armadas durante los gobiernos de izquierda en cuestión, como lo son el presupuesto militar, las compras de armas y el tamaño en términos de efectivos de las fuerzas armadas. Finalmente, se explora en el papel de Estados Unidos abordando los mecanismos de dominación militar y diplomáticos, tanto históricamente como en el curso de los procesos de cambio en cuestión.

## **Capítulo 1. Hegemonía, Estado e ideología en América Latina**

Abordar el tema de las fuerzas armadas y sus relaciones con los gobiernos de izquierda implica reconocer relaciones de fuerza que los actores políticos despliegan en el marco del Estado. Por tal motivo, es necesario un marco teórico-metodológico para entender estas relaciones de poder. En el presente capítulo se abordará el concepto de hegemonía para entender dichas correlaciones de fuerza en el marco del poder estatal. Igualmente, es necesario abordar el tema del Estado en América Latina en cuanto constructo histórico en el marco del capitalismo en la región.

### **1.1 Hegemonía**

Para entender el papel de las fuerzas armadas en América Latina, así como la ideología que en determinado momento histórico ostentan los militares y, por lo tanto, entender cuáles son sus bases materiales, es necesario partir del concepto de *hegemonía*. Dicho concepto fue desarrollado por Antonio Gramsci en sus *Cuadernos de la cárcel*. En este apartado se analiza el concepto gramsciano de hegemonía, en el cual se puede notar el uso de la selección de textos realizado por Forgacs (2000), así como los Cuadernos en sí, además de otros autores. Posteriormente se indaga en la hegemonía entendida desde el poder mundial, donde Estados Unidos ocupa la posición de sujeto hegemónico. Finalmente se explora en la hegemonía en el contexto latinoamericano, considerando la configuración del capitalismo en América Latina y la posición de la región en el sistema capitalista.

#### *1.1.1 El concepto gramsciano de hegemonía*

En términos sintéticos, se entiende la hegemonía como el proceso en el que un grupo o clase social logra ejercer dominio y dirección sobre el resto de la sociedad mediante la coerción y el consenso. Para Gramsci, el concepto de hegemonía tiene un significado epistemológico. La realización de un aparato hegemónico, al crear un nuevo terreno ideológico, determina una transformación en la conciencia y los métodos del conocimiento. Es decir, es un hecho de conocimiento y filosófico (Gramsci, 2000, p. 192).

Para Portelli (1977), la dirección hegemónica es cultural e ideológica, esto significa que la hegemonía es la primacía de la sociedad civil sobre la sociedad política (p.70). Dichas sociedades, diferenciadas, pero estrechamente vinculadas, son parte de la llamada superestructura. La sociedad civil es el campo de acción de la hegemonía, formado por los “organismos privados” que constituyen la ideología de la clase dirigente. Por su parte, la sociedad política, o Estado, es una prolongación de la sociedad civil que “agrupa el conjunto de las actividades de la superestructura que dan cuenta de la función de coerción [...] la función de la sociedad política es el ejercicio de la coerción, la conservación, por la violencia, del orden establecido” (p. 28).

Por lo tanto, la construcción de hegemonía es un proceso de “formación y desarrollo de la sociedad civil: elaboración de la ideología” (Portelli 1977, p. 72). En dicho proceso el papel de los intelectuales es fundamental, pues es este grupo social el que es capaz de dar forma y coherencia a la estructura ideológica de la clase dominante, por lo tanto, hablamos de los intelectuales de la clase dominante. La tarea de los intelectuales es importante no solo en la propia elaboración de la ideología, también porque la hegemonía “requiere del momento de la dirección intelectual y moral de las élites dominantes a escala nacional” (Roux, 2002, p. 150).

Por su parte, la ideología es el campo de acción de la sociedad civil. Es, además, una concepción de mundo que abarca todas las actividades de la clase dominante (Portelli, p. 18). Una ideología se convierte en hegemónica cuando se vuelve en sentido común, es decir, que se ha propagado en el resto de las clases subalternas (p. 21). En otras palabras, cuando se cumple con la función de consenso.

La sociedad civil contiene instituciones fundamentales, las cuales son las encargadas de difundir la ideología de la clase dominante: la Iglesia, la escuela y la prensa. Por su parte, de especial interés es que se menciona a los oficiales del ejército como organizaciones que incorporan a su actividad una “fracción cultural” (Portelli, p. 25). Sin embargo, siguiendo el razonamiento, la institución del ejército o Fuerzas Armadas estarían ubicadas dentro de la sociedad política, en tanto son responsables de ejecutar la función de coerción en la hegemonía.



La construcción de hegemonía pasa por diferentes momentos. Para que una clase o grupo social se vuelva dirigente, es necesario que ese grupo construya y consolide a la sociedad civil, a saber, que se desarrolle una ideología capaz de organizar al conjunto de la sociedad en tanto visión de mundo:

En un sistema realmente hegemónico, el bloque ideológico es factor de hegemonía en un doble sentido: en su mismo seno, en la medida en que los representantes de la clase dirigente orientan a los de los otros grupos sociales, pero sobre todo en el nivel del bloque ideológico al posibilitar a la clase dirigente controlar a otras capas sociales por intermedio del bloque ideológico (Portelli, p. 72).

La consolidación de una ideología permite al grupo social en cuestión volverse dirigente, incluso antes de tomar el poder del Estado o antes de volverse dominante, puesto que “la hegemonía jamás es total y un mismo grupo puede ser simultáneamente dirigente y dominante” (Portelli, p. 75).

Un punto fundamental en el desarrollo de la hegemonía es la correlación de fuerzas en un momento histórico dado. Gramsci identifica tres momentos o niveles en las relaciones de fuerza: 1. la relación de las fuerzas sociales o el nivel de desarrollo de las fuerzas de producción (estructura), que determina el nivel de desarrollo de distintos grupos sociales, lo que a su vez permite observar si existen condiciones para la transformación del sistema hegemónico; 2. la relación de fuerzas políticas o el grado de homogeneidad de los diferentes grupos sociales que marca el paso de la estructura a la superestructura; y 3. la relación de fuerzas militares, que se pueden distinguir en el nivel técnico militar y en uno político militar (Gramsci, p. 204-206).

### *1.1.2 Hegemonía y poder mundial*

Hasta aquí toda la conceptualización en torno a la hegemonía se da en un contexto que podemos llamar nacional, más aún al recordar que las reflexiones de Gramsci giran en torno a la Italia de la primera mitad del siglo XX. Portelli (1977) señala que el análisis de Gramsci se refiere a una posición histórica y geográfica determinada, no obstante “el estudio del

papel de la clase fundamental y de su rol histórico a nivel internacional permitirá comprender mejor su estrategia a nivel nacional” (p. 82).

En los mencionados momentos de las relaciones de fuerza, es que podemos ver un paso al análisis de la situación internacional, específicamente en el segundo y tercer momento. Durante el momento político, el desarrollo del grupo dominante se presenta como una fuerza de expansión universal. Además, las relaciones internacionales se entrelazan con las relaciones económicas y territoriales de los Estados-nación, lo que permite que una ideología (entiéndase la ideología de una clase que ha logrado volverse hegemónica en un Estado-nación determinado) pueda difundirse en otros países con fuerzas sociales y productivas menos desarrolladas (Gramsci, 2000, p. 206).

En cuanto al tercer momento de las relaciones de fuerza, la situación internacional se hace más evidente cuando Gramsci explica el hipotético ejemplo de la relación de dominación militar de un país que busca su independencia (Gramsci, 2000, p. 207). La construcción de fuerzas militares, por tanto, pasa por el momento hegemónico, tanto a nivel nacional como internacional.

Al tratar de identificar cambios en la hegemonía, tanto en lo que se refiere a nivel nacional como internacional, se debe evitar lo que Gramsci identifica como un error metodológico: la incapacidad de distinguir entre lo orgánico y lo coyuntural. Es decir, lo relativamente permanente de lo inmediato u ocasional e incluso accidental (Gramsci, 2000, p. 201). De tal manera, Cox (2016) señala que “los cambios básicos en las relaciones de poder internacionales o de orden mundial, que son observados como cambios en el balance estratégico-militar y geopolítico, pueden identificarse con cambios fundamentales en las relaciones sociales” (p. 145).

De tal forma y de acuerdo con el momento histórico actual, podemos ampliar el concepto de hegemonía. Para Ceceña (2002), la hegemonía es el reconocimiento de un orden social y, por lo tanto, requiere una construcción simultánea en los planos militar, económico, político y cultural. En esta perspectiva, la hegemonía ya no es ejercida estrictamente por un grupo o clase social, sino por un sujeto hegemónico o *hegemón*, el cual es aquel sujeto

colectivo capaz de ejercer el liderazgo, en concreto, de dirigir por la fuerza y la razón, por convicción e imposición (p. 160-161).

La hegemonía, dentro del sistema de reproducción capitalista, ha sido construida largamente sobre la base de las instituciones de la modernidad capitalista. Dichas instituciones se pueden considerar como instrumentos hegemónicos,

desarrollados en Europa a partir del siglo XVIII por la teoría política liberal con vistas a garantizar la legitimidad y gobernabilidad del Estado de derecho moderno en las sociedades capitalistas emergentes. Se trata de instrumentos hegemónicos porque fueron diseñados para garantizar la reproducción ampliada de las sociedades capitalistas de clases y porque son creíbles como garantes de la consecución del bien común (De Sousa Santos, 2010, p. 67-68).

Por otro lado, la hegemonía estadounidense ha sido posible por su predominancia económica en el sistema-mundo capitalista. Para Gramsci (2000), el hecho de que en Estados Unidos no existan grandes tradiciones históricas y culturales es “una de las principales razones -ciertamente más importante que la de la llamada riqueza natural- de su formidable acumulación de capitales” (p. 66). Más adelante aparece su conocida cita: “la hegemonía nace de la fábrica y no tiene necesidad de ejercerse más que por una cantidad mínima de intermediarios profesionales de la política y la ideología” (p. 66).

Estas reflexiones de Gramsci giran en torno al *Americanismo y Fordismo*, que “resultan de la necesidad inmanente de llegar a la organización de una economía programada” (Gramsci, 2000, p. 61). Esta racionalidad económica, como el nacimiento de la hegemonía en la fábrica, implican que “el Americanismo como hegemonía presupone que la forma natural de reproducción concreta en Estados Unidos, se encuentra subsumida a la mediación del valor mercantil, a la mercantilización y racionalización mediada por la lógica del capital” (Herrera, 2020, p. 39).

Por otro lado, Ceceña (2004) señala una necesidad de diferenciar entre hegemonía estadounidense y hegemonía capitalista. Esta diferencia implica niveles de abstracción distintos, de uno “más general -correspondiente al modo de producción y organización social- hasta el que concierne a lo que Marx denomina como el nivel de la competencia

donde lo que está en cuestión [...] son las modalidades internas de dominio” (p. 22). Es decir, aunque la hegemonía nacida de la fábrica implica una “modernidad americana que de origen es capitalista, radical en su potencial civilizatorio” (Herrera, 2020, p. 38), de fondo tenemos una visión del mundo correspondiente a la modernidad capitalista y con un proceso de construcción de mayor data.

Ahora bien, regresando a la concepción de Gramsci, en la que el consenso debe predominar sobre la coerción para construir hegemonía, Ceceña (2004) señala que se debe “concebir la hegemonía como la capacidad para generalizar una visión del mundo.” Esa capacidad tiene como soporte la dominación, sin embargo, esta “no solo se impone a través de los sistemas productivos, de los movimientos de la moneda o de las invasiones militares. La reproducción se reproduce en lo cotidiano y en la creación de sentidos comunes” (p. 21).

Recordemos que precisamente en la concepción gramsciana, una ideología se ha vuelto hegemónica cuando se convierte en sentido común. De tal manera, en “la actual concepción dominante el mundo gira en torno a la competencia económica, completamente marcada por los grandes monopolios transnacionales y las capacidades militares” (Ceceña, 2004, p. 22). Dicha visión de mundo, construida a partir del Americanismo y de la idea del *American Way of Life* como forma ideal de la socialidad capitalista contemporánea, es actualmente operatizada por sujetos colectivos, entre los que se pueden encontrar las grandes corporaciones capitalistas y los estrategas de la guerra estadounidenses.

Para el teórico de los sistemas-mundo, Immanuel Wallerstein (2005), la hegemonía dentro del sistema capitalista tiende a autodestruirse debido a que:

Debe desviarse en funciones políticas y militares, lo cual es no sólo caro sino también abrasivo. Tarde o temprano, en general temprano, los otros estados comienzan a mejorar su eficiencia económica a punto tal que la superioridad del poder hegemónico es disminuida considerablemente (p. 85).

Este proceso tiene lugar en un estado de competencia entre estados, o dentro de una disputa hegemónica intercapitalista permanente, en la que los grandes poderes del mundo se disputan el papel de sujeto hegemónico. El geógrafo David Harvey (2005) señala que la

hegemonía y dominación de Estados Unidos está amenazada desde la década de los años setenta, cuando perdió su superioridad productiva “y bien puede estar perdiendo su dominio financiero, quedándose únicamente con el poderío militar” (p. 124).

Cabe destacar que el debilitamiento de la hegemonía de Estados Unidos ha tenido lugar durante la fase neoliberal del capitalismo. Para Ceceña (2008), en el siglo XXI el eje ordenador del capitalismo se ha desplazado del mercado hacia lo militar. Este desplazamiento se da en medio de una crisis, no solo de hegemonía sino del sistema capitalista, en la que el poder (con su centro en Estados Unidos) sigue dos líneas que apelan a la intervención militar: el planteamiento de guerras asimétricas, en la que el enemigo es difuso y en donde el desarrollo tecnológico y la concentración de la riqueza hacen menos posible el mantenimiento del proceso de valorización, por lo que se recurre a mecanismos coercitivos-disciplinadores; y la instauración de una nueva territorialidad como parte de una reconstrucción de la hegemonía en la que lo militar es un criterio de ordenamiento geográfico y contrainsurgente (pp. 83-85).

En dicho estado de cosas es que podemos hablar del papel de los militares en la construcción de hegemonía. Mientras que los estrategas estadounidenses aplican diferentes mecanismos en los diferentes territorios, las fuerzas armadas de un país suelen desempeñarse como un brazo del hegemón en el contexto nacional. En casos excepcionales pueden colocarse dentro del sujeto insubordinado a las políticas del hegemón. Además, las fuerzas armadas tienen su propio papel en el ámbito de la construcción de hegemonía a nivel nacional.

### *1.1.3 Hegemonía en el contexto latinoamericano*

En América Latina, si entendemos que la construcción de hegemonía va de la mano con la del Estado-nación, podemos remontarnos al siglo XIX, durante los procesos de independencia y de conformación de las elites nacionales. Sin embargo, la conformación de América Latina como espacio geográfico dentro de la territorialidad capitalista, obliga a remontarse más atrás para entender su papel en el sistema hegemónico moderno.

El proceso en el que los territorios que ahora conocemos como América Latina comienzan a insertarse en la modernidad europea empieza en 1492, pero es en el siglo XVI, con el tráfico de metales preciosos hacia las metrópolis europeas, cuando ese proceso se hace más evidente. Bolívar Echeverría (2011), indica que una economía-mundo latinoamericana (según el concepto de Fernand Braudel), estaba en proceso de formación hasta el siglo XVII, la cual “fue mayormente ‘informal’ o de ‘contrabando’, que no se desarrolló como resultado de una política económica de la Corona española, sino en contra de ella, en sus márgenes o por debajo de ella” (p. 186).

Los teóricos de la dependencia, a partir de los años setenta del siglo pasado, aunque con matices, también señalaron la introducción de América Latina a los circuitos del naciente capitalismo a partir de la conquista. Para Marini (2008), la situación colonial no es lo mismo que la dependencia y, aunque América Latina tuvo un papel relevante en la formación del capitalismo en los siglos XVI, XVII y XVIII, “sólo en el curso del siglo XIX, y específicamente después de 1840, su articulación con esa economía mundial se realiza plenamente” (p. 112).

Por su parte, Agustín Cueva (1985), quien mantuvo diversas discrepancias con Marini y otros de los teóricos de la dependencia, indicaba que la acumulación originaria era un momento fundamental de la historia relacionado con América Latina. La “acumulación sin precedentes en uno de los polos del sistema, supone necesariamente la desacumulación, también sin precedentes, en el otro extremo” (p. 13). Esta “desacumulación” habría tenido lugar en el periodo colonial y corresponde al saqueo de riquezas, principalmente de metales, que permitieron la acumulación originaria capitalista en Europa.

Siguiendo el razonamiento de Marini, América Latina se articula con el mercado mundial tras conseguir su independencia política, proceso que coincide con la Revolución Industrial y que provocaría el articulamiento de los nuevos países con Inglaterra (en ese momento, el sujeto hegemónico del sistema capitalista). La industrialización de Europa fue posible gracias a la dependencia de los países latinoamericanos, los cuales otorgaron una oferta mundial de alimentos, necesaria para la especialización de la sociedad industrial, así como al papel de América Latina en la formación de un mercado de materias primas industriales (Marini, 2008, p. 113).

En este periodo es que podemos hablar de un surgimiento de burguesías nacionales en América Latina. Al respecto, podemos contraponer los planteamientos de Marini y Cueva. Para Cueva el desarrollo del capitalismo en América Latina fue un desarrollo oligárquico, sin una revolución burguesa, en las que las viejas oligarquías se fueron convirtiendo poco a poco en capitalistas (Cueva, 1985, p. 79). Por su parte, para Marini el capitalismo en América Latina es un capitalismo *sui generis*, con sentido solo cuando se mira al sistema en su conjunto (Marini, 2008, p. 108).

Lo importante a mencionar, más allá de las diferencias de la caracterización del capitalismo en América Latina, son las condiciones para que tuvieran lugar cambios en la correlación de fuerzas que llevaron a ciertos grupos sociales a convertirse en dominantes en el contexto latinoamericano. Es en este momento, que nociones propias de la modernidad, como el progreso, son internalizadas por las elites político-económicas latinoamericanas y, por lo tanto, hacen parte de la construcción de hegemonía en tanto parte de la ideología del capitalismo. Para Gramsci (2000), en un *Bloque Histórico*, las fuerzas materiales son el contenido y las ideologías las formas (p. 200). En el bloque histórico se puede distinguir tanto la estructura social o clases, como la superestructura ideológica y política (Portelli, 1977, p. 9). Es decir, el siglo XIX es el momento de formación de los diversos bloques históricos en los distintos países de América Latina que sentaría las bases para la posterior configuración de la hegemonía.

Sin embargo, esta fue una forma histórica de la hegemonía en América Latina, la cual ha cambiado de acuerdo con movimientos estructurales y orgánicos. Por ejemplo, las políticas de industrialización de la primera mitad del siglo XX, con los cambios políticos de la época reorganizaron la hegemonía con diferentes distribuciones de poder (o cambios en la correlación de fuerzas) al interior de las clases dominantes (Campioni, 2005, p. 22).

Podemos decir que en América Latina la hegemonía se impone en parte desde el exterior de las sociedades latinoamericanas, aunque esa dinámica se combina con las relaciones de fuerza al interior. Como resultado, tenemos dos formas de entender la hegemonía: una concebida en el seno del sistema capitalista y que concierne a América Latina como región;

y la otra entendida desde el interior de los diversos Estados-Nación y de cada bloque histórico en los diferentes países.

Aunque diferenciadas, estos dos tipos de hegemonía están completamente relacionadas. Recordando la interpretación gramsciana sobre la difusión de la ideología desde un Estado-nación consolidado a uno menos desarrollado, esto sucedió en América Latina en tanto su condición de dependencia dentro del sistema capitalista, lo que no debe restar importancia a las luchas de poder al interior de los Estados-nación, pero sí influye ampliamente en la ideología de las clases dominantes.

Tenemos entonces, durante el siglo XIX, la construcción de Estados-nacionales que se definen desde el interior, pero con la necesaria intervención del exterior (primero de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos) y las influencias de una división internacional del trabajo, que colocan a la región bajo el dominio del centro capitalista mundial.

El predominio y las modalidades de la nueva dependencia contribuyen decisivamente a la adopción más o menos consiente y deliberada de un modelo y a la realización de un proyecto de desarrollo subordinado, motivado y controlado -en considerable medida pero no totalmente- desde el exterior. Cada país se estructura en un sentido centrífugo y divergente; su economía, su cultura, su política y su diplomacia, son orientadas por separado hacia los centros mundiales de poder e integradas en la órbita de una potencia. (Kaplan, 1996, p. 54)

Los nacientes bloques históricos, en consecuencia, son influenciados por las políticas económicas, militares y diplomáticas del exterior.

Las estructuras socioeconómicas emergentes van presentando cada vez más el perfil de un sistema elitista-oligárquico. Los irán organizando y controlando cada vez más, ante todo las elites públicas de intelectuales, políticos, militares, eclesiásticos y, en relaciones en parte conflictivas y en parte coincidentes o convergentes con aquéllas, también grupos de propietarios y empresarios primario-productores y exportadores, terratenientes, mineros, comerciantes, financieros, en alianza con gobiernos y empresas de las metrópolis. (Kaplan, 1996, p. 54)



Tenemos de esta manera una nueva correlación de fuerzas que se define en parte desde el exterior, pero sobre todo de la nueva oligarquía que se va formando a partir de las viejas elites coloniales sobrevivientes y de los nuevos sectores burocráticos y económicos surgidos en los periodos post-independentistas. Al mismo tiempo, la correlación de fuerzas se disputa entre las esferas urbana y rural.

Estado y élites públicas se diferencian relativamente de la nueva oligarquía, la coproducen y coorganizan; son factor decisivo en la definición de la hegemonía y van co-participando cada vez más en la fórmula hegemónica con la clase socioeconómicamente dominante; se integran en parte con ella; todo ello y a partir del control del aparato gubernamental (Kaplan, 1996, p. 57).

Por otro lado, es necesario remarcar el papel de los militares en dicha construcción de hegemonía. Durante todo el siglo XIX, la política latinoamericana fue básicamente militar debido a la importancia de los caudillismos, tanto en las guerras de independencia como en la posterior construcción del Estado-nación. Hacia finales del siglo XIX, comenzó la modernización y profesionalización de las fuerzas armadas, mientras que el siglo XX estuvo marcado por distintas formas de militarismo, expresadas ampliamente en golpes de Estado de diverso signo, cuya expresión máxima fueron las dictaduras de seguridad nacional de los años setenta.

Para Rouquié y Suffern (1997), “aunque no hay militarismo en el sentido riguroso de la palabra antes de que existiesen ejércitos permanentes y oficiales de carrera, las instituciones militares toman forma a imagen de las naciones en las cuales aparecen” (p. 283). Consecuentemente, se debe considerar que los bloques históricos intentan influir en el estamento militar, tanto política como ideológicamente, aunque los militares, dotados de cierta autonomía, no siempre van a representar los intereses del bloque histórico, por lo que hacen también parte de la correlación de fuerzas en tanto son la principal institución armada del Estado.

Las fuerzas armadas de un país son símbolos de su soberanía nacional. A finales del siglo pasado [XIX] y comienzos del presente [XX] eran también emblemas de progreso tecnológico y de modernidad. La creación de fuerzas armadas permanentes y dotadas de

una oficialidad profesional formaba parte de una modernización de cara al exterior vinculada de modo inseparable al crecimiento hacia afuera de las economías nacionales. No era una inconsecuencia que la modernización del aparato del estado empezara por su brazo militar. Es obvio que las fuerzas armadas de estas naciones dependientes y no industrializadas sólo podían transformarse -y, en particular, elevar su nivel tecnológico- imitando prototipos extranjeros. Llevaron a cabo su modernización dependiente no sólo comprando armas a los países europeos, sino también adoptando los modelos de organización y formación, e incluso las doctrinas militares, de los países avanzados. (Rouquié y Suffern, 1997, p. 284).

En tal sentido, vemos en el sector militar la misma dinámica doble de la hegemonía: por un lado, tenemos las ideologías y modelos de los países hegemónicos mundiales; y por el otro, una dinámica interna consecuente con las correlaciones de fuerza y las luchas de poder. En el primer caso, sin embargo, en un primer momento no serán Inglaterra o Estados Unidos los poderes hegemónicos que intervendrán en la reorganización de los ejércitos, sino que lo harán Francia y Alemania, como los dos modelos de organización militar universalmente válidos, de acuerdo con Rouquié y Suffern (1997). Estos dos modelos, que también son enemigos, extenderán su rivalidad a América Latina en función de cuál tipo de modernización elegirían los países latinoamericanos, principalmente en Sudamérica. El modelo a elegir, también influyó en la actuación política de las nuevas fuerzas armadas al interior y, por lo tanto, la correlación de fuerzas, debido tanto a la forma de organizar al interior de la institución militar, como a la forma de ver los asuntos nacionales e internacionales que adquirirían los militares.

Debido a sus responsabilidades cívicas y nacionales, así como a la independencia de que gozaban sus oficiales, los nuevos ejércitos no estaban dispuestos a permanecer callados en lo que se refería a la política. Las personas que habían creído que la profesionalización garantizaría unas fuerzas armadas apolíticas tendrían ocasión de comprobar su gran error. A los militares no les resulta fácil permanecer neutrales en política cuando se encuentran muy ocupados en las tareas de edificación nacional y estatal y se les han encomendado importantes funciones relacionadas con la defensa interna (Rouquié y Suffern, 1997, p. 286)

Sobre esta falsa apoliticidad, Díaz Cardona (1988) menciona que:

La pretensión burguesa clásica de mantener a los militares apartados de las tareas del poder resulta vana, si tomamos en cuenta que la función que les está adscrita a través de los preceptos constitucionales es de suyo una actividad política, en cuanto implica garantizar la organización que para el ejercicio del poder se han dado las clases dominantes (p. 100).

De ahí que podemos decir que las fuerzas armadas juegan un papel esencial en la correlación de fuerzas y en el bloque histórico al interior, no solo por su labor como defensores del sistema político-económico, sino también por su actuación determinante en la definición de la hegemonía nacional. Además, la obediencia del estamento militar tiene como función “compartir las normas, valores y decisiones de la estructura de poder existente; en otras palabras, equivale al mantenimiento del statu quo” (Díaz Cardona, 1988 p. 101).

Regresando al aspecto ideológico, necesario para la hegemonía, Echeverría (2011), al hablar de la identidad latinoamericana, menciona que la identidad francesa, inglesa y estadounidense son las que las sociedades latinoamericanas fueron inducidas a copiar. Estos intentos de sustitución de la identidad han sido una forma de modernización que ha fracasado una y otra vez, lo que ha tenido efectos en la escena económica y política como la corrupción, el militarismo, el caudillismo, el populismo, el democratismo de la oligarquía y el caciquismo (p. 179). Esta modernidad imperfecta, (a la que Echeverría llama barroca), deja espacio también para propuestas o alternativas contrahegemónicas.

Ahora bien, de esas identidades, la que más influencia ha tenido, por sus características históricas y geográficas, es la de Estados Unidos. Desde la Doctrina Monroe y el expansionismo territorial estadounidense en el siglo XIX, hasta los golpes de Estado del siglo XX con apoyo de las embajadas norteamericanas, así como un considerable número de intervenciones militares, los Estados Unidos han demostrado un interés esencial en América Latina, en tanto se ha consolidado como su zona de influencia por excelencia y desde su posición hegemónica en el sistema.

Durante la Guerra Fría, cuando la competencia hegemónica tuvo una intensidad particular, la “consolidación continental [de Estados Unidos] fue base de su sustento” (Ceceña, 2009, p. 601). Tras la derrota del bloque soviético, la región nunca dejó de estar fuera de los ojos

de Washington. Dado que “las posibilidades son múltiples y van desde la ocupación física abierta hasta las sutiles imposiciones de reglas, mediante planes económicos como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)” (p.601), podemos observar a lo largo de los últimos treinta años un sinnúmero de ejemplos en los que Estados Unidos ha continuado ejerciendo su hegemonía sobre el continente americano.

La militarización del continente aparece en las últimas décadas como la forma por excelencia de dominación en América Latina, desde políticas como las contenidas en el Plan Colombia, hasta la permanente presencia de las fuerzas militares estadounidenses en el Caribe por medio del Comando Sur. “El control militar del gran territorio continental responde a dos elementos: la competencia y la necesidad de monopolizar esa área geográfica con todo lo que contiene [entiéndase riquezas naturales, como minerales, petróleo, agua, etc.], y la necesidad de emprender políticas contrainsurgentes que detengan las capacidades organizativas, las movilizaciones y el rechazo a la dominación de los pueblos latinoamericanos” (Ceceña, 2009, p. 602).

La existencia de propuestas contrahegemónicas en el contexto latinoamericano es amplia y con un gran abanico de propuestas, tanto epistemológicas como prácticas y desde abajo. De Sousa Santos (2010) indica que “el uso contrahegemónico [de las instituciones hegemónicas], significa la apropiación creativa por parte de las clases populares, *para sí*, de esos instrumentos con el fin de hacer avanzar sus agendas políticas más allá del marco político-económico del Estado liberal y de la economía capitalista” (p. 68).

Además, el autor portugués distingue dos tipos de luchas: ofensivas y defensivas. Las primeras, son “avanzadas” e impulsadas desde movimientos como el indígena que llevaron a nuevos constitucionalismos (en Bolivia, Ecuador y Venezuela); las segundas son “retrasadas” y buscan defenderse de la criminalización de la protesta, de la contrarrevolución, del paramilitarismo, etc. Es decir, en las luchas defensivas se busca defenderse del poder del Estado, en las ofensivas se busca tomar el poder del Estado. (De Sousa Santos, 2010).

En ambos casos, aparecen limitaciones dadas por las ofensivas y contraofensivas hegemónicas. Un mecanismo con el que constantemente se defiende la hegemonía, son las fuerzas armadas, es decir, la militarización de las sociedades para limitar, contener, desarticular y disciplinar las resistencias en una guerra que busca mantener una *dominación de espectro completo*, por medio de una guerra asimétrica donde el sujeto hegemónico tiene como objetivo “garantizar el mantenimiento del capitalismo y dentro de él la primacía de Estados Unidos; y garantizar la disponibilidad de todas las riquezas del mundo como base material de funcionamiento del mundo” (Ceceña, 2013, p.47).

Las fuerzas armadas, como tal, son una institución hegemónica con la cual se topan ambos tipos de lucha mencionados. En nuestros casos de estudio, se trata de aquellas propuestas desde el Estado, de las cuales solo Venezuela ha logrado trastocar el papel de los militares en la sociedad y en la correlación de fuerzas.

## **1.2 El Estado en América Latina**

Una vez explicado el concepto de hegemonía, es necesario entender el concepto de Estado en América Latina para poder comprender el papel de las fuerzas armadas en dicho ámbito de actuación. En América Latina existe una fuerte tradición académica en torno al Estado, especialmente durante la segunda mitad del siglo XX. En el presente apartado, se retomarán algunas de esas perspectivas, además de aquellas más recientes que reflexionan en torno al cambio del papel del Estado en épocas contemporáneas. Igualmente, se incursionará en el papel de las fuerzas armadas en el Estado latinoamericano.

### *1.2.1 El Leviatán Criollo*

El nacimiento del Estado-nación en América Latina está fuertemente ligado a los procesos de independencia de inicios del siglo XIX y su formación y organización se extendió hasta principios del siglo XX. A pesar de ese largo periodo de organización, caracterizado por una alta inestabilidad política en la mayoría de los países latinoamericanos, existe una centralidad del Estado en las sociedades latinoamericanas.

El Estado es un elemento central en las formaciones latinoamericanas debido a procesos históricos iniciados en el siglo XIX. Por otro lado, dicha centralidad fue discutida ampliamente durante el clima académico-intelectual de la década de 1970, el cual sería un “pensamiento fuerte” caracterizado por un amplio debate en torno a tres elementos: la centralidad del Estado en las formaciones sociales latinoamericanas; la relación del Estado en América Latina con el capitalismo; y la perspectiva de transformación socialista presente en los trabajos de dicho clima (Cortés, 2012).

Para explicar el Estado en América Latina, es necesario hacer una breve reconstrucción histórica. Remitirnos a la conformación del Estado en América Latina tiene su razón en el reconocimiento de la historicidad del Estado “como un fenómeno esencial del mundo contemporáneo, ligado a la modernidad que supuso el advenimiento del capitalismo” (Moncayo, 2012, p. 19). En ese sentido, el Estado es esencial en el sistema capitalista, pues es “indisociable del tipo de organización social de la producción vigente” (Moncayo, 2012, p. 20).

Aunque durante la colonia existieron formas de organización política, la fuerte dependencia de la metrópoli en dicho periodo obliga a pensar la conformación del Estado (independiente) como tal hasta una vez alcanzadas las independencias políticas. Sin embargo, es importante tener en cuenta la fase colonial, dado que “los Estados latinoamericanos, su intervencionismo, su autonomización y su rectoría, heredan tradiciones y fuerzas, estructuras y tendencias, que provienen de la fase de conquista y colonización” (Kaplan, 1996, p. 8). Para Kaplan (1996), hay una fuerte tradición estatista que se hereda de la colonia, aunque se trata aquí de los Estados absolutistas de España y Portugal.

De tal manera, aunque durante el largo periodo colonial se entrelazaron fuerzas, formas y rasgos feudales, semif feudales y capitalistas (Kaplan, 1996, p. 12), no fue sino hasta el periodo postindependentista que se formaron verdaderas élites nacionales que construyeron hegemonía y se hicieron del poder del Estado.

Lo anterior se sostiene en Gramsci (2000), para quien el Estado no solo es el aparato gubernamental, sino también el aparato privado de la hegemonía o de la sociedad civil (p. 234). En la visión del Estado de Gramsci, se evita el “instrumentalismo de clase”, pues no se reduce a la expresión o instrumento de una clase social consolidada. El Estado es más un campo donde los conflictos entre distintas fracciones de la burguesía se regulan (Forgacs, 2000, p. 31).

Si bien hegemonía, Estado y bloque histórico son cuestiones ligadas entre sí, cabe recordar que un grupo o clase social puede ser dirigente antes de la toma del poder del Estado (Portelli, 1977, p. 75). De tal manera, desde una visión gramsciana, podemos tener tres tipos de situaciones en las relaciones de dominación entre clases sociales, que implican también la toma o el uso del poder del Estado:

1. El predominio de la sociedad civil sobre la sociedad política (Estado). Una situación realmente hegemónica, donde las clases subalternas ayudan a la clase dominante a consolidar su poder e incluso la obligan a ir más allá de sus objetivos. Aquí, la clase hegemónica es más dirigente que dominante;
2. La preminencia de la sociedad política sobre la sociedad civil. Una situación donde la clase dominante solo busca mantener la dominación. Gramsci describe situaciones que ejemplifican este punto, como el transformismo (también presente en las otras situaciones), la revolución pasiva y el cesarismo, en la cual se da una “solución arbitral” expresada en una personalidad heroica, la cual puede ser tanto progresiva como regresiva (Véase Gramsci, 1999, p. 65)
3. Por último, el uso exclusivo de la sociedad política por la clase dominante, o dictadura. En este caso la clase dominante carece de dirección sobre la sociedad civil, lo que implica la crisis del bloque histórico, es decir, dominación sin hegemonía (Portelli, 1977).

Podemos decir que en América Latina estas tres situaciones se han alternado a lo largo de su historia independiente, especialmente durante el turbulento siglo XIX, donde las constantes guerras civiles y otras situaciones de inestabilidad política se alternaron en el

tortuoso proceso de formación de las burguesías nacionales y, por tanto, de los distintos bloques históricos. En otras palabras, como bien menciona Zavaleta (2009), “después de Gramsci no se puede imaginar dominación alguna que sea estable (p.328).

[En la formación de los Estados], no existe, o apenas se va esbozando, una sociedad civil como red de actores sociales, comunidades, organizaciones, instituciones, prácticas y procesos, productos y creaciones; como entramado de modos colectivos de existencia, de conciencia y acción, para la autoprotección, el autodesarrollo, la participación, el control sobre el Estado y los gobiernos. Los gérmenes o esbozos de una sociedad civil aparecen sólo en ciertos polos urbanos, en las esferas de la dominación estatal y oligárquica y de los intereses extranjeros interiorizados, y en sus representantes y periferias inmediatas (Kaplan, 1996, p. 66)

En América Latina el Estado se forma en “el contexto de la inserción dependiente en un orden mundial y en una división internacional del trabajo estructurados bajo la hegemonía de Europa Occidental y de los Estados Unidos” (Kaplan, 1996, p. 57). Además, las “elites públicas”, en acuerdo con la oligarquía, “construyen el Estado y lo dotan de un ordenamiento político-militar, de una legalidad y una institucionalización que rigen y garantizan la adquisición y el ejercicio del poder, el monopolio y la organización de la violencia, la definición y la estabilización de la solución hegemónica” (Kaplan, 1996, p. 58).

La formación de elites nacionales que conforman el Estado, por otro lado, no debe interpretarse completamente de forma instrumentalista. Si bien el Estado sí es un aparato de clase, la “ocupación del Estado por hombres personalmente pertenecientes a una clase dominantes no indica una visión o interpretación instrumentalista del Estado, sino una situación instrumental” (Zavaleta, 2009, p. 332). Es decir, el Estado no solo es resultado de las clases o grupos que lo conforman, sino que también “contiene elementos más o menos amplios de conciencia, la capacidad de valuación de la sociedad y de incursión sobre ella” (p.333).

De manera similar en la que Marini (2008) sostiene la existencia de un capitalismo *sui generis* en América Latina, para Kaplan (1996) existe un Leviathan *criollo*, que, en su fase de formación durante el siglo XIX, está supeditado al problema de la hegemonía. Este Estado



que “no coincide con el modelo importado y readaptado, sirve eficazmente a la élite pública, a la oligarquía, a la fracción hegemónica y los otros sectores de la clase dominante” (p. 75). En su periodo oligárquico, “el Estado se autoconstruye, se legitima y se regula jurídicamente a sí mismo y a la sociedad” (p. 77).

Se debe tomar en cuenta que, relativo al problema de la hegemonía y de la conformación del bloque histórico, el establecimiento de elites nacionales tuvo que tomar un tiempo después de las independencias políticas:

Los estados, en la mayoría de los países hispanoamericanos, no pudieron restablecer completamente la autoridad que la corona española mantuvo hasta 1808. Se crearon sistemas constitucionales formales, la mayoría de los cuales fueron constituidos para transferir el poder a través de elecciones y garantizar las libertades individuales. Pero estas disposiciones constitucionales formales frecuentemente se convirtieron en letra muerta, ya que ningún grupo político creía que sus adversarios fueran a cumplirlas. Los que detentaron el poder se apartaron de los principios constitucionales, y a menudo reprimieron duramente a la oposición a fin de retener el gobierno en sus manos [...] Los políticos de oposición, tanto los militares como los civiles, esperaban y se aprovechaban de los momentos de mayor debilidad del gobierno para desplazar al grupo en el poder [...] Las elites políticas sólo contadas veces estuvieron lo suficientemente unidas para poder evitar que sus países cayeran en frecuentes golpes de Estado, rebeliones o guerra civiles (Safford, 1991, p. 44).

A esto, hay que sumar que, durante el periodo de gestación de los Estados latinoamericanos, los militares tenían un amplio poder político, resultado de las guerras de independencia.

Generales y oficiales ambiciosos buscan aprovechar la fuerza y experiencia adquiridas y la inestabilidad anárquica para conquistar posiciones privilegiadas, lograr y controlar el poder político, acumular riquezas y ascender en la escala social. Los jefes militares y sus fuerzas se vuelven árbitros finales en los asuntos públicos; participan en las decisiones o las imponen [...] Carentes de situación social y de ideología definidas, los jefes militares tienden al alineamiento con los grupos oligárquicos (Kaplan, 1996, p. 61).

Ahora bien, hace falta distinguir entre los hombres de armas del siglo XIX a los militares profesionales que se empiezan a establecer a finales del siglo XIX y principios del XX.

Se habla, al menos para el siglo XIX, de un continuum “civil-agrario-militar”, cuyo eje es el hombre de a caballo. La multiplicación de ejércitos privados [liderados por caudillos], revela la precariedad del Estado, su debilidad o atraso. El ejército nacional cuando existe -y en este contexto particular suele ser el ejército privado de un caudillo que llegó al poder a punta de lanza-, no detenta el monopolio de la violencia (Rouiquié, 1984, p. 54)

En este caso, podemos ver que las bases materiales de los ejércitos dependen en gran medida del liderazgo caudillista, así como de la disposición que este pueda encontrar al reclutar y engrosar sus filas y de su capacidad de acceder al poder.

### *1.2.2 Fuerzas Armadas y Estado*

Rouiquié (1984), distingue tres etapas en la historia política de las fuerzas armadas estatales y que están vinculadas al surgimiento y modernización del Estado: 1. El periodo de “militarismo sin militares”, justo después de la independencia, donde la política no es otra que la guerra y los medios son militares. Los ejércitos libertadores desmovilizados componen este militarismo, los cuales luchan por el poder, viven del pillaje y constituyen un obstáculo para el Estado; 2. El periodo de “militares sin militarismo”, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el cual se caracteriza por una preponderancia civil y se realiza cuando el Estado se cristaliza. En este periodo existe un ejército nacional que se identifica con el personal político y administrativo. En términos de sus bases materiales, son ejércitos con escasez de tropas, falta de formación profesional y una promoción discrecional; 3. La etapa que inicia con la modernización, tecnificación y reorganización de los ejércitos. Aquí, los militares son el núcleo del Estado y se “militariza a los militares” para estatizar al ejército, lo que implicó igualmente dotarlos de herramientas para intervenir en la vida política (pp. 56-57).

Sumado a esto se debe tomar en cuenta la ya mencionada situación de dependencia en la que nace el Estado latinoamericano, pues ella, junto a “los fuertes desniveles – socioeconómicos, culturales, regionales–, la concentración con dispersión del poder político, impiden o restringen la unidad y supremacía del Estado, la vigencia y los alcances

de la participación popular y de la democracia representativa, y del Estado de derecho” (Kaplan, 1996, p. 58).

De tal manera es que el Estado latinoamericano se conformó a lo largo del siglo XIX. Vemos entonces que los militares jugaron un papel crucial en este proceso. A esto, se debe agregar el papel de la Iglesia que, si bien no es tema del presente trabajo, se puede mencionar de manera breve, debido a su actuación tanto en la consolidación del Estado, como en el bloque histórico en formación. El conflicto entre Iglesia-Estado tuvo parte fundamentalmente entre 1845 y 1870, y fue centro de las discusiones entre liberales y conservadores; es decir, fue una cuestión central en el tipo de república que debía establecerse (Safford, 1991).

Contrastando con la inestabilidad política que caracterizó a la mayor parte de Hispanoamérica entre 1810 y 1870, las décadas que transcurrieron de 1870 a 1910 fueron años de consolidación y centralización política, generalmente bajo gobiernos de tipo secular y modernizador pero más o menos autoritarios y no democráticos (Safford, 1991, p. 103).

Kaplan (1996) llama a la etapa de finales del siglo XIX a 1930 una etapa de transición, “que se configura por la convergencia de las modificaciones en el sistema internacional y de los cambios internos en los países latinoamericanos” (p.80). Diversos elementos caracterizan a este periodo, desde el plano internacional al nacional, con el desplazamiento del centro hegemónico de Gran Bretaña a Estados Unidos, el surgimiento de ideologías emergentes que tienen impacto directo en América Latina, con componentes como el nacionalismo y populismo, el surgimiento de nuevos grupos intelectuales, las preocupaciones sobre la democracia, la modificación de instituciones tradicionales y la consolidación del *statu quo* (Kaplan, 1996).

Es en este periodo que “las fuerzas armadas se profesionalizan y corporativizan cada vez más, y van desarrollando una propensión al desempeño de un papel político propio que comienza incluso a efectivizarse como función tutelar de la sociedad y el poder civiles, con orientaciones conservadoras y reformistas” (Kaplan, 1996, p. 84).

El eclipse de los guerreros en los países donde un grupo dirigente coherente impone su hegemonía, inicia un período de preponderancia civil y estabilidad política. Los caudillos son

puestos en vereda debido a las necesidades del progreso capitalista; las fuerzas armadas engendradas por éste aún no poseen los recursos institucionales necesarios para su intervención. Los militares tienen poder, pero el poder militar no existe. Esto no contradice la experiencia de los países donde algún hombre fuerte más o menos militar se impone sobre el Estado para erigirse en dictador vitalicio o patriarca inamovible (Rouquié, 1984, p. 79).

En ese momento, con militares que ya se pueden denominar como tal, en tanto son militares de carrera, aún necesitarán de la consolidación de sus bases materiales, la cual se dará con el establecimiento del servicio militar obligatorio y con su separación de la arena partidista, lo que no significa su separación de la política. Además, como ya se había adelantado en el apartado anterior, la modernización se realizó con base en los modelos de Francia y Alemania, lo que también consolidará sus bases materiales tecnológicas y armamentísticas. Este aspecto va más allá de qué tan equipado puede estar un ejército para la defensa de las fronteras, ya que,

la formación de los ejércitos modernos reviste un carácter eminentemente funcional en relación al nuevo papel de las periferias latinoamericanas en la economía mundial. Los ejércitos modernizados son instituciones estatales que garantizan el orden interior y permiten la explotación pacífica de las riquezas mineras y agrícolas que Europa necesita (Rouquié, 1984, p. 88).

La modernización de las fuerzas armadas, además, tiene un carácter decisivo sobre la construcción de hegemonía y el bloque histórico:

El ejército moderno, símbolo de progreso, es un instrumento de centralización y, por consiguiente, de fortalecimiento e incluso construcción del Estado. Su perfeccionamiento y expansión, en tanto ejército nacional, presuponen la unificación de la clase dirigente. Cuanto más tardía la unificación, más demorado el proceso de profesionalización, en algunos casos en beneficio de un poder civil inestable y en otros para ceder un poder dictatorial de facto.

Sumado a lo anterior, el proceso de construcción de hegemonía se expresa en todo su sentido en el proceso de modernización, incluyendo lo que respecta a la ideología, no solo

bajo la idea decimonónica preponderante del progreso, también en cuanto a la manera burguesa de pensar la sociedad, de ahí también la importancia de los modelos prusiano y francés:

En todos los países latinoamericanos, en condiciones particulares y en distintos grados de consolidación del Estado nacional, encontramos el mismo afán de integración a la escuela europea (francesa y alemana). Las misiones militares fueron introducidas con el objeto de estructurar una ideología absolutista prusiana en el marco democrático-burgués de la revolución francesa, uno de cuyos principios es la subordinación del aparato armado al poder político y su incondicional servicio al sistema (Díaz Cardona, 1988, p. 51).

Cabe destacar que no todos los países latinoamericanos tuvieron misiones francesas y alemanas para modernizar a sus ejércitos, puesto que algunos realizaron su modernización bajo misiones de países latinoamericanos ya modernizados bajo los modelos europeos. Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Brasil fueron los primeros países en contar con misiones francesas y prusianas. Por su parte, Ecuador, Colombia, El Salvador y Venezuela tuvieron misiones chilenas y en el caso venezolano una peruana. Ahora bien, un tercer caso son la creación de ejércitos con un carácter colonialista, creados tras las invasiones de Estados Unidos en Honduras, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Puerto Rico, Haití, República Dominicana y Cuba (Rouquié, 1984).

Dos aspectos más contribuyeron a consolidar las bases materiales de las fuerzas armadas: el reclutamiento y el servicio militar obligatorio. Para Rouquié (1984), el eje de la modernización es el reclutamiento de oficiales y la formación de cuadros instruidos para elevar el nivel profesional y técnico de los mismos. Para tal tarea, fue fundamental la creación o reforma de escuelas militares como única fuente de reclutamiento. En muchos de los países, las filas de oficiales están constituidas principalmente por las oligarquías y sectores de las clases altas, aunque algunos otros abren paso a la formación de sectores medios y obreros (Rouquié, 1984).

En cuanto al servicio militar obligatorio, la transformación principal es el ensanchamiento de efectivos, aunque paradójicamente la tropa pasó a ser integrada por civiles (Rouquié, 1984). El servicio militar obligatorio, además, tiene una función de cohesión en la sociedad

puesto que los civiles se ven obligados legalmente a defender la nación, además de acceder a las actividades militares, antes reservadas como un privilegio de clase (Díaz Cardona, 1988, p. 52).

Todo este proceso, por el que finalmente los militares se subordinaron al Estado, tuvo lugar por un largo periodo, desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Cuando el proceso se ha consolidado “la oficialidad comienza a reclutarse en la oligarquía, en la nueva burguesía o en las capas medias, según los países. La profesión militar adquiere nuevo prestigio, y se convierte en medio de ascenso social, intelectual y político” (Kaplan, 1969). Las fuerzas armadas reconstituidas cumplen una función de coacción social en su cometido por la ocupación del espacio interior.

Las Fuerzas Armadas operan también como guardia pretoriana, para la defensa del orden oligárquico contra las presiones de las capas medias, populares y proletarias. Imponen el fraude electoral; reprimen las manifestaciones campesinas, obreras y políticas; son el brazo armado de las intervenciones del poder central contra las regiones y las provincias (Kaplan, 1969, p. 194).

La subordinación al Estado, sin embargo, opera de una manera un tanto contradictoria, dado que son los mismos militares los que promovieron la modernización estatal y durante el siglo XX actuaron como defensores del orden, no solo por su papel constitucional, sino también por su intervención política, muchas veces traducida en golpes de Estado.

La modernización y las nuevas tareas otorgan a los ejércitos un peso específico en el Estado y la sociedad, que les permite hacerse oír y luego obedecer. Una de las particularidades del proceso político latinoamericano -excepción hecha de los semiprotectorados caribeños y centroamericanos- radica en la modernización asincrónica del Estado, en la cual los militares desempeñan conscientemente el papel de pioneros. En efecto, en muchos casos, el proceso se inicia a partir de exigencias propias del ejército. Dicho de otra manera la modernización comienza por la rama militar. Las demás no siempre la siguen. La instauración del servicio militar obligatorio precede a la alfabetización y el sufragio universal [...] El aumento de los gastos militares debido a la reorganización y pertrechamiento del ejército en todos los países que transforman su aparato militar amplía el papel del Estado (Rouquié, 1984, p. 117).

Ya bien entrado el siglo XX, en la década de 1930 el Estado latinoamericano se consolida, al mismo tiempo que se entra en una “fase de crisis estructural permanente”, en la cual:

se incrementan el intervencionismo y la autonomización del “Estado” y las elites públicas. Lo hacen ante todo a partir de su desarrollo preexistente y de su lógica propia, pero también a través de las modificaciones en el modo de inserción en un sistema internacional cambiante y en una nueva división mundial del trabajo (Kaplan, 1996, p. 87).

A partir de ese momento, América Latina se incorpora en el sistema internacional a partir de la hegemonía de Estados Unidos. Además, “desde la década de 1930 y, sobre todo, desde 1945 se van perfilando un modelo y proyecto de crecimiento y modernización” (Kaplan, 1996, p. 117). Para Kuijt (2012), entre 1930 y 1950 tuvieron origen los *ejércitos políticos* latinoamericanos, los cuales se caracterizan por “una identificación con el desarrollo de la nación [y] la vocación autoatribuida de vigilar la integridad del Estado como institución” (p. 96).

Ahora bien, en términos económicos tras la crisis de 1929 ocurrieron varios factores que cambiaron el modelo de acumulación de capital en todo el mundo en general y en la región latinoamericana en particular, hacia lo que fuera posteriormente llamado modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Este nuevo modelo estuvo caracterizado por el impulso de la industrialización desde el Estado, bajo el entendido de que dicha industrialización llevaría al desarrollo económico de la región y, por consiguiente, a alcanzar los niveles de vida en los países ya industrializados, principalmente los europeos y Estados Unidos.

Si bien, en la primera fase de este periodo se alcanzó cierta supremacía civil, los militares van consolidando su pensamiento político, basado en el nacionalismo y el desarrollo. Por otro lado, tras la segunda guerra mundial existió un proceso de democratización a nivel mundial, aunque en el caso latinoamericano hubo excepciones, como las dictaduras militares de Juan Domingo Perón en Argentina, de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela, de Gustavo Rojas Pinilla en Colombia y de Manuel Odría en Perú, a las que se les puede denominar *dictaduras desarrollistas* (Frank Rodríguez, 2011).

A partir de la década de 1960, sobreviene un nuevo tipo de militarismo que toca los mismos cimientos del Estado. Este militarismo se dio en el contexto de la Guerra Fría y se expresó en golpes de Estado anticomunistas y de la Doctrina de Seguridad Nacional. O'Donnell (1996), identifica tras este tipo de golpes de Estado el surgimiento del Estado burocrático-autoritario, el cual es un tipo de Estado autoritario y capitalista con una especificidad histórica en la que sus impulsores (los militares, la burguesía y el resto de los sectores hegemónicos) buscan “subordinar y controlar estrictamente al sector popular, revertir la tendencia autonomizante de sus organizaciones de clase y eliminar sus expresiones en la arena política” (p.59).

Este tipo de Estado autoritario, aunque desarrollista en un primer momento (a excepción del caso chileno), “promueve una mayor transnacionalización que entraña un nuevo desborde de la sociedad respecto del ámbito territorial y de relaciones sociales que ese Estado pretende acotar” (O'Donnell, 1996, p. 61).

### *1.2.3 El Estado neoliberal*

Estos gobiernos autoritarios dejaron el camino abierto para el desmantelamiento del Estado y para la neoliberalización de la región. Cabe especificar que el proceso no es exclusivo de los regímenes de Seguridad Nacional, pues en la mayoría de los países el neoliberalismo se impuso bajo la égida de gobiernos civiles. Tenemos de esta manera una “redefinición de la forma-Estado [que] ha supuesto el abandono de los rasgos que la caracterizaron en la época superada [...] El Estado nacional ha dejado de ser planificador e interventor y ha asumido una posición calificada como neoliberal” (Moncayo, 2012, p. 40).

En ese sentido y bajo ese contexto, que se extiende hasta finales del siglo XX, “el *Leviathan* criollo alcanza su culminación casi al mismo tiempo que su entrada en crisis. Diversas fuerzas y procesos dentro y fuera de él lo coaccionan y desgastan, lo amenazan en su autonomía y su supremacía, en la eficacia y alcance de sus acciones” (Kaplan, 1996, p. 280). Bajo el neoliberalismo, no solo el Estado se reduce, sino que los debates sobre el Estado se ven interrumpidos, principalmente por los procesos de transición de la década de 1980, proceso en el que el pensamiento latinoamericano estuvo enfocado (Cortes, 2012, p. 110).



Sin embargo, los procesos políticos recientes han vuelto la mirada hacia el Estado. Hacia mediados de la década de los años noventa, Kaplan (1996) mencionaba:

Una entre las tendencias posibles que se preparan en los pliegues de la historia latinoamericana por venir, es la de un neoestatismo, que se desplegaría en una variedad de tipos y modalidades posibles. Sus concreciones dependerían de la combinación de varias dimensiones: naturaleza, modos y desenlaces de los grandes conflictos y crisis; alianzas de elites, clases, grupos e instituciones; incidencia interna de los factores externos; redefiniciones de los modelos y caminos de desarrollo y de sistema, y sus cristalizaciones en proyectos y estrategias (p. 281).

Hacia inicios del siglo XXI, diversos gobiernos de izquierda surgieron en la región, empezando con Venezuela en 1999. De esos gobiernos, las transformaciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia resultan las más profundas, en tanto realizaron reformas constitucionales profundas.

El ciclo de gobiernos posneoliberales obliga a formularse interrogantes acerca del impacto que estas transformaciones producen en la fisonomía de los Estados de la región, al tiempo que actualiza el problema de la centralidad del Estado y de la disputa que se entreteje en torno del problema nacional (Cortes, 2012, p. 111).

Ahora bien, cabe recordar y remarcar que el Estado es un producto y reproductor del capitalismo, ya que “tanto las corporaciones como el Estado son formas de institucionalización del sujeto capitalista [...] Sujeto que apegado a la modernidad defenderá la individualidad, la igualdad jurídica que es condición de la competencia y del darwinismo social, y la propiedad privada para consolidar la apropiación” (Ceceña, 2016, p. 115).

De tal manera, dichas transformaciones tienen límites en su cometido de transformar la sociedad. De hecho, una característica de estos gobiernos es el carácter capitalista o la incapacidad de superar el modelo económico extractivista. “Suele ser de difícil comprensión la clasificación de estos gobiernos latinoamericanos, pero basta considerar que ellos mismos no realizaron la ruptura completa con el sistema capitalista ni abandonaron la vocación de extracción de nuestras economías” (Peixoto, 2017, p. 619).

Santos (2010) menciona que las refundaciones del Estado más profundas fueron llevadas en Bolivia y Ecuador, no por tener procesos constituyentes *per se*, sino porque esos procesos significaron un constitucionalismo *desde abajo*, especialmente impulsado por los movimientos indígenas, quienes reconocen que una refundación del Estado solo ocurrirá cuando desaparezcan el capitalismo y el colonialismo, cuestión de gran complejidad si consideramos al Estado como parte esencial del sistema capitalista.

En ese sentido, las fuerzas armadas siguen jugando un importante papel en el Estado y en las políticas de dichos gobiernos, en el caso venezolano reorganizándose para apoyar al nuevo grupo hegemónico, en el ecuatoriano y boliviano sin alejarse de los intereses de las clases dominantes tradicionales.

### **1.3 Ideología**

El tercer elemento teórico para el análisis de las fuerzas armadas en América Latina es el de la ideología. En el presente apartado, se parte de una noción *gramsciana* del concepto para después explicar la ideología en América Latina en términos históricos y finalmente trasladar el concepto a las fuerzas armadas.

#### *1.3.1 Concepto de ideología*

En el análisis de Gramsci, el concepto de ideología es central para su entendimiento de la realidad política y social. En el primer apartado ya se adelantaba gran parte de la concepción de Gramsci de ideología, ya que, como se puede recordar, la hegemonía implica una dirección cultural e ideológica de la sociedad.

Existen dos acepciones de la palabra ideología: una coloquial, con una carga despectiva que implica desacreditar ideas por su “ideologización”; y otra más bien teórica, que implica reconocer que cualquier idea política e incluso filosófica contiene una carga ideológica. El propio Gramsci (1984) ya distinguía entre estos dos usos:

El sentido peyorativo de la palabra se ha hecho extensivo y ello ha modificado y desnaturalizado el análisis teórico del concepto de ideología. El proceso de este error puede

reconstruirse fácilmente: 1°. Se identifica la ideología como distinta de la estructura y se afirma que no son las ideologías las que cambian las estructuras, sino viceversa; 2°. Se afirma que una cierta solución política es “ideológica”, o sea que es insuficiente para cambiar la estructura, mientras se cree que puede cambiarla se afirma que es inútil, estúpida, etcétera; 3°. Se pasa a afirmar que toda ideología es “pura” apariencia, inútil, estúpida, etcétera (p. 159).

Vale la pena volver a mencionar algunos aspectos de la ideología que ya habían sido citados con anterioridad: En la sociedad civil está constituida la ideología y al mismo tiempo esta es el campo de acción de la sociedad civil; la construcción de hegemonía es el desarrollo de la sociedad civil, es decir, elaboración de ideología. La ideología es una concepción de mundo y se vuelve hegemónica cuando se hace sentido común (Portelli, 1977).

En tanto que se trata de una concepción del mundo, el concepto gramsciano de ideología contiene una amplitud en el sentido de que abarca todas las actividades del grupo dirigente que:

crea una o más capas de intelectuales que se especializa en cada uno de los aspectos de la ideología de ese grupo: la economía, las ciencias, el arte. En apariencia independientes, las distintas ramas de la ideología no son más que los diferentes aspectos de un mismo todo: la concepción del mundo de la clase fundamental (Portelli, 1977, p. 18).

Estas actividades, señala Portelli (1977), incluyen aquellas que parecen menos ideológicas, como la ciencia, de manera que el científico es parte de los intelectuales de la clase hegemónica. En un sentido similar, Sánchez Vázquez (1983) señala que la ciencia no es neutral y contiene justificaciones ideológicas.

Como forma específica de la actividad humana, inserta en determinado contexto social, aun siendo un verdadero fin en sí, sirve a una finalidad externa que le impone ese contexto: contribuir principalmente al desarrollo de las fuerzas productivas en el caso de las ciencias naturales; contribuir al mantenimiento (reproducción) de las relaciones de producción vigentes o a su transformación o destrucción, cuando se trata de las ciencias sociales (p. 140).

Para convertirse en sentido común, es decir, en hegemónica, la ideología de la clase dirigente busca difundirse en el resto de la sociedad.

Sin embargo no posee la misma homogeneidad en todos los niveles: la ideología difundida entre las capas sociales dirigentes es evidentemente mucho más elaborada que los trozos sueltos de ideología que es posible reconocer en la cultura popular. Así, Gramsci distingue diferentes grados cualitativos que corresponden a capas sociales determinadas: en la cúspide la concepción del mundo más elaborada: la filosofía. En el nivel más bajo: el folklore. Entre estos dos extremos, el “sentido común” y la religión (Portelli, 1977, p. 20).

La filosofía, de tal manera, es el eje de la ideología. A esto se le agrega su relación con la historia: filosofía e historia van de la mano y juntas forman un bloque. La filosofía de un momento determinado y, por lo tanto, la ideología de un grupo específico, es estrictamente histórica. Una filosofía debe ser histórica para ser orgánica. (Portelli, 1977, p. 21). De esta manera pasamos al sentido común: “El rol esencial de la filosofía en el seno del bloque histórico se manifiesta por su influencia sobre las concepciones del mundo propagadas entre las clases auxiliares y subalternas: el sentido común” (p. 21).

El sentido común aparece como una amalgama de diversas ideologías tradicionales y de la ideología de la clase dirigente: el buen sentido. Pero las ideologías tradicionales, y en especial las religiones -cuya vinculación con el sentido común es aún más estrecha que la existente entre éste y la filosofía. Constituyen los principales elementos. Esta amalgama que son las religiones no está formada sólo por los distintos aspectos de las religiones contemporáneas, sino también por antiguas creencias, supersticiones, etc. Esto explica que no exista un solo sentido común [...] Cada capa social posee su propio “sentido común”, de tal forma que esta concepción del mundo se presenta bajo una multiplicidad de formas [...] Esta situación explica que sea sólo autoritariamente, por medio de la política, que pueda llegar a lograrse una cierta coherencia (Portelli, 1977, p. 22).

El hecho de que el sentido común o sentidos comunes contengan elementos de distintas ideologías se debe a los remanentes de una vieja ideología en relación con el periodo de construcción de hegemonía. Sobre filosofía, ideología política y hegemonía, Gramsci señala:

¿El elemento “especulativo” es propio de toda filosofía, es la forma misma que debe asumir toda construcción teórica en cuanto tal, o sea “especulación” es sinónimo de filosofía y

teoría? O bien debe plantearse una cuestión “histórica”: ¿el problema es sólo un problema histórico y no teórico en el sentido de que toda concepción del mundo, en una de sus fases históricas determinadas, asume una forma “especulativa” que representa su apogeo y el inicio de su disolución? Analogía y relación con el desarrollo del Estado, que de la fase “económico-corporativa” pasa a la fase “hegemónica” (de consenso activo). Esto es, puede decirse que cada cultura tiene su momento especulativo o religioso, que coincide con el periodo de completa hegemonía del grupo social que expresa y quizá coincide precisamente con el momento en que la hegemonía real se disgrega en la base, molecularmente, pero el sistema de pensamiento, precisamente por eso se perfecciona dogmáticamente, se convierte en una “fe” trascendental: por eso se observa que cada época considerada de decadencia (en la que se produce una disgregación del viejo mundo) se caracteriza por un pensamiento refinado y altamente “especulativo” (Gramsci, 1986, p. 328).

Ahora bien, como se puede deducir, la construcción de un marco ideológico coherente necesita de individuos que la realicen, es decir de intelectuales, los cuales, en el sentido gramsciano, deben ser orgánicos. El papel de los intelectuales es un problema de gran interés para Gramsci, por lo que aquí solo se mencionarán algunos aspectos para entender a qué se refiere el autor italiano al hablar de intelectual orgánico.

Cada grupo social, naciendo en el terreno originario de una función esencial en el mundo de la producción económica, se crea al mismo tiempo, orgánicamente, una o más capas de intelectuales que le dan homogeneidad y conciencia de su propia función no sólo en el campo económico, sino también en el social y político: el empresario capitalista crea junto con él al técnico de la industria, al científico de la economía política, al organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho, etcétera, etcétera [...] Puede observarse que los intelectuales “orgánicos” que cada nueva clase crea consigo y elabora en su desarrollo progresivo, son en su mayor parte “especializaciones” de aspectos parciales de la actividad primitiva del tipo social nuevo que la nueva clase ha sacado a la luz (Gramsci, 1986, p. 353).

Gramsci señala que la categoría de intelectual debe limitarse, no por la actividad intelectual en sí, ya que cualquier persona es capaz de realizar una actividad intelectual (o incluso filosófica) sino por la función del grupo social en cuestión en la sociedad.

Todos los hombres son intelectuales, podría decirse, por lo tanto; pero no todos los hombres tienen en la sociedad la función de intelectuales [...] Se forman así históricamente categorías especializadas para el ejercicio de la función intelectual, se forman en conexión con todos los grupos sociales más importantes y sufren elaboraciones más amplias y complejas en conexión con el grupo social dominante. Una de las características más relevantes de cada grupo que se desarrolla hacia el dominio es su lucha por la asimilación y la conquista “ideológica” de los intelectuales tradicionales, asimilación y conquista que es tanto más rápida y eficaz cuanto más elabora simultáneamente el grupo dado sus propios intelectuales orgánicos (Gramsci, 1986, p. 355-356).

Vemos aquí una diferencia entre intelectuales orgánicos “nuevos” e intelectuales tradicionales, que en sentido estricto se pueden considerar orgánicos, pero de un viejo orden que se va diluyendo conforme se construye hegemonía por el nuevo grupo social dominante.

Cada nuevo organismo histórico (tipo de sociedad) crea una nueva superestructura, cuyos representantes especializados y abanderados (los intelectuales) no pueden sino concebirse como también ellos “nuevos” intelectuales, surgidos de la nueva situación y no continuación de la precedente intelectualidad. Si los “nuevos” intelectuales se sitúan como continuación directa de la precedente *intelligentzia*, no son en absoluto “nuevos”, es decir, no están ligados al nuevo grupo social que representa orgánicamente la nueva situación histórica, sino que son un residuo conservador y fosilizado del grupo social superado históricamente (Gramsci, 1986, p, 270).

Los intelectuales, en gran medida, son individuos capaces de difundir la ideología de la clase dominante. Sin embargo, dicha difusión necesita de otros aspectos. Como se había mencionado en el primer apartado, la difusión de la ideología se realiza por las instituciones fundamentales de la sociedad civil (iglesia, escuela, prensa) (Portelli, 1977, p. 25).

Un estudio de cómo está organizada de hecho la estructura ideológica de una clase dominante: o sea la organización material tendiente a mantener, a defender y a desarrollar el “frente” teórico e ideológico. La parte más importante y más dinámica de éste es la prensa en general [...]

La prensa es la parte más dinámica de esta estructura ideológica, pero no la única: todo aquello que influye o puede influir en la opinión pública directa o indirectamente le pertenece: las bibliotecas, las escuelas, los círculos y clubes de distinto tipo, hasta la arquitectura, la disposición de las calles y los nombre de éstas. No se explicaría la posición conservada por la Iglesia en la sociedad moderna, si no se conocieran los esfuerzos prolongados y pacientes que realiza para desarrollar continuamente su sección particular de esta estructura material de la ideología (Gramsci, 1981, p. 55).

Althusser (1970) amplió considerablemente las instituciones que podemos considerar difusoras de la ideología y las llamó *aparatos ideológicos de estado* (AIE). Distinguió de tal manera los AIE religiosos, el escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de información y cultural. Si bien, como señala Mouffe (1998), Althusser no desarrolló todo su potencial en su visión de ideología al quedar atrapado en un reduccionismo teórico e incluso resulta profundamente divergente respecto a Gramsci, la categoría de AIE resulta una importante aportación en tanto distinción del aparato represivo de Estado. Es decir, resulta de utilidad al distinguir las dos funciones de la hegemonía: la coerción y el consenso.

Althusser (1970) señala que el aparato represivo de Estado pertenece al dominio público y funciona mediante la violencia (entiéndase policía y fuerzas armadas principalmente); mientras que los AIE pertenecen al ámbito privado y “funcionan mediante la ideología”. Esta distinción, dice Althusser, debe ser precisada, ya que “todo aparato de Estado sea represivo o ideológico, ‘funciona’ a la vez mediante la violencia y la ideología” (p. 30). La diferencia esencial resulta en el uso “masivo” de uno u otro elemento. Nos dice el autor francés que todos los AIE tienen como fin la reproducción de las relaciones de producción, y el más importante es el AIE escolar, ya que es en la escuela donde se enseña a los individuos, desde edad temprana, la ideología dominante, además de formarlos para su ocupación en el sistema de producción (p. 43).

Como se adelantaba, Mouffe (1998) crítica la visión althusseriana de hegemonía e ideología por su reduccionismo economicista, pues le quita a la ideología autonomía y eficacia:

Afirmar por una parte que la ideología realizada en los AIE es la ideología de la clase dominante, y por otra parte que esta ideología viene de otro lado, implica que proviene de

esta clase en tanto que clase y de sus condiciones de existencia, y conduce necesariamente a concebir la ideología de una clase como sistema de representaciones que son determinadas por su posición a nivel económico y los intereses que de esa posición derivan (p. 128).

En cambio, para la autora, el concepto gramsciano de hegemonía implica “una concepción radicalmente nueva de la ideología concebida como conjunto de relaciones de fuerza, como relaciones de poder en cuyo interior diversas estrategias son posibles” (Mouffe, 1998, p. 145).

### *1.3.2 Ideología y fuerzas armadas en América Latina*

Una vez revisado el concepto de ideología, podemos revisar históricamente la(s) ideología(s) dominantes en la región latinoamericana y cómo las fuerzas armadas hacen parte de ella al ser interiorizada por sus miembros.

Una buena parte del contenido ideológico contemporáneo latinoamericano proviene del siglo XIX, en tanto que se trata del escenario en el cual se construyeron las identidades nacionales y se definieron definitivamente las fronteras territoriales de la región. Aún más importante, la ideología liberal europea se extendió sobre las élites latinoamericanas, al grado de llegar a formar ciertos consensos:

Aunque sobre ciertas cuestiones hubo grandes desacuerdos entre la elite política, hablando en términos amplios se puede decir que aceptaron de forma generalizada muchos aspectos de la concepción liberal individualista de la sociedad y de la economía y (en menor grado) de los ideales de igualdad jurídica (Safford, 1991, p. 45).

Safford (1991) señala tres fases en el proceso de liberalización decimonónica en Hispanoamérica: Un periodo reformista, del inicio de las independencias (aunque reconociendo que el impulso de la ideología liberal tiene su origen en el siglo XVIII) a los primeros años de la década de 1830; un periodo de pesimismo y conservadurismo hasta la década de 1840; y un nuevo periodo de optimismo hasta la década de 1860 (p. 47).



Tal como quedó explicado anteriormente, en una ideología dominante quedan remanentes de la vieja ideología:

Al construir los nuevos estados, los líderes hispanoamericanos recibieron la influencia de una serie de elementos contradictorios que intentaron hacer compatibles de alguna manera. A pesar de la hostilidad que manifestaron contra el dominio español durante la lucha contra la independencia, apenas pudieron escapar de la tradición política española de la que habían bebido. Pero, inevitablemente, fueron muy influenciados por los ejemplos políticos francés e inglés, tanto directamente como por medio del liberalismo español, así como por el modelo de los Estados Unidos (Safford, 1991, p. 49).

Ahora bien, a pesar de la distinción entre liberales y conservadores que se realiza de manera principal en la historiografía para el siglo XIX, ambos bandos tuvieron como referencia ideológica al pensamiento liberal europeo. En el primer momento, Montesquieu, Rousseau, Constant, Bentham y Tocqueville, fueron algunos de dichos referentes (Safford, 1991, p. 49). La diferencia entre liberales y conservadores, de tal manera, estuvo supeditada a la lucha política, en cuestiones como la forma de gobierno o el papel de la iglesia y los militares, y aunque existió una lucha ideológica, los actores políticos compartían el mismo corpus liberal de la época.

Sin embargo, esto no quiere decir que no existieron individuos que no siguieran como tal las ideas políticas del liberalismo europeo. Safford (1991) señala que los individuos de las élites que tuvieron estudios universitarios eran más propensos a buscar las fórmulas liberales, como por ejemplo el establecimiento de constituciones, mientras que los militares e individuos sin dichos estudios universitarios preferían el uso de la fuerza. “Entre 1820 y 1845, el constitucionalismo liberal moderado europeo constituía la base intelectual de todos los líderes que habían recibido educación universitaria, fueran del grupo político que fueran, exaltados, moderados o conservadores” (p. 59).

Lo anterior no significa que los grupos conservadores estuvieran alejados de las discusiones intelectuales de la época, por el contrario, se puede constatar la existencia de un conservadurismo ilustrado (Véase Andrews, 2009 y Vázquez, 1997). Para el caso mexicano, por ejemplo, Andrews (2009) señala que las ideas conservadoras en la primera mitad del

siglo XIX no constituían una ideología fija, además de que no existían como tal grupos conservadores y liberales, sino una serie de políticos que comulgaban con ciertas ideas, la mayor parte de las veces vinculadas al pensamiento conservador (de acuerdo con el pensamiento contemporáneo).

De tal manera que se puede compartir la postura de que “la cultura de las elites gobernantes e intelectuales de América Latina es íntegramente occidental” (Hale, 1991 p. 1.) La ideología liberal, con ciertos contrastes, logró sobrevivir el cambio de siglo, y ya bien entrado el siglo XX, “lo que parecía ser la realización del liberalismo era, de hecho, su transformación en un mito unificador a partir de una ideología que chocaba con el orden colonial heredado, un orden de instituciones y pautas sociales” (p. 2).

Algunos de los aspectos del liberalismo decimonónico que persistieron al entrar el siglo XX, e incluso mantienen cierta continuidad histórica (lo cual se debe tomar con cautela, recordando al propio Gramsci al referirse a los intelectuales nuevos y tradicionales), son el constitucionalismo y el Estado secular (Hale, 1991). Hay otros aspectos que, sin embargo, han variado con mayor notoriedad a lo largo de la vida independiente de América Latina. Tal es el caso del positivismo, el cual tuvo su auge a finales del siglo XIX y logró crear consensos en las élites. Las ideas surgidas de esta época llevaron a postulados de una “política científica” y al autoritarismo de inicios del siglo XX, donde el “orden y progreso” fue una de sus mayores expresiones (Hale, 1991).

En cuanto a los militares, durante gran parte del siglo XIX, como ya se mencionó, no necesariamente aceptaban las ideas políticas liberales, aunque de manera indirecta estaban relacionados a ellas debido a lo que se puede considerar como un clima de época.

Algunos papeles políticos importantes, incluyendo el poder supremo, también fueron desempeñados por otros individuos [además de los universitarios] (oficiales militares, caudillos regionales, comerciantes y propietarios) que a menudo sabían bien poco de las ideas liberal-constitucionales, lo cual no les importaba mucho [...] Los oficiales militares a menudo entraban en la vida política a fin de proteger su reputación, a veces para proteger a los militares como grupo de intereses y de vez en cuando para representar intereses sociales más amplios (Safford, 1991, p. 60).

Vale la pena resaltar que una de las disputas políticas del siglo XIX era el papel de los militares. Dicha cuestión ha permanecido a lo largo de la historia independiente latinoamericana. En el liberalismo, la supremacía civil, así como el Estado secular, son situaciones ideales, por lo que parte de las luchas decimonónicas tuvieron ese sentido. De igual manera recordemos el proceso de modernización del ejército explicado en el apartado anterior.

La decisión de reorganizar las fuerzas armadas obedece a la aspiración civil de despolitizar la institución, militarizándola, y separarla de las fracciones y partidos en pugna mediante su mayor profesionalización. En la mayoría de los casos, los resultados no responden a las aspiraciones: al dotar al ejército de autonomía por encima de los partidos, se le otorgan en gran medida los medios para su propia intervención política (Rouquié, 1984, p. 83).

Es decir, si a principios del siglo XIX, cuando no existían militares profesionales en el sentido estricto y preponderaban los caudillismos, sin una instrucción intelectual profunda, a partir de su modernización a finales del siglo XIX y principios del XX, las fuerzas armadas comienzan a tomar una postura ideológica mucho más clara.

Un elemento central en la modernización de las fuerzas armadas, como se puede recordar, es la creación de escuelas militares. Cuando la modernización ya se ha llevado a cabo, ya bien entrado el siglo XX, “los oficiales dan la imagen de una elite estructurada que se perfecciona constantemente a través de una red de escuelas y los requerimientos intelectuales y morales exigidos por la promoción” (Rouquié, 1984, p. 117). De tal manera, los militares comienzan a desarrollar un sentimiento de superioridad, no solo por la educación militar, sino por su independencia burocrática y su eficiencia frente a las elites civiles (p. 118). Más aún, al interior de las fuerzas armadas, por la propia naturaleza de su función, se desarrolla el nacionalismo y los sentimientos patrióticos de manera más profunda que en el resto de la sociedad. Además, a consideración de los militares, la ineficacia de las elites civiles, a lo largo del siglo XX, constantemente sirvió de argumento para que los militares tomaran el poder.

El ejército, encargado de “educar al soberano” y, sobre todo, inculcarle el patriotismo, sólo puede estar integrado por ciudadanos puros, vigorosos, patriotas, enfrentados a una

sociedad civil, ¡ay!, corrupta, afeminada y cosmopolita [...] El cosmopolitismo de las elites, que hacen sus fortunas en inglés y gozan de la vida en francés, los ojos puestos en el Viejo Continente y luego en el Norte, ayuda a desarrollar entre los oficiales ese sentimiento de superioridad espiritual y moral que compensa la inferioridad social (Rouquié, 1984, p. 120).

Por otro lado, regresando al campo de las ideologías en América Latina, para Kaplan (1994), a partir de 1930 entran en escena nuevas ideologías. “Las principales fuerzas y tendencias cultural-ideológicas que se despliegan y compiten entre sí son: el conservadurismo tradicionalista; el desarrollismo; el nacional-populismo; las variedades de la izquierda; el neofascismo” (p. 156). De estas tendencias ideológicas el desarrollismo es la que tuvo mayor impulso e incluso un periodo hegemónico.

El desarrollismo se identifica con el ascenso y avance del neocapitalismo periférico, y se presenta como una constelación que incluye: la primacía de la idea de crecimiento; el productivismo, el eficientismo, el consumismo, la disipación; el reduccionismo, el fatalismo y conformismo, la selectividad destructiva; el cientificismo, el tecnoburocratismo (Kaplan, 1994, p. 157).

En cierta manera, el desarrollismo es una expresión contemporánea de la modernidad capitalista. Es la idea liberal de progreso relanzada por el nuevo sujeto hegemónico tras el final de la segunda guerra mundial. Fue Harry S. Truman a quien se le adjudica el uso del término de *desarrollo* con sus acepciones ideológicas contemporáneas por primera vez, en un discurso de 1949. Dicho discurso marcó la apertura de una *American era*, en la que Estados Unidos hacía explícita su nueva posición en el mundo (Esteva, Babones y Babcicky, 2013 p.3). “Development was created as a symbol of affluence; a promise of what life could be like under a benign US imperium. Development meant anti-Communism” (p. 6).

Ahora bien, a partir de la década de 1980 entra en escena una nueva ideología: el neoliberalismo. Como bien expone Harvey (2007), la teoría neoliberal comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1940 por un grupo reducido de economistas, historiadores y filósofos. Ellos, “se describían como ‘liberales’ (en el sentido europeo tradicional) debido a su compromiso fundamental con los ideales de la libertad individual.

La etiqueta neoliberal señalaba su adherencia a los principios de mercado libre acuñados por la economía neoclásica” (p. 27).

No fue hasta la década de los años setenta cuando el neoliberalismo empezó a ganar prestigio, pero sola hasta los años ochenta se extendió y se convirtió en hegemónico a lo largo del mundo, en particular en América Latina. El neoliberalismo, como dice Harvey (2007), significó la restauración del poder de la clase dominante. Por otro lado, el neoliberalismo no significó el abandono de la retórica desarrollista, por el contrario, el primero fue capaz de absorber al segundo.

A la caída de la Unión Soviética las izquierdas latinoamericanas se replegaron políticamente. Se dejó atrás el uso de la violencia como medio legítimo para tomar el poder y los Estados Unidos declaraban su momento unipolar. Es precisamente en este último momento cuando comenzaron a aparecer los gobiernos de izquierda en la región, que sin desafiar el sistema capitalista, retomaron las ideas del socialismo del siglo pasado. Esta vuelta al socialismo, vale decir, no se realizó bajo los mismos términos que los planteados en el siglo XX, sino que, en el sentido gramsciano, fueron ideas que se reconstituyeron y se incorporaron a los distintos proyectos políticos en sus búsquedas de hegemonía, especialmente en Venezuela, Ecuador y Bolivia. El adjetivo “del siglo XXI” que en primer término le dio el proyecto bolivariano al socialismo es un indicador de este rescate.

## **2 Antecedentes nacionales**

Para entender los procesos nacionales de construcción de hegemonía es necesario realizar un análisis histórico de los casos estudiados. Tomando en cuenta que el sector militar de la sociedad nació simultáneamente a los Estados-nación es necesario remontarse a esos momentos de génesis, en el caso latinoamericano, a las guerras de Independencia de inicios del siglo XXI. Rasgos históricos comunes a la región latinoamericana y, en específico a los tres casos de estudio, son los esfuerzos de las élites en la construcción y consolidación de un Estado-nación a lo largo del siglo XIX, la modernización de las fuerzas armadas a partir de fines del siglo XIX e inicios del XX y proyectos de construcción de hegemonía en el siglo XX. Específicamente en los tres casos de estudio, el siglo XX culmina con crisis orgánicas y la emergencia de nuevos proyectos nacionales que irán tomando el poder en el siglo XXI.

### **2.1 Venezuela**

En 1999 inició un proceso de cambio en Venezuela que produjo profundas transformaciones, tanto en el sistema político, como en la propia sociedad venezolana. Antes de eso, en Venezuela había una hegemonía de casi cuarenta años que estaba en crisis y, sin embargo, fue el modelo hegemónico más duradero en la historia del país. En el siglo XIX la inestabilidad y las constantes disputas y rebeliones no habían permitido la construcción de una auténtica hegemonía, aunque se logró el establecimiento y construcción del Estado. En la primera mitad del siglo XX apenas se establecieron las bases socioeconómicas para la hegemonía que finalmente tendría su empuje político en 1958.

#### *2.1.1 Del periodo independentista a la construcción del Estado*

El siglo XIX venezolano, al igual que en la mayoría de los países de la región, fue de intensas luchas por definir el rumbo de una nación en construcción. Se trató de un siglo turbulento con breves periodos de estabilidad política y económica. La construcción de hegemonía fue un proceso complicado ante la falta de una auténtica burguesía y ante la presencia de una

clase dominante, muchas veces sin definiciones políticas claras y en lo general tachada de corrupta.

Bajo el dominio español, la Capitanía General de Venezuela estaba incorporada territorialmente al Virreinato de Nueva Granada, aunque las Capitanías, bajo la dinastía borbónica, tenían plena autonomía respecto a sus virreinos y respondían directamente a la metrópoli.

Hacia finales del siglo XVIII, en Venezuela no destacaba la producción de metales preciosos, como en el caso del Virreinato de la Nueva España o del Virreinato del Perú, por lo que podría parecer una región con poca importancia. Sin embargo, Venezuela era una de las colonias agrícolas españolas más importantes ya que:

había sido [...] la de más éxito agrícola [...] El cacao venezolano era el mejor del mundo y era el principal producto de exportación de la provincia hacia Europa y México. A finales del siglo XVIII empezaron a producirse cambios en el cultivo del café, que ofrecía mejores beneficios a cambio de una inversión menor (Deas, 1991, p. 178).

Aun así, dadas las características del imperio español, las colonias agrícolas no tenían la misma importancia que sus principales virreinos. En la Venezuela colonial existía cierta fluidez social y racial, en parte por la presencia menos sólida de la Corona, de tal manera que “era un eslabón débil del imperio español que estaba destinado a romperse en una fecha más temprana que en las otras regiones del continente” (Ellner, 2014, p. 36).

De tal manera se fue preparando el terreno hacia la guerra de independencia. En Venezuela, las ideas liberales permearon en la sociedad criolla tempranamente.

Al auspiciar la Corona el florecimiento de las artes en ultramar, las ideas ilustradas sediciosas y la lectura de las obras de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Condillac y Raynal, entre otros, contribuyeron al desafío de la autoridad, formando corrientes en escuelas, universidades y reuniones de la clase criolla dominante (Donís Ríos, 2018, p. 83).

Lo ideológico, sumado a lo económico (precios bajos de la producción y elevados impuestos) y geopolítico (posición de Gran Bretaña), llevaron a que desde la década de 1770

comenzaran a existir manifestaciones de resistencia a la Corona, especialmente contra los impuestos. Ocurrieron rebeliones en 1779, 1781, 1795 y 1797 (Donís Ríos, 2018).

A pesar de estas rebeliones tempranas y de un clima de agitación entre la población, no fue hasta inicios del siglo XIX, bajo el contexto de la invasión napoleónica a España en 1808, que se inició el movimiento de independencia, al igual que en el resto de las colonias de España en América.

Los aristócratas más representativos presionan al gobernador [Juan de] Casas para la creación de una Junta Gubernativa como la de España. Hacen reuniones sigilosas en sus residencias para pulir argumentos, pero también para desembuchar reproches enfáticos contra las autoridades regionales y contra la monarquía en general (Pino Iturrieta, 2018, p. 91).

Como se puede observar, en la historiografía venezolana la visión común de la independencia es que fue realizada por la *aristocracia* o por la clase criolla dominante. En parte, esto resulta una realidad ya que, al igual que en el resto de Hispanoamérica, los movimientos independentistas fueron una reacción criolla a la ausencia de Fernando VII en el trono de España.

Además, los individuos que lograron cohesionar el movimiento, como el caso de Simón Bolívar, eran de dicho estrato de la población, o al menos eran individuos ilustrados que habían logrado hacer viajes a Europa y estar en contacto con las ideas del liberalismo. Carrera Damas (1976), en una crítica a la historiografía venezolana, señala:

En ese sentido ideológico, bien podría decirse que se trata de una historiografía heroica para los héroes, pues al sentar la afirmación desde entonces siempre repetida de que la Independencia fue obra concebida por un puñado de aristócratas ilustres, y realizada por unos cuantos más heroicos guerreros, contra la oposición cerrada de un pueblo ignorante de su propio bien, ponía la primera piedra en la edificación de las ideologías antipopulares actuantes hasta el presente. En el lapso inmediato posterior a la guerra, esta subestimación del papel del pueblo en el logro de la Independencia -que constituye una de las más escandalosas y tendenciosas falsificaciones de la historia de Venezuela-, así como la subestimación de los valores no militares cual consecuencia de la exaltación apabullante de



los militares, convenían muy propiamente a los intereses de los grupos oligarcas que ejercieron el poder durante el siglo XIX (p. 81).

Más adelante el autor reafirma:

La subestimación del pueblo como agente histórico está en esa historiografía combinada con la exaltación del héroe militar y de los valores que le son propios, formando con ello un producto ideológico muy adecuado a la vida caudillesca de la República durante todo el siglo XIX y en función del hombre providencial, del salvador necesario, no podía menos que proporcionar una buena coartada histórica para los apetitos de poder de los grupos terratenientes y comerciantes constituidos en torno a los caudillos (p. 95).

Ellner (2014), en un enfoque revisionista, señala que a lo largo de la historia venezolana existe una tendencia en la que los líderes cambian constantemente de posición, mientras los sectores populares se mantienen firmes en sus demandas y metas.

[Dicha tendencia] fue particularmente notable durante la lucha por la Independencia [...] en tan solo unos pocos años, los realistas perdieron la simpatía de los sectores populares, mientras que las fuerzas independentistas -que al principio representaban exclusivamente a la elite colonial- lograron llenar el vacío resultante (p. 40).

Una característica importante de la lucha por la Independencia es que “se libró a la par en los campos de batalla y en las prensas de la imprenta” (Carrera Damas, 1976, p. 79). Algunas de las publicaciones importantes, que difundían las ideas de los independentistas, fueron la *Gaceta de Caracas*, el *Semanario de Caracas*, el *Publicista de Venezuela* y el *Patriota de Venezuela*. (Pino Iturreta, 2018, p. 94).

Aunque la Independencia de Venezuela se declaró en julio de 1811, y en diciembre de ese año se promulgó la Constitución Federal de las Provincias Unidas de Venezuela (Pino Iturreta, 2018), la guerra de Independencia se extendió por varios años más. Como señala Carrera Damas (1976), el proceso no se puede reducir a los hechos militares y privarla “de sus efectos económicos, sociales y políticos que son solo perceptibles en las dos décadas siguientes” (p. 75).

Durante la guerra contra España, se sucedieron tres repúblicas, de acuerdo con la historiografía venezolana. La Primera República inició con la salida de los representantes de

España en 1810 y se extendió hasta la derrota de Francisco de Miranda en 1812; La Segunda fue de la llegada de Simón Bolívar del occidente de Venezuela en 1813 a 1815; y la Tercera fue del desembarco de Bolívar en la isla de Margarita en 1816 a 1819. Estas tres “repúblicas” sucesivas habrían moldeado el pensamiento y acción de Bolívar, que se consolidó hacia la Tercera República (Ellner, 2014).

Ahora bien, como se puede notar, lo que da nombre a estas etapas de la guerra de Independencia son hechos militares, en los que no es necesario ahondar. Sin embargo, es importante mencionar estos periodos debido a que serán recursos retóricos usados casi dos siglos después.

Fue hasta 1819 que se fundó la República de Colombia, que integraba a los actuales Estados de Colombia, Ecuador y Venezuela (cabe resaltar que actualmente a esa república embrionaria se le llama Gran Colombia para diferenciarla de la Colombia contemporánea).

[La creación de esta República se debió] a la necesidad de reunir contingentes numerosos para proseguir la guerra, pero especialmente por una decisión de Bolívar que no es consultada en las regiones que van a formar parte de la gigantesca jurisdicción [...] Buena parte del inmenso territorio está todavía en poder de los realistas, pero el general triunfante fabrica una flamante nación asegurando que llegará a la cumbre en el futuro. Bolívar es el presidente de Colombia y [Francisco] Santander el vicepresidente (Pino Iturreta, 2018, p. 98).

En 1821, tras la Batalla de Carabobo y la captura de la fortaleza de Puerto Cabello el territorio quedó finalmente liberado de las tropas españolas (Pino Iturreta, 2018, p. 99). La Gran Colombia sobrevivió hasta 1830. Durante su existencia, José Antonio Páez fue el jefe civil y militar del departamento de Venezuela, quien en 1826 fue llamado a comparecer a Bogotá por Santander debido a excesos cometidos en su autoridad. Páez desacató la orden, apoyado inicialmente por Bolívar, ya también enemistado con Santander (Pino Iturreta, 2018). La enemistad entre Bolívar y Santander servirá en el futuro como un recordatorio de los constantes conflictos entre Colombia y Venezuela.

En 1830 Venezuela fue el primer territorio en separarse de Colombia, seguido poco después de Ecuador. El mismo año, visto derrumbarse su proyecto de una Gran Colombia, Bolívar

muere de enfermedad. Páez, del Partido Conservador, fue el primer presidente venezolano y además fue la figura dominante en las décadas de 1830 y 1840 (Ellner, 2014, p. 47). En la fallida Gran Colombia, no hubo una construcción de hegemonía debido a los intereses e identidades contrapuestos de las élites caraqueña, bogotana y quiteña. Bajo el liderazgo de Páez, hay un primer intento de construir lo que podríamos llamar un bloque histórico, o al menos de cohesionar a la élite para consolidar al naciente Estado-nación:

La posición de José Antonio Páez fue algo más segura [respecto a los liderazgos en Colombia y Ecuador] y logró mantener su reinado republicano hasta principios de 1848. Pero si fue así se debió a algo más que a su conocida relación con el alto llano y, por otro lado, también tuvo oponentes. Muchos elementos contribuyeron al dominio de Páez. El prestigio militar que le rodeaba y también su habilidad para reunir hombres armados en momentos de emergencia, que corría paralela a su prestigio [...] Pero también lo fue el arte de Páez en lograr compromisos políticos (Deas, 1991, p. 188).

Sin embargo, esta élite política carecía de un sector económico fuerte y dominante. Si bien Páez mantuvo una alianza con los comerciantes de Caracas en la década de 1830, esta se desmoronó al hacerse sentir la caída de los precios hacia finales de la década (Deas, 1991, p. 188). Además, tras la guerra de Independencia “las pérdidas de la población se calculan en más de 30%, cifra que se siente con mayor contundencia en el sector de la aristocracia cuya presencia casi se extingue” (Pino Iturreta, 2018, p. 101).

Mientras que algunos autores califican al gobierno de Páez como visiblemente corrupto (Véase Ellner, 2014), algunos otros resaltan que su gobierno fue honesto y austero (Deas, 1991 y Pino Iturreta, 2018). Esta diferencia en la calificación de Páez puede deberse precisamente a la situación económica de quiebra inmediatamente posterior a la independencia. “No debe sorprender que estos gobiernos trataran de mantener los gastos al mínimo -aquí el modo de hacer europeo del *laissez-faire* coincidió con la necesidad” (Deas, 1991, p. 186). Al respecto, un aspecto de particular importancia es el relativo a las fuerzas armadas:

Un gasto importante que seriamente se intentó recortar fue el de las fuerzas armadas. Estos países [Ecuador, Colombia y Venezuela] dejaron virtualmente de tener marina de guerra.

Las fortalezas, que se consideraban un símbolo antirrepublicano, fueron cayendo en ruinas y algunas incluso fueron demolidas. Después de 1830 en todas partes el ejército permanente quedó reducido a pequeños cuerpos de veteranos, suficientes para guardar arsenales y para el reclutamiento en caso de emergencia, pero que en época de paz supusieran una carga lo más pequeña posible para el tesoro. Las circunstancias políticas de la disolución de la Gran Colombia favorecieron la reducción del ejército. El general Páez estableció su dominio en Venezuela con las fuerzas que tenía directamente bajo su mando y gracias a los acuerdos a que llegó con algunos individuos poderosos localmente. Muchos oficiales bolivarianos que estaban fuera de Venezuela quedaron excluidos (Deas, 1991, p. 186).

También en este periodo de dominio de Páez es que se realizaron pasos importantes en la construcción del Estado-nación, con una serie de medidas políticas como el establecimiento de una burocracia, de una tesorería, etc. Pero también con propuestas y medidas ideológico-pedagógicas liberales tendientes a instaurar nuevos valores congruentes con la creación de riquezas y del libre comercio (Pino Iturreta, 2018).

Un aspecto más en la construcción del Estado en este periodo, que fue y sigue siendo parte esencial de la lógica ideológica del Estado venezolano, es la creación de los valores patrios. Dichos valores tienen su pilar en lo que se ha dado por llamar el *culto a Bolívar*, instaurado en 1842 con el repatriamiento de sus restos (Carrera Damas, 1976). Todos los gobiernos posteriores a los de Páez, desde el siglo XIX hasta nuestros días, sin excepción, exaltaron y exaltan la figura de El *Libertador*.

[El culto a Bolívar es] eje de un culto heroico que ha llegado a convertirse en la segunda religión -una especie de religión cívica-, que se inculca a los escolares y que ha llegado a estar presente en todo el ámbito de la vida ideológica de los venezolanos, hasta constituir parte esencial de una conciencia nacional deliberadamente orientada hacia valores alienatorios de las más fecundas potencias del pueblo (Carrera Damas, 1976, p. 86).

Como podemos ver, en este periodo se sentaron las bases de lo que es el Estado-nación de Venezuela. Sin embargo, aún se necesitaron muchos pasos y transformaciones en todos los terrenos de la vida social, política y económica de Venezuela para que se lograra construir una verdadera hegemonía.

### 2.1.2 *La Guerra Federal y el triunfo del Liberalismo*

Hacia finales de la década de 1840 el dominio de Páez llegó a su fin, debido en parte a la situación económica de crisis. Pero sobre todo se debió a que “las rivalidades y antipatías locales, que a menudo tenían su origen en los tiempos coloniales se enredaban en la nueva política republicana” (Deas, 1991, p. 189). Mientras en 1846 se sucedieron revueltas contra Páez, en 1848 el veterano de la Independencia perdió el poder frente a José Tadeo Monagas (quien el propio Páez había nominado como candidato).

Monagas y su familia gobernaron hasta 1859. Durante este periodo de “dictaduras consanguíneas”, “la república se convierte en negocio familiar, como si las predicas y las conductas del pasado anterior a 1847 hubieran pasado en vano” (Pino Iturreta, 2018, p. 112).

La década en la que los hermanos Monagas gobernaron el país se caracterizó por una gran inestabilidad, rebeliones, abuso de poder, represión de los opositores, endeudamiento del Estado y baja de los precios agrícolas y ganaderos. En 1854, por otro lado, se declaró la abolición de la esclavitud, que a pesar de que fue una medida que ganó simpatías, además de ser necesaria ante el declive de dicha institución, repercutió en la economía y no terminó por mejorar el destino de los antiguos esclavos, ahora convertidos en sirvientes o peones. (Pino Iturreta, 2018, pp. 109-116).

En esta turbulenta década, comenzaron las discusiones sobre federalismo y centralismo que como en la mayoría de los países latinoamericanos, se dio entre liberales y conservadores. La disputa fue la que finalmente precipitó la salida de los Monagas del poder y llevó a la guerra federal de 1859-1863.

Los historiadores tradicionales generalmente resaltan la violencia fortuita y la falta de coordinación del conflicto de cinco años, el cual tuvo como consecuencia un estimado de 100 mil muertos y la reducción del número de reses en más de 50% (Ellner, 2014, p. 48).

Los liberales fueron los ganadores de la guerra, tras lo cual “el federalismo llega a dominar en casi todo el país -apenas los Andes se libran de su influencia debido a la protección de las moles montañosas” (Pino Iturreta, 2018, p. 120). Con el partido conservador

virtualmente derrotado y desaparecido, sobrevino un periodo de dominio liberal. “La guerra federal no tuvo de ningún modo en la sociedad venezolana el efecto nivelador que sus apologistas insinúan, pero acabó con el conservadurismo venezolano, ya que después de ella, de una manera u otra, Venezuela fue liberal” (Deas, 1991, p. 195).

Tras la guerra, pasaron algunos años de inestabilidad política, hasta que finalmente, en 1870, tomó el poder Antonio Guzmán Blanco, quien dominó el país hasta 1899. Hasta este momento, podríamos decir que comenzó un nuevo intento de construcción de hegemonía, con una ideología que logró volverse dominante. Sin embargo, la presencia de un hombre de armas fuerte en el poder no sería suficiente para tal motivo.

Que la supremacía de Guzmán Blanco en Venezuela (de 1870 a 1888) fuera tan larga parece indicar que se resolvieron algunos problemas geopolíticos, pero la hegemonía del general Joaquín Crespo de 1892 a 1898 no fue del todo tranquila. Él mismo murió en una batalla y, al igual que en Colombia, el siglo terminó en Venezuela con una guerra civil (Deas, 1991, p. 190).

Sobre este último punto, cabe aclarar que Crespo no tuvo precisamente la supremacía, pues era un hombre de confianza de Guzmán (Pino Iturreta, 2018, p.123). En este periodo se realizaron esfuerzos modernizadores en el sentido liberal. Fueron ante todo “un proceso de reformas sin guerra por las reformas, curiosidad que remite a la debilidad de los sectores que perdían preminencia” (p. 125).

Como se puede recordar del capítulo anterior, la educación es una institución fundamental para la construcción de ideología. En el gobierno de Guzmán, se estableció la instrucción pública y se multiplicaron planteles y alumnos. Otras reformas de cuño liberal fueron el matrimonio civil, la secularización de cementerios y, además, se construyó infraestructura como carreteras y ferrocarriles. Por otro lado, como pasó con los Monagas, el enriquecimiento de Guzmán y Crespo fue más que evidente y al cabo de los años multiplicaron sus propiedades y posesiones (Pino Iturreta, 2018). Incluso Guzmán llegó a ser el primer multimillonario hispanoamericano en figurar en la sociedad parisiense (Deas, 1992, p. 315).

En lo económico, Venezuela seguía siendo un país mayoritariamente agrario:

Sus ambiciones [de Guzmán] eran grandiosas, pero no se equiparaban con la inserción de Venezuela en la economía internacional. En términos económicos, presidía un país que exportaba café, cacao, cuero y oro, que podía ofrecer escaso número de contratos mayores al capitalista extranjero y cuyo mercado doméstico era notoriamente limitado (Deas, 1992, p. 318).

La supremacía de Guzmán, junto con el siglo XIX, terminó en 1899, con la Revolución restauradora de 1898 que lo derrocó, bajo el mando de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez.

### 2.1.3 *Las dictaduras del siglo XX*

El gobierno de Cipriano Castro (1899-1908), así como el de Juan Vicente Gómez (1908-1935), no solo fueron el indicador de un nuevo siglo, también representaron cambios importantes para el país, que en estos años pasó de ser un país agrícola a uno petrolero. Por lo tanto, existieron nuevas condiciones para la construcción de hegemonía que, sin embargo, no se consolidaría hasta 1958.

La nueva época no solo fue importante en dichos términos económicos, también lo fue en la estructura de clases y en el papel y organización de las fuerzas armadas. Por otro lado, el ascenso de Castro y Vicente Gómez representó la puesta en escena del área andina, una región que había quedado excluida de la mayoría de las dinámicas del país y donde incluso los efectos de las guerras no habían llegado con la misma fuerza.

El ascenso de Castro al poder se ha tomado convencionalmente como el comienzo de un periodo de dominación andina en la política venezolana. No sólo fue Castro el único presidente que provenía de la región andina, sino también lo fueron su sucesor, Gómez, y los sucesivos presidentes anteriores a 1945, el general Eleazar López Contreras y el general Isaías Medina Angarita (Deas, 1992, p. 320).

El gobierno de Castro se enfrentó al bloqueo naval de Gran Bretaña y Alemania de 1902-1903, al cual logró sobrevivir por un acuerdo con las potencias y en medio de una retórica nacionalista. En 1908 Juan Vicente Gómez, su vicepresidente, dio un golpe de Estado con el

apoyo discreto de Estados Unidos, que mantenía presencia naval en la costa (Deas, 1992, p. 322).

Gómez, convertido en dictador, dio pasos amplios en la modernización del Estado y sus fuerzas armadas. Bajo su gobierno, se descubrieron los primeros grandes yacimientos de petróleo y se dieron concesiones para su explotación a empresas extranjeras.

En la era gomecista, Venezuela le abrió las puertas a las empresas petroleras tanto británicas como estadounidenses, convirtiéndose en una fuente de suministro de vital importancia para los norteamericanos industrializados. En 1928 Venezuela suministraba casi una tercera parte de la producción total de la Shell y de la Gulf, y casi más de la mitad de la Standard de Indiana (Padilla, 2019, p. 180)

Para modernizar al ejército, primero suprimió los caudillismos que habían dominado el siglo XIX. Después, el programa consistió en fundar escuelas militares y profesionalizar y disciplinar a los militares (Véase Romero, 2020). Para Rouquié (1984), la profesionalización del ejército venezolano fue bastante tardía.

A principios del siglo XX, éste [ejército] era conocido en todo el continente como una institución militar pletórica de oficiales incultos, cargados de galones y entorchados. Es verdad que las guerras civiles que devastaron al país durante el siglo pasado [XIX] dieron lugar a instituciones militares sumamente descentralizadas, donde la indisciplina de los grandes “revolucionarios” iba de la mano de una asombrosa inflación de grados (Rouquié, 1984, p.218).

La modernización de las fuerzas armadas comenzó en 1910 bajo el modelo prusiano, pero con una misión de oficiales chilenos, los cuales fueron expulsados por Gómez, para después contratar una misión peruana con doctrina francesa. En 1920, una misión francesa se encargó de crear la aviación militar (Rouquié, 1984, p. 96 y Nesbet, 2010, p. 239).

A la muerte de Gómez en 1935 le sucede su ministro de guerra, el General Eleazar López Contreras (1935-1941) y después el General Isaías Medina Angarita (1941-1945), este último ya formado en la nueva academia. Ambos empiezan a suavizar los canales de participación con cierta apertura que dio pie al nacimiento de los primeros partidos políticos modernos. El primero fue Acción Democrática (AD) en 1941, que provenía de una formación política



anterior creada en 1939 (Partido Democrático Nacional), seguido por el Comité Político Electoral Independiente (COPEI) en 1946, la Unión Republicana Democrática (URD) en 1945 y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) formado en la clandestinidad en 1931 y legalizado en 1945 (Romero, 2020, p. 29).

Como se puede observar, la creación de nuevas formaciones políticas, propiamente partidos políticos en el sentido contemporáneo, reflejaba tanto los cambios socioeconómicos en Venezuela, en parte impulsados por el petróleo y la posición en la que colocó al país en el ámbito internacional; así como la coyuntura mundial, como la influencia de la Revolución rusa, la mexicana y la Primera Guerra Mundial, que abrieron a Venezuela a nuevas ideologías.

En 1945, AD, de carácter multclasista, inspirado en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México, junto a la Unión Patriótica Militar (UPM), dieron un golpe de Estado que instaló a un civil a la cabeza.

[Durante el gobierno de Betancourt] AD procedió rápidamente a organizar a sus aliados y constituyentes y a poner en práctica el programa político que había formulado desde 1928. Siguiendo los ejemplos del ARPA peruano, el PRI mexicano, el leninismo y su propia experiencia clandestina del decenio de 1930, los líderes de la AD creían que la clave del éxito consistía en un partido político disciplinado. Estaban decididos a no dejar un solo distrito o municipio sin su sede de la AD. (Ewell, 2002, p. 315).

Durante sus años de formación, Acción Democrática encontró un terreno llano para hacerse de simpatizantes y afiliados bajo el ejemplo mexicano del corporativismo, por lo que cuando los otros partidos fueron fundados, los *adecos* ya tenían a la mayoría de la población de su parte. En 1948 se realizaron elecciones, en las que AD ganó abrumadoramente bajo la candidatura del novelista Rómulo Gallegos, autor de la célebre novela *Doña Bárbara*.

Se podría decir que la política *adeca* del trienio fue uno de los mayores y más elaborados intentos por construir un bloque histórico, bajo una ideología socialdemócrata alimentada de las experiencias de otras latitudes. El programa corporativista de Acción Democrática es un indicio de esto: en 1947 se fundó la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), que aglutinó a los sindicatos controlados por AD. También en 1944 se realizó la convención de

las Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, que fue la precursora de la asociación patronal Fedecámaras (Ewell, 2002) que, aunque independiente de AD, demostró los deseos de cohesionar a la creciente clase productora.

En este periodo llamado el *trienio*, el gran poder de AD dejó sin sentido la competencia política para los otros partidos (Bautista, 1993). Esto, sumado a los intereses económicos y militares que tocó el gobierno de Betancourt, llevaron a un golpe de Estado a los pocos meses de iniciado el gobierno de Gallegos, encabezado por el coronel Marcos Pérez Jiménez, quien había sido el principal líder militar del golpe de 1945.

El golpe de 1948 fue síntoma de la transformación de las fuerzas armadas. Ha sido el único golpe de Estado en la historia de Venezuela corporativo, es decir, realizado por el conjunto de las fuerzas armadas y no por una facción o grupo del ejército, como el de 1945, el de 1908 o las rebeliones de caudillos del siglo XIX (Sobre el término véase Rouquié, 1984 y Müller Rojas, 2003).

López Portillo (1986) señala que los argumentos del golpe fueron la incapacidad del gobierno, desorden en la sociedad, entre otros. Esto también da cuenta de los alcances de la modernización de los militares, quienes comenzaron a elaborar su ideología basada en el nacionalismo, y también empezaron un nuevo tipo de intervención política, asumiéndose garantes del orden e interviniendo cuando lo consideran necesario.

La dictadura de Pérez Jiménez alcanzó los 10 años, en la cual, aunque había un hombre fuerte a la cabeza, no era totalmente personalista, sino que se gobernaba en nombre de las fuerzas armadas y existía un gabinete de trabajo (López Portillo, 1986, p. 70). En la década de dictadura, los esfuerzos de modernización de las fuerzas armadas continuaron, con presupuestos militares elevados (Ewell, 2002). Además, ya se puede hablar plenamente de una burguesía nacional. Sin embargo, hacia 1957 el descontento político y social iba en aumento, al que se sumaron la burguesía, trabajadores, la Iglesia, los partidos políticos (en la clandestinidad) e incluso un sector significativo de las fuerzas armadas, algunos de los cuales tenían vocación democrática (Ewell, 2002, p. 321).

La situación culminó en un nuevo golpe de Estado en 1958, apoyado por un grupo de militares y los principales partidos políticos, dando fin a la dictadura e iniciando un nuevo periodo en la historia de Venezuela, que se extendió durante casi 40 años.

#### 2.1.4 *El puntofijismo o la consolidación hegemónica*

El golpe de Estado de 1958 fue fruto de un acuerdo alcanzado por los partidos políticos: AD, COPEI y la URD. Dicho acuerdo se conoció como *Pacto de Punto Fijo*, en el que los firmantes se comprometían a respetar los resultados electorales. La posición marginal de la URD y la exclusión del PCV del pacto debido al anticomunismo de los líderes de los otros tres partidos, llevaron a una lógica bipartidista que permaneció hasta 1994.

AD y COPEI se alternaron el poder durante estas cuatro décadas de estabilidad democrática. Ambos partidos dejaron atrás su rivalidad que habían mantenido en el trienio y comenzó una etapa de desdibujamiento de las fronteras ideológicas entre ambos partidos. La constitución de 1961 estableció un sistema político que permitió la consolidación de hegemonía basada en el bipartidismo y en el corporativismo. Algunos autores han dado por llamar a este periodo como IV República (recordemos que durante la guerra de Independencia se suceden las tres repúblicas anteriores) (Véase, Ellner, 2014; Hernández, 2019; Tirado, 2019).

Con la IV República la burguesía venezolana se vuelve hegemónica, por un lado somete mediante la fuerza militar a los enemigos (al PCV y a las escisiones de AD, levantados en armas) y por el otro dirige intelectual y moralmente, gana el consenso, de clases y facciones de clase a quienes convierte en su base de apoyo: los obreros corporativizados por la CTV, los campesinos engañados por la reforma agraria de los años setenta, los cientos de miles de burócratas que dependen del Estado, etc. Y esta dirección ideológica se logra mediante las instituciones de la sociedad civil que no pueden florecer en un régimen dictatorial: la prensa en todas sus modalidades, iglesias, clubes y asociaciones artísticas, deportivas, culturales, etc. Sin embargo, se logra también a través de la forma del propio Estado, con la apariencia de ser un Estado democrático y representativo de toda la sociedad. Otro medio por el que se mantiene la lealtad de los aliados, o “bases de apoyo” es la concesión de

beneficios económicos como salud, educación, prestaciones laborales, etc. Esto fue particularmente fácil para un Estado como el Venezolano, con ingentes recursos provenientes del petróleo (Hernández, 2019, p. 66).

Claro está que la nueva hegemonía necesitaba de un bloque histórico que lo sostuviera. Las fuerzas políticas que constituyeron este bloque habían venido desarrollándose desde la experiencia del trienio.

La relación entre los actores sociales y el modelo de hegemonía presentaba dos caras. Por un lado, el modelo consagraba a los actores incluidos en los pactos como actores sociales legítimos, lo cual los encaramaba en la sociedad y los posicionaba por encima de otros actores sociales en disputa e ilegítimos. Por un lado, los actores sociales incluidos en los pactos representaban la columna vertebral del modelo y, en este sentido, participaban activamente en su consolidación. La CTV y FEDECAMARAS representan ejemplos paradigmáticos de esta relación (Bistoletti, 2011, p. 29).

La correlación de fuerzas estaba mediada por un sistema político corporativo, en el que estos actores, que constituyeron el bloque histórico, podían intervenir en el Estado. Si en este periodo la burguesía logró volverse hegemónica, su intervención política no la realizaba de manera directa controlando el poder ejecutivo, sino que lo hacía mediante la asociación patronal corporativa Fedecámaras. Lo mismo ocurría con el sector de trabajadores que estaba representado en el pacto, aglutinados en la CTV, la cual era un apéndice de AD. Los partidos políticos AD y COPEI, por otro lado, eran las fuerzas políticas que participaban directamente en el juego político y que representaban a la burguesía hegemónica (Hernández, 2019).

Si en la dictadura de Pérez Jiménez el Estado lo era todo y la sociedad civil nada y el dominio de la burguesía corría casi exclusivamente a cargo de las fuerzas armadas, en la IV República se combina por un lado la represión feroz y selectiva contra los elementos subversivos y, por el otro, la dirección intelectual y moral y las concesiones económicas hacia los aliados-subordinados, hacia las clases y fracciones de clases constituidas en “bases de apoyo” del régimen (Hernández, 2019, p. 67).

El primer presidente electo, tras el golpe de 1958 fue Rómulo Betancourt, el mismo que había encabezado el trienio y que comenzó “una experiencia política que podría definirse como democracia autoritaria” (Padilla, 2019, p. 184). Un aspecto fundamental en esta nueva hegemonía fue el pleno apoyo de Estados Unidos a los gobiernos democráticos del *puntofijismo*, lo que también influyó en la academia:

Los fieles defensores de la democracia venezolana, y de Rómulo Betancourt en particular, en los años inmediatamente después de 1958 estaban ideológicamente motivados. Betancourt no tuvo un defensor más firme en la academia que Robert Jackson Alexander, quien era un prolífico escritor, estrechamente vinculado con la Alianza para el Progreso, y un jugador central en los asuntos laborales, políticos y académicos de América Latina para los Estados Unidos (Ellner, 2014, p. 74).

En cuanto a las fuerzas armadas, ocurrieron cambios importantes, impulsados en un inicio por Betancourt, tendientes a evitar un nuevo golpe de Estado. Dichas medidas consistieron en un alto presupuesto militar y prestaciones para los oficiales. Los militares fueron encomendados a tareas de desarrollo y en las academias del ejército se impulsó un nuevo modelo educativo llamado Plan Andrés Bello (Véase, Romero, 2020, p. 35). Igualmente, algunos militares fueron mandados a estudiar a la Escuela de las Américas, lo que según Trinkunas (2002) fue parte de una adaptación de la doctrina de seguridad nacional a un régimen democrático, coherente con el discurso político y con el boom del petróleo en la década de 1970.

Ahora bien, el tema de la guerrilla es importante, no solo por las características hegemónicas de su represión y su virtual derrota en 1964, que reforzó las condiciones para la hegemonía, también porque en la historia de la guerrilla venezolana, queda demostrado que los militares mantienen cierta autonomía ideológica del Estado, aún con los esfuerzos tendientes a alinear la política de defensa con la hegemonía de Estados Unidos. La lucha armada de izquierda tuvo su origen en la exclusión del PCV del acuerdo de 1958, a pesar de que este había tenido en papel determinante en el derrocamiento de Pérez Jiménez. En 1960, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una escisión de AD, comenzó la lucha armada a la que rápidamente se le unió el PCV. Nesbet (2010) sostiene que los

comunistas asumían que el apoyo del ejército era necesario para su triunfo, bajo la idea de que los militares venezolanos eran “hijos de las clases medias”. La tarea de convencimiento del PCV en las fuerzas armadas le permitieron sumar a al menos 150 oficiales al Partido (p.254).

Por otro lado, un aspecto de suma relevancia para la consolidación de la hegemonía, así como para la supremacía civil que caracterizó a estos años, fueron las condiciones económicas creadas por la renta petrolera. Entre las décadas de 1960 y 1970 el petróleo representaba el 80% de los ingresos del Estado (Quintero, 2018, p. 196).

Bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez, de AD, se nacionalizó el petróleo en 1983 y poco después se fundó la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). La presidencia de Pérez asumió un “activismo pro tercermundista” en el plano de la política exterior (Ellner, 2014), con acciones como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba y la incorporación a la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela fue miembro fundador.

Tanto las condiciones económicas como el consenso generado por la hegemonía llevaron a un optimismo que ignoraba las contradicciones del capitalismo venezolano. Este optimismo se extendía al ámbito académico, o en términos gramscianos, a la intelectualidad orgánica:

Los análisis académicos optimistas de la democracia venezolana hasta los años noventa ignoraron los signos problemáticos que se habían manifestado. En el frente económico, la pérdida de confianza en el bolívar y la fuga repentina de capital, que obligaron al gobierno de Herrera Campins a implementar el control de cambio en 1983, y el pronunciado e inesperado descenso en los precios internacionales del petróleo en 1986 pusieron en evidencia la vulnerabilidad de la economía de la nación (Ellner, 2014, p. 78).

Junto al culto a Bolívar, la renta petrolera ha sido, desde la segunda mitad del siglo XX, parte de la idiosincrasia venezolana, una promesa de movilidad social y parte de la ideología que sostenía al consenso *puntofijista*.

El capitalismo dependiente venezolano centrado en el petróleo generó una serie [de] creencias tales como que la riqueza está al alcance de la mano y que cualquier medio es lícito para alcanzarla, que los valores máximos de la vida son el dinero, el consumo y el

confort. Por otro lado, forjó una admiración fanática hacia lo extranjero, sobre todo hacia lo estadounidense. Miami era el centro turístico predilecto de la clase media, el consumo de productos importados de Estados Unidos era sinónimo de estatus, de progreso, de modernidad (Hernández, 2019, p. 72).

El momento de bonanza económica fue un contexto ideal para que el régimen puntofijista se cristalizara. Con esto, llegó la corrupción y el derroche de recursos. “Sin embargo, esta situación llegó a su fin con la caída de los precios del petróleo [...] La crisis estalló finalmente el 18 de febrero de 1983, día que ha sido llamado Viernes Negro (Hernández, 2019, p. 78).

Durante la década de los años ochenta, el Estado venezolano entró en la fase de la crisis de la deuda, junto a varios países de la región. El modelo de hegemonía, que parecía fuerte, entró en una crisis en la que la protesta se intensificó (Bistoletti, 2011).

El momento cumbre de esta crisis se dejó ver en febrero de 1989, al iniciar un segundo mandato de Carlos Andrés Pérez y anunciar una serie de medidas de ajuste estructural que continuaban con las políticas neoliberales que se habían iniciado a inicios de los años ochenta. El 27 de febrero de ese año, los sectores empobrecidos de Caracas, invisibilizados por el consenso hegemónico, salieron a las calles en una rebelión conocida como el Caracazo. Según Hernández (2019), el Caracazo, una explosión de ira contenida sin dirección, abrió paso a una crisis orgánica de la hegemonía, en términos gramscianos.

En otros términos, el bloque histórico que había sido construido en 1958 agotó su vigencia, no solo en términos económicos y de alianza de clases. El régimen puntofijista fue excluyente con los sectores subalternos. Esto se hizo evidente con el agotamiento del modelo de desarrollo económico. Los sucesos de febrero de 1989 demostraron esta crisis del bloque histórico, que al cristalizarse se hizo aún más excluyente.

Unos pocos años después, el 4 de febrero de 1992, un grupo de oficiales del ejército, organizados en el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), encabezados por el entonces desconocido teniente-coronel Hugo Chávez Frías, realizaron un golpe de Estado en contra de Carlos Andrés Pérez. La asonada fue reprimida y los líderes enviados a prisión, no sin antes aparecer Chávez en la televisión llamando a sus compañeros a la rendición y

asumiendo la responsabilidad de los hechos. En noviembre del mismo año, otro grupo de militares, del ejército y la fuerza aérea, organizaron otro intento de golpe de Estado. En 1993, Carlos Andrés Pérez fue destituido por malversación de fondos.

Para Hernández, con las asonadas de 1992,

la burguesía y su Estado perdieron el apoyo de una parte de las fuerzas armadas, es decir, de su sostén principal luego de haber perdido efectividad los mecanismos de construcción del consenso, especialmente los partidos. Recordemos que el núcleo fundamental del Estado son las fuerzas armadas, y la fisura en ellas era una fisura en el Estado (p. 86).

En 1994, el sistema bipartidista terminó, cuando el partido Convergencia ganó las elecciones, si bien su candidato era Rafael Caldera, principal líder de COPEI durante las décadas anteriores y primer presidente *copeyano* (1969-1974). En 1999, el sistema político puntofijista, y con ello, la hegemonía de cuarenta años llegó a su fin con el triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de 1998 y la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 1999, iniciando un nuevo periodo de construcción de hegemonía, bajo la ideología que el MBR-200 había empezado a formular desde sus inicios embrionarios en 1984.

## **2.2 Ecuador**

En 2007 Ecuador entraba al ciclo de gobiernos de izquierda iniciados en 1999. Al igual que en Venezuela, en Ecuador se vivía una crisis hegemónica que había prevalecido desde 1999, pero que tenía sus orígenes en las transformaciones del siglo XX. La historia ecuatoriana, por otro lado, ha estado marcada por el constante conflicto entre las clases dominantes, que a su vez se traduce como conflictos regionales por el control del país.

### *2.2.1 La guerra de Independencia*

Como se puede suponer, al haber formado parte de la Gran Colombia, el país que ahora conocemos como Ecuador comparte parte de su historia con Venezuela y Colombia, especialmente en lo referente a la guerra de Independencia y a los primeros años de vida



independiente. Igualmente, el Ecuador comparte lazos históricos con Perú originados en la época colonial.

La región que ocupa el actual Estado-nación ecuatoriano era el comprendido por la Real Audiencia de Quito durante la Colonia. Durante la primera etapa colonial, la Audiencia pertenecía al virreinato de Perú. A partir de las reformas borbónicas del siglo XVIII, que crearon nuevos virreinos (el de Nueva Granada y el de Río de la Plata), la Audiencia de Quito pasó a jurisdicción neogranadina. Los vínculos con Perú, especialmente los de la región costera de Guayaquil, y en parte los de Cuenca, seguían siendo tan importantes que había más identificación de las élites criollas con el viejo virreinato.

Como ya se ha mencionado, los procesos de independencia iniciaron con la invasión napoleónica a España en 1808 y el establecimiento de juntas que intentaron gobernar en nombre de Felipe VII. En la Audiencia de Quito, el proceso inició ese mismo año, con reuniones de criollos para reemplazar a las autoridades españolas. En agosto de 1809 dicho plan se concretó y se constituyó un gobierno criollo. Aunque nunca se dejó de reconocer al rey español, según Lara (2010) “era la primera vez que soberanía y majestad dejaban de atribuirse al rey de España en Hispanoamérica” (p. 27).

La temprana declaración de independencia en Quito, entre otras, tuvo dos grandes razones: en primer lugar, recordemos que las ideas liberales y de la ilustración en América habían permeado en las élites criollas desde finales del siglo XVIII, lo que “fue gestando un movimiento de reivindicación de lo americano y lo quiteño, que expresaba el nacimiento de una conciencia incipiente en las élites criollas” (Ayala, 2008 p. 21); en segundo lugar, “a inicios del siglo XIX las tendencias autonomistas estaban a la vista. Los criollos habían logrado una significativa ampliación de su poder económico, especialmente con el robustecimiento del latifundio” (ídem). Esto último se ejemplifica con las tendencias del barón Héctor de Candorelet, quien fungió como presidente de la Audiencia entre 1799 y 1807 y llegó a pedir la creación de una Capitanía General para el territorio quiteño.

A lo largo del siglo XVIII, se produjo en la Audiencia de Quito uno de los fenómenos más interesantes de su historia, cual fue el desarrollo y consolidación de una inicial identidad nacional, bajo la forma de una emergente “conciencia de Patria criolla”, que luego se

concretó en las ideas de la “Nación quiteña”. Naturalmente, no se trató de un fenómeno pronto e inesperado, sino de uno progresivo y de largo plazo, que se originó a comienzos de la etapa colonial y culminó recién a fines del siglo XVIII y comienzos del XIX (Nuñez, 2012, p. 28).

El gobierno de la primer junta tuvo una existencia relativamente corta. En 1810 las tropas realistas entraron a la ciudad de Quito y la mayoría de los líderes insurgentes fueron enjuiciados y ejecutados. Poco después, un asalto al Cuartel Real, el 2 de agosto de 1810, terminó en una masacre de cientos de personas, entre ambos bandos. “El hecho conmovió a América y ejerció poderosa influencia en los acontecimientos posteriores de todo el continente” (Lara, 2010, p. 34).

Para Ayala (2008) hubo tres etapas de la guerra de Independencia: La Revolución de Quito, de 1808 a 1812; Un triunfo realista, de 1812 a 1820; y una campaña definitiva de 1820 a 1822. Como vimos en el caso venezolano, las clases populares son comúnmente olvidadas en la historiografía ecuatoriana. Sobre la participación de distintos estratos de la población en la revolución de independencia, Ayala (2008) señala:

Los grandes protagonistas de la Independencia, los *patriotas*, fueron los notables latifundistas, a los que se sumaron lo que podríamos denominar grupos medios de la sociedad colonial, entre ellos los intelectuales, que dieron un sesgo radical al proceso. Los grupos populares urbanos, básicamente artesanales y el pequeño comercio, fueron reticentes al principio, y solo apoyaron la rebelión anticolonial en estadios posteriores de la lucha. En las masas indígenas, protagonistas de muchos alzamientos en las décadas previas, había la conciencia de que los beneficiarios de la autonomía eran justamente los terratenientes que habían contribuido a la sangrienta represión de esos alzamientos. Por ello, los pueblos indios solo excepcionalmente apoyaron las luchas independentistas [...] Los negros en cambio, cuando vieron que su participación en la guerra les permitiría librarse de la esclavitud o ascender en la sociedad, se integraron en los ejércitos patriotas (p. 22).

En la primera etapa de la independencia, la insurgencia quiteña no contó con el apoyo de los grupos populares (Ayala, 2008, p. 23). Hacia 1812 las tropas españolas reconquistaron Quito y derrocaron la Junta de Gobierno, instaurada tras la masacre del 2 de agosto de 1810. Después de 1812, la mayoría de los líderes independentistas quiteños fueron

ejecutados o exiliados (Lara, 2010), lo que provocó la orfandad del movimiento que no resucitaría plenamente hasta 1820. Durante esa década, los esfuerzos independentistas se concentraron en Guayaquil (Ayala, 2008, p. 23). Hacia 1820, Guayaquil proclamó su independencia, seguida de Cuenca quedando pendiente la liberación de la capital de la Audiencia.

Una de las primeras acciones de Guayaquil independiente fue intentar liberar al resto de la Audiencia. Luego de algunos éxitos, el ejército guayaquileño sufrió derrotas que lo obligaron a replegarse. En estas circunstancias se recibió el refuerzo enviado desde Colombia por Simón Bolívar, que destacó a su mejor general, el venezolano Antonio José de Sucre, para que dirigiera las operaciones. Además del encargo militar, Sucre traía la comisión de gestionar la anexión de Guayaquil a Colombia, pero la resistencia obligó a postergarla. Luego de un primer intento no exitoso, Sucre logró seguir a la sierra y llegar cerca de Quito. En la mañana del 24 de mayo de 1822 derrotó a los realistas en las faldas del volcán Pichincha. Esa batalla definió el curso de la independencia de lo que hoy es Ecuador. Quedó pendiente en el Sur la independencia de Perú (Ayala, 2008, p. 24).

Para Báez et al. (2004), la independencia de la Audiencia mostró la distribución y organización regional desigual que se mantenía en la colonia. “Con muchas dificultades y conflictos no resueltos, el siglo terminará de nacer, penosamente, hacia la década de 1820. Y no morirá sino hasta pasada la década de 1920” (p. 49).

Tras la batalla de Pichincha, la antigua Audiencia de Quito fue anexada a la Colombia bolivariana como su tercer departamento, que durante el resto de existencia de la Gran Colombia fue llamado “el sur” o departamento del sur (Lara, 2010).

Si algo comparten los mitos de fundación en los países de América del Sur, son personajes históricos que actuaron en lo que después se convertirían en distintos Estados. Tal es el caso de Bolívar, San Martín, Sucre, etc. Bolívar actuó en los tres estados que formaron la Gran Colombia, pero su figura también fue primordial en Perú y Bolivia. Aun siendo el presidente de Colombia, Bolívar seguía preocupado por las guerras de independencia en otras regiones, como lo fue el caso de Quito y Perú. En el contexto de anexión de Quito a Colombia,

la guerra libertadora de Perú siguió exigiendo grandes sacrificios. Armas, hombres y dinero, vituallas y bastimentos, ganado y caballerías fueron requeridos en gran escala por Bolívar. Los recursos se sacaron sobre todo del Departamento del Sur, primero apelando al patriotismo de sus habitantes, después prácticamente a la fuerza. El país se empobreció más aún (Lara, 2010, p. 112).

La vinculación de Bolívar y Sucre a Quito fue más allá de la política, estableciendo lazos afectuosos. De hecho, los primeros años de vida política republicana, tras la separación de Colombia, tuvieron como protagonistas a *extranjeros* que se establecieron en Ecuador por sus lazos matrimoniales. El papel de la quiteña Manuela Sáenz, compañera amorosa de Bolívar, por ejemplo, es fundamental en el mito de Bolívar, llegando a ser nombrada la Libertadora del Libertador, por haber frustrado un intento de magnicidio en Bogotá tras el regreso de la pareja de Quito (Lara, 2010).

Tal es la importancia de la figura de Bolívar en Ecuador, que las elites quiteñas fueron fieles partidarias de El Libertador. Incluso hacia finales de la década de 1820, cuando el sueño bolivariano de la Gran Colombia comenzaba a ver su fin, el Departamento del Sur se mantenía leal a Bolívar, y solo buscó su separación cuando Bolívar se había retirado del poder.

Hay que reconocer que la presencia en Quito de Sucre y [Juan José] Flores, los principales jefes del partido bolivariano, contribuía a convertir esta ciudad en tal baluarte [...] Flores, ausente Sucre, encabezó en Quito el partido bolivariano y mantuvo constantemente encendido el culto del héroe. El plan de los bolivarianos era mantener el baluarte quiteño y traer a Bolívar a Quito para iniciar desde aquí un movimiento reintegracionista. Así lo prueban los documentos que demuestran la fidelidad quiteña al Libertador y que originaron el reconocimiento -un siglo después- de Venezuela al Ecuador, al proclamar para nuestra patria “el procerato de la lealtad a Bolívar” (Lara, 2010, p. 119).

La lealtad de Quito a Bolívar no se explica, sin embargo, como una simple predominancia de los ideales de integración y sus valores, sino por la propia política del momento y los intereses económicos de las elites:

Los latifundistas quiteños resistieron las políticas de Santander, especialmente las medidas librecambistas que perjudicaban la producción textil y las reformas igualitarias que afectaban la estructura jerárquica corporativa, tan acentuada en la sociedad quiteña. Por ello, los notables de Quito aceptaron entusiasmados la idea de la dictadura de Bolívar. En Guayaquil, los terratenientes y comerciantes del puerto, reticentes en principio a la anexión, encontraron que las políticas de Santander les favorecían. Por ello mantuvieron su lealtad a Colombia mientras en Quito había agitación. Pero cuando cayeron las exportaciones al final de los años veinte, y se reactivaron vínculos de comercio con Lima, las tendencias autonomistas renacieron. Las rebeliones de esclavos los llevaron a pensar en la necesidad de mayor represión. Cuenca también experimentó una reactivación del comercio con Perú. Esto reafirmaría sus reivindicaciones de autonomía. Por motivaciones diversas y hasta contradictorias, las élites dominantes regionales del Distrito del Sur fueron llegando al rompimiento con Colombia (Ayala, 2008, p. 25).

Como ya se mencionó en el apartado anterior, Venezuela fue la primera en romper con Colombia. Ecuador, a pesar de su apego a Bolívar, también encontró conveniente su separación y así vio su fin el sueño bolivariano de una Gran Colombia. Bolívar murió poco después de enfermedad en su camino a Quito.

### *2.2.2 Construcción del Ecuador*

Como ya se ha mencionado, el nombre tradicional del territorio que conocemos como Ecuador era Quito. Sin embargo, como se ha podido ver entre líneas, en Ecuador hay tres regiones tradicionales: Quito, Guayaquil y Cuenca. Las últimas dos lograron declarar su independencia antes que la región contigua a la ciudad de Quito, lo que habla de la existencia de identidades locales que se fueron formando conjuntamente a la de Quito.

Desde el siglo XVIII, a través de la Independencia y la etapa de vinculación a Colombia, se configuró un fenómeno de regionalización en el actual Ecuador. Se consolidaron tres regiones. La Sierra centro-norte, que iba desde la actual Carchi hasta Chimborazo, con su eje político en la antigua capital Quito, era la región más poblada y el centro principal del poder. Su comercio era precario con el sur del país y la Costa, pero activo con el sur de Nueva Granada. La Sierra sur, que comprendía las actuales provincias de Cañar Azuay y Loja, con

su centro político en la ciudad de Cuenca, había desarrollado específicas relaciones productivas. Sus elites tenían fuertes intereses en la producción y el comercio con Guayaquil y el norte de Perú. La región costeña, articulada por el puerto de Guayaquil, crecía alrededor del sistema fluvial del Guayas, con Manabí y Esmeraldas como zonas periféricas (Ayala, 2011, p. 23)

Se puede deducir, de tal manera, que la unidad político-territorial de la antigua Audiencia de Quito no era un hecho que necesariamente se pudiera mantener tras la Independencia. De hecho, los conflictos entre las clases dominantes de estas tres regiones, definió la política ecuatoriana de todo el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Los vínculos económicos de Guayaquil y Cuenca con el antiguo Virreinato de Perú, por ejemplo, pudieron haber llevado a una integración de esas regiones con aquel país, pero las identidades locales ya eran lo suficientemente fuertes como para echar a andar un proyecto nacional con Quito. Ahora bien, estas identidades regionales, con la fuerza política que representaban sus elites, dieron paso a que se buscara un nombre distinto al de Quito para el nuevo estado que se estaba conformando.

Los diputados constituyentes reunidos en Riobamba, al redactar la primera Constitución, dejaron de lado el tradicional nombre de Quito que había sido el de la audiencia colonial para recoger la denominación que habían usado para estas tierras los geodésicos franceses que visitaron el país casi un siglo antes. El nombre Ecuador, que resultó extraño a la mayoría de los contemporáneos, fue producto de las tensiones de la regionalización. Quito, el antiguo centro político y eje de la región Sierra centro-norte, tenía al frente a Cuenca y Guayaquil, ejes de regiones con perfiles económicos, políticos y culturales propios. Los representantes de Azuay y Guayas no aceptaron un nombre identificado con uno solo de los departamentos o regiones que habían confluído a formar el nuevo estado y los quiteños tuvieron que ceder. Fue así como nuestro país fue bautizado con un nombre de compromiso, de resonancias tropicales que a veces provoca confusión en quienes lo leen de fuera (Ayala, 2011, p. 23).

Baéz et al (2004) añaden a esta explicación que el nombre de Ecuador “aludía a un hecho geográfico, importante, pero no específico, puesto que de la línea ecuatorial participan

muchos países. A pesar de ello, el nombre encontrado se impuso por su neutralidad” (p. 128).

Tras la separación de Ecuador de Colombia, emergió el liderazgo de Juan José Flores, de origen venezolano, quien se rodeó de militares *extranjeros*, principalmente neogranadinos y venezolanos que habían participado de la guerra de Independencia. Por esta razón, Lara (2010) denomina al periodo de dominación de Flores, que se extendió hasta 1845, como *militarismo extranjero o floreano*. Ayala (2008 y 2011), por su parte, periodiza de manera más certera el primer periodo de la república desde 1830 hasta 1895 como *Estado Oligárquico Terrateniente* en términos económicos, bajo el cual tuvo vigencia un *Proyecto nacional criollo* en términos ideológicos y de construcción del Estado-nación.

“Estado Oligárquico Terrateniente” [...] permite caracterizar a la forma de estado en el Ecuador decimonónico por sus dos elementos básicos. En primer lugar, la naturaleza precapitalista de la sociedad, caracterizada por las relaciones productivas prevalecientes, donde las clases dominantes terratenientes transferían al Estado sus intereses de dominación y los rasgos corporativos y autoritarios de sus visiones ideológicas. En segundo lugar, el carácter oligárquico de la dirección política, que se dio en el Ecuador de inicios de la República en medio de la inestabilidad y la dispersión (Ayala, 2011, p. 24).

Ahora bien, una de las instituciones fundamentales en la construcción del Estado fue el ejército. Ayala (2011) realiza un amplio estudio sobre las fuerzas armadas ecuatorianas en el siglo XIX, del cual se pueden extraer varios aspectos. En Ecuador, como ya se adelantaba, en los primeros años de la república predominaron los militares extranjeros que habían participado en la Independencia. Estos militares se posicionaron en el ejercicio del poder durante la época de Flores, lo que fue denunciado en el discurso nacionalista opositor de estos años (Ayala, 2011, p. 79).

Flores gobernó Ecuador de 1830 a 1835 y de 1839 a 1845. Entre 1835 y 1839 gobernó Vicente Rocafuerte, quien primero fue un acérrimo opositor a Flores. En el segundo

gobierno de Flores, ambos personajes volvieron a enemistarse. A la caída de la época florista,

La fuerza armada se fue también “nacionalizando”, lo cual no solamente implicó que estaba compuesta por nacidos en el país, sino que su acción política de alguna manera permitió la incorporación de ciertos sectores a la comunidad nacional incipiente. Vista desde esta perspectiva, la lucha de entonces contra el “militarismo” asumió un carácter francamente democrático. Pero no se debe olvidar que aunque en el “civilismo” había un elemento de denuncia del carácter del ejército como instrumento de los intereses de quienes ejercían el poder, muchas veces encerraba críticas aristocratizantes y racistas (Ayala, 2011, p. 80).

Al igual que en el caso de Venezuela, a lo largo del siglo XIX se intentó reducir el gasto del ejército, quedando reducido el ejército permanente a veteranos de la independencia (Deas, 1991, p. 186). Ahora bien, Ayala (2011) señala que “la realidad persistente, sin embargo, fue que la fuerza armada se mantuvo como permanente actor de la lucha por el poder, y que sus miembros personal e institucionalmente estuvieran envueltos en la contienda política” (p. 84).

Además, a pesar de la reducción de efectivos, el gasto militar siguió absorbiendo la mayoría de los recursos del Estado. De tal manera, hubo esfuerzos sistemáticos por reducir el presupuesto del ejército “pero cuando se daban insurrecciones, amenazas de invasión o guerras civiles, el gasto militar se elevaba significativamente y superaba con mucho lo previsto en las leyes presupuestarias” (Ayala, 2011, p. 149).

Un aspecto que no se puede dejar pasar en el estudio de las fuerzas armadas, no sólo para el caso ecuatoriano, es la función que cumplían las fuerzas armadas en el ámbito del Estado. Se pueden establecer dos dimensiones al respecto. Primero las tareas formales del ejército; segundo, el carácter político de dichas funciones. En el primer aspecto la tarea primordial es la defensa de amenazas externas y el mantenimiento del orden interno. “El ejército tuvo entonces las tareas de mantenimiento de una precaria unidad territorial interna, y la vigilancia de las mal definidas fronteras externas” (Ayala, 2011, p. 83). Como se puede inferir, el mantenimiento del orden interno es una tarea represiva.



Es evidente que la “necesidad” de la fuerza armada como mecanismo de control represivo se daba en condiciones en que el nivel de conflictividad, sobre todo en el espacio rural, era disperso y no estructurado. Un ejército pequeño, con poca personal y organización como era el ecuatoriano de entonces no hubiera podido manejar situaciones de prolongada resistencia campesina. El que los alzamientos no hubieran constituido desafío serio para las tropas no se explica fundamentalmente por la superioridad de su entrenamiento, organización o armamento, sino más bien por la presencia de mecanismos de control fuertemente establecidos, tanto a nivel de la hacienda, como del Estado y la Iglesia (Ayala, 2011, p. 90).

Ahora bien, la segunda dimensión de las tareas del ejército es la cuestión de fondo de la existencia de un cuerpo armado del Estado:

Más allá de las anécdotas y de la retórica su función básica fue garantizar el poder latifundista. Era una institución del Estado Oligárquico Terrateniente [...] Al constituirse como garante de la vigencia del orden establecido, la fuerza armada expresaba los intereses de quienes dirigían el estado (Ayala, 2011, p. 78).

Regresando al desarrollo político del Estado, tras el fin del *florismo*, ascendieron al poder los llamados *marcistas*, bajo el liderazgo principal de José María Urvina. Este periodo se extendió desde 1845 hasta 1860. “En realidad este período bien debe denominarse “urvinista”, pues fue este general quien directa o indirectamente inspiró todos los movimientos y cambios políticos desde 1845 y mantuvo su influencia hasta el final del marcismo” (Lara, 2010, p. 140).

Para Baéz et al (2004), el periodo *marcista* fue el segundo de tres periodos (el primero habría sido el florismo) en los que se construyó un orden social bajo el cual la república se entendió como utopía.

“Los marcistas” liderados por Urvina, imprimieron un ideal económico social al republicanismo, reivindicando el concepto de igualdad, cuestión que permitió importantes reformas como la emancipación de los esclavos en 1854 y la abolición del tributo de indios en 1857; fomentaron la educación básica para cambiar las costumbres jerárquicas del pasado colonial para crear una “familia política ecuatoriana” más igualitaria, y en lo

económico, promovieron “el libre comercio” para según ellos, combatir a los monopolios económicos y permitir la incorporación de las clases populares (Baéz et al, 2004, p. 130).

Las medidas económicas impulsadas por los distintos gobiernos del siglo XIX estuvieron marcadas por el patrón productivo diferenciado de Ecuador basado en parte en la exportación de cacao.

A lo largo del siglo Ecuador fue el principal exportador mundial de este producto, y las fluctuaciones de su comercio exterior fueron mucho menos graves que las sufridas por sus antiguos socios gran-colombianos. El cacao dio lugar a la preponderancia comercial y financiera de la costa y a un aumento continuo del peso demográfico de esta zona (Deas, 1991, p. 181).

Ahora bien, debido a la regionalización imperante en el siglo XIX, no se puede decir que la producción de cacao fue la que sostenía la totalidad de la economía ecuatoriana. Las tres regiones que ya se han mencionado “constituían no solo porciones de la geografía, sino unidades territoriales con estructuras económicas, sociales y culturales diferenciadas, sometidas al poder político de los ‘señores de la tierra’” (Ayala, 2011, p. 31).

En consecuencia, mientras en la costa la exportación de cacao hacía crecer el peso de Guayaquil, en la sierra prevalecían actividades agro-ganaderas y “se produce algo así como un “enfeudamiento” tardío. [...] La sierra centro-norte siempre buscó su salida propia a los mercados internacionales, pero no encontró ni las vías ni los productos adecuados para hacerlo” (Baéz, et al, 2004, p. 67).

Estas diferencias llevaron a un continuo enfrentamiento regional, principalmente en una especie de dicotomía costa-sierra. “En efecto, si los “señores de la tierra” tuvieron éxito al arrebatarse el poder a los representantes del poder colonial español, no lograron constituirse como una clase hegemónica unificada dentro del nuevo país” (Ayala, 2011, p. 31).

De esta manera, en el Ecuador del siglo XIX no existieron proyectos de construcción de hegemonía exitosos. Mientras el *florismo* representó los intereses económicos serranos, el *marcismo* representaba los intereses costeros. De ahí que hubieran llevado a cabo políticas “proteccionistas” y “librecambistas” respectivamente. Solo después de una crisis nacional,

en la que la existencia del Estado-nación ecuatoriano estuvo en verdadero riesgo existencial, fue que existió un intento de formación de hegemonía.

Dicha crisis nacional, ocurrida en 1859, fue producto del conflicto entre las oligarquías regionales. Esta guerra civil puede tener como analogía la guerra federal en Venezuela, ocurrida en el mismo periodo. En este año, se constituyeron cuatro gobiernos regionales en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja, que casi llevaron a la desintegración del Ecuador. A esto se le agregó una invasión de Perú y “los países vecinos negociaban la partición del país. Llegó un momento en que todo el sistema pudo venirse abajo con el peso de las contradicciones entre las oligarquías regionales” (Ayala, 2008, p. 29).

La crisis se superó con una alianza de las oligarquías para consolidar el Estado Oligárquico Terrateniente como garantía de preservación de la unidad interna y como condición para afrontar las nuevas situaciones internacionales que se daban en el marco de la expansión del sistema mundial dominado por el capitalismo (Ayala, 2011, p. 29).

La figura triunfadora de este conflicto fue el conservador Gabriel García Moreno, quien logró reconstituir el Estado ecuatoriano para después dominar el país por quince años con un proyecto de construcción de hegemonía que terminó con el sistema de departamentos y representación por regiones. La construcción de hegemonía en este periodo fue una necesidad de las oligarquías que, en sus conflictos regionales, habían puesto en riesgo sus propias condiciones de dominación:

La crisis de 1859-1860 reveló que el enfrentamiento entre las élites y la acción de los caudillos militares llevaron al límite la existencia del Estado. Por ello, a inicios de la década de los sesenta, cuando había signo de crecimiento económico y ampliación del mercado externo, se dio un consenso sobre la necesidad de centralización y represión que tendieran a la consolidación del Estado. Este proceso se dio bajo el régimen de Gabriel García Moreno. Los notables de Quito constataron que no podían someter a los demás grupos dominantes regionales. Por otra parte, el incremento del comercio externo robustecía a los notables guayaquileños que, sin embargo, tampoco habían logrado controlar el poder en sus renovados intentos. Podían derrocar gobiernos y poner ciertas condiciones, pero carecían de fuerza para subordinar a todos los sectores. Los enfrentamientos habían acentuado la dispersión del poder y la influencia de caudillos militares. Había llegado el momento en que

las élites regionales confluyeran en la necesidad de hacerse concesiones para preservar el poder terrateniente (Ayala, 2011, p. 35).

En el plano ideológico, el régimen de García Moreno tuvo un carácter conservador. La Iglesia tuvo durante este periodo el papel de garante ideológico del Estado. A esto se debe agregar el esfuerzo realizado en esta época por ampliar la educación pública. Además, se llevaron a cabo obras de infraestructura para conectar al país. En términos gramscianos, se establecieron las condiciones para la construcción de hegemonía. Sin embargo, las propias características autoritarias del régimen teocrático de García Moreno llevaron a una reacción liberal (Deas, 1991). De tal manera, el proyecto de hegemonía fracasó ante la falta de consenso, es decir, por la predominancia de la sociedad política sobre la sociedad civil (Véase capítulo 1):

Con el advenimiento de García Moreno al poder (1860-1875) se llevó adelante un plan de robustecimiento estatal, bajo condiciones de represión muy duras. El fusilamiento, los azotes, la cárcel, la repatriación fueron la norma. El régimen tuvo su máxima expresión en la Constitución dictada en 1869, la famosa “Carta Negra”, que estableció un sistema político donde se restringían las garantías al máximo y se entregaba todo el poder al Poder Ejecutivo. [...] Así fue como el proyecto saltó en pedazos cuando luego de haber controlado directa o indirectamente el poder por quince años, el caudillo cayó asesinado [...] Y si bien durante un tiempo la tradicional oligarquía serrana tuvo el control del poder, las reformas favorecieron, a la larga, a los sectores de poder guayaquileños (Ayala, 2011, p. 56).

La muerte de García Moreno y el derrumbamiento casi inmediato del régimen que había construido, demostraron que los conflictos que habían llevado a la crisis de 1859 seguían vigentes. “Al finalizar el siglo XIX, a pesar de todo el esfuerzo del estado central por integrar al país, las regiones y localidades mantenían firmes sus bases económicas, sociales, políticas e ideológicas de poder” (Baéz et al, 2004, p. 156).

Entre 1876 y 1895 sobrevino un periodo de dominación liberal, llamado en la historiografía *progresista* (Lara, 2010).

El llamado período “progresista” es en realidad el dominio del doctor [José María Plácido] Caamaño, hombre fuerte de aquella etapa que reinstala el civilismo. Más que gobiernos de

la “argolla”, como se le denominó por la profusión de sus parientes en los altos cargos [...] el progresismo fue en verdad el dominio hegemónico de los terratenientes costeños exportadores de cacao, ante quienes los serranos cedieron la preponderancia (Lara, 2010, p. 172).

Por otro lado, a partir de estos gobiernos liberales se agotó el latifundismo, se desafió a los terratenientes, se acentuó el conflicto entre las clases dominantes y emergieron nuevos grupos sociales (Ayala, 2011). Para entonces, existían cuatro organizaciones políticas que se pueden considerar proto-partidos políticos en el sentido contemporáneo: el Partido Conservador, el Progresista, el Liberal y el Radical (Lara, 2010, p. 172). En este último prevaleció la figura de Eloy Alfaro, que durante este periodo encabezó las *montoneras*, “una fuerza armada radical paralela al ejército regular, que desafiaba al Estado” (Ayala, 2011, p. 74).

El fin del siglo XIX ecuatoriano terminaba bajo una inestabilidad de la que resultaría un nuevo proyecto de hegemonía, esta vez de signo liberal y bajo la figura dominante de Eloy Alfaro.

### 2.2.3 *De la Revolución Liberal a la Revolución Juliana*

En 1895, Eloy Alfaro encabezó un movimiento que lo llevó al poder y al mismo tiempo desató una guerra civil. Para ese entonces, la economía ecuatoriana no había sufrido grandes transformaciones, pero en medio del auge del cacao (1875-1925) empezaban a existir tendencias transformadoras, como el desarrollo de una burguesía agro-exportadora en Guayaquil y el crecimiento demográfico de la Costa, que superó a la población de la Sierra (Baéz et al., 2004, p. 158).

El periodo de dominación alfarista representó un proyecto de hegemonía, con una ideología liberal que traería cambios en la sociedad ecuatoriana. Si podemos resumir la Revolución Liberal encabezada por Alfaro, su principal rasgo fue su anticlericalismo y su carácter de revolución burguesa:

Alfaro llevó a cabo en la República la única auténtica revolución, aparte de la independentista, en el sentido de transformación profunda, polémica y sangrienta, discutido cambio doctrinario que liquidó al Partido Progresista e intentó también, sin lograrlo, hacer lo propio con los conservadores. La Revolución Liberal significó ruptura entre la Iglesia y el Estado; confiscación de los bienes eclesiásticos; abolición del catolicismo como religión estatal; prohibición absoluta de las manifestaciones religiosas públicas; efectiva supresión de los derechos civiles y políticos para clérigos y monjas; monopolio, rígidamente impuesto, de la educación laica estatal en el sentido de no poder enseñarse la doctrina cristiana (Lara, 2010, p. 183).

Por otro lado, este periodo representó el ascenso de la burguesía guayaquileña, que logró imponerse frente a las oligarquías tradicionales.

Los comerciantes y banqueros de Guayaquil y los cultivadores de cacao no habían carecido de poder en gobiernos anteriores [...], pero su dominio aparece mucho más completo y seguro al final del ciclo alfarista. Sin embargo, la revolución liberal contó también con el apoyo de grupos pequeñoburgueses, de funcionarios menores y maestros de escuela y, aparte de ellos, atrajo también al pueblo (Deas, 1992 p. 305).

Para Ayala (2008), la Revolución Liberal puso fin al Estado Oligárquico Terrateniente y al Proyecto Nacional Criollo. Le sucedió un Proyecto Nacional Mestizo que supuso la consolidación de la burguesía comercial y bancaria. Además, fue una etapa de consolidación del Estado (p. 32).

Aunque podemos considerar este periodo como uno de construcción hegemónica, con una burguesía emergente a la cabeza, la correlación de fuerzas estuvo marcada por un conflicto político que alejó a Alfaro del poder entre 1901 y 1906. Este conflicto se dio al interior del propio grupo liberal, dividiéndose en dos bandos. Alfaro gobernó por segunda ocasión entre 1906 y 1911. En 1912 fue asesinado por sus adversarios liberales.

Las transformaciones implantadas por el liberalismo (separación de la Iglesia y el Estado, educación laica, libertades de conciencia y culto, etc.) fueron innovaciones políticas e ideológicas, orientadas a consolidar mecanismos de reproducción del sistema capitalista en ascenso. Con ellas la burguesía aseguró su control del Estado, garantizando condiciones

favorables a la integración de los mercados internos y a la vinculación cada vez más estrecha con el sistema internacional (Ayala, 2008, p. 33).

Entre 1912 y 1924 siguieron gobernando los liberales. Aunque el asesinato de Alfaro “fue parte de un plan de los sectores oligárquicos por frenar su impulso” (Ayala, 2008, p. 33), las condiciones de hegemonía que se habían creado no cambiaron en este periodo. Sin embargo, en 1924 las condiciones económicas provocaron la caída de esta hegemonía:

El nuevo liberalismo no era ya radical [...] Tampoco las circunstancias económicas del país eran propicias; a las dificultades causadas por la primera guerra mundial sucedió la decadencia del cacao. Los últimos gobiernos liberales, minados en su base fiscal, cayeron cada vez más bajo la influencia de los bancos de Guayaquil (Deas, 1992, p. 309).

Ahora bien, durante el periodo alfarista fue que se modernizaron a las fuerzas armadas, con una misión de militares chilenos, es decir, bajo el modelo prusiano (Rouquié, 1984). En 1925 sobrevino un golpe de Estado que instauró un régimen militar y es conocido como la Revolución Juliana.

El militarismo reformista llega a Ecuador en 1925. La burguesía exportadora y financiera de Guayaquil en el poder, debilitada por la crisis del cacao de la inmediata posguerra, reprime duramente las agitaciones sociales provocadas por la recesión. En 1922 el gobierno liberal aplasta a sangre y fuego, mediante la milicia, ya que el ejército no era de confiar, las huelgas contra la miseria y la inflación que estallan en Guayaquil.) Hay un millar de muertos. En la región serrana de Ambato, los campesinos resisten al despojo de sus tierras por una gran empresa; se los masacra en septiembre de 1923. Las elecciones fraudulentas de 1924 y la debilidad del presidente provocan la intervención de los jóvenes oficiales [...] El 9 de julio, la Liga de Jóvenes Oficiales Revolucionarios de Ecuador depone al presidente y conforma una junta, para entregarle el poder a Isidro Ayora, gran burgués esclarecido, proveniente de la Costa (Rouquie, 1984, p. 126).

En este golpe de Estado, el primero de carácter moderno y no caudillista, se logra observar una de las características que trajo la modernización de las fuerzas armadas en Ecuador:

La percepción militar de que la oligarquía exportadora, de origen guayaquileño, paraliza el fortalecimiento de la nación, sumó al liberalismo un sentimiento antioligárquico que ha sido una constante en la historia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas (Nesbet, 2010, p. 47).

Aunque se puede considerar como progresistas a los oficiales julianos, según Cueva (2003) los militares cedieron al chantaje de la banca guayaquileña al ser incapaces de realizar un proyecto de transformación (p. 295).

En medio de este cúmulo de vacilaciones e ingenuidades el gobierno seguía empeñado, sin embargo, en llevar adelante una serie de reformas tendientes a la modernización del estado ecuatoriano. Pero este mismo proyecto se enmarañó temporalmente en el problema del *regionalismo*, explotado con habilidad por la burguesía costeña (Cueva, 2003, p. 295).

La junta de militares julianos gobernó entre 1924 y 1926. Tras ceder el poder a Ayora, este gobernó hasta 1931, cuando la hegemonía que se había construido en el periodo liberal finalmente terminó por caer.

#### *2.2.4 Inestabilidad y golpes de Estado en el siglo XX*

La crisis económica mundial de 1929 tuvo consecuencias importantes en Ecuador. Las exportaciones cayeron, algunos bancos cerraron y la burguesía guayaquileña recibió un duro golpe a su dominio hegemónico.

Compuesta por propietarios de plantaciones y comerciantes exportadores, era inevitable, en primer lugar, que la burguesía de la costa sufriera el impacto de la crisis de manera mucho más inmediata y directa que el otro sector de la clase dominante, articulado en torno a los terratenientes semif feudales de la sierra, cuya producción se destinaba casi por entero al consumo interno. Mas estos dos sectores no constituían compartimentos estancos, sino que se hallaban insertos en una misma formación económico-social, compitiendo en el seno de un mismo mercado nacional y disputándose, ahora con más ardor que nunca, el dominio de un solo y único estado (Cueva, 2003, p. 297).

Tras la caída del gobierno de Ayora, sobrevino en Ecuador una década de profunda inestabilidad, que Cueva (2003) denomina como “una larga crisis de hegemonía”. “Por eso en la década de los 30 se sucedieron en el mando nada menos que 17 gobernantes, y en un



solo año, el de 1932, desfilaron por el palacio presidencial 5 mandatarios y Ecuador sufrió una cruenta guerra civil” (p. 300). Sin embargo, esta década veía el surgimiento de la figura de José María Velasco Ibarra, que tuvo su primer presidencia en 1933.

Se iniciaba una etapa marcada por su presencia caudillista en la escena nacional. El velasquismo fue una nueva fórmula de alianza oligárquica que, intentando superar la disputa ideológica conservadora liberal, movilizaba una clientela de grupos medios y populares firmemente identificados con la electrizante figura del líder. El primer velasquismo, como casi todos los restantes, cayó estrepitosamente en su primer intento dictatorial (1935), dejando una vez más al país en manos del arbitraje militar (Ayala, 2008, p. 35).

Ahora bien, un aspecto que se ha dejado pasar de largo, pero que tiene que ser mencionado, son los constantes conflictos de Ecuador con sus vecinos, especialmente con Perú que fueron reduciendo el territorio nacional.

En el decenio de 1830 los soldados colombianos empezaron a apoderarse de lo que hoy es el sur de Colombia. En 1904 Brasil obligó a Ecuador a cederle algunas de sus tierras en el oriente. En 1916 Colombia se apoderó de otro trozo de territorio en disputa. Lo peor fue que en 1941 tropas peruanas invadieron el oriente, apoderándose de la mitad de la tierra de la nación. Bajo la presión de Estados Unidos, en 1942 Ecuador firmó un tratado, conocido como el Protocolo de Río de Janeiro, que cedió a Perú la mayor parte de lo que reclamaba (Cockcroft, 2001, p. 502).

En 1938, bajo la presidencia de Aurelio Mosquera Narváez, la burguesía guayaquileña logró retomar el poder (Cueva, 2003, p. 302), aunque el periodo de inestabilidad continuó hasta 1948, en gran parte por la pérdida de territorio frente a Perú. En 1944 tuvo lugar el segundo velasquismo tras un golpe de Estado que le entregó el poder. El segundo gobierno de Velasco cayó en 1947 por un nuevo golpe de Estado que entregó el poder a los civiles.

El periodo de 1948 a 1960 constituyeron una etapa de estabilidad (Ayala, 2008). En estos años “fue articulándose una nueva alianza dominante. La burguesía era la clase dirigente, pero cedía al mismo tiempo una importante cuota al latifundismo y a la pequeña burguesía

urbana” (p. 36). Los gobernantes en este periodo fueron Galo Plaza (1948-1952), Velasco (1952-1956) (cuyo mandato fue el único que logró concluir) y Camilo Ponce (1956-1960).

Las condiciones que permitieron a la burguesía reestablecerse fue una rearticulación de la economía de Ecuador, basado en el auge de la economía bananera, que reacomodó las fronteras agrícolas y colocó a Ecuador en una posición de dependencia “hábilmente negociada” (Cueva, 2003, p. 308).

Próspera a consecuencia del repentino “boom” del banano que proporcionaba ingresos para “todos”, y ya sin graves grietas en la cúspide, la clase dominante ecuatoriana en su conjunto podía darse ahora el lujo de poner en práctica y “respetar”, por primera vez, las reglas de juego democrático-burgués, por lo menos mientras durase esta época de “prosperidad” (p. 309).

Sin embargo, hacia la década de 1960 tuvo lugar una nueva transformación económica que de nueva cuenta puso en jaque a la hegemonía burguesa.

La crisis de la exportación bananera precipitó el descalabro de la estabilidad constitucional, pero abrió también paso a un conflictivo proceso de modernización y cambios de corte reformista. Desde los años sesenta hasta el fin de los setenta o inicios de los ochenta, se dieron profundas transformaciones de la sociedad ecuatoriana. No se trataba solamente de un cambio en el producto básico de exportación (banano por petróleo), sino de un agotamiento del modelo agroexportador y del surgimiento e inicial consolidación de un nuevo modelo de dominación (Ayala, 2008, p. 37).

En 1960 Velasco asumió por cuarta vez la presidencia de la república. En plena guerra fría, el gobierno de Velasco reconoció al gobierno revolucionario de Cuba.

Junto con esto, la influencia norteamericana en los órganos castrenses se intensificó. En junio de 1962 se pone en práctica el primer programa de Acción Cívica, auspiciado por Estados Unidos, en Latinoamérica, con lo que aumentó la asistencia militar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas (Nesbet, 2010, p. 65).

En 1961 un golpe de Estado depuso el cuarto velasquismo y le entregó el poder a su vicepresidente. Sin embargo, en 1963 los militares volvieron a realizar un golpe de Estado y esta vez se quedaron en el poder, mediante una Junta Militar.

La política del nuevo régimen militar se puede graficar claramente con la conocida analogía de la zanahoria y el garrote. Por un lado, tuvieron una política social inclusiva, cuyo factor más importante fue la reforma agraria [...]. Pero por otro lado, no toleraron ningún atisbo marxista (Nesbet, 2010, p. 69).

La reforma agraria de la junta causó el descontento de la burguesía guayaquileña y los terratenientes serranos, sin embargo, esto no fue suficiente para provocar su caída. En 1966 los militares ocuparon la Universidad Central, lo que sí provocó su derrumbe (Cueva, 2003, p. 314).

Los miembros del gobierno militar abandonaron el gobierno el 29 de marzo, cuando el país se encontraba casi totalmente paralizado por una serie de manifestaciones y huelgas y estaba a punto de descubrirse que los generales, entre otras “reformas”, habían llevado a cabo la de renunciar secretamente a nuestra soberanía sobre las doscientas millas marítimas, en favor del imperialismo (p. 314).

En 1968, una vez más Velasco regresó a la escena política, para ocupar por quinta y última vez la presidencia de la república, convirtiéndose en el único personaje de la historia ecuatoriana en ostentar el cargo de presidente en tantas ocasiones. En 1970, Velasco se declaró dictador en un “autogolpe” de Estado, apoyado por las clases dominantes y en principio por las fuerzas armadas.

Incapaz de superar sus contradicciones fraccionales y de trincas y por lo tanto de ofrecer un proyecto político coherente, susceptible de atraer el apoyo masivo y decidido de las fuerzas armadas; temerosa, inclusive, de que al interior de éstas se impusiese la corriente reformista, a la burguesía no le quedaba otra salida que auspiciar el autogolpe de Velasco, único personaje capaz de representar fantasmalmente y “por encima” de sus fracciones la dictadura de clase en general (Cueva, 2003, p. 316).

Sin embargo, en 1972 los militares decidieron intervenir una vez más, esta vez precisamente por el ala reformista. “El *Gobierno Nacionalista y Revolucionario* de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Guillermo Rodríguez Lara, comenzó en 1972, justo en el momento en que se abría la mayor expansión económica que registra la historia nacional” (Ayala, 2008, p. 38).

El gobierno de Rodríguez Lara inició una política reformista, basada en la nacionalización del petróleo, lo que dio a las fuerzas armadas un peso económico que mantiene hasta la actualidad (Nesbet, 2010). Bajo los cuatro años del gobierno de Rodríguez Lara Ecuador ingresó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y se creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), además de reducir la participación de empresas extranjeras en la producción de petróleo. Esta política nacionalista le valió el apoyo moderado de la izquierda ecuatoriana (Cueva, 2003, p. 319).

Tanto las élites como Estados Unidos temían, sin embargo, que un populismo militar como el de Perú o Panamá se inclinara a la izquierda. Los derechistas que había entre los militares comenzaron a planear un golpe de Estado. Su primer intento fracasó en 1975, pero en 1976 lograron su propósito (Cockcroft, 2001, p. 509).

El *Consejo Supremo de Gobierno* que tomó el poder en 1976 introdujo las políticas de ajuste neoliberal, aunque en el discurso continuó el nacionalismo militar e incluso se nacionalizó parte del petróleo controlado por empresas extranjeras (Crockcroft, 2001).

Al cabo de una década de dictadura, se podían observar cambios significativos en varios aspectos de la vida del Ecuador. La modernización se había acelerado y el capitalismo había penetrado profundamente en toda la estructura socioeconómica, acentuando la dependencia internacional del país (Ayala, 2008, p. 38).

Ahora bien, a partir de la transición a la democracia a finales de los años setenta, y hasta inicios del siglo XXI, predominaron en Ecuador las políticas neoliberales. Las décadas de 1980 y 1990 se caracterizaron por una relativa estabilidad política y periodos presidenciales que se cumplieron consecutivamente. En la década de 1990, sin embargo, comenzaron a surgir los movimientos indígenas que definieron la política ecuatoriana a inicios del siglo XXI.

En 1999 ocurrió la más grave crisis económica que ha vivido Ecuador y que llevó a la desaparición de su moneda y la dolarización de la economía (Vázquez y Rezende, 2020). En el año 2000, una alianza entre el movimiento indígena y los militares depuso al presidente Jamil Mahuad, quien había cedido la soberanía de la base de Manta a Estados Unidos y protegió los intereses banqueros (Ayala, 2008, p. 40).

En 2002 el coronel Lucio Gutiérrez, que lideró el golpe de 2000, asumió la presidencia con un gobierno pronorteamericano. Fue depuesto en 2005 por el congreso tras una movilización indígena (Ayala, 2008).

La inestabilidad que caracterizó el fin del siglo XX y los primeros años del XXI se puede traducir como una crisis de hegemonía, donde el movimiento indígena ascendió, las protestas predominaron y se constituyó una contra-hegemonía, que después se vería cristalizada en la llamada Revolución Ciudadana encabezada por Rafael Correa a partir de 2007.

### **2.3 Bolivia**

La elección en 2005 de Evo Morales incluyó a Bolivia en el ciclo de gobiernos de izquierda de la región. Como en Venezuela y Ecuador, la elección de 2005 estuvo marcada por una inestabilidad política que representaba una crisis de hegemonía. La historia boliviana desde el siglo XIX, por su parte, tuvo un desarrollo totalmente diferente de estos dos países. El inicio de la república fue tardío respecto a sus coetáneos. La situación de “retraso” frente a los paralelismos de la historia latinoamericana, es una constante en la historia boliviana hasta 1952, fecha de la Revolución Nacional, que indicó la creación de una hegemonía dentro del capitalismo dependiente que, sin embargo, tuvo una existencia breve.

#### *2.3.1 La larga guerra de independencia*

Al igual que Ecuador y Venezuela, la historia de Bolivia, durante la colonia y a inicios del siglo XIX, tiene una honda relación con sus vecinos. Los lazos más profundos los tiene principalmente con Perú, pero también con Argentina y, de una manera menos amigable, con Chile.

El territorio que actualmente conocemos como Bolivia, en época colonial, era el que correspondía a la Audiencia de Charcas, también conocida como el Alto Perú. Como en el caso ecuatoriano, Charcas perteneció al virreinato del Perú, desde su fundación y hasta las

reformas borbónicas del siglo XVIII, cuando la Audiencia pasó a formar parte del recién creado virreinato del Río de la Plata con sede en Buenos Aires.

Al igual que Quito, los vínculos con Perú no se rompieron, en este caso de manera más marcada, pues la configuración geográfica, social, política y poblacional de Charcas era más parecida a Perú que a Buenos Aires, situación que se mantendría durante las primeras décadas del siglo XIX y que de alguna forma mantiene vigencia.

Ahora bien, como se mencionaba en el caso venezolano, como ocurre en el ecuatoriano y como en realidad pasa en todas las historiografías nacionales de América Latina, “la historiografía clásica boliviana sobre la independencia viene a constituir un conjunto de obras apologéticas sobre la actuación de los héroes que la llevaron a cabo” (Fernández, 2007, p. 188). Esta situación tiene su origen en los periodos en los que se escribe la historia nacional, que reflejan la ideología y la correlación de fuerzas de la época.

La cuestión sobre a qué virreinato debía pertenecer la Audiencia tuvo una influencia notable en el desarrollo de la Independencia boliviana. La configuración de la colonia de Charcas y su sujeción a uno y otro virreinato permitieron tempranas ideas de autonomismo y fueron una fuente de disputas entre ambos virreinos.

Desde que empezó a funcionar hasta la creación del virreinato platense, transcurren dos siglos en que la Audiencia de Charcas se extiende a todo el territorio donde iba a asentarse un nuevo virreinato el cual emergió como cabecera de una jurisdicción de la que antes era sufragáneo (Roca, 2011, p. 53).

Desde muy prematuramente, las elites charqueñas ambicionaron ser sede virreinal. Los motivaba en parte la importancia de la Audiencia en la economía colonial, pues debe recordarse que la principal zona minera de todo el imperio español se encontraba en Potosí, pero también existía el hecho de que Charcas, aunque subordinada nominalmente, primero a Lima y luego a Buenos Aires, gozó de una autonomía en su autoridad de facto sobre el territorio de la Audiencia.

A Charcas siempre le fue difícil aceptar una condición subalterna tal como lo muestra su relación con el virreinato peruano, llena de instancias donde se reivindican derechos que la

propia corona le negaba. La Audiencia estaba acostumbrada al ejercicio del poder y nada dispuesta a disminuirlo, mucho menos a perderlo (Roca, 2011, p.73).

A pesar de los esfuerzos autonomistas en Charcas, la Corona española nunca le concedió a la Audiencia más concesiones de las que ya tenía (Roca, 2011). Sin duda, esta situación influyó en el proceso que inició en 1809, cuando Buenos Aires mantenía la pretensión de independizar Charcas como parte de su territorio, se extendió hasta la creación de la actual Bolivia en 1825, cuando aún cabía la posibilidad de integrarse a Perú y aún influyó bien entrada la vida independiente, durante la efímera existencia de la Confederación Perú-Boliviana e incluso en la Guerra del Pacífico, como se verá más adelante.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que las ideas autonomistas no fueron las únicas que permearon en la sociedad charqueña antes del proceso de independencia. A finales del siglo XVIII tuvieron lugar una serie de rebeliones indígenas, tanto en Charcas como en Perú, que sacudieron a la sociedad colonial de las cuales las más conocidas y nombradas por la historiografía son las de Tupac Amaru y Tupac Katari en la década de 1780, las cuales tuvieron un carácter multclasista e independentista (Klein, 2015).

Tomando en cuenta estos antecedentes, es como se llegó al punto de la invasión napoleónica en España que, como ya se ha mencionado en los anteriores apartados, fue la que desencadenó finalmente los procesos de independencia en Hispanoamérica.

La región [Charcas] fue la primera de la América española en verse gravemente afectada por los conflictos que sucedían en la escena imperial e internacional, así como la primera que podría desarrollar un movimiento independentista. En parte debido a su aislamiento respecto al mar, o porque aún era una zona independiente de poder económico, entre dos virreinos conflictivos, el de Lima y el de Buenos Aires, y en parte debido a su autonomía tradicional, se permitió que la disputa entre grupos se extendiera durante un prolongado tiempo antes de ser sofocada (Klein, 2015, p. 123-124).

En 1809 tuvo lugar en La Paz una revuelta popular, de la cual resultó la instalación de una Junta Tuitiva que gobernó en nombre de Fernando VII (Klein, 2015, p. 124). Los sucesos en España, si bien tenían repercusiones en todas las colonias, en Charcas se expresaron de

forma más contundente. De tal manera, es necesario mencionar la creación de Juntas de Gobierno en las distintas provincias de España, que resistieron la invasión francesa.

Aunque otras juntas también ostentaban el título de “Suprema”, la de Sevilla se sintió como la única merecedora de tal distinción y, prevalida de ella, envió a sus agentes a buscar el reconocimiento de los reinos ultramarinos. Su obvio propósito era asegurar su dominio en América y recuperar el monopolio que hacía un siglo había perdido frente a Cádiz (Roca, 2011, p. 131).

En 1809, en Charcas, surgió un debate en torno a qué autoridad reconocer. El presidente de la Audiencia y el arzobispo apoyaron la Junta de Sevilla, mientras que los oidores (jueces), prefirieron reconocer a la Junta de Madrid (Soux, *et al*, 2014, p. 171). La Junta Tuitiva de 1809, por su parte, desconoció la Junta de Sevilla y proclamó un gobierno independiente.

Pero sólo se trató de una revuelta a corto plazo; el “grito” de independencia de los líderes rebeldes criollos de La Paz no encontró eco inmediato entre los indígenas, ni una respuesta positiva de las élites criollas urbanas. Al recibir las nuevas noticias sobre la revuelta, el virrey de Lima [que reconoció la Junta de Sevilla] ordenó represalias inmediatas, y envió al presidente [Manuel de] Goyeneche, de la Audiencia de Cuzco, a La Paz, con 5 000 soldados (Klein, 2015, p. 125).

Sobre la llegada de Goyeneche a Charcas, vale la pena mencionar que consigo traía una carta de Carlota Joaquina de Borbón, hermana de Fernando VII y consorte del príncipe Juan VI de Portugal. En dicho documento “Carlota expresaba sus pretensiones al trono español en reemplazo de su hermano, el rey prisionero” (Roca, 2011, p. 132). Si bien, las pretensiones de Carlota no prosperaron y solo tuvieron un breve eco en Buenos Aires, el evento expresa la situación de incertidumbre que se vivía en América.

Aunque la Audiencia finalmente reconoció a Sevilla (Soux *et al*), la Junta tuvo una breve existencia de cuatro meses, tras la creación de la Junta Central Gubernativa del Reino, que fue reconocida tanto en América como en España. Sin embargo, “A Charcas la noticia tardó en llegar, al punto de que cuando Goyeneche armó tan tremendo alboroto por el reconocimiento de la junta sevillana ya ella había dejado existir” (Roca, 2011, p. 132).



Al mismo tiempo que tenían lugar estos sucesos en La Paz, Chuquisaca, al sur de la Audiencia, era tomada militarmente por las tropas enviadas por el virrey de Buenos Aires. “Con esta acción y con la ejecución de los rebeldes de La Paz, el movimiento de independencia del Alto Perú terminó formalmente y se aplastó el primer intento de independencia en América” (Klein, 2015, p. 125).

De manera paradójica, después de haber sido la primera región que formalmente declarara su independencia, el Alto Perú fue la última región de América del Sur en obtenerla. Además, ahora era campo de batalla de fuerzas más poderosas, tanto del norte como del sur, y perdió su iniciativa en todos los eventos subsecuentes, que tuvieron líderes y ejércitos más allá de sus fronteras (p. 126).

Fernández (2007) menciona que la historiografía boliviana ha dividido la independencia en “episodios”, de los que lo arriba descrito correspondería a un primer periodo. Soux *et al.* (2014), por su parte, afirman que “la ‘corta duración’ [del periodo de juntas en Charcas] es absolutamente cuestionable dado el tiempo que tuvieron todas las juntas en España y América” (p. 176).

Regresando a la figura de Goyeneche y la represión de la Junta Tuitiva, Roca (2011) menciona que “[Goyeneche] tomó la iniciativa para sofocar el levantamiento paceño y de esa manera reincorporar (como en efecto reincorporó) al Perú aquella rica provincia” (p. 145). Dicho suceso es importante de mencionar, puesto que desde ese momento y hasta el final de la guerra, Charcas permaneció subordinado al virreinato del que antes había formado parte, mientras que Buenos Aires tomaba su propio camino hacia la independencia, no sin antes jugar un papel importante en Charcas.

Tras la derrota de la rebelión de 1809 y tras la instalación de la primera Junta de Gobierno en Buenos Aires, “Charcas se constituyó en punto estratégico para el futuro de la Revolución de Mayo [como se conoce al movimiento porteño de 1810]” (Soux *et al.*, 2014, p. 186). De tal manera, en 1810-1811, un ejército argentino invadió el Alto Perú, pero fue derrotado por Goyeneche; en 1813 un segundo ejército argentino volvió a intentar tomar el Alto Perú; y en 1815 tuvo lugar un tercer intento porteño por tomar Charcas.

Estas expediciones tuvieron algunos avances, logrando tomar porciones del territorio como Cochabamba, pero finalmente todas fueron aplastadas por los ejércitos realistas de Charcas y Lima (Klein, 2015). Ahora bien, aunque los ejércitos argentinos, en la mayoría de los lugares a los que entraban alcanzaban el apoyo popular de los habitantes:

Las tres expediciones militares porteñas al Alto Perú (1811-1815) estuvieron encaminadas a que las prerrogativas virreinales se transfirieran intactas a la Junta Revolucionaria de Buenos Aires, entre ellas, el derecho al mineral de plata del cerro de Potosí, a la capacidad de acuñación (Buenos Aires no tenía Casa de Moneda) y a cubrir los costos de su revolución (Roca, 2011, p. 151).

Sobre la derrota de los porteños en Charcas, Klein (2015) menciona:

Para 1816 todos los esfuerzos, tanto externos como internos, por alcanzar la independencia habían llegado a un fin desastroso. A partir de ahí se aislaría al Alto Perú de los principales eventos de las grandes luchas por conseguir una liberación continental, mientras que el logro final de su independencia provendría de la misma élite que había apoyado las actividades realistas a lo largo del periodo (p. 129).

A pesar de que la anterior afirmación expresa en gran medida cómo se obtuvo la independencia, hay dos cuestiones que deben ser expresadas y contrastadas con la tesis del aislamiento. En primer lugar, la participación temprana de los indígenas que, a partir de las rebeliones de finales del siglo XVIII, tenían ya una experiencia de organización; en segundo, la continuación del movimiento independentista por medio de lo que la historiografía boliviana considera como guerrillas o “republiquetas”, desde la derrota del movimiento de 1809 hasta 1816. Además, en 1817 tuvo lugar una cuarta expedición argentina, tras la cual Buenos Aires pasó a considerar Charcas como un territorio de contención (Soux *et al.* p. 207)

Sobre el primer punto, mencionan Soux *et al.* (2014) que “era, [...] un movimiento indígena no tanto porque participaran sólo éstos, sino sobretudo por su autoidentificación como tales” (p. 198), lo que constituye una verdadera excepción en esta época, y nos habla de la configuración social y étnica del país. Además, agregan “frente a la retirada del ejército rioplatense, fueron los grupos indígenas los que mantuvieron la insurgencia” (p. 199).

Sobre el punto de las guerrillas, estas fueron surgiendo bajo liderazgos caudillistas “al calor del paso de cada ejército, surgía en cada pueblo, estancia o hacienda un nuevo caidillo que se proclamaba a favor de la junta de Buenos Aires” (Soux *et al.*, 2014, p. 210). Muchas de estas guerrillas surgieron como *montoneras*, es decir, como:

un grupo de hombres sin una dirección ni objetivos definidos, reunidos al calor del momento, sin ninguna estrategia particular, que atacaba y se dispersaba de forma relampagueante [...] lo que se inició como una montonera, muchas veces se transformó en una guerrilla, es decir que evolucionó hacia un tipo de guerra más ordenado, con una estructura militar sólida (p. 211).

Hacia 1816 “la gran mayoría de los caudillos principales de la región de Charcas habían muerto, fruto de las intensas expediciones “pacificadoras” realizadas por las nuevas unidades venidas de la península, expertas en combate contra-guerrillas” (Soux *et al.*, p. 222). A partir de ese momento y hasta la intervención de Simón Bolívar en 1825 en la región, sobrevino un periodo de dominación realista, a pesar de que sobrevivieron algunos grupos guerrilleros y apareció la figura de José Miguel Lanza en 1817, que logró transformar las guerrillas en un ejército de línea (*ibid.*).

Por otro lado, hacia 1821 fue enviado desde España, como nuevo virrey del Perú, José de la Serna, que había combatido contra la invasión francesa. En este momento destacó la figura de Pedro Antonio de Olañeta, también del bando realista, y quien fue una figura esencial en la obtención de la independencia. Olañeta, fungió como supremo comandante militar de Charcas, en un momento en que la Audiencia estaba sin una autoridad formal (Roca, 2011).

Cabe destacar que de la Serna era identificado en España como un liberal, lo que en parte le valió su envío a América. Olañeta, por su parte, era un convencido absolutista, por lo que desde el primer momento desconoció la autoridad de La Serna. Esta división llevó a la llamada “Guerra doméstica”, acontecida en 1823 entre estos dos bandos realistas. Fue una disputa interna de cuatro meses en la que simultáneamente el virrey se había repelido a Cuzco, asediado por los ejércitos de Bolívar y San Martín, mientras que Olañeta reclamaba para sí una figura de autoridad en Charcas (Roca, 2011).

El combate que Olañeta dio al virrey le valió el reconocimiento de las tropas de Bolívar. Durante algunos meses, Bolívar y Olañeta compartieron correspondencia, en la que El Libertador trató de convencer al general realista de unirse a su bando y dar fin a la guerra. En ese contexto, en diciembre de 1824 tomó lugar la batalla de Ayacucho, en la que resultó ganador Antonio José de Sucre del ejército libertador, que desembocó en la capitulación de Ayacucho, con la que Perú obtuvo su independencia y el virrey finalmente se rindió. A partir de ese momento, Charcas era el último territorio de América del Sur en manos realistas.

Luego de la victoria del 9 de diciembre en Ayacucho donde se terminó con la influencia realista en el Perú, Bolívar vio que el contar con el control de Charcas era para el Ejército Libertador una cuestión de vital importancia (Soux et al. 2014, p.243).

Según Roca (2011), la influencia del sobrino de Olañeta, Casimiro Olañeta, fue decisiva en las decisiones del general realista. Sin embargo, sus gestiones para que su tío aceptara unirse a Bolívar fracasaron, incluso cuando Casimiro terminó uniéndose al ejército libertador tras la batalla de Ayacucho. La principal razón de su rechazo fue que “en su relación con Bolívar, el general Olañeta dio todo su apoyo a la causa de la independencia a condición de que se le reconociera su autoridad sobre Charcas” (p. 483). Bolívar, por su parte, solo estaba dispuesto a “que se le reconocieran los honores y preeminencias del caso, incluyendo la honrosa dignidad de “Libertador” (p. 484).

Es decir, Bolívar podía reconocer a Olañeta dentro del propio ejército libertador, pero la autoridad sobre los territorios liberados correspondía a sus cercanos, como finalmente ocurrió con Sucre a la cabeza del nuevo país.

Este confuso estado de cosas condujo a que, por último, Sucre se viera forzado a encabezar un ejército en el Alto Perú para alentar la deserción de las tropas de Olañeta. En enero de 1825, el viejo general fue muerto en una batalla, a manos de su propia tropa amotinada. Con su muerte, las guerras de independencia, tanto para América del Sur española como para el Alto Perú, finalmente llegaron a su fin, después de casi 16 años de amarga guerra civil, de grave pérdida de vidas y de un severo encajamiento (Klein, 2015, p. 132).

Bajo el mando de Sucre, mano derecha de Bolívar, que ya había sido el gobernante del entonces Distrito del Sur de la Gran Colombia, comenzaba la construcción del actual Estado boliviano.

### 2.3.2 *La experiencia boliviana de construcción del Estado-nación*

Sucre asumió la autoridad de Charcas de manera provisoria a inicios de 1825 con el apoyo de los cabildos. A la brevedad el Mariscal de Ayacucho (título obtenido en la batalla del mismo nombre) convocó a una Asamblea Deliberante, la cual “se reunía en medio de una situación difícil debido a las posiciones tanto de Bolívar y el Perú, por un lado, como de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, por el otro” (Soux *et al*, 2014, p. 250).

A pesar de que estos dos nuevos países se disputaban el control de la antigua colonia de Charcas, la Asamblea votó mayoritariamente por constituir un estado independiente y solo un par de diputados se pronunciaron por la unión con Perú (*ibid.*). Argentina y Perú respetaron la resolución. La independencia de la nueva república se declaró en agosto de ese año, bautizada en honor a El Libertador Simón Bolívar.

Ahora bien, la posición de Bolívar no era favorable a la independencia del Alto Perú. Sus ideas sobre la unión continental favorecían una unificación con Buenos Aires (Abecia, 2002). Sin embargo, terminó por aceptar la decisión de Sucre sobre la independencia, a quien le había dado plenas facultades para decidir sobre la situación de la antigua Charcas (Klein, 2015).

Mientras que al principio Bolívar sostuvo que el Congreso peruano aún debía determinar el destino final de la región, transigió luego de su visita triunfal por las ciudades del Alto Perú, y por último ignoro sus propios decretos y aceptó la independencia de la nueva república, e incluso fue su presidente durante algunos meses (Klein, 2015, p. 135).

Bolívar dejó de participar en la política boliviana en diciembre de 1825 y el mando directo del país regresó a Sucre (Barragán *et al.* 2014a). El Mariscal de Ayacucho enfrentó una situación compleja, pues el país nacía aislado del exterior, desarticulado internamente y con la economía minera en plena decadencia (Bonilla, 1991).

Ahora bien, a pesar de que la larga guerra de independencia había destruido la economía boliviana, sobrevivían muchas de las instituciones coloniales. Klein (2015) señala al respecto:

Los historiadores del siglo XX tienen razón al señalar la persistencia de las élites tradicionales con una apariencia republicana, y en enfatizar la continuidad de las instituciones sociales y políticas hasta muy entrado el siglo XIX instando con urgencia a considerar la década de 1880 como un periodo de transformaciones fundamentales de las estructuras coloniales (p. 137).

En términos de hegemonía, lo anterior se traduce como un escenario donde el viejo régimen no termina de morir. Situación que impidió el surgimiento de un bloque histórico hegemónico, a pesar de la existencia de figuras caudillistas que en algunos momentos trataron de impulsar un proyecto de hegemonía, tal como Sucre y su sucesor, Andrés de Santa Cruz.

Ejemplo de lo anterior fueron las reformas que realizó el gobierno de Sucre, como el establecimiento de un ministerio de guerra y otro del interior y finanzas; medidas secularizadoras hacia la Iglesia católica; una reforma tributaria para financiar al Estado; el restablecimiento de la Casa de la Moneda y el Banco de San Carlos y una reforma educativa (Barragán *et al*, 2014a).

Aunque algunas medidas tuvieron un relativo éxito, otras tuvieron un inmediato fracaso. Tal es el caso de la reforma tributaria, en la que se pretendía eliminar el tributo indígena, una de las instituciones más arraigadas heredadas de la colonia y abolido por Bolívar. La difícil situación en las arcas del Estado obligó a Sucre a restituirlo en una situación que se extendió hasta 1882 (Bonilla, 1991).

Otro aspecto fundamental en este temprano intento de constitución de hegemonía fue la educación. Para Sucre, “el régimen republicano no podía existir sino se educaba a los ciudadanos en los nuevos valores republicanos” (Barragán *et al*, 2014a, p. 77). Un papel destacable en el proyecto educativo fue el de Simón Rodríguez, de origen venezolano, más conocido por haber sido el mentor de Simón Bolívar. Rodríguez elaboró un ambicioso

proyecto de corte liberal, que sin embargo fracasó debido a que “no hubo manera de persuadir a las clases dominantes de que se trataba de un modelo pedagógico adecuado a nuestro medio y situación y de esa manera, Rodríguez abandonó el país fundamentalmente amargado” (Cajías, *et al.*, 2014, p. 124).

También en estos primeros años es que tuvo lugar la conformación del ejército boliviano. Sus primeros integrantes fueron los veteranos de las guerrillas del periodo independentista y los oficiales llegados con el ejército colombiano. En el gobierno de Sucre se fundaron escuelas militares y se dotó al cuerpo militar de un Estatuto Orgánico (Barragán *et al.*, 2014a).

Aunque abundante en acciones y reformas para la conformación del Estado, el gobierno de Sucre tuvo una importante oposición, que llevó a su rápido fin en 1828. Ese año tuvo lugar un alzamiento militar contra Sucre. Al mismo tiempo, el general peruano Agustín Gamarra invadió Bolivia, lo que provocó la renuncia de Sucre y su regreso a su natal Venezuela (Abecia, 2002, p. 151).

En ese momento hizo su reaparición Andrés de Santa Cruz, quien había tenido un papel importante en la guerra de independencia. Hasta 1820, fue coronel del ejército realista. Al ser capturado por las tropas de San Martín, cambió de bando en favor de la causa independentista. En 1822, cambió nuevamente su lealtad en favor de Bolívar, quien lo nombró general (Klein, 2015). En el ejército libertador de Bolívar aprendió el ideario constitucionalista, la retórica liberal y se definió su pensamiento político (Colàs, 2019).

El papel del ejército como elemento vertebrador del Estado fue una constante en el pensamiento de Santa Cruz. Utilizando esa nueva retórica para tomar control de las tropas, creó redes clientelares como instrumento para asegurar una base de poder ya durante las guerras de emancipación (Colàs, 2019, p. 8).

De origen paceño, Santa Cruz permaneció en Perú al declararse la independencia, donde se involucró profundamente en la política local. En 1828, tras la renuncia de Sucre, fue llamado a asumir la presidencia de Bolivia. Santa Cruz es considerado el primer caudillo boliviano

(véase Colàs, 2019). Su gobierno se caracterizó por lograr una relativa estabilidad al haber encontrado vacíos de poder que llenó sobre todo con el aspecto militar:

Puso su atención en primera instancia en el aparato militar. Aumentó el número de soldados, inició un programa de adiestramiento destacable y creó un entramado de talleres para la creación de material militar para evitar la dependencia del extranjero. Además, se rodeó de generales extranjeros con experiencia [...] llegando a disponer de un ejército depurado que constituyó per se un fuerte poder en la región (Colàs, 2019, p. 12).

Por otro lado, “es a Santa Cruz a quien Bolivia debe el primer intento de lograr una organización eficiente tanto del gobierno como de la economía, y también la búsqueda de nuevas salidas para romper el aislamiento externo” (Bonilla, 1991, p. 226). En fin, a Santa Cruz le son atribuibles obras de gobierno exitosas, “pero, a pesar de estos logros, sobre todo se recuerda a Santa Cruz como el ejecutor frustrado de la unidad andina entre el Perú y Bolivia” (idem).

Aquí cabe resaltar la identidad de Santa Cruz. Nacido en La Paz, el general se sentía tanto peruano como boliviano y, en última instancia, consideraba ambos territorios como uno solo (Colàs, 2019). La renuncia de Sucre, con tintes intervencionistas peruanos, ya habían manifestado planes de anexión de Bolivia a Perú (Abecia, 2002). La idea no era descabellada ni inconveniente, pues recordemos los lazos históricos entre ambos países, incluyendo la reunificación del Virreinato del Perú y Charcas en la guerra de independencia, recuerdo reciente y vivo en las recién creadas naciones.

Ahora bien, existían en ese momento tres alternativas de unión: la fusión de los territorios; un Estado confederado que conservara la soberanía de ambos; y la anexión del sur de Perú a Bolivia (Barragán *et al*, 2014a, p. 78). El camino adoptado por Santa Cruz fue una variante del segundo: el Perú se dividió en dos estados (el del sur y el del norte) y Bolivia conservó su integridad territorial. Cada estado conservó la administración interior y Santa Cruz fue el jefe de los tres estados, con el título de Sumo Protector de la Confederación. La confederación Perú-Boliviana se estableció el 28 de octubre de 1836 (Colàs, 2019).



La confederación tuvo un éxito inicial considerado. Santa Cruz tuvo sus bases de apoyo en el sur peruano y en La Paz; reorganizó el ejército, con base en la experiencia boliviana; obtuvo el reconocimiento de Estados Unidos, Reino Unido y Francia (Colàs, 2019). Sin embargo, el norte de Perú y el resto de Bolivia le generaron una generalizada oposición desde el principio, lo que según Barragán *et. al.* (2014a) llevaron a la destrucción de la confederación.

Sin embargo, un factor determinante, sin el cual la oposición no habría tenido éxito, fue la disconformidad de los vecinos de la confederación, especialmente de Chile y Argentina, que vieron en el gran estado andino un peligro, especialmente el primero, por temor a que los puertos de ambos estados desplazaran a los chilenos en el comercio de la región.

La fusión del Perú y de Bolivia rompía el equilibrio de fuerzas existentes entre los países que emergieron del colapso del sistema colonial, lo que inevitablemente se percibió como una seria amenaza a sus intereses. Así lo comprendieron rápidamente Argentina y, sobre todo, Chile [que] el 26 de diciembre de [1836] declaró la guerra a la Confederación [...] Cuatro meses más tarde, el 9 de mayo de 1837, Argentina, bajo el pretexto de reclamaciones fronterizas, emprendió una iniciativa similar (Bonilla, 1991, p. 228).

Aunque Santa Cruz logró vencer esta intervención, en 1838 Chile volvió a intervenir militarmente y en el norte de Perú la oposición se rebeló, encabezados por Agustín Gamarra, lo que llevó a la renuncia y exilio de Santa Cruz y al fin de la confederación en 1839 (Colàs, 2019).

A pesar de este adverso final de Santa Cruz, se debe hacer notar que su dominio en Bolivia fue de diez años. Si bien, en un principio pudo lograr consolidar cierto proyecto hegemónico, su plan integracionista fue el que llevó al fracaso esa hegemonía, pues entraron en conflicto las élites de La Paz con las de Lima, además, claro, del desequilibrio geopolítico que los países del sur veían en dicho proyecto.

Después del periodo de Santa Cruz, Bolivia siguió enfrentando por unos años más la intervención extranjera. En 1841, Gamarra, en el puesto de presidente de Perú, invadió Bolivia por temores a un regreso de Santa Cruz. Al final, José Ballivián tomó el liderazgo boliviano y:

se enfrentó a Gamarra en el poblado de Ingavi, en noviembre de 1841, y derrotó a las fuerzas invasoras de Perú. Resultado de esta acción, el gobierno de Gamarra cayó en Perú [...] y la cercana conexión entre la política peruana y boliviana se rompió en definitiva. Después de Ingavi, Perú jamás volvió a tomar parte en los asuntos bolivianos, y ningún líder político boliviano volvió a ser un contendiente potencial en la política peruana (Klein, 2015, p. 155).

Desde el ascenso de Santa Cruz hasta 1880, sobrevino la época de los caudillismos en Bolivia (Colàs, 2019, Barragán *et al*, 2014b). Fue, igualmente, una época en que el control de la presidencia tenía una dinámica militar, por medio de revueltas, “movimientos” y golpes de Estado (Barragán *et al*, 2014b). En este sentido, si bien se puede considerar la existencia de una élite oligárquica, sus miembros “participaron en la vida política como senadores y diputados, como parte de la burocracia palaciega en calidad de asesores y ministros [...]. La consolidación de una nueva élite económica y política debió esperar [...] hasta la década de 1870” (ibid., p. 101).

De tal manera, en este periodo no tenemos una hegemonía, dada la ausencia de una clase dominante, tanto por el control del Estado en manos de los militares, como por la situación económica del país que impidió la acumulación capitalista. Al respecto, se puede mencionar que Bolivia permaneció como una sociedad eminentemente rural; que esa sociedad fue semejante a la del periodo colonial; y que la actividad minera permanecía estancada y sólo comenzó a desarrollarse lentamente hacia las décadas de 1860 y 1870 (Klein, 2015).

Un indicador de la prevalencia del viejo régimen es la existencia, relativamente anacrónica, del tributo indígena, el cual, en gran parte, siguió financiando al Estado. Solo en 1866, el gobierno de Mariano Melgarejo (1864-1871) abolió el tributo en un decreto que la historiografía boliviana considera como uno de los mayores agravios a los indios, ya que implicó la enajenación de las tierras comunales y su privatización. Hacia 1871, el decreto se abolió con el derrocamiento del gobierno de Melgarejo, lo que:

no significó ni el restablecimiento de la propiedad comunal ni la transformación del indio en un jornalero sin tierra [...] En cuanto al tributo, éste fue suprimido del presupuesto nacional, pero los indios no quedaron exentos de pagarlo; en adelante, su recaudación fue confiada a la administración departamental hasta su abolición en 1882 (Bonilla, 1991, p. 233).

En cuanto a la minería:

Desde 1840 compañías chilenas, inglesas y francesas empezaron a explorar y a asentarse en el litoral boliviano (la provincia de Atacama) con el propósito de explotar el cobre y, sobre todo, los principales depósitos de guano. Entre 1857 y 1866 se descubrieron los yacimientos salitreros de la región de Mejillones, en la parte sur de Atacama, que se explotaron con capital chileno e inglés y se exportó como fertilizante al mercado europeo en expansión. Desde 1868, el puerto de Antofagasta, cuya población, como la de Cobija, era en más de 90 por 100 chilena, se convirtió en el puerto principal del litoral boliviano (Bonilla, 1991, p. 235).

No solo eso. Al interior, en la tradicional región minera de Potosí, desde la década de 1850 la élite chola (mestiza) de Cochabamba también volvió a explotar la producción de plata y “para el decenio de 1870 comenzó a llegar capital extranjero en cantidades siempre crecientes, y para la segunda mitad de la década, se puede decir que la industria minera de plata boliviana alcanzó niveles internacionales de capitalización” (Klein, 2015, p. 166).

En este marco de cosas es que Bolivia se acercaba a la década de 1880. La situación que iba gestándose en el litoral boliviano era una advertencia de lo que vendría después. En 1874, se había firmado un tratado con Chile para no aumentar impuestos a las empresas chilenas. En 1878 el gobierno boliviano impuso un impuesto por la extracción de salitre. “La respuesta chilena fue la ocupación militar de Antofagasta (febrero de 1879) y la declaración de guerra (abril de 1879) que inmediatamente se extendió al Perú” (Bonilla, 1991, p. 236).

### *2.3.3 De la guerra del Pacífico a la guerra del Chaco*

Se decía más arriba que la década de 1880 fue una época de cambios profundos en la sociedad y el Estado boliviano. Dichos cambios, amargamente, fueron consecuencia de la llamada guerra del Pacífico, que arrebató a Bolivia de su litoral. Aunque desde el final de la era de Santa Cruz, Perú y Bolivia siguieron caminos diferentes, en 1879 estos se volvieron a encontrar ante la necesidad de hacer frente al rival chileno. En 1873, Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto de defensa mutua (Bonilla, 1991).

La guerra del Pacífico sólo fue el principio, ya que los chilenos tenían el propósito de ocupar no sólo los territorios bolivianos, sino también la mayor parte de las regiones mineras costeras de Perú [...] los chilenos, de hecho, se habían preparado para sostener una larga guerra naval con este último país. Chile deliberadamente provocó a Perú para que ayudara a Bolivia, y luego procedió a concentrar todos sus esfuerzos en la destrucción del poderío militar peruano (Klein, 2015, p. 186).

El resultado de lo anterior fue la rápida derrota de Bolivia y, como ya se dijo, la pérdida de su salida al océano. Basta decir que la búsqueda de una salida al mar, desde entonces “es una constante en la política internacional boliviana, habiéndose ensayado y planteado muchas formas de arreglo” (Abecia, 2002, p. 163).

Por otro lado, la posguerra del Pacífico permitió la toma del poder de una clase dominante, que en los próximos años harían ensayos de proyectos de hegemonía: “Políticamente, la derrota de Bolivia produjo importantes cambios; sobre todo, puso punto final al dominio del caudillo militar y dio paso al establecimiento de un gobierno oligárquico civil, con la participación directa de la elite minera” (Bonilla, 1991, p. 236). Vale contrastar que esa oligarquía ya venía desarrollándose antes de la guerra junto al avance minero, pero que se había visto obligada a apoyar a los distintos caudillismos, al mismo tiempo que los gobiernos de antes de la guerra se veían obligados a tomar medidas en favor de ese nuevo grupo dominante. La guerra sólo fue el momento que necesitaba la nueva oligarquía para tomar las riendas del Estado (ibid.).

Tras la derrota y el derrocamiento del general Hilarión Daza, que había conducido las riendas del país durante la guerra, se convocó a la Convención Nacional de 1880, con el objetivo de redactar una nueva constitución y que finalmente trajo los cambios definitivos de la vieja sociedad colonial.

Se buscó dar viabilidad a la ansiada modernización capitalista iniciando una modernización de la legislación en todos los campos de la economía nacional que apuraron a la liberalización de la economía, el desarrollo de la industria, las garantías para las inversiones y la propiedad, el código de minería, la modernización del sistema impositivo [...] se

pretendía también el fomento de las obras públicas, especialmente ferrocarriles y carreteras (Mendieta, 2014a, p. 198).

Otros aspectos por mencionar que ocurrieron después de 1880 y hasta entrado el siglo XX, en lo sociopolítico son: la creación de partidos políticos; el surgimiento de un movimiento anticlerical; la recurrencia de insurrecciones indígenas a causa de la desposesión de sus tierras. Por otro lado, en lo económico se puede mencionar el crecimiento del sector de exportación; la continuidad en una población mayoritariamente rural; y el crecimiento del sector minero, especialmente en lo que se refiere a la plata y el estaño (Klein, 2015 y 1992). Ahora bien, en el periodo entre la Guerra del Pacífico y la Guerra del Chaco (1932) podemos distinguir dos grandes etapas: un periodo oligárquico-conservador entre 1880 y 1899 (Mendieta, 2014a), y uno liberal hasta 1935. Entre estas dos guerras, que sacudieron completamente al país, encontramos una guerra civil intermedia: la Guerra Federal de 1899.

A partir [del dominio oligárquico conservador] el ejército ya no sería un actor político determinante convirtiéndose en un instrumento indispensable de los designios de la élite sobre todo a la hora de apagar insurrecciones en contra del gobierno además de los constantes disturbios indígenas [...]

Los principales protagonistas en este periodo fueron los partidos Liberal y Constitucional Demócrata (conservadores) en pugna por el poder por casi veinte años. A partir de entonces se realizaron elecciones ininterrumpidas (presidenciales, legislativas y municipales) que se convirtieron en la actividad más importante de la vida política del país (Mendieta, 2014a, p. 199).

Esta aparente hegemonía conservadora no careció de contradicciones. La principal de ellas fue el surgimiento del Partido Liberal y su discurso ideológico, que se centró en el federalismo y la descentralización (Mendieta, 2014b). Además, comenzó a surgir una nueva clase social, relacionada “con las florecientes clases profesionales de la Paz y con los grupos mineros no relacionados con plata, y muy especialmente con todos los nuevos grupos del estaño, que aspiraban a desplazar a la oligarquía conservadora” (Klein, 1992, p. 214).

Para contrastar geopolíticamente a estos dos grupos sociales, que ahora se disputaban el papel de clase dominante, podemos ubicar a la oligarquía conservadora al sur del país, en los lugares tradicionales de la minería de plata, en Potosí y la ciudad de Sucre. Por su parte, la clase social emergente se encontraba en La Paz, que pasó a ser el centro de la nueva industria del estaño y desde ahí comenzó “su dominio en la economía nacional y en la vida social” (Klein, 1992, p. 215).

Lo que desencadenó finalmente la guerra civil en 1899 fue la llamada *Ley de Radicatoria de Sucre*, que declaraba a dicha ciudad como capital del país, lo que:

además de expresar un problema regional no resuelto -pues ya se llevaba años en el intento de definir la capital definitiva de Bolivia- fue más que nada la excusa ideal para que la élite paceña iniciara, el 12 de diciembre de 1898, la lucha armada por el poder a través del recurso del golpe de estado y la organización de un gobierno federal (Mendieta, 2014b, p. 240).

Un aspecto importante en este conflicto político entre dos sectores en disputa fue la participación indígena. Como menciona Klein (2015), desde la independencia los que llevaron las riendas del país era una minoría blanca, mientras que Bolivia permaneció como un país de una inmensa mayoría indígena. Esta situación fue bien observada por los liberales, que llevaron alianzas con los líderes indígenas, de los cuales el más destacable fue Pablo Zárate “Willka”, alianza determinante en el derrocamiento de los conservadores (Mendieta, 2014b).

De esta manera terminaba el siglo XIX boliviano. Una vez más, el país entraba al nuevo siglo con un atraso político y social de treinta años respecto a sus vecinos (Baptista, 1996). La llegada de los liberales, además, no implicó cambios profundos como los de 1880.

El programa liberal no se cumplió en cuanto al federalismo y tampoco se atendieron los reclamos de los campesinos aimaras liderados por el “temible Willka”. Tampoco hubo cambios en cuanto a la política económica seguida por los conservadores, de apoyo y finalmente rendición del Estado a la minería privada.

En lo que sí se cumplió el programa liberal fue en la relación con la Iglesia. Aunque tan católicos como los conservadores, los liberales establecieron el decreto de supresión de la

enseñanza religiosa y de las leyes de libertad de culto, de abolición del fuero clerical [y demás medidas liberales anticlericales, tomadas años antes en otros países de América Latina] (Baptista, 1996, p. 21).

En otros términos, el bloque histórico cambió en términos de sus representantes, su lugar de origen e ideas políticas (más no ideología de fondo), pero no así en su composición productiva y carácter capitalista-exportador-dependiente. Igualmente, lo que cambió fue el producto de exportación que requerían las potencias capitalistas occidentales: el estaño.

Así nació lo que los analistas políticos posteriores llamarían la “rosca”, aludiendo a un gobierno de políticos profesionales que operaban principalmente a favor de los importantes barones del estaño de la nación. Los grupos de poder económico ya no debían intervenir directamente en el proceso político para lograr sus fines (Klein, 2015, p. 206).

Esta nueva clase dominante, hacia los años veinte, disminuyó en términos de sus representantes: Simón I. Patiño, dominó y controló el 50% de la producción minera; el resto se lo distribuyó Carlos Víctor Aramayo, de una vieja familia minera y Mauricio Hochschild, de origen alemán (Klein, 2015 y Baptista, 1996). Aquí podemos destacar la consolidación de una burocracia del Estado, fundamental en este bloque histórico:

El retiro de Patiño y de los nuevos magnates del estaño, de la participación directa en los asuntos nacionales, dejó la política boliviana en manos de una élite de profesionistas urbanos de la clase media alta, así como de representantes de la élite con tierras a nivel provincial [...] Casi todos ellos tenían formación en derecho, y aunque estaban comprometidos con una concepción liberal de gobierno parlamentario y derecho constitucional, creían con firmeza en el sistema de castas y en el gobierno ejercido por una oligarquía blanca (Klein, 2015, p. 208).

Por otro lado, fue en el periodo liberal que se llevó a cabo la modernización del ejército, que, como se menciona en el capítulo 1, fue llevada a cabo por una misión alemana.

Bolivia tarda más en reponerse de los trastornos de la guerra [del Pacífico] y sus decisiones son más eclécticas. En 1905, una misión militar francesa privada reforma los programas de la Escuela Militar y la Escuela de Guerra. Pero a partir de 1910, La Paz imita a Santiago y contrata a instructores alemanes. El coronel Hans Kundt, jefe de la misión, es nombrado jefe

del Estado Mayor. Con su equipo de doce oficiales y suboficiales alemanes, germaniza el sistema de instrucción de cuadros y tropa e introduce los reglamentos del ejército alemán. Su contrato inicial, de tres años, se prorroga hasta 1914. En 1921, Kundt, ascendido a general, vuelve a Bolivia, adquiere la ciudadanía boliviana y participa en la vida política del país, convirtiéndose en uno de los pilares más firmes del Partido Republicano (Rouquié, 1984, p. 92).

Antes de continuar con el papel que jugaría el general Kundt en un nuevo desastre militar boliviano, hay que anotar el surgimiento del Partido Republicano. Desde 1914 hubo una escisión del Partido Liberal, que formaron la Unión Republicana a iniciativa de Bautista Saavedra y con el predominio de Daniel Salamanca. La creación del nuevo partido modificó las reglas de juego, instalando una dinámica bipartidista (Mendieta y Lema, 2014). En 1920 ocurrió un golpe de Estado, liderado por Saavedra y con un discurso anti-oligárquico.

El poder pasó, en 1920, a las manos del Partido Republicano, gajo desprendido del tronco liberal, obsesionada por los aspectos formales de la Constitución y la “pureza” del voto en un país donde una exigua minoría ejercía tal derecho. Como fruto del cambio de la situación, se formó una Junta de Gobierno, que llamó a elecciones y reunió una Convención Nacional, de la que saldría el nuevo presidente. La opinión general señalaba el nombre de Daniel Salamanca, la figura más prominente del republicanismo; pero la Convención produjo lo inesperado: uno de los triunviros, Bautista Saavedra [...] resultó electo por la mayoría de los convencionistas (Baptista, 1996, p. 27).

Bajo los republicanos en la década de 1920 sucedieron algunos cambios y continuidades en el sistema político: se consolidó la minería y el dominio de Patiño; surgió un movimiento obrero y socialista y se organizaron sindicatos; se pasó del bipartidismo al multipartidismo; hubo cambios ideológicos respecto al siglo XIX; sucedieron grandes revueltas y se reprimió con las fuerzas armadas; y finalmente se enfrentó la gran depresión, que anunciaría profundos cambios para la década de 1930 (Klein, 2015 y Baptista, 1996).

Hacia 1931, Salamanca, enemistado toda la década anterior con el Partido Republicano, llegaba al poder.



Salamanca, amargado por el escenario político nacional, se volvió aún más agresivo en el frente internacional. Fortaleció al ejército de manera sistemática, a costa de todos los otros servicios gubernamentales. También empujó al ejército a una exploración y programa de colonización cada vez más amplio en el Chaco (Klein, 2015, p. 227).

Bajo este contexto, Bolivia asumió una posición provocadora. Con el apoyo de los grupos tradicionales, empujó al ejército a una guerra de gran escala en la región del Chaco, en la frontera con Paraguay. Zavaleta (2003) describe así la nueva guerra, que tendría dimensiones aún más catastróficas para Bolivia que la del Pacífico:

La guerra, desde luego, era evitable. Cualquiera que fuese el grado de abigarramiento de los títulos enseñados por las partes, cualquiera el grado de gravedad de los incidentes previos a la guerra misma, en cualquier forma, parece evidente que habría sido posible convenir una solución arbitral. Es una mala política de estado pensar que la única salida para todo es la imposición total del principio que uno mismo sostiene. ¿Por qué, en efecto, los dos países más pobres de la zona tenían que lanzarse a una aventura tal? Era como si la sintieran una obligación a sí mismos, acaso porque suponían que lo único que les quedaba era su honor. La negociación era lo que pedía la lógica pero no eran lógicos los hombres que debían pensar en la negociación. El arbitraje habría sido posible pero sólo si se hubiera tratado de países no sometidos a semejantes presiones emocionales acumuladas y no racionalizadas jamás. En esto, que parece casi la voluntad de destruir, algo nihilista y misterioso, quizá donde haya que tentar una explicación no sea en el razonamiento coetáneo a los sucesos sino a la carga que lo condicionaba, es decir, en el fondo histórico de los dos países (p. 74).

Durante la guerra, el general Kundt logró reconstruir al ya golpeado ejército boliviano, pero “pasó los siguientes seis meses [de 1933] destrozándola” (Klein, 2015, p. 236).

[La] “politización” a la antigua de un militar destacado, va en detrimento de los intereses de la máquina de guerra. Cuando Bolivia enfrenta a Paraguay por la cuestión del Chaco (1932-1935), el ejército de Kundt es derrotado por los paraguayos, tal como el viejo ejército había sido vencido por Chile en el Pacífico. La derrota y la difícil amalgama entre los jóvenes oficiales formados en la escuela y los generales, veteranos y políticos, estarán por mucho tiempo en el espíritu de los militares bolivianos (Rouquié, 1984, p. 92).

Ante el desastre que resultaba la aventura en el Chaco, el ejército se había lavado las manos y había obligado a Salamanca a reconocer su responsabilidad. Solo fue con la llegada del mayor Germán Busch que el ejército retomó posiciones y estuvo en condiciones de negociar la paz, aunque para ese momento “los paraguayos capturaron más territorio del que jamás hubieran exigido en sus demandas más extremas antes de la guerra” (Klein, 2015, p. 237).

El resultado de la guerra para Bolivia fue la pérdida de la mayor parte del territorio del Chaco y la pérdida del 25% de los combatientes (Klein, 2015). La guerra que la propia Bolivia había iniciado y perdido resultó en nuevos y profundos cambios en el país.

#### *2.3.4 De la generación del Chaco y la Revolución Nacional a los gobiernos militares*

La gran derrota, física y moral, que resultó la guerra para el país, trajo consigo el surgimiento de un grupo de individuos jóvenes, que han sido llamados como la Generación del Chaco. Novelistas, políticos e intelectuales destacados, de un movimiento político de izquierda radical, fueron los principales integrantes de esta generación.

Ahora bien, decíamos que el ejército había responsabilizado a Salamanca. Al respecto, Zavaleta (2003) menciona:

El ejército a su turno responsabilizaba a Salamanca, y era ello infundado asimismo porque no se podía inculpar en globo al mismo cuyas tesis se habían aceptado de manera tan encendida. Pero lo que se produce en fin de cuentas es la desorientación del poder oligárquico que ya no retomará su coherencia; aquí es donde empieza su decadencia, que no hará sino atenuarse cada vez más y más hasta 1952. Es, por cierto, normal que un ejército salga como el amo de las situaciones después de una guerra por más que haya sido incapaz de cumplir los fines externos que se le asignaron y quizá por ello mismo. Tal es la razón por la cual lo inmediato a la guerra fue una sucesión de gobiernos militares. Pero sería de una gran superficialidad pensar en esto como una linealidad; en realidad, cada gobierno militar representó ya una cosa distinta (p. 85).

Los primeros gobiernos que siguieron a la guerra fueron el de David Toro (1936-1937) y el de el ya mencionado Germán Busch (1937-1939). Bajo sus gobiernos, los nacientes

sindicatos intentaron ser corporativizados y hubo una suerte de “socialismo militar” (Cockcroft, 2001).

Además, en la posguerra surgió un chivo expiatorio sobre lo que llevó a Bolivia al desastre: el petróleo. Antes de la guerra la Standard Oil de Nueva Jersey operaba en los primeros yacimientos bolivianos, mientras que en Paraguay operaba la Royal Dutch Shell. Ante esto, en la guerra se llegó a ver “un efecto de las contradicciones *in crescendo* entre el imperialismo inglés, ya instalado, y el ascendente imperialismo norteamericano en la región” (Zavaleta, 2003, p. 80).

Sin embargo, solo fue al final de la guerra que “el petróleo se volvió preocupación importante en los objetivos de la guerra. Pero hasta finales de 1935 la guerra se efectuó a cientos de kilómetros de los campos petroleros” (Klein, 2015, p. 229). Aun así, la instalación del discurso sobre el papel del petróleo en la guerra, que se hacía más importante cada vez, sirvió al gobierno de Toro para nacionalizar a la Standard Oil en 1937 y crear la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Por su parte, Busch, tras continuar con el socialismo militar, se suicidó en 1939, lo que “puso fin al liderazgo carismático de los oficiales de la Guerra del Chaco, al tiempo que permitió que la oligarquía terminara el experimento del radicalismo militar” (Klein, 2015, p. 253). Aunque la oligarquía tradicional intentó retomar el poder, los gobiernos militares habían cambiado las condiciones anteriores, y “la era del militar-socialismo señaló el fin del sistema político tradicional que se había creado a partir de 1880 y vio la transición de un clásico régimen republicano intraclase, de participación limitada, a uno basado en políticas de clase” (ibid., p. 254).

La década de 1940 fue de una alta violencia política. En estos años, siguieron fortaleciéndose los sectores de izquierda de la generación del Chaco: El antioligarca y multclasista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que llegó a tener un ala con vínculos con el fascismo europeo (aunque se debe contrastar que la imagen de cercanía con el fascismo fue en parte propaganda de Estados Unidos), el marxista Partido de la Izquierda

Revolucionaria (PIR) y el trotskista Partido Obrero Revolucionario (POR), encabezaron inicialmente la oposición a los partidos oligárquicos en decadencia (Klein, 2015).

Hacia 1943, un grupo de oficiales, aliados al MNR, dieron un golpe de Estado para dar paso al primer gobierno del MNR. En 1946, una alianza antifascista entre la derecha y la izquierda dio por terminado dicho gobierno, cuyo presidente Gualberto Villarroel fue linchado por una multitud (Klein, 2015 y Cockcroft, 2001).

En 1949, el MNR organizó una rebelión. Zavaleta (2003) da el carácter de guerra civil a este movimiento principalmente por la toma de las armas del proletariado minero, que se enfrentó al ejército, especialmente en Sata Cruz y Chuquisaca. Esta guerra civil, que tan solo duró dos meses, fue el preludio de lo que venía. En 1951, Paz Estenssoro, jefe del MNR, triunfó en las elecciones. El triunfo fue rechazado por el ejército, que dio un golpe de Estado.

Si la oligarquía hubiese tenido confianza en el funcionamiento de su propia democracia y, en particular, en su control sobre el ejército, le habría resultado factible entregar el poder al vencedor y, sin embargo, bloquear legalmente su programa o condicionarlo e incluso, esto es ya una pura hipótesis, apoyar al MNR en sus relaciones con los aliados peligrosos, que eran los mineros [...] Con ello se completaron las condiciones subjetivas para que, menos de un año después, existiera la insurrección de masas del 9 de abril de 1952 (Zavaleta, 2001, p. 97-98).

En efecto, en 1952 el MNR organizó una nueva rebelión, que esta vez devendría en la Revolución Nacional que derrocó completamente al ejército, armando a campesinos, mineros y sectores medios urbanos.

Aunque el periodo que va de 1936 a 1952 fue de enormes cambios en la sociedad boliviana, no existió la construcción de hegemonía. El conflicto de clases alcanzó una enorme conflictividad, mientras que la vieja clase dominante del estaño, la “rosca”, cada vez era menos capaz de controlar la situación política con el negocio del estaño en completa decadencia después de la segunda guerra mundial. Además, afirma Zavaleta (2003) que, aunque el estado oligárquico tenía una burguesía, su ideología no lo era y, “era una burguesía que no era burguesa sino en ciertos aspectos muy específicos de su acumulación” (p. 100). La Revolución, en cambio, fue un intento de establecer una hegemonía de carácter

popular, o podría decirse, una contrahegemonía desde abajo, por un lado, con la construcción de una hegemonía pequeñoburguesa desde arriba.

En el MNR de la revolución ya no había ningún rasgo con que se le pudiera vincular con el fascismo. Ahora era un partido con una alianza de clases y étnica: el campesinado indígena, el proletariado cholo-urbano y los sectores medios blancos y cholos. “Al aceptar la participación e ideología obreras, y armar a la muchedumbre, se había comprometido con la destrucción del viejo orden” (Klein, 2015, p. 270).

Aunque esta destrucción en efecto tomó lugar, el ciclo de la Revolución Nacional, como movimiento popular, terminó hacia 1956, cuando, siguiendo a Zavaleta (2003), la revolución fue conquistada por el imperialismo. En los cuatro años de revolución, aunque con las masas a la cabeza en un principio, una naciente pequeña-burguesía terminó por imponerse.

Por otro lado, entre las medidas del periodo revolucionario, se pueden contar la nacionalización de la minería y la creación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), la reforma agraria y una precaria reforma educativa. Además, hubo también la construcción de un aparato estatal-burocrático y lo que sería un caso cercano a la *vía junker* de formación de la clase capitalista (Zavaleta, 2003).

Ahora bien, existió en estos años también un co-gobierno con el movimiento obrero, plasmado en la creación de la Central Obrera Boliviana (COB). “La razón por la que la COB tomó funciones políticas, tradicionalmente reservadas a los partidos políticos de izquierda, se debió a la extrema debilidad e inexistencia de lo que se llamaba ‘vanguardia revolucionaria de los trabajadores’” (Baptista, 1996, p. 192).

Otro aspecto clave a mencionar es el papel de las fuerzas armadas. El triunfo de la revolución prácticamente desapareció al ejército. Lo sustituyeron milicias armadas de campesinos y trabajadores, las mismas que habían llevado a cabo la revolución:

La academia militar nacional se cerró temporalmente y se depuró a unos 500 oficiales de entre sus filas. Cuando se le dio al ejército la tarea de reorganizarse a sí mismo, éste quedó tan reducido en poderío y cantidad que mucha gente pensó, durante una época, que había dejado de existir. Al inicio las milicias militares civiles del MNR estaban mejor armadas que

la policía y que el ejército, y se encargaron de todas las tareas internas de las que estas dos fuerzas por lo general se ocupaban (Klein, 2015, p. 275).

Regresando al cierre del ciclo revolucionario, la “conquista del imperialismo” a la Revolución Nacional no solo se dio por el proceso de acumulación que menciona Zavaleta. En el plano internacional, estaba en desarrollo la Guerra Fría y el gobierno boliviano buscó evitar un derrocamiento por parte de Estados Unidos (Klein, 2015). De hecho, desde 1953 Bolivia buscó la ayuda financiera y la cooperación petrolera de aquel país erigido ya en hegemonía, que no estaba dispuesto a “perder el control” como en Guatemala.

Pero en 1956, fecha que Zavaleta cuadra para la entrada plena de Estados Unidos, fue cuando el gobierno boliviano aceptó los términos estadounidenses para hacer frente a una difícil situación fiscal (Klein, 2015).

El imperialismo norteamericano, que ya había obtenido un *modus vivendi* provisional con el MNR a partir de la ayuda en alimentos (lo que había influido sin lugar a dudas en la reorganización del ejército y en las primeras concesiones petrolíferas) pudo entonces imponer un plan económico global. El enviado económico de Estados Unidos, George Jackson Eder actuó con plenos poderes y sus memorias son quizá el documento más humillante que existe para la soberanía de Bolivia. Actuó como todo un enviado colonial; pero eso fue posible no sólo por las urgencias de la situación sino por la desmoralización del nacionalismo (Zavaleta, 2003, p. 112).

En 1960 sobrevino un segundo gobierno de Paz Estenssoro, el tercero de la Revolución. Su nuevo mandato difirió ampliamente del primero.

Cuando Paz Estenssoro volvió a la presidencia en 1960 no tenía ninguna intención de seguir otra vez lo que, a su modo de ver, era la fallida política económica de 1952-1956 [...] Un nuevo enfrentamiento con la izquierda obrera por cuestiones centrales de la gestión económica era casi inevitable. Puede que al principio la ayuda a las empresas públicas y la reforma agraria prometidas por la Alianza para el Progreso hicieran concebir esperanzas de que podía evitarse el conflicto [...] En 1964 (al igual que en 1946) tuvo que hacer frente a una serie de enemigos tanto de izquierda como de la derecha, unidos solamente por la decisión de destruir su poder personal (Whitehead, 2002, p. 144).

En las elecciones de 1964, Estenssoro volvió a reelegirse. El nuevo mandato profundizaba aún más los cambios de paradigmas en el MNR: esta vez ya no sería su vicepresidente Juan Lechín (líder de la COB y, por lo tanto, figura de gran relevancia en los primeros años de la Revolución), sino que se eligió a un militar: René Barrientos. El nuevo mandato ya no resistiría las oposiciones a Estenssoro, pero fue su propio vicepresidente, es decir, las fuerzas armadas, que darían un golpe de Estado.

A partir de los años sesenta se hizo obvio que la represión militar sería un componente importante de la respuesta del estado boliviano. Entre finales de los años cincuenta y principios de los sesenta, a medida que fracasaban otras estrategias de gestión, estrategias más políticas, el MNR cedió gradualmente la hegemonía política a las fuerzas armadas reorganizadas. El nombramiento del general de la fuerza aérea René Barrientos [...] representó la culminación de este proceso (Whitehead, 2002, p. 145).

Después de casi haber desaparecido, las fuerzas armadas no solo retomaban su papel político como represor del Estado, esta vez dominarían la política, en una sucesión de gobiernos militares, y también de sectores del ejército, unos inclinados a la izquierda y después más inclinados a la derecha. El gobierno de Barrientos puede considerarse como parte del segundo, no solo por la represión del nuevo régimen militar, sino también por su carácter anticomunista en clave de la guerra fría.

En ese sentido, desde 1960 Paz Estenssoro ya había vuelto a rearmar al ejército, justificando evitar una subversión comunista. Fue en su gobierno que a Estados Unidos se le permitió infiltrar al Estado Mayor boliviano y promover las ideas de subversión interna y contrainsurgencia (Klein, 2015, p. 287).

Barrientos implica el desplazamiento de los sectores que podemos llamar estatistas tanto de la burocracia civil como de la militar [...] Donde penetró primero la ideología del imperialismo y su sistema de seguridad fue en el ejército [...] Parece evidente que el proyecto norteamericano para Bolivia consistía en suprimir sus focos de independencia clasista o democracia política, como los mineros y la izquierda como tal, y construir una dictadura a la manera de los Trujillo, Somoza o Stroessner (Zavaleta, 2003, p. 120-121).

Además de lo ya explorado, durante el gobierno militar de Barrientos tuvo lugar en 1966 la guerrilla de Ñancahuasu, la célebre célula militar de Ernesto Guevara en Bolivia. Su mención va más allá de lo anecdótico, pues es bien conocido el destino que encontraría el Che en Bolivia. Lo importante a mencionar es que el combate y asesinato de Guevara por parte del ejército boliviano contó no solo con el pleno apoyo de Estados Unidos, sino con su asesoría y completo involucramiento por medio de la CIA. En otras palabras, el sujeto hegemónico ejerció su poderío plenamente sobre el país.

En 1969, Barrientos murió en un accidente aéreo. Eso no impidió la continuidad del régimen militar de corte anticomunista. Lo sucedió en el poder el general Alfredo Ovando, de su círculo cercano y que pertenecía a una tradición reformista moderada del MNR. Lo que diferenció a Ovando fue su intento por permitir a la izquierda regresar a la escena política para organizar un sistema de partidos coherente. (Klein, 2015, p. 292). De tal manera, en 1970 la cúpula de las fuerzas armadas llevó a cabo un golpe de Estado contra Ovando. En su lugar, el general Juan José Torres tomó las riendas del país.

A pesar de que desempeñó un papel activo en la campaña contra el Che y apoyó las acciones del ejército en el periodo que llevó a su toma del poder, Torres surgió como un político de izquierda idealista que quería extender la “apertura democrática” de Ovando para incluir una movilización aún más radical de trabajadores y de políticos de izquierda (Klein, 2015, p. 293).

La sucesión de estos dos gobiernos militares, con un corte popular-nacionalista, llevaron nuevamente a la reacción de los sectores de derecha de las fuerzas armadas. En 1971, el coronel Hugo Banzer derrocó a Torres, reinstalando el carácter anticomunista del gobierno militar, además de colocar al país en un eje de la Doctrina de Seguridad Nacional y también de tomar el militarismo brasileño como modelo en las fuerzas armadas.

Entre las acciones del “banzerato”, que se extendió hasta 1978, estuvo la disolución de los partidos políticos y los sindicatos, así como la represión al movimiento estudiantil, los movimientos sociales y los focos de insurrección (Cockcroft, 2001, p. 573), aunque también se le dio continuidad a la Reforma Agraria, lo que no impidió una masacre a campesinos en



1974 y una reducción de la importancia del campesinado en la escena política (Klein, 2015, p. 297).

Por otro lado, “Hugo Banzer fue el militar que expresó más nítidamente la ideología anticomunista y la defensa del sistema capitalista, de los grupos económicos y empresariales poderosos y de los intereses capitalistas” (Cajías, 2004 p. 98). De tal manera, podríamos decir que el proceso de desarrollo de una nueva burguesía, iniciada en la época de la Revolución Nacional, tiene un punto culminante en los gobiernos militares, especialmente el de Banzer, en el que va a obtener de manera más clara el papel de nueva clase dominante.

Hacia 1977 el régimen comenzó a mostrar apertura política. En 1979 se realizaron elecciones, de las que resultó ganador, por pequeño margen, Paz Estenssoro. Sin embargo, la falta de acuerdos llevó a designar a un presidente interino, Walter Guevara Arze, para reponer el proceso electoral. Sin embargo, fue derrocado por una nueva junta militar, que enfrentó una enorme oposición, por lo que le sucedió otro breve gobierno civil con la primera presidenta del país: Gueiler Tejada (Klein, 2015 y Baptista, 1996).

En 1980 tuvieron lugar nuevas elecciones, de las que resultó ganador Siles Zuazo, pero nuevamente, una junta militar impidió su toma de posesión. El general Luis García Meza estaría a la cabeza del nuevo gobierno militar y “emprendió una campaña de violencia estatal claramente inspirada en el Cono Sur [...] Esta vez se necesitaba mucha violencia para acabar con las expectativas nacidas de las elecciones [...] las fuerzas armadas tuvieron que actuar con una ferocidad desenfrenada (Whitehead, 2002, p. 162). La dictadura de García Meza, incapaz de sostener por más tiempo dicha situación, terminó en 1982, dando fin definitivo a la época de gobiernos militares. En un balance de la época:

El sector dominante tuvo en las dictaduras de Barrientos, Banzer y García Meza las condiciones más favorables para afianzar su poder económico; sus miembros obtuvieron distintas prebendas, privilegios y concesiones de parte del Estado. Aunque instigaron a la represión contra los sectores populares, no lograron evitar la resistencia social ni erigirse como una clase burguesa con legitimidad en la sociedad. Si este sector apoyó el retorno de la democracia fue porque sus representantes comprendieron que podía sacar ventajas. Fue

así que crearon nuevos partidos políticos -o sacaron de la crisis a otros- para pugnar por votos en las elecciones (Cajías, 2004, p. 99).

En un periodo de treinta años, como hemos visto, la sociedad boliviana había sufrido profundas transformaciones, lo que refleja la demora que tuvo Bolivia en el desarrollo histórico. En 1952 una oligarquía remanente del siglo XIX fue destruida por una revuelta popular, que al mismo tiempo condujo a la construcción de una débil clase dominante, que apenas en 1982 pudo pensar en tomar el poder.

### *2.3.5 La época neoliberal*

Al igual que en los países latinoamericanos que habían pasado por dictaduras militares durante las décadas de 1960 y 1970, la década de 1980 en Bolivia fue de transición a la democracia. La nueva década traía consigo también un nuevo sistema político y, sobre todo, un cambio en la ideología de la clase dominante con la aplicación del neoliberalismo.

En cuanto al sistema político y, de nueva cuenta, al igual que en varios países latinoamericanos, se abrió un periodo de alta competencia político-electoral con la creación de nuevos partidos políticos y la modificación de los actores políticos que habían sido protagonistas desde 1952 e incluso anteriormente:

Los grandes actores políticos del pasado, como los mineros y la COB, fueron debilitados y experimentaron un gran quiebre. Por su parte, los sectores campesinos e indígenas dieron sus primeros pasos hacia un mayor protagonismo político: hicieron frente a la crisis y a las medidas neoliberales de los gobiernos de turno, pero a costa de vivir una fuerte represión (Laimé, 2004, p. 168).

El partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), fundado por Banzer en 1979, el ala izquierdista del MNR, encabezada por Jaime Paz Zamora y el Partido Socialista-I de Marcelo Quiroga Santa Cruz, fueron los partidos políticos que mantuvieron una presencia dominante en el sistema político. Entre las nuevas agrupaciones, destacó el Movimiento Revolucionario Túpac Katari que indicó el surgimiento de un liderazgo indígena (Klein, 2015).

Al inicio parecía que los partidos tradicionales habían logrado aprovechar este nuevo movimiento político [el indígena] y dirigirlo desde arriba mediante líderes clásicos de la élite política, no indígenas o mestizos. Desde principios de los años ochenta surgió un complejo sistema político en el que no dominaba ningún partido [por sí solo]. En cada elección, desde 1985 y en adelante, el electorado por lo general se dividía en tres agrupamientos burdos de izquierda, centro y derecha, donde cada alineación política se componía de un grupo de partidos [...] En ninguna elección después del último régimen de [Hernán] Siles [1982-1985] el candidato presidencial obtuvo mayoría en las urnas antes de 2005 (Klein, 2015, p. 314).

La presencia política de los indígenas, como se ha visto a lo largo del presente apartado, resulta de una enorme relevancia, tanto por la composición étnica del país, que sigue siendo mayoritariamente indígena, como por lo que surgiría en el siglo XXI con la elección de Evo Morales. En estas últimas décadas del siglo XX fue cuando se comenzó a gestar el movimiento político, mayormente de composición indígena, que llevaría al poder al primer presidente indígena del país.

El katarismo fue vital para la recuperación popular del movimiento indígena campesino y para la dotación de un nuevo discurso de lucha que rompió con el reduccionismo “campesinista” que había servido de base para la instrumentalización de este movimiento. Y si bien el katarismo nunca fue un movimiento homogéneo -de su interior surgirán distintas tendencias que van desde la participación en la democracia partidaria hasta el levantamiento en armas-, lo cierto es que el presente boliviano no sería el mismo sin el influjo que tuvo este movimiento (Salazar, 2013, p. 57).

Ahora bien, conforme comenzaban a surgir nuevos liderazgos políticos, de todas las tendencias, los políticos de la era de la Revolución y de las dictaduras permanecieron en la escena política durante un buen tiempo. Tal es el caso de Paz Estenssoro, quien tuvo un nuevo mandato entre 1985 y 1989; la presencia del líder sindical Juan Lechín como una figura de importancia política; así como la elección mediante las urnas del exdictador Hugo Banzer, que volvió a gobernar entre 1997 y 2001.

Por otro lado, el regreso a la democracia traía consigo una difícil situación económica que dejaban detrás las dictaduras militares. Los primeros años de este periodo, además,

tuvieron una inestabilidad política, aunque nadie estaba dispuesto a volver a la dictadura, por lo que la democracia prosperó a pesar de ese clima de crisis del Estado (Laime, 2014).

Fue bajo el mandato de Paz Estenssoro que comenzaron a aplicarse las primeras medidas de corte neoliberal. “Con la ayuda de asesores estadounidenses, en cuestión de unos cuantos meses Paz Estenssoro llevó a cabo un clásico shock de ortodoxia económica que seguía al pie de la letra el modelo de una política económica conservadora” (Klein, 2015, p. 316). Además, la época de la dictadura había dejado un problema que en la década de 1980 se acrecentaría: el narcotráfico.

La cocaína seguía siendo la única industria que daba señales vigorosas de vida en la economía agonizante de Bolivia. El cultivo de la hoja de coca y la producción de pasta de coca representaban una cuarta parte del PNB de Bolivia. Muchos campesinos y trabajadores migrantes sin empleo, incluidos los mineros del estaño despedidos, dependían de ellos para sobrevivir (Cockcroft, 2001, p. 578).

Como en el resto de los países latinoamericanos, el neoliberalismo acrecentó la desigualdad. Además, el combate al narcotráfico, con la erradicación de los plantíos de hoja de coca y la militarización de la política antidrogas, bajo el apoyo de Estados Unidos, trajeron una represión sobre los sectores campesinos-indígenas, que a su vez dinamizaron la protesta social, especialmente hacia la década de 1990.

En el marco del desarrollo neoliberal habría de fortalecerse un nuevo sujeto rural sobre el cual aún no hemos hecho referencia: el movimiento cocalero. Si bien la historia de la formación del movimiento cocalero responde a la dinámica económica, social y política que vivió la estructuración de la república boliviana, la historia de la articulación de este movimiento a la historia de luchas indígenas campesinas [...] fue pausada y se acentuaría - hasta convertirse en una sola historia- durante el periodo neoliberal (Salazar, 2013, p. 59).

En ese marco de cosas terminaba el siglo XX boliviano. Como vemos, aunque el neoliberalismo fue un proyecto de hegemonía de clase, su implementación trajo consigo un cambio en las correlaciones de fuerza, donde los movimientos populares adquirieron un peso político importante, que finalmente cambiaría la estructura del Estado con un proyecto de hegemonía compuesto a partir de la etnicidad.

En las elecciones de 2002, resultó ganador Gonzalo Sánchez de Lozada, que ya había gobernado entre 1993 y 1997.

Empero, esta elección fue un hito fundamental en la historia política boliviana moderna. El sistema de gobierno de partidos políticos que fungía desde 1985 estaba a punto de terminar. Durante este periodo el sistema presidencial de Bolivia se había modificado de manera significativa debido a la creciente importancia del gobierno parlamentario [...] Sin embargo, los partidos que habían creado este sistema más descentralizado estaban cercanos a dejar de existir (Klein, 2015, p. 335).

La fuerte movilización política de finales de siglo XX e inicios del XXI tuvo un papel importante en la nueva crisis del sistema político. El movimiento cocalero, por su parte, daría el ascenso a un nuevo líder político: Evo Morales. En 1995 se fundó la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), que en 1997 se convirtió en el partido Movimiento al Socialismo (MAS). En 2002, Morales llegó en segundo lugar en las elecciones presidenciales. Por otro lado, dos movilizaciones hicieron tambalear al sistema político: la guerra del agua en Cochabamba (donde el movimiento cocalero tiene su base) en 2000, y la guerra del gas en 2003, que llevó a la renuncia de Sánchez de Lozada. Ambos conflictos consistieron fundamentalmente en intentos de privatizar el agua y el gas, respectivamente, lo que llevó a una fuerte protesta popular que impidió su realización, aunque con una fuerte dosis de represión.

Desde las elecciones de 2002 hasta las presidenciales de diciembre de 2005, las clases indígenas y mestizas tomaron caminos y carreteras del país durante un extraordinario periodo de movilización popular. El estallamiento de la guerra del gas en 2003 se dio tras la caída del gobierno de Sánchez de Lozada en octubre, a la que entonces siguió la tumultuosa presidencia, de un semestre, de Carlos Mesa [...] No obstante que Mesa fue capaz de parar la sangría al retirar a la policía y al ejército del enfrentamiento contra los manifestantes, no pudo terminar por completo con los bloqueos; así que se le forzó a renunciar cuando fue obvio que no podía controlar el Congreso (Klein, 2015, p. 365).

El resultado de este periodo de inestabilidad política fue la elección de Evo Morales en 2005. El ascenso del MAS al poder significó una completa ruptura con el orden establecido. Por

primera vez en la historia del país, un indígena dirigía las riendas del país. Durante los gobiernos de Morales, se creó una nueva hegemonía y la clase indígena ascendió socialmente como nuevo bloque histórico en el poder. Aunque el golpe de Estado de 2019 parecía ser una restauración conservadora de las viejas clases dominantes, la elección de Luis Arce en 2020 demostró la permanencia de los cambios en la sociedad boliviana que iniciaron en 2005.

### **3 Gobiernos de izquierda, fuerzas armadas y hegemonía**

Los gobiernos de Hugo Chávez en Venezuela, de Rafael Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia representaron procesos de cambio en una época en la que varios países de América Latina giraban a la izquierda. Estos tres países realizaron procesos constituyentes que terminaron transformando sus sistemas políticos. El papel de las fuerzas armadas, por otro lado, estuvo presente en las políticas de los tres países y las relaciones entre el poder político y el militar variaron en unos más que en otros. Finalmente, las relaciones de estos países con Estados Unidos pasaron por momentos de tensión dado el desafío que representaron para la hegemonía estadounidense.

#### **3.1 Ideología y hegemonía**

Al llegar al poder en Venezuela en 1999, Hugo Chávez y el movimiento que lo respaldaba no tenían un discurso radical. El chavismo se fue constituyendo lentamente en una agrupación de fuerzas políticas, entre las que se encontraban militares que se pueden denominar de izquierda, así como partidos de izquierda. Tuvo que pasar un golpe de Estado en 2001 y constantes intentos de la oposición por derrocar al gobierno, para que el chavismo se radicalizara, derivando en 2005 en la adopción del término Socialismo del siglo XXI.

A su vez, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, en 2006 y 2007 respectivamente, tuvieron un acercamiento a Venezuela y adoptaron igualmente el término. Debido a la importancia del movimiento indígena en estos dos países, el discurso del *Buen Vivir* (Sumak kawsay en quechua; Suma qamaña en aimara) tuvo un importante peso en la estrategia discursiva oficial. Qué tanto estos discursos se constituyen en ideología y, por lo tanto, cuáles son sus posibilidades de convertirse en sentido común y hegemonía son cuestiones que se intentan resolver en este apartado. Asimismo, se intenta dar respuesta a qué tanto esta nueva ideología, impulsada desde el gobierno, permea al resto del Estado, específicamente a las fuerzas armadas.

### 3.1.1 Venezuela: del bolivarianismo al Socialismo del siglo XXI

Antes de que Venezuela diera un giro al socialismo, el discurso del chavismo ya tenía una ideología, construida a lo largo de varios años y la cual podríamos denominar como nacionalista. Precisamente hay que tener presente el nacionalismo militar al referirnos al caso venezolano, al recordar la procedencia del propio Hugo Chávez, que en 1992, cuando su grupo realizó un intento de golpe de Estado, ostentaba el rango de Teniente-coronel en el ejército, es decir, un mando medio en la estructura militar.

De hecho, los referentes ideológicos del chavismo proceden del grupo que intentó tomar el poder en 1992, el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), el cual se había formado desde la década de 1980. El MBR-200 no fue el único grupo al interior de las fuerzas armadas de militares de izquierda, pero este fue el más relevante a partir de 1992, precisamente por el intento del golpe de Estado de ese año. Estos grupos fueron formados por oficiales jóvenes que había sido egresados del Plan Andrés Bello del ejército, el cual, según Trinkunas (2002), reforzó los sentimientos nacionalistas de los cadetes, además de desarrollar un profundo apego a la figura de Simón Bolívar.

Precisamente las referencias a El Libertador son centrales en el pensamiento del chavismo. Según Hernández (2019) la aportación más importante del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992 y del chavismo es que:

le proporcionó al movimiento popular una ideología, es decir, una concepción del mundo, o al menos, del país, de su historia y su futuro. El MBR-200 está cargado de historia, se asume como el heredero, como el portador de la estafeta que dejaron los héroes de la Independencia nacional y de las luchas populares del siglo XIX: Miranda, Bolívar y Zamora (p. 123).

Entre 1992 y 1995, durante su estancia en la cárcel después del golpe de 1992, Hugo Chávez dejó plasmada su interpretación sobre qué es el bolivarianismo en *El Libro Azul*. Aquí es precisamente donde aborda tres referencias históricas en las que se tendría que cimentar la sociedad venezolana.



Para Chávez, la ideología era necesaria para el avance del pueblo en un futuro complicado. Esa ideología debería estar basada en un modelo autóctono, cimentado en el origen histórico del ser venezolano. Chávez encuentra ese origen en el Árbol de las tres raíces, formado por Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, también llamado sistema EBR (E de Ezequiel, B de Bolívar y R de Robinson) (Romero, 2019, p. 49).

De tal manera, encuentra en Simón Rodríguez (también conocido como Samuel Robinson) la raíz *robinsoniana*, donde el proyecto de sociedad debe estar basado en la educación, en lo nuevo y lo original; en Simón Bolívar, la raíz *bolivariana*, que trasciende lo filosófico para inventar una nueva sociedad; y en Ezequiel Zamora, la raíz *zamorana*, que inventó la insurrección (véase Romero, 2019).

Tomar como bandera las ideas de Bolívar, Zamora y Rodríguez le permitía al MBR-200 no solamente independencia respecto a la izquierda venezolana, también le permitía quedar a salvo de la crisis política e ideológica que el colapso de la Unión Soviética y sus satélites de Europa del Este provocó.

Ante el desvanecimiento de los parámetros políticos mundiales, la opción fue hurgar en la propia historia. Esto va acorde con el nacionalismo propio de las Fuerzas Armadas pero también con las ideas de Simón Bolívar y Simón Rodríguez. ¿Por qué adoptar el Árbol de las tres raíces? En primer lugar *porque son nuestros*, porque son las raíces venezolanas. Los modelos del capitalismo y del socialismo parecían agotados en aquel momento y sin embargo el MBR-200 no quiere hundirse en el escepticismo posmoderno. La solución era inventar nuevos caminos (Hernández, 2019, p. 139).

La reinterpretación de la historia del país no es un hecho menor en términos ideológicos. En el caso venezolano, no se trata solamente de enaltecer un patriotismo basado en los héroes de la historia nacional. Como señala Ellner (2013),

no debería ser sorprendente, por lo tanto, que el discurso radical y los cambios dramáticos producidos con la elección de Hugo Chávez en 1998 hayan impactado el pensamiento de los venezolanos de distintas clases sociales y formaciones políticas. No solamente existe mayor interés en el estudio del pasado, sino también una tendencia a reexaminar actitudes sociales y valorizar la autonomía nacional relacionada con la política y la economía. Inclusive la oposición venezolana, que en los primeros años del gobierno de Chávez había dirigido sus

esfuerzos hacia sus seguidores de la clase media, posteriormente ha manifestado mayor sensibilidad hacia las actitudes sociales y raciales y ha priorizado la meta de penetrar a los sectores no privilegiados de la población (p. 11).

Por tal motivo, se puede afirmar que la emergencia del chavismo produjo a largo plazo un cambio ideológico en el conjunto de la sociedad venezolana, es decir, en el sentido común. Ahora bien, estos cambios ideológicos, en principio, no iban dirigidos a construir una sociedad socialista. En esencia, las primeras transformaciones que procedieron después del proceso constituyente de 1999 no eran propiamente anticapitalistas, sino más bien antineoliberales, lo que se explica en el contexto inmediatamente anterior a la llegada de Chávez a la presidencia.

El MBR-200, además, no tenía como tal un pensamiento marxista, aunque sí existió la influencia de la izquierda marxista, como es el caso de Douglas Bravo, líder guerrillero de los años sesenta y uno de los principales defensores de la idea de infiltrarse en las fuerzas armadas para llevar a cabo la revolución y quien tuvo contacto con los líderes del MBR-200 (véase Romero, 2019).

Es un hecho que Chávez y el MBR-200 fueron influidos por el pensamiento marxista por el contacto con el PRV [Partido Revolucionario Venezolano, fundado por Douglas Bravo], Causa R [La Causa Radical] y otras organizaciones, y también por la cercanía con Fidel Castro y Cuba. Sin embargo, esta apertura hacia el marxismo no es solamente una cuestión ideológica, intelectual, también es un asunto político: tener una actitud de apertura hacia el marxismo contribuía a mantener la alianza con el PVC, Causa R (y su escisión posterior, el Partido Patria Para Todos), el MIR, el MAS y el conjunto de organizaciones de izquierda. Que nunca se haya condenado al marxismo, que siempre se haya mantenido la disposición al diálogo con el marxismo y los marxistas, permitió en su momento plantearse la discusión sobre el socialismo del siglo XXI y hacerlo objetivo, al menos declarativo, del gobierno y la revolución (Hernández, 2019, p. 143).

Precisamente, en las campañas electorales de 1998 Chávez llegó a afirmar que su gobierno fomentaría la iniciativa privada e hizo un distanciamiento respecto a Cuba (véase Romero, 2019). Sin embargo, su candidatura era respaldada no solo por el partido que él mismo había fundado, el MVR (Movimiento V República, nombre adoptado más por el

impedimento legal de hacer referencia a Bolívar que por una interpretación histórica de la trayectoria republicana, véase *ibid.*), sino también por la mayoría de los partidos de izquierda, que conformaron la alianza Polo Patriótico.

Bajo dicha alianza, Chávez gobernó los primeros años de su mandato hasta 2005, cuando en el Foro Mundial Social de Porto Alegre anunció el giro hacia el socialismo del siglo XXI. Antes, en 2002 había enfrentado un golpe de Estado que lo mantuvo cautivo por 48 horas y, en 2003, un paro petrolero que buscaba su destitución. Sin duda, estos eventos tuvieron repercusiones en la búsqueda de profundizar el proceso de cambio, que finalmente llevó a dicho giro al socialismo.

Una vez más, de la misma manera que se postuló cuando el fallido golpe de Estado de 1992, durante la campaña electoral de 1998, al tomar posesión de la presidencia en 1999, y en los años de su primer mandato constitucional, la alusión a Bolívar como inspiración y guía de la revolución se mantuvo presente al momento de anunciar el socialismo del siglo XXI. La visión de Bolívar difundida por Chávez a través de su discurso es la de un Bolívar revolucionario, protector de los pobres, defensor de los oprimidos, antiimperialista, anticolonialista, antiesclavista, popular y socialista [...]

Este Primer Plan Socialista se propuso refundar la nación sobre la base de las corrientes humanistas del socialismo y la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar, para alcanzar la “suprema felicidad social” mediante la construcción de un nuevo modelo productivo socialista de clara vocación estatista, en el cual el Estado tendría bajo su cargo todas aquellas actividades consideradas de valor estratégico para el desarrollo del país (Quintero, 2018, p. 220-221).

Una de las primeras consecuencias del giro al socialismo, a nivel organizativo, fue la disolución de la mayor parte de los partidos del Polo Patriótico (a excepción de unos pocos como el PCV, que se negó a desaparecer) para conformar el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Ahora bien, la idea de Socialismo del siglo XXI no era completamente nueva. El término fue acuñado por el ruso Alexander Buzgalin. El alemán Heinz Dieterich, por su parte, hizo

referencia a un “Nuevo Proyecto Histórico” que se diferenciara del Capitalismo y del socialismo del siglo XX (véase Romero, 2019, y Doxrud, 2016).

Dieterich estuvo cerca del gobierno venezolano y del comandante Chávez, recordemos que cuando comenzaba su gobierno le concedió una larga entrevista, *El destino superior de los pueblos latinoamericano*, y ante algunas personas llegó a dar la impresión de que el académico de origen alemán era el ideólogo de la revolución bolivariana. Sin embargo, eso no era así [...] A nuestro juicio, Chávez retomó de Dieterich la expresión “socialismo del siglo XXI” pero no el contenido que este le da, lo que uno y otro entienden por socialismo es completamente distinto (Hernández, 2019, p. 263).

Por el contrario, al declarar a la revolución bolivariana como socialista, Chávez hizo un llamado a crear las bases para un nuevo socialismo, uno alejado del socialismo del siglo XX.

Chávez nos dice que debe no ser calco ni copia sino creación heroica, como planteaba Mariátegui, a quien cita explícitamente. En el fondo se trata del mismo planteamiento de Simón Rodríguez: América es original y originales han de ser sus instituciones, en este caso, original ha de ser su socialismo [...] Chávez convoca explícitamente a *inventar* el socialismo del siglo XXI (Hernández, 2019, p. 264).

En palabras del propio Chávez:

No está en nuestro proyecto el comunismo, respetamos el comunismo pero no está, ¿Dónde está? El comunismo es otra cosa. El comunismo, incluso, plantea la eliminación del Estado, el proyecto comunista, la eliminación del Estado. El proyecto nuestro es socialismo; y además socialismo con particularidades venezolanas, socialismo bolivariano, humanista, democrático (Chávez, 2014, p. 527).

Ahora bien, mencionábamos antes que el chavismo había producido un cambio ideológico en la sociedad venezolana. Sin embargo, qué tanto se avanzó en el camino al socialismo es una cuestión aparte. Si bien nominalmente Chávez proclamó el giro al socialismo y a inventarlo, aún queda pendiente la cuestión de si este socialismo bolivariano es realmente una alternativa a la hegemonía capitalista, cuestión que se ve acentuada tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. La crisis política y económica producida desde 2013 hace cuestionar el alcance de una construcción de hegemonía del chavismo que, aunque ha logrado

permanecer en el poder, su continuación se ha visto aparentemente en entredicho en varios momentos.

Como es previsible, el bonapartismo no puede prolongarse indefinidamente, o bien el proceso degenera y se abandona toda intención de superar el capitalismo, o bien se revitaliza y entra en una segunda etapa, en algo similar a una revolución dentro de la revolución, que emprenda la demolición definitiva del Estado heredado y la expropiación completa de la burguesía y los terratenientes. Si sucede lo primero, si la revolución se detiene, su ideología (el bolivarianismo y el socialismo del siglo XXI) se convertirán en falsa conciencia, en la fachada, la máscara de una sociedad capitalista con un régimen autoritario encabezado por la burocracia militar [...]

La revolución bolivariana es un proceso abierto. Toda revolución es un periodo histórico lleno de avances penosos y retrocesos devastadores, donde las transformaciones de la base económica de la sociedad son el sedimento de cruentas luchas políticas (Hernández, 2019, p. 336-337).

Cabe recordar que el chavismo solo ha sufrido dos derrotas electorales desde 1999. La primera en 2007, cuando triunfó el no al referéndum constitucional que impulsaba el gobierno de Chávez, y luego en 2016, cuando por primera vez la oposición pasó a controlar la Asamblea Nacional. Por otro lado, la oposición venezolana, agrupada desde el 2008 en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ha buscado por distintos medios la salida del chavismo del poder, siendo sus métodos más violentos el golpe de Estado de 2002 y las llamadas *guarimbas*, consistentes en el cierre de avenidas e instalación de barricadas para enfrentar a las fuerzas policiales.

Precisamente, en un clima de violencia política durante 2017, que incluyó el uso de dichas protestas violentas, se neutralizó a la Asamblea Nacional, que buscaba un proceso para la destitución de Nicolás Maduro, mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue la propuesta del Gobierno venezolano para salir de la situación de violencia callejera guerracivilista en la que la oposición sumió al país entre abril y agosto de 2017. Se trataba de iniciar un proceso de participación política para reformar la Constitución, que abriera la posibilidad de un diálogo nacional que la oposición

tuviera que asumir y, así, encauzarla hacia opciones electorales. A la vez, se trataba de neutralizar a una Asamblea Nacional opositora que se dedicaba a bloquear la acción del Ejecutivo vulnerando, en muchas ocasiones, la propia Constitución y que amenazaba con derrocar al presidente (Tirado Sánchez, 2019, p. 39).

Ahora bien, más allá de las victorias y derrotas electorales, e incluso del clima de inestabilidad política, no se puede medir la penetración del chavismo en la mentalidad venezolana con base a estos criterios. Finalmente, la profunda polarización de la sociedad venezolana es producto de una lucha de clases que se ha visto intensificada desde la muerte de Hugo Chávez.

Quizá uno de los mayores indicadores de la construcción de hegemonía, además de las fuerzas armadas, puede estar en las comunas, un modelo de autogobierno, impulsado y regulado desde el Estado, pero que busca ser la realización de la democracia participativa y protagónica que pregona el socialismo del siglo XXI y que tiene profundas implicaciones en la organización de la sociedad (véase Gabbert y Martínez 2018).

### *3.1.2 Ecuador y Bolivia: Socialismo del siglo XXI y Buen Vivir*

Tanto en términos temporales como ideológicos, los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia son más parecidos entre sí que con Venezuela, sobre todo al compartir un importante componente en sus definiciones políticas: el sector indígena, tan amplio en ambos países, que su participación es determinante en la política del presente siglo. Ambos países se acercaron inmediatamente a Venezuela tras el ascenso de los gobiernos en cuestión, lo que se dio justamente en el contexto en que Hugo Chávez llamaba a inventar el socialismo.

Por otro lado, las particularidades y trayectorias políticas de Morales y Correa marcan una distancia entre sí y, sin embargo, desembocan en el mismo contexto de transformaciones en América Latina. Mientras Morales, de origen indígena, tenía una trayectoria en la política boliviana desde la década de 1990, Correa, economista posgraduado en el extranjero, hizo su aparición en la escena nacional recién un año antes de su elección. De la misma manera,

Morales tenía un movimiento que lo respaldaba, mientras que Correa tuvo que construirlo mediante la creación de un partido político.

En Ecuador, en medio de la inestabilidad política de inicios del siglo XXI, durante la presidencia de Lucio Gutiérrez, en 2003 Correa ingresó a la política como asesor del vicepresidente Alfredo Palacio. Antes, su vida profesional había estado en el sector privado y en la academia, donde realizó trabajos de investigación (Tibocha y Jaramillo-Jassir, 2008). Tras la destitución de Gutiérrez en 2005, Palacio asumió la presidencia y Correa fue nombrado ministro de finanzas.

A pesar de su perfil académico, cuya formación culminó en la Universidad de Illinois en Estados Unidos, Correa no era el habitual tecnócrata del neoliberalismo. Por el contrario, “cuando apenas transcurrían tres meses de la administración del ex coronel Lucio Gutiérrez, Correa arremetió contra él por privilegiar el pragmatismo por encima de la ideología” (Tibocha y Jaramillo-Jassir, 2008, p. 24).

La gestión de Correa en el ministerio de finanzas apenas duró unos meses. La mayor parte de sus medidas fueron polémicas, aunque le dieron una imagen de compromiso. Además, durante su gestión se mostró su cercanía con el gobierno de Hugo Chávez (Tibocha y Jaramillo-Jassir, 2008). De tal manera, con su popularidad disparada,

figura nueva en la política ecuatoriana, logró aglutinar en torno a su candidatura una coalición de amplio espectro con predominante signo considerado de izquierda (clase media, trabajadores, ecologistas y rezagos de la militancia ya sin rumbo de los antiguos partidos marxistas), que venció en sufragio libre al acaudalado empresario Álvaro Noboa Pontón (Lara, 2010, p. 371).

El salto al socialismo del siglo XXI fue casi inmediato. El primer acto de Correa fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente, que finalmente sancionó la Constitución de 2008. De tal manera, en 2009 se realizaron nuevas elecciones en el marco de la transición a la nueva constitución. En su toma de posesión de 2009, Correa ya mencionaba el socialismo: “Una de las características más relevantes del socialismo del siglo XXI, doctrina a la que se adhiere la Revolución Ciudadana, es precisamente la supremacía del ser humano

sobre el capital” (Correa, 2009, p. 9). Más adelante hace referencia a la historia al referirse a Eloy Alfaro:

así el Viejo Luchador se convirtió en un precursor de las nobles causas de la transformación social, la hermandad latinoamericana y el socialismo, al entender que, sin justicia, lo que algunas ideologías entienden por libertad es lo más parecido a la opresión (Correa, 2009, p. 10).

Como vemos, al igual que en el caso venezolano hay un uso de la historia para construir la ideología. Sin embargo, este uso no es de la misma profundidad que Chávez. En cambio, el lenguaje de Correa suele hacer uso de elementos técnicos. Es decir, tiene más importancia el uso de la ciencia social que de la historia. En sus definiciones sobre el socialismo del siglo XXI utiliza dichos elementos académicos. Por ejemplo, al exponer su argumento central sobre la relación trabajo-capital: “La supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo fundamental del Socialismo del Siglo XXI” (Correa, 2014, citado en Paz y Cepeda, 2015, p. 3).

Son las definiciones del propio Presidente Rafael Correa las que conducen a entender que el “socialismo del siglo XXI” (al menos para Ecuador) es un sistema que combina *capitalismo social* (nivel económico) y *Estado popular o ciudadano* (nivel político); y que, por tanto, ese “socialismo” es relativamente distinto al marxista (aunque tampoco es antimarxista, puesto que reconoce y valida la teoría de Marx como fundamento histórico), pero también diferente a otros modelos de capitalismo social, como el europeo, el nórdico o el canadiense (Paz y Cepeda, 2015, p. 7).

Aquí hay una diferencia entre el socialismo ecuatoriano de Rafael Correa con el de Venezuela. Mientras que en Venezuela paulatinamente se comenzó a hablar de una superación del capitalismo (aun cuando esa meta no haya sido lograda), en Ecuador, Correa hablaba explícitamente de la permanencia de un capitalismo social: “el sindicalismo moderno debe buscar la supremacía del trabajo humano sobre el capital, sin negar la existencia y necesidad de este último, y en este contexto buscar solucionar las tensiones capital-trabajo” (Correa, 2014, citado en Paz y Cepeda, 2015, p. 4).



Ahora que hemos visto la definición de socialismo del siglo XXI en Ecuador hace falta examinar qué tanto significó una ideología con potencial de convertirse en hegemónica. Antes, veamos la trayectoria boliviana. Como hemos visto en el capítulo anterior, el movimiento de Evo Morales surgió a finales del siglo XX del movimiento de productores de hoja de coca. Mientras que Chávez provenía del estrato militar y Correa del académico, Morales del campesino y, además, con una trayectoria política creada desde el movimiento social, a diferencia de sus pares venezolano y ecuatoriano.

La única escuela del actual presidente fue el sindicalismo campesino o, más exactamente, aquel construido por los productores de la hoja de coca de la región tropical del departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia. Evo Morales conduce desde los años 90 a este sector, que hizo su primera aparición electoral en 1995, cuando consiguió 3% de los votos en el ámbito nacional y 15% en el departamental.

Recluido en esa plataforma local, con certeza hubiera pasado desapercibido de no haber contado con un antagonista tan poderoso como el gobierno de Estados Unidos. Desde 1989, Washington cambió sus prioridades bélicas. El comunismo se había desplomado y quedaba el narcotráfico como adversario alternativo [...] Evo pasó rápidamente a integrar la lista de enemigos globales de la Casa Blanca, lo que constituye una de las explicaciones básicas de su vertiginoso crecimiento como líder político (Archondo, 2007, p. 83).

Ahora bien, Morales llegó a la presidencia en 2005 bajo las siglas del partido Movimiento al Socialismo (MAS), lo que de entrada puede erróneamente interpretarse como la llegada al poder de una plataforma socialista consolidada, que a su vez daría pauta al acercamiento de Bolivia a Venezuela y al socialismo del siglo XXI.

[El MAS] no era un partido de tipo clásico sino la expresión partidaria del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) formado por el sindicalismo campesino del país, y que accede a esa sigla cedida por un partido político activo en décadas anteriores, como forma de sortear el requisito burocrático de la justicia electoral. Pero el MAS-IPSP cobraría vida propia, más allá de la sigla y también de los sindicatos del campo [...] y fueron sumando el apoyo de sectores de izquierda, indígenas y sociales, protagonistas de las movilizaciones en la política boliviana reciente (Schavelzon, 2012, p. 2).

De tal manera, la ideología del MAS no era propiamente la del socialismo. Las bases ideológicas de los cocaleros tienen raíz propia en la forma de ver el mundo de los indígenas. Por otro lado, se puede identificar en el vicepresidente de Morales, Álvaro García Linera, a uno de los principales ideólogos del actual MAS y del gobierno plurinacional. Con un perfil académico, García Linera se acercó a Morales y al MAS a principios de la década del 2000, al mismo tiempo que formaba parte de un grupo de intelectuales críticos: el grupo Comuna.

Álvaro García Linera se convirtió en importante intérprete de la realidad boliviana, además de ideólogo del Estado Plurinacional. Como ex profesor de sociología, preso cinco años sin sentencia por participar del Ejército Guerrillero Tupak Katari (EGTK), grupo armado en los años 90; gramsciano, indianista katarista y marxista bolchevique según su propia definición, algunas veces combinaba las interpretaciones políticas con interpretaciones sociológicas (Schavelzon, 2012, p. 24).

A pesar de este perfil de ideólogo, no se puede considerar que Morales y el movimiento indígena que lo respalda carezcan de una ideología propia.

Morales lo convocó en 2005 para acompañarlo en el binomio presidencial (luego de un intento de buscar un “empresario nacional”), por considerarlo un “puente” -y un traductor, como a García Linera le gusta presentarse a sí mismo- entre los campesinos indígenas, y las clases medias urbanas, reacias a votar por un campesino formado en la escuela sindical, con un bachillerato de provincia como única credencial educativa, pero más abierta a aceptar a un dirigente cocalero acompañado por “un hombre que sabe”, como rezaba uno de sus afiches de la campaña electoral de 2005 (Stefanoni, 2009, p. 10).

En tales términos, García Linera es el traductor de la ideología del MAS, el que se encarga de plasmar esa ideología en textos, conceptos y bajo términos académicos. Efectivamente, García Linera es autor de una amplia producción intelectual en la que aborda teóricamente cuestiones relacionadas al Estado, indianismo, marxismo, movimientos sociales, decolonización, entre otros. En un breve ensayo sobre el socialismo, retomando al sociólogo Nicos Poulantzas, García Linera (2015) habla sobre una vía democrática al socialismo:

Si el Estado capitalista moderno es una relación social que atraviesa a toda la sociedad y todos sus componentes -las clases sociales, las identidades colectivas, sus ideas, su historia

y sus esperanzas-, entonces el socialismo, entendido como la transformación estructural de las relaciones de fuerzas entre las clases sociales, necesariamente tiene que atravesar el propio Estado, que por otra parte no es más que la institucionalización material e ideal, económica y cultural, de esa correlación de fuerzas sociales. Y lo atraviesa justamente como la democratización sustancial de las decisiones colectivas, de la gestión de lo común, como desmonopolización creciente de la producción de los universales cohesionadores; es decir, como irrupción de la democracia en las condiciones materiales y simbólicas de la existencia social (p. 156).

Vemos entonces que para García Linera el socialismo es la realización plena de la democracia. Por otro lado, en el contexto de la discusión sobre el socialismo del siglo XXI, hay una semejanza con Correa al aceptar la imposibilidad de superar el capitalismo.

Frente a la discusión -bastante opaca- sobre el denominado socialismo del siglo XXI, promovida por el presidente venezolano Hugo Chávez, García Linera sostuvo que en Bolivia sólo puede aspirarse a la consolidación de un capitalismo andino-amazónico, como potencialidad y límite de un escenario postneoliberal.

Sin embargo, más que una “teoría”, el capitalismo andino consiste en algunas propuestas vinculadas a una articulación entre las formas modernas (capitalistas) y tradicionales de la economía (comunitario-microempresariales), con el Estado como artífice de la potenciación de estas últimas mediante la transferencia de tecnología y recursos. De esta forma, no se aspiraría a modernizar de manera homogeneizante el país (como ocurría en el antiguo desarrollismo latinoamericano), sino a imaginar una “modernización pluralista” que reconozca el *abigarramiento* boliviano (Stefanoni, 2009, p. 24).

Aquí hay una diferencia sustancial con el socialismo de Correa. Vemos en la versión de García Linera el reconocimiento de múltiples realidades en la sociedad boliviana, lo que finalmente está plasmado tanto en el proceso constituyente de 2006 como en la constitución resultante de ese proceso, al declarar a Bolivia como un Estado plurinacional. Aparece en este sentido la importancia dada al elemento indígena del gobierno del MAS.

García Linera y el propio Evo nunca fueron críticos con el componente comunitario e indianista. En ese sentido, en el terreno de las tensiones, hablarían de socialismo comunitario, de indianismo y marxismo, o de plurinacionalidad, aunque con una posición

más cercana al comunitarismo que se mezcla con la lucha sindical, más propia de la CSUTCB y los colonizadores, que de las versiones de búsqueda de reconstrucción del ayllu o de autonomía indígena (Schavelzon, 2012, p. 552).

Ciertamente, este componente tiene mayor peso en Bolivia, sobre todo tomando en cuenta el origen del movimiento cocalero y la propia etnicidad de Evo Morales. De cualquier forma, tanto en Ecuador como en Bolivia aparece un discurso de origen netamente indígena: el *buen vivir* en Ecuador, el *vivir bien* en Bolivia. Más que un complemento al socialismo del siglo XXI, el buen vivir aparece como matriz de los estados reconstituidos. De esa manera, el socialismo sería el complemento al buen vivir y a la inversa.

En palabras de Evo Morales:

El Vivir Bien es vivir en igualdad y en justicia. Donde no haya ni explotados ni explotadores, donde no haya ni excluidos ni quienes excluyan, donde no haya ni marginados ni marginadores. El Vivir Bien es vivir en comunidad, en colectividad, en reciprocidad, en solidaridad, y, especialmente, en complementariedad (Morales, 2010, p. 9)

Por su parte, Correa lo expresa de una manera similar

Es necesario que entendamos que la victoria popular no ha sido más que el primer paso de un proceso revolucionario, cuyo objetivo es la construcción de una sociedad incluyente, solidaria y equitativa. Nosotros buscamos el buen vivir, el *sumak kausay*, el desarrollo equitativo, el bienestar común, la libertad basada en la justicia y la paz (Correa, 2009, p. 6).

Ahora bien, aunque parecidos en contenido, hay claras diferencias en ambos discursos. Ambas visiones están encaminadas al respeto a la *madre tierra*, en un contexto de degradación ambiental, además de provenir de la cosmovisión indígena.

La idea de Buen vivir declarada por el Presidente de Bolivia, Evo Morales, se parece a un proyecto político de descolonización, mientras que la de Rafael Correa, Presidente de Ecuador, se asimila más y más al proyecto del socialismo del siglo XXI [...] que perpetúa el modelo de desarrollo extractivista pero reorienta los beneficios hacia políticas sociales (“progresistas”) y una mejor distribución de las riquezas (Vanhulst, 2015, p. 2)

Según Vanhulst (2015) hay tres vertientes del Buen Vivir: la propiamente indígena, noción nacida del concepto quechua Sumak Kawsay y sus análogos en Aymara (Suma Qamaña),

Guaraní (Ñandereko), Achuar (Shiir waras), Mapuche (Mongen), entre otros. En esta corriente, el Buen Vivir es un principio de vida que reúne las reivindicaciones indígenas socioambientales; la segunda vertiente es la socialista, que es la extrapolación política del concepto en Bolivia y Ecuador. Su principal hito es la centralidad del concepto en los procesos constituyentes de ambos países; la tercer vertiente es la “post-estructuralista” o académica. Esta aparece en el pensamiento crítico latinoamericano y tiene diversas expresiones en función de los autores, que van del ambientalismo a la decolonialidad y las críticas al desarrollo.

El discurso del buen vivir en los gobiernos de Ecuador y Bolivia, por otro lado, genera tensiones con el propio movimiento indígena, especialmente en relación con los modelos de desarrollo y extractivismo. Aunado a esto, diversos autores han sido críticos con estos gobiernos en lo que se ha categorizado como *neoextractivismo* (véase, por ejemplo, Machado y Zibechi, 2016).

En estas tensiones y, sobre todo en los cambios en la correlación de fuerzas que generaron o no estos gobiernos, así como en los límites de los procesos de cambio, es que aparece el problema de la hegemonía. En Ecuador, la aproximación de la Revolución Ciudadana a un modelo más clásico de desarrollo limitó en gran medida los cambios en la correlación de fuerzas y en la creación de un nuevo bloque histórico. Esto también puede explicarse por la novedad del movimiento creado por Correa y sus tensiones con el movimiento indígena que ya tenía una trayectoria de consolidación.

Alianza País, más allá de haber aprovechado el espacio de “crisis orgánica” para su emergencia política, donde logró hacer sentir identificada a la población con su proyecto político cimentado en un discurso de rechazo a los partidos tradicionales, no logró derribar el antiguo “bloque histórico” para construir hegemonía en términos de dirección política y cultural (Ponce Silva y García Macías, 2018, p 106).

Ponce Silva y García Macías (2018) dan varios elementos para explicar cómo es que Alianza País, el partido fundado por Correa como base política de la Revolución Ciudadana, no solo no logró construir hegemonía, sino que durante la gestión de Correa la hegemonía de los grupos económicos tradicionales salió fortalecida. Entre estos elementos están la herencia

de un acumulado colonial; el beneficio que tuvieron al acceder a programas como las Ferias Ciudadanas; la posición lejana de Correa a una posible reforma agraria. En suma “si alguien construyó hegemonía durante 2007-2017, fueron los grupos económicos, quienes fortalecieron el control de la cadena de producción y comercialización de bienes y servicios del mercado interno” (p. 104).

Por otro lado, la ideología del socialismo del siglo XXI no generó los cambios estructurales en la sociedad ecuatoriana necesarios para el cambio del sentido común.

En el caso de Alianza País, sus triunfos electorales responden a un orden nuevo -ya sea el generado por la Constitución de 2008-, pero no genera una construcción cultural que esté apoyada en las reivindicaciones y en las luchas de los movimientos sociales, ya que fue un partido que se creó en el mismo año de las elecciones presidenciales de 2006, y partió con un equipo técnico de intelectuales tradicionales, más no de intelectuales orgánicos (Ponce Silva y García Macías, 2018, p. 106).

Sumado a estos factores estructurales se encuentran una serie de sucesos políticos que terminaron por acabar con el proyecto de la Revolución Ciudadana. El primero tiene que ver con la reelección. Aunque en 2015 Correa impulsó un proceso de reformas constitucionales, entre las que se encontraba la reelección indefinida, su aprobación no aplicó al proceso electoral de 2017, por lo que Correa no pudo postularse una tercera vez consecutiva al cargo de presidente (sin contar el proceso electoral de 2006, anterior a la Constitución de 2008), aunque se abría la posibilidad de un tercer mandato a partir de 2021 (BBC, 2015).

En consecuencia, en Alianza País se dio una contienda interna en torno a quién sería candidato a las elecciones de 2017. La candidatura se la disputaban principalmente los que fueron vicepresidentes de Correa en sus dos periodos: Lenin Moreno y Jorge Glas. Aunque Correa se inclinaba por Glas (Ibarra, 2016), finalmente en la V Convención Nacional de Alianza País se eligió a Moreno, con Glas como vicepresidente.

Las elecciones de 2017 fueron ganadas por la fórmula Moreno-Glas en segunda vuelta. El resultado contrastaba con los triunfos electorales de Correa, que no se había tenido que presentar a una segunda vuelta, pero la victoria electoral de Alianza País demostraba que

la popularidad de la Revolución Ciudadana seguía vigente y que habría continuidad de dicho proyecto político.

Sin embargo, al poco tiempo se hizo la notoria separación entre Correa y Moreno que terminó con la destitución de Glas por Moreno, su persecución política por medios judiciales y su posterior encarcelamiento, además de un diametral cambio de rumbo en el gobierno. Igualmente, Moreno impulsó en 2018 una consulta popular que revirtió la reforma de 2015 sobre la reelección, asegurando que Correa no regresaría a la presidencia. Por último, “el gobierno generó un pacto pro-empresarial, lo que trajo consigo el ascenso al poder de figuras cercanas a sectores empresariales” (Camacho, 2022, p. 68). A esto se le agrega un acercamiento al gobierno de Estados Unidos, del que Correa se mantenía distanciado desde la salida de tropas estadounidenses de la base militar de Manta en 2009.

Finalmente, en las elecciones de 2021, tras haber enfrentado procesos judiciales y haber perdido el control de Alianza País, el correísmo se reagrupó y presentó como candidato a Andrés Arauz. Los resultados de la primera vuelta daban el triunfo al candidato de la Revolución Ciudadana frente al banquero Guillermo Lasso en su tercer intento por llegar a la presidencia. Sin embargo, se hizo ver una fuerte campaña mediática, en la que incluso la fiscalía de Colombia acusó de un supuesto financiamiento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a la campaña de Arauz, información originalmente revelada por un medio colombiano y que nunca se demostró (Europa Press, 2021 y Primicias, 2021).

Esta campaña sucia finalmente llevó a la derrota de Arauz en segunda vuelta, dando el triunfo a Lasso. Si el gobierno de Moreno, que hacia finales de su administración perdió toda legitimidad, representó la reversión de los cambios sociales hechos durante el gobierno de Correa, la llegada de Lasso representa el afianzamiento de los grupos hegemónicos ecuatorianos, al asumir el poder un representante de la burguesía guayaquileña.

Por el contrario, en el caso de Bolivia, en cambio, las transformaciones en la sociedad fueron más profundas, a tal punto que los sectores conservadores fueron incapaces de revertirlos en su mayor intento por retomar el poder por medio del golpe de Estado de 2019.

Hoy, en Bolivia, el MAS no solo es el partido político más grande de la historia (después del Movimiento Nacionalista Revolucionario -MNR- en los años 50 y 60), sino que además es la única organización con alcance nacional y una estructura medianamente sólida. [...] El MAS no es solo el partido mayoritario, sino también el partido dominante, y está en camino de convertirse en hegemónico ¿Qué implica ello? Que no solo puede reproducir su mayoría en varias ocasiones sucesivas, sino que es capaz de ordenar los paradigmas discursivos e ideológicos que organizan la política nacional (Archondo, 2007, p. 87).

Las líneas anteriores eran escritas en 2007, cuando Evo Morales apenas llevaba unos meses en el poder. La perspectiva de convertirse en hegemónico desde ese momento habla también de la oportunidad de construir un bloque histórico en la crisis orgánica que había llevado al MAS al poder. Sin lugar a duda hay una búsqueda de construcción de hegemonía y de modificar la correlación de fuerzas, en términos gramscianos y de manera explícita, como lo demuestra García Linera (2015), citado en extenso:

Desde la experiencia boliviana, ese proceso significa un despliegue simultáneo de intensas luchas sociales en cada uno de los espacios de las estructuras estatales, donde se producen profundas transformaciones en las correlaciones de fuerzas entre los sectores sociales con capacidad de decisión y en la propia composición material de esas estructuras estatales; esto es válido tanto para los sistemas de representación electoral (victorias electorales), como para la administración de los bienes comunes (políticas económicas) y para la hegemonía política (orden simbólico del mundo).

La hegemonía es la creciente irradiación de una esperanza movilizadora en torno de una manera social de administrar los bienes comunes de todos los connacionales, pero también es la modificación de los esquemas morales y lógicos con los que las personas organizan el mundo. Antonio Gramsci tiene razón cuando dice que las clases trabajadoras deben dirigir y convencer a la mayor parte de las clases sociales en torno de un proyecto revolucionario de Estado, economía y sociedad. Aunque Lenin también tiene razón cuando afirma que el proyecto dominante debe ser derrotado. Se dice que existen dos versiones respecto a la hegemonía política: la de convencer (gramsciana) y la de derrotar (leninista).

Nuestra experiencia en Bolivia nos enseña que la hegemonía es en realidad la combinación de ambas (p. 157).



La presencia de García Linera en la vicepresidencia y su demostrado conocimiento sobre Gramsci y la hegemonía pueden ser un indicador del proyecto de transformación cultural-ideológico del MAS, traducido en políticas sociales y económicas y en el esfuerzo por cohesionar a la mayor parte de la sociedad en el partido, al mismo tiempo que mantiene la superioridad electoral.

En el caso de Bolivia, más allá de la emergencia de una “burguesía aymara” y de la burocratización y la institucionalización de los grupos dirigentes de los movimientos sociales que impulsaron las luchas antineoliberales, es menos sensible el deslizamiento hacia el centro en términos de la composición política del bloque de poder. Al mismo tiempo, el tema de la reelección de Evo y un posible referéndum abren a un escenario delicado, a pesar de que no se consolidaron alternativas electorales sólidas ya que la derecha, salvo algunos resultados locales, todavía no levanta plenamente la cabeza (Modonesi, 2015, p. 27).

En cuanto a la emergencia de una burguesía aymara, Rea (2016) indica que, aunque las políticas redistributivas y el modelo económico basado en la renacionalización de empresas favorecieron la aparición de esta nueva élite indígena, en realidad este sector tiene su origen en procesos anteriores al gobierno del MAS. Además, persiste un sector dominante, ahora desplazado del control estatal, pero que mantiene su vínculo con el capital financiero transnacional.

A pesar de lo anterior, sin duda este nuevo sector representa un reacomodo en la composición de la sociedad boliviana, lo que al mismo tiempo cambia la correlación de fuerzas y favorece al nuevo bloque histórico. Por otra parte, en lo que refiere a la reelección de Evo Morales, fue precisamente el tema en el que la derecha encontró las posibilidades de retomar el poder y terminar con la hegemonía en construcción del MAS.

En 2019, con apoyo de Estados Unidos y las fuerzas armadas, amparados en un informe sobre las elecciones de 2019 elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA), la derecha dio un golpe de Estado. Con la salida del país de Morales, García Linera y varios miembros del gobierno y del MAS, parecía tener fin el proceso de cambio político iniciado en 2006. Sin embargo, luego de un año de un gobierno de facto, el MAS se reorganizó para las nuevas elecciones.

Con Evo Morales exiliado en México, el MAS presentó como candidatos a Luis Arce a la presidencia y a David Choquehuanca a la vicepresidencia, ganando por amplio margen. El triunfo contundente de Arce demostró la ilegitimidad de los argumentos que llevaron al golpe de Estado. Aún sin Evo Morales en el poder, el MAS conserva su posición como partido dominante. Aunque son crecientes las tensiones internas, la construcción de un bloque histórico retomó su camino, demostrando que los cambios iniciados en 2006 difícilmente pueden ser revertidos.

### *3.1.3 Fuerzas Armadas e ideología*

Ahora que hemos visto la ideología de los tres casos de estudio es necesario examinar la existencia de esfuerzos por irradiar esa ideología a las fuerzas armadas. El cambio de ideología en la institución militar es en gran medida necesario para la construcción de hegemonía, ya que las fuerzas armadas, más allá de su papel formal de defensa de la soberanía nacional, fungen como defensoras del orden establecido.

En Venezuela, dado el propio origen militar de Hugo Chávez, el proceso es el más completo y profundo. Aunque la constitución de 1999 introdujo cambios en la concepción de seguridad, fue tras el golpe de Estado de 2002 que tuvo el apoyo del alto mando, que inició el proceso de cambio de ideología en la institución castrense.

A nivel constitucional, el primer cambio fue de nombre, pasando de Fuerzas Armadas Nacionales a Fuerza Armada Nacional (FAN), dando un sentido de unidad en las cuatro ramas (ejército, fuerza aérea, armada y guardia nacional); Se modificó igualmente la perspectiva de seguridad nacional, introduciendo el concepto de desarrollo integral y la corresponsabilidad entre el Estado y sociedad civil; También se dio un marco legal para la participación de la FAN en tareas de desarrollo; Se introdujo el derecho al voto de los militares, aunque se mantuvo la prohibición de la militancia política de militares en activo; Se eliminó el servicio militar obligatorio ; Y por último se le dio a la FAN la competencia exclusiva de los ascensos militares, antes en poder del Senado, que también se sustituyó por un sistema unicameral (Véase Romero, 2020).

Un cambio relevante en cuanto al nombre de la institución se dio en 2008, tras la expedición de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB), que sustituyó a la ley de 2005 (Romero, 2020). Añadir el apelativo de Bolivariana a la FAN es un aspecto significativo en términos simbólicos, ya que demuestra un mayor alineamiento al proyecto político de la Revolución Bolivariana.

Por otro lado, en 2004 Chávez habló de una nueva estrategia militar nacional. Convocó de tal forma a los militares para elaborar el “Nuevo Pensamiento Militar venezolano”, que tendría que estar basado en el pensamiento de Bolívar y otros personajes históricos (Chávez, 2004). Como resultado, se creó la Doctrina Militar Bolivariana, basado en la idea de una amenaza asimétrica, identificada en Estados Unidos y que requería de un pensamiento antiimperialista y comprometido con el socialismo (Romero, 2020). Es decir, hubo una redefinición de las amenazas. Además, los militares entendieron que hacer cambios en la educación sería necesario para alinear a la FANB con el socialismo: “la educación militar es fundamental para la consolidación del recurso humano de la FANB dentro de la construcción del Socialismo del Siglo XXI” (Comandancia, s/f, p. 38).

Como consecuencia, se creó el Plan de Estudios Simón Bolívar, se integraron las academias militares y se creó la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Bolivariana (UNEFA), de carácter cívico-militar, donde se forman tanto a civiles como a militares, los primeros encaminados a integrar la Milicia Bolivariana (Romero, 2020). De hecho, este último aspecto también resulta relevante. La Milicia Nacional Bolivariana se introdujo en 2008 y está conformada por civiles, entrenados en el uso de armamento y dependiente directamente del presidente.

Por su parte, en Ecuador hubo intentos más tímidos para reestructurar a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. La diferencia más visible es que el Estado ecuatoriano no adoptó formalmente el discurso del socialismo del siglo XXI, sino que este era impulsado por Rafael Correa como presidente. En cambio, sí se adoptó el discurso del Buen Vivir. En lo que se refiere a doctrina militar, no hubo cambios notorios, pero sí se elaboró una política de defensa, expresada en la Agenda Política de la Defensa, aunque esta emanó del Ministerio

de Defensa, que en el gobierno de Correa tuvo al frente a funcionarios civiles. En dicho documento, las referencias al Buen Vivir son notorias:

La Defensa está orientada a contribuir el Buen Vivir de los ciudadanos y ciudadanas: es por esto que en el marco de este nuevo periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana y hacia el año 2017, la Defensa continuará siendo un aspecto vital del proyecto nacional del Estado ecuatoriano. La planificación estratégica de la Defensa se concibe con un enfoque integral, orientada en base a los tres ejes programáticos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: el poder popular con políticas y lineamientos estratégicos; los derechos y libertades para el Buen Vivir determinados en la Constitución; y, la transformación económica y productiva (Ministerio de Defensa Nacional, 2014 p. 37).

Vemos que el lenguaje del Ministerio está en sintonía con el discurso de Rafael Correa, aunque no se incluyen alusiones al Socialismo del siglo XXI. Por otro lado, existe una redefinición de las amenazas y del concepto de seguridad. A diferencia del caso venezolano que identifica a Estados Unidos como la principal amenaza a su existencia, en Ecuador, sin llegar a ese punto, se crítica su papel interventor y se reconoce la existencia de una hegemonía hemisférica:

Así como vimos anteriormente, varios países fueron incorporando paulatinamente Libros Blancos de la Defensa Nacional, donde se buscaba dar un giro y replanteamiento a la defensa hacia las nuevas amenazas que atenta la estabilidad institucional de los países. De esta forma esta hegemonía estadounidense fue configurando una agenda programática que consiste en tres puntos: militarización, criminalización y cooperación (Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, 2008, p. 62).

Efectivamente, tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos replanteó sus amenazas, las cuales identificó en el terrorismo y el narcotráfico. Igualmente, los *libros blancos de defensa* estuvieron ligados a la visión neoliberal. Aunque la Agenda de Defensa del gobierno de Correa es crítica con esta visión, no deja de reconocer que el tráfico de drogas y el crimen organizado son un peligro para la región. No obstante, también añade otras amenazas: la pobreza, la desigualdad, la intromisión de las empresas transnacionales y los golpes de Estado (Ministerio de Defensa Nacional, 2014, p. 21).

En el caso del concepto de seguridad, en la política de defensa se introduce la *seguridad integral*, que, aunque guarda semejanzas al concepto venezolano de defensa integral, se tratan de concepciones distintas, tratándose en el primer caso de una política acorde con el Buen Vivir y en el segundo de un marco legal de defensa de la soberanía.

Un cambio legal fundamental es el que repercute directamente al papel de las fuerzas armadas:

Este nuevo contexto, a su vez, refleja un cambio de naturaleza de las Fuerzas Armadas, las que dejan atrás el rol de garantes de la democracia para convertirse en una institución de protección de derechos, garantías y libertades de las y los ciudadanos. El sujeto de protección deja de ser únicamente el Estado y el territorio y se centra ahora en el ser humano, en relación armónica con la naturaleza y en la construcción de una cultura de paz en la sociedad (Ministerio de Defensa Nacional, 2014, p. 33).

Este cambio a nivel constitucional tiene un importante objetivo. Como garantes de la democracia, las fuerzas armadas intervinieron en la política del siglo XX y aún en el siglo XXI para deponer gobiernos. En el nuevo papel asignado, hay concordancia con el Buen Vivir y con el concepto de Socialismo del siglo XXI de Correa con el ser humano como eje, aunque no se menciona explícitamente.

Sin embargo, sin cambios internos en las fuerzas armadas solo hay un cambio en las justificaciones políticas del actuar de las fuerzas armadas. Aunque hubo cambios dentro de la estructura de las fuerzas armadas, estos no fueron propiamente de carácter ideológico, sino administrativos. Por ejemplo, el ejército describía su proceso de la siguiente manera:

La reestructuración establece fundamentalmente la necesidad de estructurar unidades militares adecuadamente entrenadas, con un equipamiento que permita la interoperabilidad con otras fuerzas, con la capacidad de cumplir diferentes tipos de misiones en el marco de la defensa nacional, la seguridad interna, apoyo al desarrollo, apoyo a la población en caso de desastres, misiones de paz y ayuda humanitaria. Paralelamente, requiere del diseño de nuevos sistemas de educación y generación de doctrina militar (Vera, 2013, p. 6).

Este proceso de reestructuración estuvo enfocado “en la actualización y promulgación de cuerpos legales y de planificación para la unificación de procesos y el empleo conjunto como

una solución óptima para el mejoramiento de la eficiencia operacional” (Ministerio de Defensa Nacional, 2017, p. 8). Vemos que, aunque hay un esfuerzo por actualizar la doctrina militar, el proceso se deja en manos de las propias fuerzas armadas, al margen del Ministerio de Defensa, que tiene una atribución administrativa sobre la institución militar, pero es el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas el que tiene el mando operativo.

En Bolivia, a diferencia de Correa, Evo Morales tuvo un acercamiento con algunos militares incluso antes de su llegada al poder. Según Molina (2018), el excapitán Juan Ramón Quintana sirvió de enlace entre los militares, el MAS y el general César López, comandante del ejército en los tiempos de la presidencia de Carlos Mesa. Una vez en la presidencia, Quintana fue nombrado ministro de la Presidencia, quien “tomó medidas en contra de las antiguas generaciones de comandantes, que habían prestado su apoyo político a los sucesivos gobiernos neoliberales” (Molina, 2018, p. 124).

Vemos de esta forma que hay facciones en las fuerzas armadas bolivianas mayormente definidas, a diferencia del caso ecuatoriano, donde pareciera que los militares conservan mayor homogeneidad (lo que no significa que no existan, como se expuso en el capítulo 2). En cuanto a ideología, hay un mayor esfuerzo por hacer cambios en la institución, aunque sin llegar a los niveles del caso venezolano, estos se pueden ver en lo simbólico.

Les dio una nueva línea ideológica a las Fuerzas Armadas, exaltando la “reserva nacionalista” a la que hacía referencia Quintana. Incluso morigeró el rechazo militar a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que, dirigidos por Ernesto “Che” Guevara, “invadieron” el país a fines de la década de 1960 (Molina, 2018, p. 124).

Esto es significativo, no solo por el hecho de que las fuerzas armadas bolivianas han exaltado la muerte de Guevara en territorio boliviano, sino también porque ese discurso representa el gran alineamiento a Estados Unidos de la institución castrense boliviana. Otros rasgos de este simbolismo que menciona Molina (2018) es la adopción de la Wiphala (la bandera representativa de los pueblos indígenas) en los uniformes; el cambio de lema “Subordinación y constancia. ¡Viva Bolivia!, por “Patria o muerte. ¡Venceremos!”; la creación de la Escuela Antiimperialista como contrarréplica de la Escuela de las Américas;

así como la creación del himno “Marcha Evo Morales”, que se debería entonar al finalizar actos cívico militares.

Estos cambios ideológicos pueden verse también en los documentos institucionales de los ministerios. Por ejemplo, en los *Lineamientos Metodológicos para la formulación de los Planes Estratégicos Institucionales de las FF.AA.*, se menciona directamente el Vivir Bien y el Socialismo, lo que contrasta con el caso ecuatoriano y es significativo al ser un documento que influye directamente en las fuerzas armadas:

El Vivir Bien significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y la sociedad, en equidad y solidaridad, eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. El Vivir Bien se constituye en un modelo alternativo al capitalismo y a la modernidad en el marco del Socialismo Comunitario del Vivir Bien (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2016p. 9).

Igualmente, en los planes estratégicos del Ministerio de Defensa se puede notar el uso de este lenguaje:

Una vez iniciado el proceso de transformación de las estructuras institucionales del Estado y de la sociedad boliviana culminando en la refundación del país y en el nacimiento del Estado Plurinacional se pudo sentar las bases de la Revolución Democrática y Cultural, que permitió consolidar y profundizar los postulados de la nueva Constitución Política para el logro del Vivir Bien sobre la base de un nuevo modelo económico social comunitario (Ministerio de Defensa, 2016, p. 2).

Además, hubo un esfuerzo por actualizar la doctrina militar, plasmado en el documento *Bases para la Discusión de la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia*, publicado en 2010 por el Ministerio de Defensa. Entre varios aspectos que presenta el documento, se muestra la estructura del Estado, del Ministerio y de las fuerzas armadas; se describe lo que se entiende como “Doctrina del Estado Plurinacional”, en donde se explican los conceptos de Estado Plurinacional, Whiplala, Vivir Bien, entre otros; se presentan los fundamentos de lo que deberá ser la política de defensa; se explican cómo debe ser la relación entre la sociedad y las fuerzas armadas y se introducen los conceptos de seguridad integral y defensa integral.

Sobre este último punto, recordemos que en Ecuador la política de defensa del periodo de la Revolución Ciudadana introdujo el concepto de seguridad integral y en el caso venezolano el de defensa y desarrollo integral. A diferencia del caso ecuatoriano, en Bolivia la seguridad integral tiene un enfoque más amplio, pero también en concordancia con las políticas del Vivir Bien.

Ahora bien, a pesar de estos esfuerzos, los límites a los cambios ideológicos de las fuerzas armadas se pudieron constatar durante el golpe de Estado de 2019, cuando el alto mando militar apoyó expresamente al grupo que tomó el poder. En lo simbólico y en una acción significativa se clausuró la Escuela de Comando Antiimperialista y se sustituyó como “Héroes de Ñancahuazu” en referencia a los militares que acabaron con la vida de Ernesto Guevara en 1967 (Hernández, 2020 y Muñoz, 2020). En el mismo sentido, en octubre de 2020 la presidenta de facto realizó un acto de “desagravio” ante las fuerzas armadas donde se homenajeó a los mismos militares de Ñancahuazu (Molina, 2020).

En suma, el caso boliviano muestra un esfuerzo por modificar la ideología de los militares, al mismo tiempo que hubo un proyecto de construcción de hegemonía desde la llegada al poder de Evo Morales. Sin embargo, las propias resistencias de lo que podríamos denominar viejo régimen, aún presente en el estamento militar, representan límites en dicho proceso.

### **3.2 Fuerzas Armadas y gobiernos de izquierda**

En el apartado anterior se abordó la ideología de los gobiernos de izquierda de los casos estudiados. Igualmente quedaron explicados los esfuerzos por modificar la ideología de los militares, siendo el caso venezolano el más completo en ese aspecto y el ecuatoriano el más incompleto, con Bolivia en un puesto intermedio. Toca ahora revisar las relaciones entre las fuerzas armadas y el gobierno, tanto en sus funciones legales y constitucionales como en aquellas que los gobiernos les asignan, como puede ser el uso de las tropas en lo que se denominan tareas de desarrollo o en la seguridad pública o interna. Además, se revisará lo correspondiente a las bases materiales, como puede ser compras de armas y modificaciones en el presupuesto militar.



### 3.2.1 Relaciones entre las Fuerzas Armadas y el poder político

Como ya se había mencionado, en Venezuela hay una reorganización de la Fuerza Armada acelerada después del golpe de Estado de 2002. En la Constitución de 1999, se define a la Fuerza Armada Nacional como:

[Una] institución profesional, sin militancia política alguna, subordinada a la autoridad civil, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional (Asamblea Nacional, 2009, p. 13).

De estas funciones constitucionales, se añaden las contenidas en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN), la cual ha tenido cambios desde su primera versión de 2005, pasando por la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (LOFANB) de 2008 y la LOFANB de 2014. La LOFAN de 2005 determina diez funciones para la FAN, mientras que en la de 2008 aumentan a veinte (véase Romero, 2020) y en la de 2014 se incrementan a veintidós (Maduro, 2014).

Estos cambios legales son indicio de la evolución de la situación política venezolana desde 1999. En la primera ley tenemos como antecedente el mencionado golpe de Estado de 2002. En 2008 el antecedente es la adopción del Socialismo del siglo XXI, mientras que en 2014 precede la muerte de Hugo Chávez y la sucesiva conflictividad y violencia política. Igualmente, estos cambios expresan la profundización del apego de la FANB al proyecto de la Revolución Bolivariana.

Esta creciente lealtad al chavismo ha tenido una evolución desde la creación del MBR-200. Recordemos que el grupo del ejército del que surgió el liderazgo de Hugo Chávez no representaba en un inicio al conjunto de las fuerzas armadas. Un primer paso fue la modificación constitucional en la que los militares participan en el *desarrollo nacional*. A partir de 1999, Chávez recurrió a esa función de forma activa, partiendo con el Plan Bolívar 2000 que contemplaba una serie de programas sociales llamados “misiones”.

Este uso de la FAN en la política social del Estado tiene su fundamento en lo que Chávez tempranamente llamó “unidad cívico-militar”. Esta alianza comenzó a manifestarse en el mencionado programa de “misiones”. De esa forma, los militares comenzaron a relacionarse activamente con los sectores civiles, por ejemplo, en programas de construcción de viviendas. Los propios militares indican que en estos programas buscaban integrar a las comunidades con las diversas labores que se hacían (véase Harnecker 2003).

Un primer límite a la transformación de la Fuerza Armada fue la intentona golpista de 2002, cuando el alto mando militar ordenó el arresto de Chávez. Después de casi 48 horas fuera del poder, mandos medios del ejército lograron sacar a los golpistas del Palacio de Miraflores y restituyeron la autoridad del presidente depuesto, esto con el apoyo de la protesta popular (Harnecker, 2003).

Por otro lado, desde el primer gobierno de Chávez, enfatizando su origen militar, designó a militares retirados y en activo como funcionarios en diversas áreas. Este proceso se intensificó a partir del paro petrolero de 2003, ocupando los puestos de los trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en huelga (véase Romero, 2020).

Ahora bien, esta cercanía entre el gobierno y la Fuerza Armada ha sido objeto de debate, sobre todo por las repercusiones que esto pudiera tener en el control civil de la institución armada y en una posible militarización. Por ejemplo, Irwin y Micett (2008) argumentan que el gobierno venezolano es un caso de *pretorianismo* y gobierno militar indirecto. Por su parte, Jácome (2011) sostiene que se debilitó el control y supervisión civil, dando a los militares mayor independencia.

Por su parte, Battoglini (2015) afirma que las condiciones en las que se encontraban las fuerzas armadas en Venezuela al inicio del gobierno de Chávez son claves para entender el problema del control civil.

El reducido poder de las fuerzas armadas venezolanas al comienzo del mandato de Chávez, debido principalmente a sus divisiones internas y a su escasa legitimidad social, ha favorecido un elevado nivel de intervención política en los asuntos militares [...] Cabe mencionar que la intervención de Chávez ha borrado cualquier rastro de autonomía militar

en las áreas de educación, misiones, compra de armas, capacitación y doctrina (Battogolino, 2015, p. 22).

Vemos entonces que no solo no hay una pérdida de control, por el contrario, el aumento del control civil ha permitido darle a la fuerza armada mayor homogeneidad en sus componentes, borrando dichas divisiones internas, al mismo tiempo que el poder de la FANB se ha incrementado al ser parte esencial del proyecto de la Revolución Bolivariana. Este proceso consiste tanto en la transformación ideológica de la institución como en la expulsión de oficiales contrarios al gobierno. Este último punto tuvo su inicio tras el golpe de Estado de 2002, tras iniciarse procesos judiciales a los militares golpistas.

Según Trinkunas (2009) tras la expulsión de los militares que apoyaron el golpe de Estado la Fuerza Armada se dividió en una facción revolucionaria politizada y en aquellos con una visión “apolítica” de la institución. Aunque se pueda discutir dicha apoliticidad, es cierto que, a partir de entonces, en cada intento de la oposición por derrocar al gobierno, sea por medios legales o ilegales, el gobierno venezolano ha logrado homogeneizar aún más la institución armada, expulsando a aquellos miembros que han cooperado con dichos intentos.

Ahora bien, mencionábamos antes la idea de unión cívico-militar. Esta va más allá de cumplir los objetivos de desarrollo que el gobierno chavista se plantea. En última instancia, se trata de construir un pacto entre el poder político, la sociedad civil y el poder militar para la defensa del proyecto de transformación y construcción de un bloque histórico. El propio Chávez lo expresa de la siguiente manera:

Para llegar al 2012 [año de elecciones presidenciales] hay que caminar todos estos días, mejorar, las tres R al cuadro, revisar errores, fortalecernos, los gobiernos locales desde el Poder Popular, las Alcaldías, las gobernaciones, los ministerios, el gobierno nacional, la Fuerza Armada, la integración de todo, el gran Polo Patriótico, la unidad nacional. Y un movimiento así es invencible. La unidad cívico militar por si se les ocurre inventar que si un golpe. Porque miren, para dar un golpe no hace falta tener una gran fuerza militar, vean lo que pasó en Ecuador, casi matan a Correa, y era un grupito (Chávez, 2013, p. 92).

En suma, la FANB adquiere un papel protagónico en el proyecto de la Revolución Bolivariana. Esto se expresa tanto en sus funciones en la sociedad como en la defensa del proyecto político. Es significativo que, en vísperas de su muerte, Hugo Chávez llamara a votar por Nicolás Maduro, de origen obrero y no un militar en caso de que falleciera. Lo que podría ser una contención de los militares se expresa igualmente en la creación de la Milicia Bolivariana.

La Milicia Bolivariana y la Guardia Territorial, bajo el Comando General de la Milicia Bolivariana. Ambas instituciones quedan separadas del mando regular y dispuestas bajo el mando directo del Presidente. Esto permitía, además, contar con un contrapeso a las FF.AA. formales y reducía la importancia de la Reserva Nacional. Que por el contrario era entrenada y comandada por las fuerzas tradicionales como el Ejército (Garay Vega, 2015, p. 246).

Como ya se había explicado, la Milicia se creó en la LOFANB de 2008 y está integrada por civiles. A diferencia de una reserva militar tradicional, la Milicia Bolivariana ha sido muy activa desde su creación y va más allá de un servicio militar. Además, su creación corresponde a la elaboración del Pensamiento Militar Bolivariano y a una visión de guerra asimétrica y lo que la nueva doctrina bolivariana denomina Guerra Popular de Resistencia, consistente en la movilización y preparación del pueblo para la resistencia en caso de una intervención o derrocamiento del gobierno (véase Romero, 2020 y Quintero, 2013).

Cabe destacar que, desde la muerte de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro al poder, la lealtad de la FANB se ha mantenido y los escasos llamados a una sublevación desde el interior de la institución, en medio de una crisis política, no han rendido frutos. Además, el alto mando militar se ha mantenido estable en todo el gobierno de Maduro, con el general Vladimir Padrino López a la cabeza del ministerio de defensa.

En Ecuador, las relaciones entre el gobierno de Rafael Correa y las Fuerzas Armadas Ecuatorianas fueron complejas y atravesaron momentos de tensión. Uno de ellos fue en 2008, cuando el alto mando militar renunció, tras declaraciones de Correa sobre la influencia de Estados Unidos en los aparatos de inteligencia ecuatorianos y en medio de la crisis entre Ecuador y Colombia tras la incursión de tropas colombianas a territorio ecuatoriano (conocida como crisis de Angostura) (Reuters, 2008).

Cabe señalar que la crisis de Angostura fue un hito de los cambios geopolíticos que vivía la región. Venezuela y Nicaragua intervinieron en la crisis diplomática y en la reunión del Grupo de Río de 2008 es representativa la discusión entre Correa y el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, donde entre reclamos y acusaciones mutuas se hacían notar los cambios y diferencias en las concepciones de seguridad y defensa, así como el papel del conflicto colombiano en Ecuador y Venezuela.

La crisis diplomática, por otro lado, dejó al descubierto carencias en la defensa ecuatoriana “pues la institución militar ecuatoriana conoció del incidente por la versión de Colombia y no por una alerta oportuna de sus dispositivos de protección fronteriza” (Ordoñez, 2016, p. 44). De esta manera, una de las consecuencias fue el intento por desmilitarizar la seguridad interna, lo que incluía cambios en los organismos de inteligencia (ibid.), lo que finalmente llevó al primer roce antes mencionado.

Otro momento de relevancia y quizá el más importante ocurrió en 2010, cuando un grupo de la Policía Nacional retuvo al presidente Correa en un hospital en demanda de incrementos salariales. Los hechos fueron calificados por el gobierno como un intento de golpe de Estado. En esa ocasión, las fuerzas armadas se apegaron al orden constitucional, confirmando su lealtad al presidente y rescatándolo del edificio donde se encontraba retenido.

La relación de Rafael Correa con los militares atravesó dos etapas principales. La primera de ellas se extendió desde comienzos de su mandato hasta la rebelión policial de 2010. Este periodo estuvo caracterizado por el intento de su gobierno de limitar la presencia de los militares en empresas estatales no vinculadas con el área de la defensa y por la tentativa de fortalecer al Ministerio de Defensa y reducir la expansión de roles. Cabe destacar que la reforma constitucional de 2009 establecía que los militares sólo podrían mantener empresas relacionadas con el área de la defensa, el resto sería objeto de un proceso de desinversión. Una segunda etapa comienza luego de 2010 y se caracteriza por una pérdida de impulso de la política de control civil y del proceso de desinversión previsto en la reforma constitucional (Battaglino, 2015, p. 26).

La lealtad al presidente Correa, demostró ser frágil hacia finales de su administración. En 2016, el alto mando militar se pronunció sobre un forcejeo por la compra de un terreno por parte del sistema de pensiones de las fuerzas armadas, a lo que Correa respondió nombrando a un nuevo mando. Incluso en la Armada se desconoció la autoridad militar del presidente para sancionar a un oficial de rango medio (Constante, 2016).

Aunque el gobierno de la Revolución Ciudadana dio ciertas concesiones a las fuerzas armadas, estos casos muestran que no existió una relación cercana con los militares. De hecho, la política en el sector defensa representó un rompimiento con el pasado inmediato de Ecuador y de la propia institución armada. Como describe Pérez (2018), desde 1987 el ministerio de defensa era ocupado por un general en servicio pasivo, lo que era un acuerdo no escrito y respetado por los actores políticos.

Desde el inicio del gobierno de Rafael Correa esta posición la mantuvieron civiles, con un elevado perfil político y mucha cercanía al presidente. Ello garantizó una línea directa de comunicación y mando entre este y la institución que, tradicionalmente, había mantenido una dosis de independencia decisional [...] Los resultados de este periodo supusieron una importante tensión que se mantuvo hasta abril de 2018 (Pérez, 2018, p. 117).

La titularidad del ministerio de defensa por parte de un civil, de hecho, está en concordancia con los modelos liberales de control civil y relaciones civiles-militares. Sin embargo, en Ecuador, este cambio representó efectivamente una tensión con los militares y cierto grado de desconfianza del gobierno respecto a las fuerzas armadas.

Por otro lado, esto no significó que se haya relegado a las fuerzas armadas del proyecto político de la Revolución Ciudadana. Durante el gobierno de Correa las funciones de los militares cambiaron, especialmente en lo relativo al uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna y como ya se había mencionado antes, en su función constitucional de garantes de la democracia a protectores de los derechos humanos.

En el fondo lo que estaba en juego era el control del monopolio de la violencia física legítima, el paso desde el funcionamiento autónomo de las Fuerzas Armadas hasta la subordinación del poder del régimen: eliminar su capacidad de actuar como decisores de última instancia en los momentos de crisis política. Después del 30S [2010] se abren las condiciones para los

cambios modernizadores. La desarticulación de las formas tradicionales coloca a la Fuerza Pública en la dinámica de los nuevos tiempos del poder (Saltos, 2017, p. 68).

Ahora bien, como señala Ordoñez (2016), el fortalecimiento de la seguridad interna mediante el uso del aparato militar no era algo nuevo, pero a partir de 2010 “comenzó a ser institucionalizado con una serie de reformas legales, entre las que destaca la reforma a la Ley de Seguridad Pública y del Estado en 2010, el Plan de Seguridad Integral, la Agenda Política de la Defensa, y las enmiendas constitucionales de 2015” (p. 49).

El primer paso fue la eliminación de la diferencia y la homogeneización moderna de militares y policías como servidores públicos. El reclamo policial y militar partió de la defensa de “conquistas” desde la modalidad de la soberanía y el funcionamiento de derechos diferenciados (Saltos, 2017, p. 67).

Un aspecto más a señalar de la relación entre el gobierno de Correa y las fuerzas armadas fue el mantenimiento de los militares como actores económicos fundamentales, situación creada en el siglo XX y que siguió siendo ejercida por los militares, a pesar del intento por contener esta función económica al inicio de la administración (Battaglino, 2015).

Un último momento de tensión ocurrió en 2017, cuando el comandante del Ejército puso en duda la cadena de custodia de las urnas en las elecciones de 2017 y Correa respondiera asegurando que no se podía volver al pasado con los generales como árbitros electorales. Según Pérez (2018), dicha respuesta representaba “una visión simplista y maniquea de la relación civil-militar del Ecuador, en la que los últimos procuran tomarse el poder apenas surge la oportunidad” (p. 126). El autor argumenta que se deja de lado las explicaciones del funcionamiento del sistema político.

Sin embargo, en contrapartida se podría decir que esta explicación deja de lado la historia militar del Ecuador, donde efectivamente los militares han sido árbitros del sistema político, siendo su última actuación de este tipo la de 2005. Las declaraciones de un general poniendo en duda el proceso electoral eran por demás peligrosas, y dan cuenta de que los militares no tuvieron un rompimiento con el pasado.

Aunque el gobierno de Lenin Moreno no realizó cambios relevantes en el marco normativo elaborado desde 2008, sí volvió a nombrar a un general retirado en el Ministerio de la Defensa (Pérez, 2018). No solo eso, en 2019, después de un paro nacional contra el gobierno de Moreno, este nombró a un nuevo Alto Mando con el general Luis Lara Jaramillo, el mismo que había sido destituido por Correa en 2016 (Fiallo, 2019).

Vemos que los cambios vacilantes hechos por la Revolución Ciudadana, más la autonomía y cohesión ideológica y política de las fuerzas armadas, produjeron una relación de tensión durante los diez años del gobierno de Correa. Hacia el final de su gobierno, se hacía evidente que las fuerzas armadas aún pueden jugar un papel político de relevancia. La elección de Lenin Moreno y su alejamiento del proyecto de la Revolución Ciudadana finalmente demuestran el alineamiento de las fuerzas armadas al viejo régimen.

En Bolivia, en cambio, la relación entre el gobierno de Evo Morales y las fuerzas armadas fue mucho más estrecha y sin grandes momentos de tensión. En cuanto a la formación de un bloque histórico, el gobierno del MAS, al igual que el venezolano, entendió que la necesidad de transformar las fuerzas armadas iba en función de la permanencia del proyecto político. Según Rocabado (2018), el poder emergente tras la refundación del Estado fue una trilogía consistente en los movimientos sociales, los sindicatos y las fuerzas armadas.

Más allá de ser un actor institucional que controla el monopolio de la fuerza, el rol que jugaron las FF.AA. fue importante, no solo para afianzar la estabilidad política de largo plazo -algo relativamente inédito en la historia contemporánea boliviana- sino que también pasó a ser un actor influyente en el sistema político e institucional boliviano. Asimismo, la relación directa entre el presidente Morales y las FF.AA. fue una relación primordial, dado que le dio seguridad y estabilidad a la gestión de gobierno. A cambio, el presidente Morales respaldó importantes iniciativas de apoyo y fortalecimiento institucional de las FF.AA., y les concedió amplio apoyo logístico (Rocabado, 2018, p. 140-141).

Vemos de tal manera que, a diferencia del caso ecuatoriano, el gobierno de Evo Morales hizo mayores concesiones al poder político de las fuerzas armadas. Por otro lado, el campo que encontró también posibilitó las transformaciones en las fuerzas armadas. Como ya se



había mencionado en el apartado anterior, desde tempranamente Morales se había relacionado con un sector militar que finalmente le ayudó a realizar dichos cambios. Uno de ellos fue el retiro anticipado de 28 generales, medida estratégica que aseguraba la subordinación y obediencia de los militares (Rocabado, 2018), y que además fortalecía al sector de la institución que apoyaba al gobierno.

Una declaración significativa de Evo Morales, al inicio de su gobierno, fue que las fuerzas armadas debían contribuir al desarrollo nacional y dejar de ser guardianes del imperialismo (Battaglino, 2015). Esta declaración daba luces de la importancia que tenía para el proyecto del MAS mantener la estabilidad política con el apoyo de las fuerzas armadas, para lo cual era necesario mantener su lealtad al gobierno. Además, la cercanía del gobierno con las fuerzas armadas no solo es clave para el proyecto político, también para las propias fuerzas armadas:

Las relaciones entre las instituciones del país y el gobierno son ahora más estrechas que en ningún otro momento de la historia de la democracia nacional. [Morales] se ha convertido en el presidente democrático más querido y respetado por las Fuerzas Armadas (Molina, 2018, p. 129).

De manera similar al caso venezolano con las misiones, los primeros usos del gobierno de las fuerzas armadas por parte del gobierno del MAS fue su participación en programas de desarrollo, como la atención médica, la construcción de infraestructura, tareas de alfabetización y distribución de alimentos (Battaglino, 2018 y Rocabado, 2018).

Igualmente, la institución armada adquirió un importante papel de agente económico con la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA). Al respecto, en 2016 Evo Morales declaró que las empresas del Estado debían estar a cargo de las fuerzas armadas (Rocabado, 2018). Con la COFADENA, los militares impulsaron empresas productivas, no sólo del ámbito de la defensa, como la Empresa Nacional Automotriz o la Química Básica Boliviana para la extracción de litio (Battaglino, 2018), esta última de especial relevancia geopolítica.

Otro ámbito en el que se ha hecho uso de las fuerzas armadas es en el del orden interno. En el caso boliviano esta participación de las fuerzas armadas se da en el marco del enfoque de seguridad ciudadana, que va más allá del uso de los cuerpos de seguridad del Estado y pretende ser una política pública integral.

Rocabado (2012) señala que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana se da principalmente mediante la vigilancia y el patrullaje, además de existir una “policialización” de las Fuerzas Armadas, que conlleva “una aceptación tácita a la presencia recurrente de fuerzas militares en tareas de seguridad” (p. 28). Simultáneamente, hay una militarización de la policía “que supone un potenciamiento de su capacidad represiva” (ídem).

Cabe destacar que inicialmente, el gobierno de Morales trató de excluir a las fuerzas armadas de la política antidrogas (Vargas, 2008). Esta política iba acorde con la decisión de expulsar a la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en 2008. Sin embargo, Rocabado (2012) señala que uno de los ámbitos de actuación de los militares es precisamente la lucha contra el narcotráfico, aunque ciertamente hay una prioridad por la policía en este aspecto.

Un rasgo interesante que señalar es que, a pesar de los cambios en las funciones de las fuerzas armadas, e incluso de la transformación ideológica descrita en el apartado anterior, el marco jurídico de la institución militar no ha variado desde la aprobación de la Constitución de 2008. Actualmente, aún sigue vigente la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación de 1992, aunque en 2018, antes del golpe de Estado, permanecía en proyecto una nueva Ley Orgánica, coordinada con el alto mando (Rocabado, 2018).

Ahora bien, el hecho de que el gobierno de Evo Morales haya mantenido una buena relación con los militares en busca de una transformación de la institución no significa que este proceso hubiera sido completamente armónico y sin momentos de tensión. Uno de ellos fue precisamente relativo a la vigencia de la vieja Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas:

El cuestionamiento más grave a la búsqueda transformación de las Fuerzas Armadas provino de su interior. El 3 de abril de 2014, los suboficiales y sargentos, organizados de una manera

cuasisindical, propusieron a la Asamblea Legislativa una ley modificatoria de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas con una serie de medidas para superar la “discriminación” que, se alegaba, afectaba a este personal militar [...]

Fueron tres semanas de manifestaciones callejeras de los suboficiales y sargentos y de huelga de hambre de sus esposas [...] Finalmente, el Alto Mando cortó de un tajo un movimiento que calificaba como motín: dio de baja a 715 uniformados, de los cuales 639 fueron reincorporados ulteriormente; arrestó y expulsó a los cabecillas de la protesta [...] El gobierno evitó que la represión fuera extremada, pero no la detuvo. De este modo, los “Mamani, Condori o Aima” en filas de los que hablaba Evo al inicio de su gestión, los indígenas de este “ejército popular” que hasta ahora no ha logrado tener jefes con apellidos claramente indígenas, perdieron la batalla por “descolonizar” las Fuerzas Armadas (Molina, 2018, p. 127).

Se demostraba de tal manera la subsistencia de un generalato que, aunque dispuesto a cooperar con un gobierno que pretende realizar un proceso de cambio político, incluida la propia institución, pugna por mantener su autonomía tradicional del viejo régimen. Además, estaba de por medio el cuestionamiento a las jerarquías, lo que en cualquier cultura militar es inaceptable.

En contrapartida, el gobierno del MAS encontró apoyo en los militares durante el motín policial de 2012, cuando policías de bajo rango exigían aumentos de salario y llevaron a cabo protestas violentas como saqueos de oficinas. “Frente a este vacío de seguridad y ante el peligro de un agravamiento de los delitos y crímenes, el ministerio de Defensa instruyó el despliegue de más efectivos militares para evitar hechos violentos” (Rocabado, 2012, p. 35).

Para Battaglini (2015) el caso boliviano es un caso de relaciones político-militares donde el nivel de expansión de las misiones militares es alto, mientras que el control civil es por contención, es decir, se limitan las medidas de control. Esto es una posible explicación al retiro del apoyo de las fuerzas armadas en 2019, cuando la renuncia de Evo Morales fue antecedida por las declaraciones del alto mando en las que se le recomendaba renunciar.

En suma, aunque tenemos un esfuerzo por alinear a las fuerzas armadas al proyecto político del MAS, finalmente las continuidades del viejo régimen dentro de la institución castrense

cedieron ante una crisis política que llevó a la salida precipitada del poder de Evo Morales. Ahora bien, tras el regreso del MAS al poder en 2020 queda en cuestión cómo evolucionarán las relaciones entre el gobierno y los militares, dado que su actuación un año antes dañó por completo la relación que se había construido como parte de la formación de un bloque histórico.

### 3.2.2 *Bases Materiales*

Un indicador de la importancia que se les da a las fuerzas armadas, así como en el desarrollo de las relaciones político-militares, es el presupuesto de defensa. Altos presupuestos pueden indicar un mayor protagonismo de los militares en la sociedad. De igual forma se puede hablar del tamaño de la institución en términos de número de efectivos. Por último, también es importante revisar las compras de armas, pues estas pueden hablar de las coyunturas geopolíticas regionales e internacionales y cómo los gobiernos en cuestión actúan frente a esos momentos, así como a los proyectos de modernización de las fuerzas armadas.

En el caso venezolano, debido a la constante conflictividad política, así como a la situación económica adversa, que implica también la más elevada tasa de inflación en los últimos años, resulta problemático abordar el tema del presupuesto. De acuerdo con datos del *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)* (2022), el gasto militar en Venezuela entre 1999 y 2019, ha variado entre el 0.2 al 2.2 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, siendo el 2017 el más alto y el 2018 y 2019 los más bajos.

En la siguiente tabla se puede observar el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa, (desde 2007 Ministerio del Poder Popular para la Defensa) de acuerdo con las leyes de presupuesto anuales.

Presupuesto militar Venezuela 2000-2017

	Presupuesto de gastos nacional total en Bolívars	Presupuesto Ministerio de Defensa	%	Fuente (núm. Gaceta Oficial extraordinaria)
2000	948.600.300.000	17,878,137,200,000	5.3	5.420
2001	1.399.029.000.000	23.214.303.000.000	6.0	5.505
2002	1.326.090.700.000	26.443.129.300.000	5.0	5.562
2003	1.811.983.312.560	41.600.426.600.000	4.3	5.618
2004	2.431.151.360.000	49.950.883.610.000	4.8	5.678
2005	3.357.314.321.318	69.326.522.616.247	4.8	5.743
2006	4.474.520.800.000	87.029.741.240.375	5.1	5.795
2007	5.517.715.527.112	115.178.096.856.679	4.7	5.828
2008	7.121.275.956	137.567.650.786	5.1	5.861
2009	8.978.331.046	167.474.173.604	5.3	5.900
2010	8.604.293.447	159.406.061.772	5.3	5.945
2011	10.228.518.093	204.208.188.048	5.0	proyecto de ley
2012	21.299.025.105	297.836.717.982	7.1	proyecto de ley
2013	31.135.581.911	396.406.748.187	7.8	proyecto de ley
2014	31.742.157.720	552.632.553.461	5.7	6114
2015	33.084.660.373	741.707.523.894	4.4	6.161
2016	85.377.082.544	1.548.574.181.316	5.5	6.204
2017	767.811.261.398	8.479.300.860.837	9.0	6.263

Fuente: elaboración propia con datos de Asamblea Nacional (2000-2016) y Maduro (2017), extraídos de las Gacetas Oficiales extraordinarias en las que se publican las Leyes de Presupuesto

Dejando de lado los aumentos inflacionarios y ajustes en la moneda, el porcentaje de gasto militar respecto al presupuesto total permite observar una tendencia estable. Solo en los años 2012, 2013 y 2017 se observan aumentos significativos en dicho porcentaje. Los aumentos en el presupuesto militar parecen coincidir con periodos de alta conflictividad política. Los tres años mencionados se caracterizaron por la salida a las calles por parte de la oposición en las llamadas guarimbas. Igualmente, hay correlación con el aumento de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

En cuanto al armamento, según datos de SIPRI (2022), entre 2000 y 2020 Venezuela ha realizado compras de armas por 5,531 millones de dólares. Los mayores contratos fueron realizados con Rusia por un valor de 3,850 millones de dólares entre 2006 y 2015, seguida por China con 629 millones entre 2006 y 2016. Después del inicio de las sanciones estadounidenses en 2015, se puede observar que los únicos países occidentales que se mantienen como proveedores de armas son Alemania, los Países Bajos, España y Suiza, pero incluso Estados Unidos mantuvo un contrato por 6 millones en 2015.

### Importaciones de armas a Venezuela en millones de dólares

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Total	
<b>Austria</b>										1	1	1	1		1	5								9
<b>China</b>							14	27	41	54	89	8	51	97	74	100	76							629
<b>France</b>	29	5	5																					39
<b>Germany</b>			8							8	8	32	8		4							8		76
<b>Iran</b>													0	1										1
<b>Israel</b>			25		9	5	5																	44
<b>Italy</b>	11	1	1							3	3	10	3									3		34
<b>Netherlands</b>	23	20				12	6			13	13	75	49	14	24	14	14		14			41		332
<b>Poland</b>	28	11																						39
<b>Russia</b>							353	748	699	252	57	266	516	881	79									3850
<b>South Korea</b>		45																						45
<b>Spain</b>										24	24	188	55									24		313
<b>Sweden</b>	16	16																						32
<b>Switzerland</b>										4	4	16	4									4		32
<b>Ukraine</b>											11										5			16
<b>United Kingdom</b>						4																		4
<b>United States</b>		5	11	15												6								37
<b>Unknown supplier(s)</b>												0												0
<b>Total</b>	106	103	50	15	9	21	377	775	739	358	208	596	687	993	181	125	95				14		79	5531

Fuente: SIPRI Arms Transfers Database (2022).

Vemos una clara tendencia geopolítica en dejar de abastecerse de los países de la esfera de Estados Unidos. El hecho de que China y Rusia se hayan convertido en los principales abastecedores de Venezuela habla de las alianzas estratégicas del chavismo, las cuales, como se puede notar, inician en el mismo marco en que Venezuela dio el giro al Socialismo del siglo XXI. Ahora bien, las armas compradas no solo consisten en el abastecimiento corriente para el funcionamiento de la FANB, como puede ser munición o rifles de asalto. Las compras a Rusia y China incluyen sistemas de armas complejos y modernos, como

helicópteros de combate, sistemas de defensa anti-misiles e incluso aviones de combate tipo caza como el Su-30MK de Rusia (SIPRI, 2022).

Por otro lado, en América Latina pocos países actúan como proveedores de armas, siendo Brasil el que mayores tratos de armas registra. Venezuela, por su parte vendió entre 2004 y 2008 sistemas de armas a Bolivia, Ecuador y Guatemala. En todos los casos se trata de helicópteros y aviones de segundo uso y solo el caso de Ecuador registra una venta de cuarenta misiles aire-aire de fabricación francesa en 2009 (SIPRI, 2022).

Deteniéndonos en la fabricación de armas, la industria militar venezolana está a cargo del Viceministerio de Planificación y Desarrollo para la Defensa. Se trata de una industria que, al igual que en muchos países de la región, está destinada a abastecer las necesidades básicas de una fuerza militar, es decir, fabricación de armas comunes (pistolas, rifles, metralletas, explosivos, etc.), munición, calzado y uniformes. También destaca la manufactura de embarcaciones para la Armada y de un vehículo multipropósito en colaboración con China. Además, el Ministerio de Defensa participa en empresas del sector agrícola, petrolero, turismo, banca, transporte de carga y telecomunicaciones (Véase Viceministerio de Planificación y Desarrollo para la Defensa, 2022).

En cuanto al número de efectivos militares, el *International Institute for Strategic Studies* (IISS) presenta cifras más o menos estables, como se puede ver en la siguiente tabla. Cabe señalar que la FANB está compuesta por cuatro ramas: el Ejército Bolivariano, la Armada Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana (antes Fuerza Aérea) y la Guardia Nacional Bolivariana. En la mayoría de los países del mundo las fuerzas armadas se componen de un ejército, una armada o fuerza naval y una fuerza aérea, y solo algunos casos presentan una cuarta fuerza como en este caso la Guardia Nacional o en el de Estados Unidos el Cuerpo de Infantería de Marina (Marines Corps). En el análisis se incluye la Milicia Bolivariana que, aunque legalmente no representa una quinta fuerza al depender directamente del ejecutivo, su tamaño y jerarquías permiten tomarla como un elemento separado.



Personal de la FAN (2000-2008) y la FANB (2008-2017)

Año(s)	Total	Ejército	Armada	Aviación	Guardia Nacional	Milicia
2000	79,000	34,000	15,000	7,000	23,000	-
2001-2007	82,300	34,000	18,300	7,000	23,000	-
2008-2015	115,000	63,000	17,500	11,500	23,000	-
2016-2017	115,000	63,000	17,500	11,500	23,000	150,000

Fuente: elaboración propia con datos del IISS (2000-2017)

Podemos ver que hay una correlación entre los cambios jurídicos y políticos en la Fuerza Armada vistos en el subapartado anterior, y en el número de efectivos. Antes de 2000, permanecía en vigencia el ordenamiento legal anterior al gobierno de Hugo Chávez. A partir de 2001 se puede ver un aumento de efectivos, que se correlaciona con el uso de militares en la política social del gobierno. A partir de 2008 hay un nuevo incremento de efectivos, correspondiente a la aprobación de la LOFANB, en la que se introdujo la Milicia Bolivariana, aunque los datos expuestos no manifiestan ese aumento de manera independiente, sino como un aumento principalmente en el ejército. Finalmente, a partir de 2016 el aumento de la Milicia es exponencial y corresponde al periodo de violencia política entre el chavismo y la oposición.

Ahora bien, desde el periodo del *puntofijismo*, las fuerzas armadas han tenido un origen popular en su composición. Es decir, sus miembros pertenecen a clases populares y la institución fungió como una vía de ascenso social (véase Romero, 2020). La creación de la milicia vale resaltar, refuerza esta composición, pues son los sectores populares de la sociedad que se involucran en la política de defensa.

En Ecuador, según SIPRI (2022), el gasto militar por porcentaje del Producto Interno Bruto en el periodo de la Revolución Ciudadana rondó entre el 1.5 y 2 por ciento. En la siguiente

tabla se puede observar el gasto militar de acuerdo con las cifras de ejecución presupuestaria oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (2022).

#### Presupuesto Militar Ecuador 2007-2017

	Presupuesto total del Estado en dólares estadounidenses (codificado)*	Presupuesto Sector Defensa Nacional	%
2007	11,225,131,384.48	867,761,524.01	7.7
2008**	26,630,267,132.12	1,730,804,297.36	6.4
2009	20,645,561,759.05	1,591,573,593.53	7.7
2010	23,523,027,228.20	2,010,955,905.72	8.5
2011	26,551,283,389.62	1,944,137,998.50	7.3
2012	30,025,352,955.09	1,991,937,621.28	6.6
2013	36,161,716,439.06	2,116,414,633.96	5.8
2014	39,421,252,144.45	2,250,645,251.54	5.7
2015	39,300,286,615.07	1,986,193,058.53	5.0
2016	36,005,806,451.03	1,728,814,169.13	4.8
2017	36,673,267,427.82	1,747,726,268.69	4.7

\*Según el Manual de procedimientos del Ministerio de Finanzas (2010), el presupuesto codificado es el presupuesto inicial más las reformas realizadas (aumentos o disminuciones)

\*\*Para el periodo 2008-2016 se muestra el presupuesto "codificado" en diciembre del año en cuestión, tomando en cuenta que la plataforma de información del Ministerio muestra los datos por mes a partir de esta fecha

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (2022). Los datos mostrados corresponden a la ejecución del presupuesto, es decir, al presupuesto ejercido al final del año fiscal independientemente del presupuesto inicial, que puede ser mayor o menor

Podemos observar un porcentaje de gastos militares altos si lo comparamos con el caso boliviano e incluso con el venezolano, donde las fuerzas armadas tienen mayor importancia en el proyecto político. Vemos también que el comportamiento de la ejecución presupuestaria tiene relación con los eventos de relevancia política. En 2008, año de la Crisis de Angostura, vemos un aumento respecto al 2007 y luego en 2009 un decremento. Igualmente, en 2010 hay un incremento y de hecho es el año con mayor porcentaje de gasto militar en relación con el presupuesto total. Recordemos que aquel año ocurrió el motín policial y la consecuente salida de las fuerzas armadas de sus cuarteles para rescatar al presidente.

En cuanto a la compra de armas, en la siguiente tabla se puede observar que en los diez años del gobierno correista se realizaron contratos por 563 millones de dólares. Comparado con Venezuela, el gasto militar en compra de armas es drásticamente menor. Además, se puede observar que los proveedores de armas son en su mayoría occidentales. Sin embargo, también se puede observar una importancia de Rusia, China e incluso la propia Venezuela.

### Importaciones de armas a Ecuador en millones de dólares 2007-2017

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
<b>Brazil</b>				62	18							79
<b>Canada</b>				7	2	1	1	6				17
<b>Chile</b>		100										100
<b>China</b>				8								8
<b>France</b>					2	7	2	7	1			18
<b>India</b>			27									27
<b>Israel</b>			7									7
<b>Italy</b>				3	5							8
<b>Netherlands</b>						4	9	4			20	37
<b>Russia</b>		2	2		14							18
<b>South Africa</b>					24	72						96
<b>Spain</b>								36	26	26		88
<b>United Kingdom</b>	2				4	4						10
<b>United States</b>			1	10								10
<b>Venezuela</b>			40									40
<b>Total</b>	2	102	77	89	68	88	11	53	27	26	20	563

Fuente: SIPRI Arms Transfers Database (2022).

A pesar del relativamente bajo gasto en compra de armas, se puede observar un esfuerzo por modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Como puede verse, el contrato más grande fue hecho con Chile en 2008. Se trata de la compra de dos fragatas Leander de segunda mano de fabricación inglesa. No podríamos decir que Chile es el principal proveedor de armas para Ecuador, dado que este es el único contrato entre ambos países en el periodo estudiado. Entre los tratos más importantes, además del ya mencionado, está la modernización por parte de Francia de los dos submarinos de la Armada ecuatoriana (solo hay siete países latinoamericanos con submarinos, entre ellos también está Venezuela). También se puede mencionar la compra de aviones no tripulados a Israel y la donación por parte de Venezuela de seis aviones tipo caza Mirage-50.

A pesar del papel económico de las fuerzas armadas desde la década de 1970 y la posesión de más de 150 empresas por parte de la institución, en lo que respecta a industria militar solo existen dos empresas relacionadas con la defensa: la fábrica de munición Santa Bárbara

dedicada a la fabricación de armas y ASTINAVE, que fabrica embarcaciones navales (Granja y Manzano, 2022). Podemos ver que Ecuador solo tiene capacidad para abastecer sus necesidades de municiones y de construcción naval.

En cuanto al número de efectivos, las Fuerzas Armadas del Ecuador son una fuerza militar relativamente pequeña. Durante el periodo de la Revolución Ciudadana el ejército se mantuvo como la rama con más personal armado, aunque hacia el final del periodo se puede observar un ajuste que equilibra un poco más a las tres ramas de las fuerzas armadas.

Personal de las Fuerzas Armadas del Ecuador (2006-2017)

Año	Total	Ejército	Armada	Fuerza Aérea
2006	46,500	37,000	5,500	4,000
2007	56,500	47,000	5,500	4,000
2008	57,100	47,000	6,100	4,000
2009-2013	57,983	46,500	7,283	4,200
2013-2015	58,000	46,500	7,300	4,200
2016-2017	40,250	24,750	9,100	6,400

Fuente: elaboración propia con datos del IISS (2006-2017).

Sobre la composición social de las fuerzas armadas, Saltos (2017) señala que hay una diferenciación entre oficiales y tropa (lo que es aplicable a la gran mayoría de países) y que el ejército tiene un origen social más vinculado a los sectores populares, mientras que la Armada y la Fuerza Aérea mantienen una mayor distancia de la sociedad.

En Bolivia el gasto militar durante el gobierno de Evo Morales rondó entre el 2 y el 1.5 por ciento del producto interno bruto (SIPRI, 2022). De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el gasto del Ministerio de Defensa tuvo el siguiente comportamiento.

Presupuesto militar Bolivia 2006-2019

	Presupuesto total del Estado en bolivianos	Presupuesto de Ministerio de Defensa Nacional	%
2006	46,159,641,834	1,246,365,982	2.7
2007	58,917,733,732	1,275,081,875	2.1
2008	80,554,139,517	1,496,379,886	1.8
2009	103,137,982,636	1,702,335,968	1.6
2010	105,964,336,473	1,902,322,358	1.7
2011	119,471,340,251	2,054,668,012	1.7
2012	145,942,902,291	2,304,625,528	1.5
2013	172,020,910,618	2,556,026,366	1.4
2014	195,409,570,082	2,779,098,240	1.4
2015	221,180,950,531	2,986,250,161	1.3
2016	217,139,563,218	2,986,250,161	1.3
2017	210,346,912,461	3,725,792,440	1.7
2018	214,649,608,533	3,449,246,946	1.6
2019	214,724,291,393	3,288,402,850	1.5

Fuente: elaboración propia con datos de Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2022) y las Leyes anuales del Presupuesto General del Estado (2006-2019) Nota: los datos del Ministerio de Defensa corresponden a la ejecución del presupuesto, es decir, al presupuesto ejercido al final del año fiscal, mientras que los datos del presupuesto total corresponden a las Leyes de Presupuesto, es decir, al presupuesto asignado al inicio del año fiscal.

Como podemos ver, el presupuesto boliviano en el área de la defensa es el más bajo de los tres casos de estudio considerando el porcentaje del presupuesto total, aunque tomando el porcentaje del PIB el comportamiento es similar al de Ecuador. A diferencia de los casos anteriores, en Bolivia el presupuesto militar parece tener un aumento más orgánico,

conforme a las tasas de inflación e incremento del propio presupuesto total del Estado. Los eventos políticos parecen no incidir ampliamente en la ejecución del gasto militar.

Respecto a la compra de armas, Bolivia también resulta ser el que menor gasto hace en este aspecto. El mayor gasto lo tenemos en el año 2014. Al igual que en los otros dos casos, los proveedores son diversificados, aunque Francia y China son los países con las sumas más altas en contratos.

#### Importaciones de Armas a Bolivia 2006-2019

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
<b>Argentina</b>	2														2
<b>Austria</b>					1										1
<b>Brazil</b>							4								4
<b>China</b>						21			20		4		1		46
<b>Czechia</b>											1				1
<b>France</b>				2					15		22	7		26	97
<b>Germany</b>							7		7						13
<b>Spain</b>		2		3											5
<b>Ukraine</b>						4									4
<b>United Kingdom</b>														8	8
<b>United States</b>						1	1	1	6						8
<b>Unknown supplier(s)</b>				0				1							1
<b>Venezuela</b>	7		3												9
<b>Total</b>	9	2	3	5	1	25	12	1	46		27	7	1	34	199

Fuente: SIPRI Arms Transfers Database (2022).

Nuevamente, los sistemas de armas en cuestión son en su mayoría helicópteros y aviones. En cuanto a Francia, el país con mayores sumas monetarias en contratos, exportó helicópteros ligeros y de transporte, así como radares aéreos. Por su parte, China exportó aviones de combate ligero K-8, helicópteros y vehículos APV (Armored Protected Vehicles o vehículos de combate) (SIPRI, 2022).

Hablando de industria militar, Bolivia es la más rezagada en este campo respecto a los otros dos casos de estudio. La Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA) tiene un conglomerado de siete empresas, de las cuales solo la Fábrica

Boliviana de Munición (FBM) y la Fábrica Nacional de Explosivos y Accesorios (Fanexa) pertenecen al sector defensa y abastecen propiamente a las fuerzas armadas. Por su parte, la Armada cuenta con astilleros que fabrican embarcaciones, en el caso boliviano, para la navegación de ríos (Faundes, 2015).

Sobre este último punto, resulta interesante señalar la existencia de una Armada boliviana, dada la pérdida del país de su lecho marino en el siglo XIX. Las actividades de la Armada se desarrollan sobre todo en zonas lacustres y fluviales, pero cabe resaltar que su propia existencia es parte de la política estatal de reivindicación del derecho de Bolivia a una salida al mar.

En lo que respecta al personal de las fuerzas armadas, se trata de una fuerza relativamente pequeña, de un tamaño un poco menor a las ecuatorianas. Al igual que en los otros dos casos vistos, el ejército es la fuerza más numérica, seguida de la Armada y al final la Fuerza Aérea.

Personal de las Fuerzas Armadas Bolivianas 2006-2019

Año	Total	Ejército	Armada	Fuerza Aérea
2006	33,000	25,000	5,000	3,000
2007-2015	46,100	34,800	4,800	6,500
2016-2019	34,100	22,800	4,800	6,500

Fuente: elaboración propia con datos del IISS (2006-2017).

Finalmente, a diferencia de Ecuador y Venezuela, las fuerzas armadas en Bolivia no se componen de sectores populares. El propio Evo Morales, al inicio de su gobierno, lamentó que no hubiera generales con apellidos indígenas (Molina, 2018). De hecho, se puede decir que las Fuerzas Armadas Bolivianas son de las más conservadoras al representar tradicionalmente los intereses de las clases dominantes. Aunque después de la Revolución de 1952 se incluyó en la tropa a los indígenas, esto se hizo bajo criterios discriminatorios, prohibitivos y racistas (Linares, 2010).



### **3.3 Dominación estadounidense**

Ahora que hemos revisado los elementos internos de la actuación política de las fuerzas armadas, así como las coyunturas nacionales que posibilitan o no la construcción de bloques históricos, hace falta revisar la influencia externa, específicamente la de Estados Unidos, país en el que se identifica el ejercicio de una hegemonía política, económica y militar. En el presente apartado se hará una revisión de cómo ha sido esa hegemonía antes de los gobiernos que se están analizando y después en cómo ha evolucionado la política militar estadounidense ante el desafío geopolítico que dichos gobiernos pueden representar para la dominación hegemónica.

#### *3.3.1 Seguridad hemisférica y hegemonía estadounidense*

La influencia e intromisión de Estados Unidos en los asuntos políticos y militares de los países de América Latina es un hecho histórico que comienza con la propia emergencia de la hegemonía estadounidense. Naturalmente, un poder en consolidación primero ve a su ámbito regional más cercano, en este caso el continente americano, el que después se convertiría en su ámbito de influencia inmediato.

Como tal, América Latina ha sido concebida por la hegemonía estadounidense como un territorio de contención, pero también de contención, primero en el siglo XIX para consolidar su poder en ascenso por medio de la conocida doctrina Monroe, a partir de la segunda mitad del siglo XX para hacer frente al bloque socialista y en el siglo XXI para preservar una hegemonía en decadencia.

En 1942, en medio de la segunda guerra mundial, se creó la Junta Interamericana de Defensa. Pensada para apoyar diplomática y militarmente a Estados Unidos, este mecanismo fue el primero en su tipo para impulsar la agenda de seguridad de Washington en la región.

Le siguieron en 1947 el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca (TIAR) y en 1948 el nacimiento de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estos mecanismos, más que definir el concepto de seguridad nacional, estuvieron pensados a partir de una seguridad

continental o seguridad hemisférica, para defender a Estados Unidos y sus aliados americanos de lo que identificaron como amenaza comunista enmarcada dentro de la guerra fría.

También en estos años, en 1947 se estableció en Panamá el Comando del Caribe de Estados Unidos (*U.S. Caribbean Command*), que en 1963 pasó a llamarse oficialmente Comando Sur de Estados Unidos (*Southcom*). El propio Comando señala que este cambio de nombre describe mejor sus intereses geopolíticos: América Central y América del Sur (*Southcom, s/f*).

Simultáneamente, en 1946 se creó la famosa Escuela de las Américas (*School of the Americas, SOA*) en una base estadounidense en Panamá. Aunque oficialmente la SOA tenía la misión de profesionalizar a las fuerzas armadas latinoamericanas, su objetivo de fondo fue el control de ellas y su adoctrinamiento anticomunista (Romero, 2014).

Casi todos los países de América Latina mandaron a militares a estudiar en la SOA y algunos jefes de Estado de las dictaduras militares que azotaron la región en los años sesenta y setenta fueron graduados de la Escuela. En lo que respecta a nuestros casos de estudio, entre 1946 y 1998 hubo 3,373 militares ecuatorianos graduados de la SOA; 3,681 de Bolivia; y 3,310 de Venezuela (Romero, 2014).

Según Rouquié (1984) a partir de 1962 la ayuda militar estadounidense se volvió más intensa, estrechando los lazos entre las fuerzas armadas latinoamericanas y Washington con programas de asistencia militar (*Military Assistance Programs*) y el envío de asesores militares estadounidenses a los países latinoamericanos.

Todo este entramado desembocó en las mencionadas dictaduras de los años sesenta y setenta, que a su vez colocaron al centro la llamada Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). Los golpes de Estado de este tipo tuvieron el apoyo de Estados Unidos y muchos fueron gestados desde las embajadas estadounidenses y las oficinas de la CIA.

A las dictaduras de Seguridad Nacional se adscribieron la mayoría de los regímenes militares, tanto los que iban tomando el poder, como los que se habían establecido antes, tal como la dictadura de los Somoza en Nicaragua y la de Alfredo Stroessner en Paraguay.

El lanzamiento de la Operación Cóndor en 1975 en los países del Cono Sur fue la mayor expresión de los regímenes de Seguridad Nacional.

En Venezuela, aunque no hubo un golpe de Estado de este tipo, el envío de militares a la Escuela de las Américas demuestra el alineamiento militar en esos años a Estados Unidos. Los militares entrenados en Panamá fueron los que combatieron a la guerrilla en los años sesenta. Trinkunas (2005) señala que la Doctrina de Seguridad Nacional se adaptó al régimen democrático del puntofijismo. Además, Venezuela tuvo un programa de asistencia militar, de los más robustos de la región. Los asesores militares estadounidenses participaron activamente en la lucha antiguerrillera de los militares venezolanos (Crockcroft, 2001).

En Ecuador, que sí tuvo gobiernos militares anticomunistas, la DSN también se adoptó. Según Jiménez (2021) la estrategia estadounidense en Ecuador tuvo tres vertientes: política, con la firma del TIAR; militar, con tratados de asistencia técnica; y económica, con la firma de la Alianza para el Progreso. A esto se suma la actuación directa de la CIA en operaciones de vigilancia política e infiltración en las organizaciones de izquierda ecuatorianas, como lo denuncia el exagente de la CIA Philip Agee, quien mantuvo actividades en Ecuador y otros países (véase Agee, Galarza y Herrera, 2014).

Bolivia fue uno de los casos de América del Sur donde la intervención estadounidense fue más directa. Junto a Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Bolivia implementó la Operación Condor, un plan de inteligencia anticomunista de los cinco países. Además, es conocido que la CIA mantuvo operaciones durante la estancia de Ernesto Guevara en Bolivia y tuvo un papel fundamental en su asesinato, sumado a oficiales de las fuerzas armadas de alto rango que colaboraban con dicha agencia estadounidense (véase Cockcroft, 2001).

Hacia los años ochenta, aún con la política de la guerra fría vigente, se empezó a vislumbrar un nuevo tipo de intervención basada en la construcción de un nuevo enemigo: el narcotráfico. La guerra contra las drogas de Ronald Reagan dio paso a la fundación de la Administración de Control de Drogas (DEA). Nuevamente fue especialmente en Bolivia donde esta política tuvo mayores repercusiones.

En julio de 1986 unos 160 infantes de marina y 6 helicópteros Blackhawk llegaron a Bolivia para realizar una redada de narcotraficantes, llamada “Operación Alto Horno”, que fue objeto de mucha publicidad. Los soldados estadounidenses permanecieron en Bolivia hasta finales de ese año [...]

De 1988 a 1991 el embajador norteamericano Robert Gelbard, que acababa de trabajar con Elliot Abrams, del Departamento de Estado, en la guerra de los contras contra la revolución de Nicaragua, supervisó la militarización escalonada de la política boliviana de las drogas como parte de la “Operación Cima Nevada” (Cockcroft, 2001, pp. 578-579).

Con la caída del bloque soviético, la concepción de seguridad se transformó, haciendo una redefinición de las amenazas. Se comenzó a pensar en una seguridad multidimensional, que incluye no solo amenazas de carácter militar, sino también de carácter político, económico, ambiental, etc. Desde inicios de la década de 1990, las nuevas amenazas incluyeron el terrorismo, la migración, la pobreza y, por supuesto, el narcotráfico y el crimen organizado. En este mismo contexto el *Southcom* comenzó a enfocarse en operaciones contra el narcotráfico y expandió su área geográfica al Caribe. En 1997, la sede del *Southcom* fue trasladada a Miami (Southcom, s.f.).

En 2003, se aprobó en la OEA la *Declaración sobre seguridad en las Américas*, donde se declaró que “los Estados del Hemisferio enfrentamos tanto amenazas tradicionales a la seguridad como nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos que por sus características complejas han determinado que la seguridad tenga un carácter multidimensional” (OEA, 2003). Entre esas nuevas amenazas se identificaron las que tienen que ver directamente con el crimen, como lo son “el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos” (ibid.).

La visión estadounidense de seguridad hemisférica no dista mucho de la expuesta por la OEA. La declaración de 2003 tuvo como antecedente inmediato los foros en la OEA impulsados por Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina y Colombia. Según Benítez Manaut (2003), después de los atentados terroristas de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York hay un “cambio de la autopercepción de seguridad de Estados Unidos, de

una nación invulnerable, a la vulnerabilidad producto de las nuevas amenazas, [que] provoca la gran revolución doctrinaria e institucional que da pie a la nueva doctrina de defensa del territorio y la patria” (p. 53).

En realidad, aunque los atentados de 2001 influyeron enormemente en ese cambio, la nueva visión tenía ya varios años gestándose, tanto en el Departamento de Defensa de Estados Unidos al haberse colocado como el vencedor indiscutible de la guerra fría, como en el resto del hemisferio occidental, incluyendo a los países latinoamericanos dentro del marco de actuación de la OEA.

En un reporte del Colegio Nacional de Guerra (National War College) de 1997 se indicaba que el principal interés de Estados Unidos en América del Sur era prevenir la emergencia de un poder rival y hostil. Se indicaba que no había amenazas inmediatas a los intereses estadounidenses, pero señalaba la existencia de desafíos como la pobreza, desigualdad, las relaciones civiles-militares y las drogas (Nesbitt, et al., 1997).

En el capítulo 1 se hizo referencia a las condiciones de la hegemonía estadounidense en el siglo XXI. Se señalaba una crisis hegemónica en la que el ordenador del capitalismo se ha desplazado a lo militar y en América Latina la militarización aparece como la forma de dominación por excelencia. Igualmente se señalaba la *dominación de espectro completo* como una política para mantener la hegemonía estadounidense. Ceceña, Yedra y Barrios (2009) señalan que en 1998 apareció un documento de los Estados Unidos en los que se elabora esta visión del mundo:

El mantenimiento de la hegemonía, del papel de liderazgo que Estados Unidos cree estar llamado a ocupar, requiere de una estrategia correspondiente al nuevo tipo de enemigo, a la amenaza incierta y desconocida que proviene de cualquier parte de la sociedad, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo. Es decir, ante una amenaza que se cierne de manera ubicua y que proviene de todo el espectro social, lo que se requiere es trabajar principalmente en tareas disuasivas o preventivas y abarcar el espectro completo. Full spectrum dominance. Este es el concepto clave con el que procede la reorganización de los asuntos militares y de los asuntos políticos de Estados Unidos a partir de finales de la década de los noventa y que les permite entrar al siglo XXI en otras condiciones (p. 16).

Con la identificación de nuevos enemigos, la guerra tiene como eje la asimetría y su uso a favor de Estados Unidos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) encuentra enemigos institucionales o convencionales dentro de las amenazas tradicionales a su seguridad. Pero aparecen enemigos no institucionales o inespecíficos, identificados en el narcotráfico, el terrorismo, etc.

En este marco de cosas es que aparecieron respuestas contrahegemónicas en América Latina. Hay ciertamente una permisibilidad inicial de Estados Unidos respecto a la región, que permitió el triunfo, inicialmente, de Hugo Chávez en Venezuela. Podría decirse que Estados Unidos, distraído en sus guerras de dominación en Medio Oriente, no alcanzó a ver lo que representaría eventualmente el gobierno de Chávez en su propia esfera de influencia.

Sin embargo, no debe entenderse que la sola intromisión de Estados Unidos es el único factor determinante en los cambios políticos realizados en los casos de estudio. Los factores internos arriba explicados, así como las condiciones sociopolíticas de finales del siglo XX explicadas en el capítulo 2 deben tomarse como los principales elementos que crearon circunstancias difícilmente manipulables por el ejercicio de la hegemonía estadounidense, especialmente observando el caso venezolano.

### *3.3.2 La política estadounidense en una época de cambios en Venezuela, Bolivia y Ecuador*

A partir de la elección de Hugo Chávez y del subsecuente giro a la izquierda en América Latina, Estados Unidos tuvo diversos descalabros geopolíticos. Un momento crítico ocurrió en 2005, cuando la iniciativa impulsada por Estados Unidos, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) colapsó en medio de los cuestionamientos hechos por Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva.

Al mismo tiempo, Chávez impulsó la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) en clara contrapropuesta al ALCA. A este mecanismo multilateral se integraron Bolivia tras la llegada al poder de Evo Morales y Ecuador, con Rafael Correa.

Por otro lado, vale la pena mencionar que los tres países poseen posiciones geopolíticas clave en América del Sur y por lo tanto están bien presentes en la estrategia de dominación estadounidense. Venezuela, justo al norte de América del Sur, posee un largo litoral en la Cuenca del Caribe, territorio nodal en la visión estratégica. Por si fuera poco, las grandes reservas petroleras, que actualmente son las mayores del mundo, mantienen a Venezuela en el centro de la visión de los estrategas norteamericanos. Ecuador, un país considerablemente más pequeño, es uno de los países megadiversos del mundo. Además, su soberanía sobre las Islas Galápagos le dan un amplio mar territorial sobre el Océano Pacífico. Finalmente, Bolivia, al parecer aislada por no tener lecho marino, se ubica en medio de los grandes países sudamericanos y posee grandes riquezas minerales, entre ellas, el litio, que en los últimos tiempos se posiciona como uno de los minerales estratégicos.

Todavía en 1999 el Departamento de Estado (DoS) de Estados Unidos hablaba de las cercanas relaciones con Venezuela, indicando que era el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos (DoS, 1999). La moderación era mutua en los primeros años de la Revolución Bolivariana:

Hasta la huelga general en 2002-2003, el gobierno de Chávez empleaba un lenguaje prudente en sus relaciones con los Estados Unidos. La discreción de Chávez se hizo evidente durante la campaña presidencial de 1998, cuando se abstuvo de criticar la administración de Clinton [...] Al mismo tiempo, manifestó la posibilidad de mantener un diálogo con el FMI y se comprometió a respetar los acuerdos existentes con el capital extranjero. En septiembre de 1999, Chávez pronunció un discurso en la Asamblea General de la ONU, se reunió con el presidente Clinton (por segunda vez), y habló ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, donde sus observaciones fueron consideradas positivas y alentadoras (Ellner, 2014, p. 261).

Diversas iniciativas militares de Estados Unidos en estos primeros años estuvieron presentes, a las que Chávez respondió negativamente, pero aún con moderación. Estas iniciativas fueron el envío de ingenieros militares estadounidenses después de las inundaciones de 1999; la petición de Estados Unidos de permitir vuelos de reconocimiento en el espacio aéreo venezolano para combatir el tráfico de drogas; y el establecimiento de

una base donde se albergarían asesores militares para hacer frente a las guerrillas colombianas (Ellner, 2014).

Como se puede ver, en estos años la principal preocupación de Estados Unidos en la región era el tráfico de drogas desde Colombia, lo que coincide también con el auge del llamado Plan Colombia. En 2000, la declaración de postura al Congreso del entonces jefe del *Southcom* hacía referencia a estas iniciativas militares (Wilhelm, 2000).

La línea moderada de la administración de Clinton estuvo formulada por el embajador de Estados Unidos, John Maisto, quien argumentó que el triunfo electoral de Chávez obligaba a Washington a asumir una posición tolerante, y que además, las presiones económicas forzarían, tarde o temprano, a moderar sus posiciones. Un punto de vista opuesto fue defendido por los de línea dura norteamericana, quienes finalmente incluyeron al subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Peter Romero, quien advirtió a Chávez no pasar los límites de la acción aceptable (Ellner, 2014, p. 262).

Vemos de tal manera que en la cúpula del poder estadounidense siempre estuvo la intención de ejercer su hegemonía sobre Venezuela, advirtiendo sobre lo que se podía hacer o no bajo la supervisión de Washington. Durante la presidencia de George W. Bush, la relación pasó de esta moderación inicial a posiciones cada vez más enfrentadas.

El golpe de Estado de 2002 fue un punto de quiebre en la estrategia de Estados Unidos sobre Venezuela. Es conocido que la administración Bush apoyó el golpe de Estado, no solo reconociendo al efímero gobierno de facto y culpando públicamente a Chávez de la situación política, también con financiamiento y apoyo material y logístico de la *National Endowment for Democracy* (NED) a la oposición y a los grupos golpistas y la presencia de la CIA, que sabía los detalles del golpe de Estado desde una semana antes. Incluso Chávez llegó a afirmar la presencia de barcos y helicópteros militares cerca de la costa venezolana (Ellner, 2014).

Vale la pena detenerse a explicar qué es la NED y su comportamiento. Fundada en 1983, recibe dinero directamente del Congreso de Estados Unidos, pero mantiene un carácter privado que le permite usar los recursos a discreción y sin obligación de indicar a qué organizaciones financia. El exagente de la CIA, Philip Agee señala que la CIA mantuvo



operaciones encubiertas hasta 1985. La creación de la NED fue el resultado de un escándalo iniciado en 1967 donde diversos medios denunciaron la financiación de fundaciones legítimas e ilegítimas por parte de la CIA (Agee, Galarza y Herrera, 2014).

Podemos decir de tal forma que la NED realiza el trabajo encubierto de financiación que antes realizaba la CIA. La presencia de esta organización en Venezuela financiando grupos de la oposición ha sido constante desde 2002 (véase Golinger, 2014). Igualmente, otra organización presente en Venezuela es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), que en 2002 abrió en la embajada de Estados Unidos en Caracas una Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) (Golinger, 2007 y Ellner, 2014), un tipo de oficina que Estados Unidos mantiene en varios países del mundo y que abiertamente busca cambios de régimen.

Después del golpe de 2002, Chávez comenzó a usar una retórica cada vez más antiimperialista y crítica de Estados Unidos, al mismo tiempo que buscaba nuevas alianzas estratégicas con Rusia, China e Irán. En 2004, tras la reelección de Bush, Chávez ya encontraba una amenaza proveniente de Estados Unidos: “en lo internacional, ya lo he comentado suficientemente, los Estados Unidos van a incrementar la agresión, estoy seguro, van a volver a hacer nuevos intentos por debilitarnos” (Chávez, 2004, p. 26).

Cabe recordar que durante estos años se estaban realizando transformaciones al interior de la Fuerza Armada. Fue hasta 2005 que las relaciones militares entre Estados Unidos y Venezuela comenzaban a ver su fin definitivo, con la suspensión de intercambios en educación militar y consecuentemente el retiro de militares venezolanos radicados en Estados Unidos y a la inversa, de militares y enlaces estadounidenses de la misión militar en Venezuela (Romero, 2006).

En 2007, el entonces director de inteligencia nacional de Estados Unidos presentaba al Senado una evaluación de las amenazas que enfrentaba Estados Unidos. Su reporte mencionaba a Venezuela como el “mayor líder antiestadounidense del mundo” y seguiría intentando reducir la influencia de Estados Unidos en el país (Negroponte, 2007).

A pesar del distanciamiento diplomático entre Venezuela y Estados Unidos, la relación tuvo altos y bajos, sobre todo durante la administración Bush. Hasta 2015 las relaciones comerciales no variaron ampliamente. Venezuela siguió siendo el principal proveedor de petróleo de Estados Unidos e incluso se mantuvo la empresa CITGO, de propiedad estatal venezolana en Estados Unidos.

Por otro lado, durante la administración de Barack Obama, las relaciones diplomáticas no solo no mejoraron. Desde 2010, ambos países permanecen sin embajadores, aunque no se rompieron relaciones sino hasta 2019. En 2015, Obama firmó una orden ejecutiva que declaraba a Venezuela como amenaza a la seguridad nacional. Esto es significativo, pues si bien funcionarios estadounidenses ya venían llamando amenaza al gobierno de Chávez desde la administración Bush, con esta orden ejecutiva pasaba a ser una política de Estado y como tal se habilitó a elaborar políticas abiertamente en contra del gobierno venezolano.

De tal manera, se puede observar el paso de un pequeño periodo de permisibilidad entre 1999 y 2001, a una estrategia *desde dentro* a partir de 2002 y finalmente a una estrategia combinada, pero sobre todo *desde fuera* a partir de 2015. Desde entonces, el gobierno estadounidense lleva a cabo una política de sanciones contra funcionarios venezolanos. En 2019, una nueva orden ejecutiva desconoció plenamente al gobierno de Nicolás Maduro, pasando a reconocer al exdiputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela.

El punto más crítico de esta estrategia *desde fuera* se dio precisamente en 2019. Mientras en la prensa se daban reportes sobre la intención del presidente Donald Trump de intervenir militarmente Venezuela, un plan elaborado por la USAID de ingresar “ayuda humanitaria” por la frontera con Colombia recibió la atención mediática internacional, con funcionarios estadounidenses presentes en territorio colombiano.

Otro punto sobre esta estrategia es el aislamiento internacional al que se ha visto sometido Venezuela. En 2017 se estableció el Grupo de Lima en el cual se alinearon la mayoría de los países latinoamericanos a los intereses de derrocar al gobierno venezolano. A esto se suma

la actuación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, en los constantes esfuerzos por aislar diplomáticamente al país.

Hay además intereses concretos en el asedio a Venezuela. Como ya se señaló, Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo.

La guerra contra Venezuela no es “para derrocar a un dictador”, cuestión que evoca las de Irak, Libia y circunstancialmente las de cualquier país petrolero que pretenda poner condiciones a la entrega de sus recursos. Es la guerra de la Exxon, que no deja de abrir brecha desde la región en disputa del Esequibo; es la guerra de Chevron, del coltan, el uranio, el thorium, el gas y el oro; es la guerra del estado norteamericano por reforzar sus condiciones materiales y su posición hegemónica (Ceceña y Barrios, 2017).

De tal manera es que hay un despliegue militar en toda la Cuenca del Caribe, por medio de las bases militares estadounidenses, con el objetivo de hacerse de dichos recursos. En la práctica, Venezuela está en un cerco militar (Ceceña y Barrios, 2017) reforzado por las concepciones de seguridad estadounidenses vistas en este apartado: la lucha contra el narcotráfico. Bajo dicho motivo, el despliegue militar se legitima, añadiendo una retórica de apoyo a la democracia.

En Ecuador, el paso de una política de cooperación con Estados Unidos y una postura antiimperialista fue notorio en la primer parte del gobierno de Correa. La relación militar entre Estados Unidos y Ecuador a inicios del siglo XXI estuvo marcada por la presencia militar directa de Estados Unidos desde 1999, permitida por las propias autoridades ecuatorianas. Se trata de la base militar de Manta, que alojaba a personal militar estadounidense.

En 2007, el jefe del *Southcom* reconocía que junto a la base en Comalapa en El Salvador y en Curazao y Aruba, llamadas *Foreign Operating Locations* (FOL), eran resultado de su retiro de Panamá y eran utilizadas para operaciones anti-narcóticos. Aún más, indicaba que estas instalaciones eran claves para la operación militar de Estados Unidos en la región (Stavridis, 2007).

La presencia militar estadounidense en Ecuador fue denunciada por movimientos sociales, entre los cuales se constituyó la Coalición No Bases en Ecuador, cuyo impulso finalmente fue determinante para que en la Constitución de 2008 se prohibiera explícitamente el establecimiento de bases extranjeras en el país (véase, Coalición No Bases, 2010). La presencia estadounidense tenía varias implicaciones, entre ellas la degradación de la propia soberanía nacional

En materia de política exterior las acciones del FOL significaban que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no tenían capacidad alguna para vigilar el territorio nacional, cediendo la vigilancia del espacio aéreo a una potencia extranjera [...]. Para colmo de este tipo de sospechas, donde la diplomacia ecuatoriana aún tiene mucho por explicar, se situaba otra sospecha de que la vigilancia aérea no se contenía al tema del narcotráfico, sino que servía a los intereses de los Estados Unidos para contener los flujos migratorios (Schoettler, et al, 2022, p.182).

La salida de los militares estadounidenses de Ecuador tuvo lugar en 2009 como resultado de la nueva disposición constitucional y consecuentemente de la decisión del gobierno de no renovar el acuerdo firmado en 1999.

En 2011 el gobierno de Rafael Correa expulsó a la embajadora de Estados Unidos debido a la filtración por parte de *Wikileaks* de un cable diplomático de 2009 en el que la embajada estadounidense afirmaba la corrupción generalizada de la policía. Correa acusó espionaje, aunque también dijo que las relaciones entre ambos países eran buenas (El País, 2011).

Estas buenas relaciones también se mantuvieron durante algún tiempo en el ámbito militar. Hasta 2013, Ecuador participó en los ejercicios militares PANAMAX, que según el comandante del *Southcom* por esas fechas decía que era un ejercicio para el entrenamiento en la defensa del Canal de Panamá (Fraser, 2011), es decir, la defensa de los intereses estadounidenses en la Cuenca del Caribe.

El alejamiento del gobierno de Correa con respecto a Estados Unidos también coincidió con su entrada al ALBA. En 2012, Correa denunció interferencia directa por parte de la USAID en los países que integraban el ALBA. Desde ese entonces y hasta 2014, Estados Unidos intentó negociar la permanencia de la USAID en Ecuador y finalmente anunció su salida,

dado que el gobierno de Correa exigía que la cooperación estadounidense se alineara a los objetivos del Plan del Buen Vivir (Constante, 2014).

En 2012, el comandante del Southcom alegaba la presencia de Irán y Hezbollah en América Latina. Según el General, Irán había logrado establecer lazos, especialmente en los países del ALBA (Fraser, 2012). Esta retórica pone en evidencia la identificación de una amenaza militar en los países latinoamericanos, justificada en la supuesta amenaza terrorista que conlleva el acercamiento a Medio Oriente.

Todavía en 2011 el General Fraser había visitado Ecuador y se había reunido con el ministro de defensa y autoridades militares del país (Infodefensa, 2011). Pero para el 2014, el gobierno de Correa pidió la salida de unos cincuenta militares adscritos al Southcom que permanecían en la embajada estadounidense en Quito (Telesur, 2014).

Otro momento de tensión fue la decisión del gobierno de Correa en 2012 de otorgar asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien huyendo de una extradición a Estados Unidos se refugió en la embajada de Ecuador en Reino Unido.

A pesar de estos incidentes y evidentes diferencias entre Estados Unidos y el gobierno de la Revolución Ciudadana, la relación diplomática nunca se rompió. La página del departamento de Estado de la administración Obama indicaba en 2016 que, a pesar de las tensiones en la relación con Ecuador, el compromiso bilateral se había fortalecido y en 2015 se habían designado nuevos embajadores (DoS, 2016).

Ahora bien, no se podría afirmar plenamente la existencia de una estrategia *desde dentro* para sacar del poder a Rafael Correa por parte de Estados Unidos. Sin embargo, las tensiones en la relación diplomática y militar demuestran un alejamiento del tradicional alineamiento de Ecuador a Estados Unidos. Por otro lado, una vez en el poder, Lenin Moreno restableció las relaciones con Estados Unidos a las condiciones en que estaban anteriormente. En 2018 mandos del Southcom regresaban a Ecuador para reunirse con autoridades y el Alto Mando de las Fuerzas Armadas (El Universo, 2018).

El embajador de Estados Unidos en esa ocasión dijo que se le habían ofrecido varias cosas al Ecuador, entre ellas entrenamiento militar e intercambio de información (Plan V, 2018).

El realineamiento de Ecuador a Estados Unidos, por tanto, indica la no necesidad de una estrategia *desde dentro*. Tuvimos por tanto un periodo de permisibilidad, en el que Estados Unidos consideró conveniente la espera en el cambio de situación política. Sin embargo, dado la tradicional cercanía de los militares ecuatorianos a Estados Unidos y a que, como vimos en el apartado anterior, estos no tuvieron un proceso de transformación efectivo, tampoco se puede descartar un escenario con la intervención de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, al igual que en Venezuela, la búsqueda de recursos en Ecuador guía la estrategia estadounidense. La presencia militar norteamericana a inicios de siglo era una extensión del Plan Colombia, estrategia central en la lucha contra las drogas formalmente, pero instrumento de dominación de las territorialidades en la práctica. El capitalismo fósil, cabe decir, tiene enormes intereses en el Ecuador. Hace falta observar el caso de la demanda del Estado ecuatoriano contra Chevrón, en la que se demandaba a la empresa por los enormes daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana realizados en la década de 1990 (véase Ceceña y Ornelas, 2017). Tras la derrota de la Revolución Ciudadana, la transnacional ganó el caso, no solo librándose de pagar por los daños, sino obligando al Estado ecuatoriano a pagar una multa a favor de la empresa.

El discurso antiimperialista también estuvo presente en Bolivia desde la llegada al poder de Evo Morales. La relación entre Estados Unidos y el país andino atravesó varios momentos de tensión. El mayor indicio en el cambio de política de Bolivia sucedió en 2008, cuando se declaró persona no grata al embajador de Estados Unidos y se expulsó a la DEA (Ceppi, 2014).

Un reporte del Congreso de Estados Unidos de 2014 indica varios de los momentos de tensión en la relación bilateral. Un momento significativo fue la advertencia de funcionarios del Departamento de Estado sobre las condiciones de la relación, que dependería del tipo de políticas que se tomarían (Seelke, 2014). Este tipo de advertencia recuerda al caso venezolano, donde se da a entender que Estados Unidos usará su poder hegemónico en caso de un alejamiento de su política estratégica.

Por otra parte, de acuerdo con Golinger (2007), en Bolivia existe una oficina de transición (OTI) de la USAID desde 2004. Durante los trabajos de la Asamblea Constituyente de 2007 promovió el modelo capitalista con propaganda pro-estadounidense y anti-socialista. Además, dicha oficina apoyaba la autonomía de regiones como Santa Cruz, que dicho sea de paso, es una región donde la oposición tiene su mayor bastión y desde donde han provenidos intentos de desestabilización a los gobiernos del MAS.

Entre 2009 y 2011 hubo encuentros entre funcionarios bolivianos y estadounidenses para intentar normalizar la relación bilateral que resultó en la firma del Convenio Marco de Mutuo Respeto y Colaboración.

A pesar de los intentos por recomponer el vínculo, este ingresó nuevamente a una etapa de tensión ante la negativa de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada por parte del gobierno de Obama [...] la expulsión de la USAID del territorio boliviano en mayo de 2013 y el caso Edward Snowden en julio del mismo año (Ceppi, 2014, p. 141).

Este último caso presenta una gran relevancia. En medio de la cacería internacional que realizaba Estados Unidos por el excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional que reveló importantes secretos de la inteligencia estadounidense, el avión de Evo Morales, que se encontraba sobrevolando espacio europeo, fue retenido durante horas en Austria por la sospecha de llevar a bordo a Snowden (González, 2014).

Evidentemente, esto representó un descalabro diplomático para los países europeos que permitieron tal situación (Portugal, Francia e Italia negaron el permiso de sobrevuelo al avión presidencial) en una violación flagrante a los tratados internacionales. La retención de un presidente latinoamericano, con claras diferencias con Estados Unidos, da cuenta de las pretensiones estadounidenses por controlar la región.

El pensamiento militar estadounidense da cuenta de los cambios regionales y de la amenaza que representan estos gobiernos a los intereses estadounidenses. Ellis (2017), investigador del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos menciona que el “régimen” de Morales, igual que el de Correa, trabajaban activamente contra los intereses estadounidenses, lo que incluía el establecimiento de relaciones militares con China y Rusia.

Ahora bien, la salida de los mecanismos militares y diplomáticos estadounidenses presentes en Bolivia no impidió que una estrategia *desde dentro* se hiciese notar en el golpe de Estado de 2019. Romano, *et al* (2019) exhiben que desde 2017 diversos comunicados y declaraciones de funcionarios de Estados Unidos daban cuenta de la intervención en las elecciones de 2019.

Por su parte, aunque los mecanismos formales de Estados Unidos salieron del país, la NED y otras organizaciones del bipartidismo estadounidense siguieron operando en Bolivia. Por otro lado, los militares entrenados por Estados Unidos antes del gobierno del MAS estuvieron involucrados en el golpe de Estado (Romano, *et al*, 2019). Esto “demuestra que las FF.AA. bolivianas, a pesar de los intentos del Gobierno de Morales por transformarlas, siguen estando dirigidas por mandos afines a EE.UU” (ibid., p. 12).

Finalmente, cabe resaltar que el principal detonador de la crisis de 2019 fueron las acusaciones de fraude electoral sustentadas en un reporte de la OEA de Luis Almagro, que como se recordará del caso venezolano, ha servido perfectamente a los intereses estadounidenses.

Además, una vez más los intereses estadounidenses por recurso están al centro de la estrategia militar de Estados Unidos. Según Romano, *et al* (2019), en cables de WikiLeaks y en informes de *think tanks* estadounidenses se puede notar la necesidad de eliminar obstáculos para el acceso a recursos, especialmente el litio y el gas. “En definitiva, dejan percibir un clima de ‘guerra por los recursos’ en la que China se dibuja como gran rival” (ibid., p. 2). Igualmente, en los tres casos la estrategia estadounidense se encaminaba a un objetivo: el rompimiento de un bloque contrahegemónico. En Bolivia, el golpe de Estado tuvo lugar en un momento en que las opciones conservadoras habían retomado posiciones a lo largo de la región y aún no eran claras las perspectivas sobre un reavivamiento del llamado ciclo progresista.

Sumado a esto, es importante mencionar un aspecto clave en la estrategia militar frente a este bloque contrahegemónico: la reactivación de la Cuarta Flota de Estados Unidos. Desactivada desde la década de 1950, se trata de una flota naval con capacidad de



bombardeo, siendo subordinada precisamente del Southcom y que volvió a operar a partir de 2008, en plena cúspide del “giro a la izquierda” en América Latina. Para Ceceña (2014), el despliegue militar es solo uno de varios aspectos de la estrategia hegemónica. En esta se puede notar:

La iniciativa, flexible y versátil para adaptarse a los escenarios cambiantes aunque sin perder la ruta estratégica [...] estableciendo una amplia red de bases militares y bases de operación antinarcóticos; patrullajes navales crecientes y constantes antes y después de la reconstitución de la IV Flota en 2008 (p. 49).

En suma, vemos que Estados Unidos, a pesar de aparentemente haber visto retraída su hegemonía sobre la región, actúa plenamente sobre aquellos países que se han alejado de sus políticas hegemónicas. La constante presencia militar y sus mecanismos diplomáticos, legales e ilegales permiten afirmar que aún juega un papel decisivo en los destinos latinoamericanos, aunque también se presentan resistencias que, como se muestra en este trabajo, son institucionales, pero, cabe decir, también se gestan desde abajo.

Por último, hace falta resaltar el papel de Estados Unidos en los golpes de Estado. Como vimos en el caso venezolano en 2002 y boliviano en 2019, efectivamente Washington realizó una injerencia si bien no definitiva. Los cambios en las correlaciones de fuerza nacionales permitieron o imposibilitaron respuestas de este tipo a los procesos de cambio. Aunque vemos el ejercicio de la hegemonía estadounidense en los intentos por desestabilizar a los gobiernos en cuestión, las condiciones de la hegemonía interna finalmente son decisivas para cambios de rumbo o procesos regresivos.

## Conclusiones

El análisis de los procesos de cambio de inicio del siglo XXI en América Latina debe tomar en cuenta la correlación de fuerzas y la hegemonía. En los tres casos de estudio, el triunfo de opciones que electoralmente se identifican como de izquierda tuvieron sus posibilidades de la preexistencia de crisis orgánicas de las hegemonías nacionales.

En el mismo sentido, identificar la ideología entendida como sentido común y la posibilidad de transformarla debe ser parte de ese análisis. De la misma manera, al identificar a los sectores dominantes de cada caso de estudio, es necesario observar la profundidad de una ideología proveniente del exterior, es decir, aquella por medio de la cual es ejercida la hegemonía en el contexto internacional. En un aspecto metodológico, es importante recuperar perspectivas teóricas como la de Althusser y ponerlas en tensión frente al análisis gramsciano. Esto puede enriquecer la perspectiva teórica al agregar conceptos como el de AIE, que puede ayudar a explicar el funcionamiento de la ideología dentro del Estado.

Sumado a esto, la trayectoria del Estado-nación dentro del contexto del capitalismo global debe tomarse en cuenta al explorar el papel de las fuerzas armadas. En ese sentido se concluye que la institución militar no solo es el brazo armado del Estado para ejercer el monopolio de la violencia, también es la institución fundamental para el mantenimiento de un orden interno y, por lo tanto, de una hegemonía constituida y del sector dominante de la sociedad. De ahí también se desprende que las fuerzas armadas no son una institución apolítica y sin ideología, por el contrario, representan la ideología que se ha convertido en sentido común.

En ese mismo sentido, los procesos de modernización de las fuerzas armadas son momentos fundacionales del pensamiento político-militar, que en América Latina en general y en los tres casos de estudio en particular tuvieron un papel político esencial a lo largo de la historia, especialmente después de dicho momento de modernización.

Ahora bien, respecto a las trayectorias históricas nacionales, hay claras similitudes en los tres casos de estudio. La relativa proximidad geográfica de estos países da una historia fundacional común, con personajes históricos como Simón Bolívar presentes en los mitos

fundacionales heroicos de los tres casos. También comparten primeros intentos de construcción de hegemonía en el siglo XIX, pudiendo caracterizarse dicho siglo como uno de inestabilidades y luchas nacionales intestinas, que en los tres casos desembocaron en el triunfo del liberalismo como sentido común. También en el siglo XX se puede notar el levantamiento de un poder militar moderno que iría tomando el control del Estado directamente a lo largo del siglo XX. Finalmente, en estas similitudes encontramos que la implementación del neoliberalismo llevó a crisis orgánicas a finales del siglo pasado, las cuales dieron pie al surgimiento de movimientos y actores que serían protagonistas de los procesos de cambio.

En cuanto a las particularidades de estas trayectorias nacionales, en el caso venezolano la transformación de la economía a inicios del siglo XX con el descubrimiento de los primeros pozos petroleros, sin duda definió la trayectoria política. La presencia de gobiernos militares en dicha centuria, aunque fue un proceso proveniente de un pensamiento militar modernizado, no fueron dictaduras corporativas, sino de sectores de las fuerzas armadas que se hicieron con el poder y ciertamente dominantes dentro de la institución. Los cuarenta años de democracia liberal que prosiguieron desde 1959 sin duda marcan distancia con lo acontecido en los otros dos casos, pero desembocó finalmente en una crisis estructural que permitió la emergencia del liderazgo de Hugo Chávez desde las propias fuerzas armadas.

En Ecuador, la constante inestabilidad política que caracterizó al siglo XX, con sus respectivos golpes de Estado militares, sumado al histórico enfrentamiento entre las elites costeñas y serranas, no permitieron la efectiva construcción de un proyecto hegemónico como en el caso venezolano, pero dieron a las fuerzas armadas, especialmente al ejército, un papel preponderante en la sociedad y un importante poder económico que tuvo una continuidad en el siglo XXI. Las políticas neoliberales de finales de siglo dieron pie al surgimiento del importante movimiento indígena que, a diferencia del caso boliviano, no fue el que tomó el poder en el contexto del ciclo de gobiernos de izquierda.

Por su parte, Bolivia, marcada en su dirección política y mutilada territorialmente por dos guerras con sus vecinos, tuvo un importante proyecto de construcción de hegemonía a

mediados del siglo XX. La Revolución Nacional, que casi provoca la desaparición de las fuerzas armadas, permitió el resurgimiento de estas para que en los años sesenta tomaran el poder en el contexto de la guerra fría y las políticas hegemónicas de Estados Unidos sobre la región. Tras la transición a la democracia, surgió un poderoso movimiento indígena precisamente en el país con mayor proporción de población originaria en América Latina. Este movimiento finalmente logró tomar las riendas del Estado y construir un auténtico proyecto de hegemonía.

Precisamente, en términos de construcción de hegemonía, bajo el gobierno de Hugo Chávez Venezuela tuvo un proyecto que a largo plazo cambió la ideología de la sociedad. Esta ideología, fundamentada primeramente en la referencia a los héroes de la historia nacional, dio el salto al socialismo del siglo XXI. Este logró permear al conjunto del Estado, incluyendo a la Fuerza Armada. El proceso sin embargo requirió de cambios profundos sobre la institución militar y el pensamiento de la oficialidad venezolana.

En Ecuador, aunque hubo un proceso de construcción de ideología, el gobierno de Rafael Correa no logró realizar cambios sobre la estructura de la sociedad ecuatoriana. Los sectores hegemónicos de Ecuador, aunque fuera del poder y del control del Estado durante diez años, no vieron afectadas las estructuras de dominación que posibilitan su hegemonía. Al mismo tiempo, aunque hubo intentos por cambiar a la institución militar y hacerla parte del proceso de cambio, el pensamiento militar ecuatoriano, altamente influido por la estrategia militar estadounidense, no cambió en lo fundamental, limitándose a cambios más bien administrativos.

En Bolivia, el gobierno de Evo Morales logró realizar cambios profundos en la sociedad, posibilitados en parte por la debilidad de la oposición de derecha, pero también por la fortaleza del movimiento indígena que sostuvo al gobierno de Morales. Durante este periodo, hubo cambios importantes en las fuerzas armadas, tanto en términos ideológicos como en la relación entre el poder político y el militar. Esto permitió al gobierno del MAS encontrar en la institución castrense a un aliado del proyecto político. Sin embargo, las inercias del viejo régimen, que en el pasado había permeado completamente a los militares, dieron como resultado el apoyo de las fuerzas armadas al golpe de Estado de 2019.

Por otro lado, el ejercicio de la hegemonía estadounidense si bien, no siempre es determinante, sí es fundamental para entender eventos como los golpes de Estado o procesos de inestabilidad. La emergencia de un bloque contrahegemónico en el que se pueden adscribir los tres casos en cuestión también exigió un reacomodamiento de la estrategia militar estadounidense sobre la región en su proyecto de dominación global. Los intereses por los recursos de los tres países ponen a los tres casos en el ojo de los estrategas norteamericanos.

En Venezuela, el golpe de Estado de 2002, si bien organizado por los sectores conservadores del sistema político venezolano, contó con el apoyo de Estados Unidos. Dicho apoyo se extendió más allá del golpe, con financiamiento encubierto que ha permitido la elaboración de intentos por desestabilizar al gobierno bolivariano, si bien estos no han sido fructíferos. Consecuentemente, vemos la elaboración de una estrategia *desde fuera*, por medio de la adaptación de las políticas hacia Venezuela, de una tolerancia al chavismo a una política de asedio militar y diplomático a partir de 2015.

Aunque no fue objeto de este trabajo, cabe mencionar a modo de reflexión la importancia geopolítica de Venezuela y el cambio de estrategia *cuando sea necesario*, refiriendo puntualmente a los recientes acercamientos (al momento de escribir estas líneas) entre Estados Unidos y Venezuela en el contexto de la guerra en Ucrania y la necesidad de buscar nuevos (o viejos) fuentes de petróleo y gas.

Sobre el caso ecuatoriano, aunque no vemos la injerencia directa de Estados Unidos, su presencia se evidencia con la base militar de Manta antes del gobierno de Correa. El cierre de dicha base sin duda fue un golpe a la estrategia militar de Estados Unidos sobre la región y un cuestionamiento a sus políticas de dominación sobre el territorio. Si bien, en Ecuador no existieron intentos de golpe formales, más allá del de 2010, se puede hablar de una estrategia *desde dentro* en tanto los militares mantienen una alineación a las políticas de Washington. En ese sentido, resulta más que anecdótico el hecho de que una vez fuera del poder, los militares volvieron a tener reuniones con los mandos del Southcom. Este realineamiento vuelve a poner a Ecuador en el eje de las políticas hegemónicas de Estados Unidos sobre la región.

Finalmente, el caso boliviano nos muestra que la construcción de un bloque contrahegemónico no está exenta de retrocesos. Aún después de haber realizado cambios ideológicos en las fuerzas armadas, las inercias de una ideología construida en medio de la guerra fría, fuertemente asimilada por los militares, permitieron que estos apoyaran un golpe de Estado en el cual de nueva cuenta se hizo notar la injerencia de Estados Unidos. Sin embargo, el caso también pone en el centro que cambios societales profundos no pueden ser fácilmente revertidos. El regreso del MAS al poder por su parte pone en entredicho la futura relación entre el poder político y el militar.

Podemos decir que la pregunta de investigación ha sido contestada satisfactoriamente. En el trabajo se abordó el papel de las fuerzas armadas en los procesos de transformación política de los tres casos de estudio. Igualmente, el objetivo general de la investigación se cumplió al analizar dicho papel de la institución castrense.

En cuanto a la hipótesis, esta no se comprobó completamente. Aunque sí hubo nuevas concepciones de seguridad nacional y visiones específicas sobre el papel de las fuerzas armadas, esto se expresó material y estratégicamente en Venezuela y Bolivia, aunque no completamente en Ecuador. Por otro lado, se comprueba que la transformación de la institución armada fue profunda en Venezuela y se puede especificar que en Ecuador fue superficial y Bolivia constituye un caso intermedio. Igualmente, se comprueba que en Venezuela se promueve un cambio de régimen “desde fuera”, en Bolivia pudimos observar una estrategia “desde dentro”, pero no se puede afirmar lo mismo para el caso ecuatoriano, en el que la salida del poder del proyecto político por medios no militares no permite dar cuenta de esta estrategia, aunque se podría hablar de una estrategia “desde dentro” no en el sentido militar, sino del político-electoral, lo que, sin embargo, no era el sentido de la hipótesis original.

En suma, el papel de las fuerzas armadas en países que pretenden realizar cambios políticos resulta fundamental si dichos cambios pretenden construir hegemonía o contrahegemonías. Aunque desde una perspectiva ideal el poder militar deba ser contenido e incluso eliminado, debe aceptarse su presencia y su factor determinante en la sociedad.

En nuestra región, por lo tanto, se debe tener presente que ese sector tiene una historicidad y politicidad que no debe ser ignorada.

Ahora bien, de la presente investigación se desprenden nuevas líneas de investigación y temáticas de reflexión respecto a América Latina. Una de ellas es el abordaje de la perspectiva abordada en países con otras trayectorias nacionales y hegemónicas, por ejemplo, en Colombia, Chile o Brasil, donde las fuerzas armadas y el poder político generan contradicciones y tensiones distintas a las vistas en los tres casos de estudio.

Igualmente, aunque no fue planteado como tal en el presente trabajo, se puede mencionar la perspectiva teórica de la *securitización*, que sin duda enriquece el estudio de las fuerzas armadas y que se puede decir que sus distintas formas hacen que las fuerzas armadas se desborden a otros aspectos, por ejemplo, con corporaciones privadas con lógicas armadas y militares.

Por otro lado, el trabajo queda pendiente en ampliar la discusión de la crisis hegemónica de Estados Unidos. Desde aquí se sostiene que la decadencia de la hegemonía estadounidense está ligada a la crisis civilizatoria y del capitalismo, aunque estas deben ser bien diferenciadas. Dicha crisis, además, podrá dar lugar a reacciones conservadoras impulsadas desde el poder mundial, en un intento por mantener dicha hegemonía. Aunque en términos gramscianos, esto pueda representar el desequilibrio del consenso, inclinándose más hacia la coerción en la búsqueda de mantener el poder.

En ese sentido, sin duda el futuro de la región latinoamericana es incierto y se puede esperar una dicotomía de avances y retrocesos, tanto si hablamos de gobiernos de izquierda o progresistas, e incluso las propias derivas de estos, como en las luchas y resistencias llevadas desde abajo. El papel de las fuerzas armadas, por su parte, seguirá siendo importante en tanto posibles defensores -o no- del orden establecido.

## Referencias

- Abecia Valdivieso, V. (2002). Aspectos importantes de la política internacional de Bolivia 1825-1987. *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, 85 (337), 147-179.
- Agee, P., Galarza, J. y Herrera, F. (2014). *La CIA contra América Latina. Caso especial: Ecuador*. Quito, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
- Althusser, L. (1970). *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. México, Quinto Sol.
- Andrews, C. (2009), Sobre conservadurismo e ideas conservadoras en la primera República Federal (1824-1835). En Pani, E. (coord.) *Conservadurismo y derechas en la historia de México*. México, FCE-CONACULTA, 86-134.
- Archondo, R. (2007). La ruta de Evo Morales. *Nueva Sociedad*, (209), 82-99.
- Asamblea Nacional (2009). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, (5908 Extraordinario) Caracas, Imprenata Nacional.
- Asamblea Nacional (2000-2016). Leyes de presupuesto. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, Caracas, Imprenta Nacional. consultadas en: <https://transparenciave.org> y <http://www.onapre.gob.ve/index.php/publicaciones/descargas/viewcategory/26-leyes>
- Ayala Mora, E. (2008). *Resumen de Historia del Ecuador*. Quito, Corporación Editora Nacional. Recuperado de: <https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/836>
- Ayala Mora, E. (2011). *Ecuador del siglo XIX. Estado nacional, ejército, iglesia y municipio*. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar-Corporación Editora Nacional.
- Baéz, S., Ospina, p., Ramón, G. (2004). *Una breve historia del espacio ecuatoriano*. Quito, Instituto de Estudios Ecuatorianos.
- Baptista Gumucio, M. (1996). *Breve historia contemporánea de Bolivia*. México, FCE.
- Barragán, R., Mendieta, P., Urcullo, A., Manani, R. (2014a). Organizando la República naciente. En Barragán, R., Lema, A. M., Mendieta, P. (coords.). *Bolivia, Su historia. Tomo IV. Los primeros cien años de la República 1825-1925*, La Paz, Coordinadora de Historia-La Razón.



- Barragán, R., Mendieta, P., Urcullo, A., Manani, R. (2014b). Otras prácticas: soberanía de los pueblos y participación política. En Barragán, R., Lema, A. M., Mendieta, P. (coords.). *Bolivia, Su historia. Tomo IV. Los primeros cien años de la República 1825-1925*, La Paz, Coordinadora de Historia-La Razón.
- Battaglino, J. (2015). Políticos y militares en los gobierno de la nueva izquierda sudamericana. *Política y gobierno*, 22(1), 3-43.
- Bautista U, D. (1993). *Pueblo y petróleo en la política venezolana del siglo XX*, Caracas, Monte Ávila Latinoamericana.
- BBC (2015). Ecuador: aprueban enmiendas a la Constitución que incluyen la autorización de la reelección indefinida. BBC, consultado en: [https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151203\\_ecuador\\_asamblea\\_reeleccion\\_ep](https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151203_ecuador_asamblea_reeleccion_ep)
- Benítez Manaut, R (2003). Avances y límites de la seguridad hemisférica a inicios del siglo XXI. *Revista CIDOB d'Afers Internacionals*, (64), 49-70.
- Bistoletti, E, L. (2011). *Estudio sobre los orígenes del chavismo: El ascenso político del movimiento encabezado por Hugo Chávez en perspectiva sociopolítica*. Saarbrücken, Editorial Académica Española.
- Bonilla, H. (1991). Perú y Bolivia. En Bethell, L. (ed.). *Historia de América Latina 6. América Latina independiente, 1820-1870*, Barcelona, Crítica.
- Cajías, D., Barragán, R., Lema, A. M. (2014). La educación a principios de la República. En Barragán, R., Lema, A. M., Mendieta, P. (coords.). *Bolivia, Su historia. Tomo IV. Los primeros cien años de la República 1825-1925*, La Paz, Coordinadora de Historia-La Razón.
- Cajías, M. (2004). La implantación del poder militar y el retorno de la democracia (1964-1982). En Cajías (coord.). *Bolivia, Su historia. Tomo VI. Constitución, desarrollo y crisis del estado de 1952*, La Paz, Coordinadora de Historia-La Razón.
- Camacho Solís, G. S. (2022). *Entre los procesos políticos de Alianza País y UNES. Un estudio entográfico de la campaña política de la Revolución Ciudadana en el Centro-Sur de*

- Quito (2020-2022). Tesis de Maestría de Investigación en Estudios Latinoamericanos. Universidad Andina Simón Bolívar.
- Campione, D. (2005). Hegemonía y contrahegemonía en la América Latina de hoy. Apuntes hacia una nueva época. *Sociohistórica*, (17), 13-36.
- Carrera Damas, G. (1976). *La renovación de los estudios históricos, el caso de Venezuela*. México, SEP.
- Ceceña, A. E. (2002). Estrategias de dominación y planos de construcción de la hegemonía mundial. *La globalización económico-financiera. Su impacto en América Latina*, Buenos Aires, CLACSO, 159-177.
- Ceceña, A. E. (2004). Estrategias de construcción de una hegemonía sin límites. Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI. Buenos Aires, CLACSO, 20-32.
- Ceceña, A. E. (2008). *Hegemonía, emancipaciones y políticas de seguridad en América Latina*. Lima, Programa Democracia y Transformación Global.
- Ceceña, A. E. (2009). Geopolítica. En Sader E., Jinkins I., et. al. (coord). *Enciclopedia contemporánea de América Latina y el Caribe*. Akal-CLACSO-Boitempo, Madrid, 592-603.
- Ceceña, A. E. (2013). La dominación de espectro completo sobre América. *Patria*, Quito 1(1), 43-59.
- Ceceña, A. E. (2016). La territorialidad de las corporaciones. En Ceceña A. E y Ornelas R (coord.). *Las corporaciones y el sistema-mundo. El capitalismo monopolista y la economía mexicana en retrospectiva*. México, Siglo XXI, 108-133.
- Ceceña, A. E. y Barrios, D. (2017). *Venezuela, ¿invadida o cercada?*, México, UNAM.
- Ceceña, A. E. y Ornelas, R. (2017). *Chevron. Paradigma de la catástrofe civilizatoria*. México, Siglo XXI-UNAM.
- Ceceña, A. E., Yedra, R. y Barrios, D. (2009). *El águila despliega sus alas de nuevo. Un continente bajo amenaza*. Quito, OLAG-Fedaeps.
- Ceppi, N. (2014). La política exterior de Bolivia en tiempos de Evo Morales Ayma. *Si Somos Americanos*, 14(1), 125-151.

- Chávez, H. (2004). *Taller de Alto Nivel "El nuevo mapa estratégico"*, Caracas, Ministerio de Comunicación e Información.
- Chávez, H. (2013). *El libro azul*, Caracas, Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
- Chávez, H. (2013). La propiedad patria. En Rico, M. A. y Álvarez, M. A. (coomp.). *La Propiedad social base del socialismo. Discursos del Comandante Hugo Chávez Frías*. Caracas.
- Chávez, H. (2014). Yo invito a todos a que sigamos aportando nuestro esfuerzo para continuar fortaleciendo la independencia nacional en todos los ámbitos de la vida del país: Discurso ante la Asamblea Nacional Memoria y Cuenta 2011. En *Hugo Chávez. La construcción del Socialismo del siglo XXI: discursos del Comandante Supremo ante la Asamblea Nacional (1999-2012)*. Tomo 4. Caracas, Fondo Editorial de la Asamblea Nacional-EFICEM, 411-578.
- Chávez, H. *Taller de Alto Nivel. El Nuevo Mapa Estratégico*. Caracas, Ministerio de Comunicación e Información.
- Coalición No Bases (2010). *Llukshy Yamkee, Fuera Yankee. Propuesta de acciones no violentas contra bases militares extranjeras. El caso de Manta en Ecuador*, Quito, Coalición No Bases.
- Cockcroft, J. D. (2001). *América Latina y Estados Unidos. Historia y política país por país*. México, Siglo XXI.
- Colàs, P. (2019). Una aproximación historiográfica al "caudillo" Andrés de Santa Cruz. *Naveg@mérica* [en línea], (22).
- Comandancia en jefe (s/f.). *Plan "Sucre". Líneas generales del plan de desarrollo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la defensa integral de la nación*. Caracas, Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
- Constante, S. (2014). La agencia de EEUU para el Desarrollo internacional sale de Ecuador. *El País*, consultado en: [https://elpais.com/internacional/2014/05/20/actualidad/1400592120\\_316130.html](https://elpais.com/internacional/2014/05/20/actualidad/1400592120_316130.html)

- Constante, S. (2016). Rafael Correa mide su poder con las Fuerzas Armadas. El País, consultado en: [https://elpais.com/internacional/2016/09/01/america/1472764437\\_592400.html](https://elpais.com/internacional/2016/09/01/america/1472764437_592400.html)
- Correa, R. (2009). Discurso en la toma de posesión presidencial. *Revista Casa de las Américas* (257), 5-17.
- Cortes, M. (2012). El Leviatán Criollo: Elementos para el análisis de la especificidad del Estado en América Latina. En Thwaites Rey, M. (ed.). *El Estado en América Latina: Continuidades y rupturas*, Santiago, CLACSO, 93-115.
- Cox, R. W. (2016). Gramsci, hegemonía y relaciones internacionales: Un ensayo sobre el método. *Relaciones Internacionales*, (31), 137-203.
- Cueva, A. (1985). *El desarrollo del capitalismo en América Latina*. México, Siglo XXI.
- Cueva, A. (2003). Ecuador: 1925-1975. En González Casanova, P. (coord.). *América Latina: historia der medio siglo. 1. América del Sur*. México, Siglo XXI.
- Deas, M. (1991). Venezuela, Colombia y Ecuador. En Bethell, L. (ed.). *Historia de América Latina 6. América Latina independiente, 1820-1870*, Barcelona, Crítica, 175-201.
- Deas, M. (1992). Ecuador, c. 1880-1930. En Bethell, L. (ed.). *Historia de América Latina 10. América del Sur, 1870-1930*, Barcelona, Crítica, 304-313.
- Deas, M. (1992). Venezuela, c. 1880-1930. En Bethell, L. (ed.). *Historia de América Latina 10. América del sur, 1870-1930*, 315-329.
- Department of State (1999). Background Notes: Venezuela. Consultado en: [https://1997-2001.state.gov/background\\_notes/venezuela\\_1299\\_bgn.html#relations](https://1997-2001.state.gov/background_notes/venezuela_1299_bgn.html#relations)
- Department of State (2016). U.S. Relations With Ecuador. Consultado en: <https://2009-2017.state.gov/r/pa/ei/bgn/35761.htm>
- Díaz Cardona, F. E. (1988). *Fuerzas Armadas, militarismo y constitución nacional en América Latina*. México, UNAM.
- Donís Ríos, M. (2018). Venezuela colonial. En Pino Iturrieta, E. (Coord.). *Historia mínima de Venezuela*. México, COLMEX, 21-86.

- Doxrud, J. (2016). El Socialismo del Siglo XXI, los ideólogos: Alexander Buzgalin y Heinz Dieterich. *Liberty and Knowledge*. Consultado en: <http://www.libertyk.com/blog-articulos/2016/7/11/iv-el-socialismo-del-siglo-xxi-los-idelogos-alexander-buzgalin-y-heinz-dieterich-por-ian-doxrud>
- Echeverría, B. (2011). La modernidad múltiple. *Crítica de la modernidad capitalista*. La Paz, Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
- El País (2011). Ecuador expulsa a la embajadora de EEUU por un cable de Wikileaks. El País, consultado en: [https://elpais.com/internacional/2011/04/05/actualidad/1301954417\\_850215.html](https://elpais.com/internacional/2011/04/05/actualidad/1301954417_850215.html)
- El Universo (2018). Altos oficiales del Comando Sur se reúnen con el Gobierno y militares ecuatorianos en Quito. El Universo, consultado en: <https://www.eluniverso.com/noticias/2018/03/26/nota/6686218/altos-oficiales-comando-sur-se-reunen-gobierno-militares/>
- Ellis, R. E. (2017). America's Strategy for Latin America and the Caribbean. *ASPJ Africa & Francophonie*. 2<sup>nd</sup> Quarter, 10-31.
- Ellner, S. (2014). *El fenómeno Chávez, sus orígenes y su impacto (hasta 2013)*. Caracas, Centro Nacional de Historia.
- Esteve, G. Babones, S. y Babicky, P. (2013). *The Future of Development. A Radical Manifesto*. Bristol, Policy Press.
- Europa Press (2021). El ELN habría financiado la campaña del candidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz. Madrid, Europa Press, Consultado en: <https://www.europapress.es/internacional/noticia-eln-habria-financiado-campana-candidato-presidencial-ecuatoriano-andres-arauz-20210130190808.html>
- Ewell, J. (2002). Venezuela, 1930-1990. En Bethel (ed.). *Historia de América Latina 16. Los países andinos desde 1930*, Barcelona, Crítica, 301-356.
- Faundes, C. (2015). La construcción del poder nacional en la Bolivia de Evo Morales (2006-2014). *Revista UNISCI*, (38), 125-154.

- Fernández, J. M. (2007). Los procesos de independencia en los países andinos: Ecuador y Bolivia. En Chust, M. y Serrano, J. A. (Eds.). Debates sobre las independencias iberoamericanas. Madrid, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos.
- Fiallo, M. (2019). Fuerzas Armadas del Ecuador no se doblegan al socialismo del siglo XXI. *PanamPost*, consultado en: <https://panampost.com/mamela-fiallo/2019/10/16/fuerzas-armadas-ecuador-socialismo/>
- Fonseca, B., Polga-Hecimovich, J. y Trinkunas, H. A. (2016). *Venezuelan Military Culture*. Miami, Florida International University-Southcom.
- Forgacs, D. (2000). *The Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935*. Nueva York: New York University Press.
- Fraser, D. (2011). *Posture Statement of General Douglas M. Fraser, United States Air Force Commander, United States Southern Command*. Washington, Southcom, consultado en: <https://www.airandspaceforces.com/PDF/testimony/Documents/2011/March%202011/033011fraser.pdf>
- Fraser, D. (2012). *Posture Statement of General Douglas M. Fraser, United States Air Force Commander, United States Southern Command*. Washington, Southcom, consultado en: <https://www.airandspaceforces.com/PDF/testimony/Documents/2011/March%202011/033011fraser.pdf>
- Gabbert, K y Martínez, A. (coomp.) (2018). *Venezuela desde adentro. Ocho investigaciones para un debate necesario*. Quito, Fundación Rosa Luxemburgo.
- Garay Vega, C. y Ramos, F. (2015). Las relaciones civiles-militares y el proyecto ideológico bolivariano en Venezuela (1999-2014). *Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad*, 11(1), 239-261.
- García Linera, Á. (2015). El Estado y la vía democrática al socialismo. *Nueva Sociedad*, (259), 143-161.

- Golinger, E. (2007). USAID en Bolivia y Venezuela: la subversion silenciosa. *Rebelión*, consultado en: <https://rebellion.org/usaaid-en-bolivia-y-venezuela-la-subversion-silenciosa/>
- Golinger, E. (2014). The Dirty Hands of the National Endowment for Democracy (NED) in Venezuela, *Venezuelanalysis*, consultado en: <https://venezuelanalysis.com/analysis/10641>
- González, M. (2014). Morales vuela a La Paz tras la crisis diplomática por el caso Snowden. *El País*, consultado en: [https://elpais.com/internacional/2013/07/03/actualidad/1372811536\\_087887.html](https://elpais.com/internacional/2013/07/03/actualidad/1372811536_087887.html)
- Gramsci, A. (1981). *Cuadernos de la cárcel*. Tomo 2. México, Era.
- Gramsci, A. (1984). *Cuadernos de la cárcel*. Tomo 3. México, Era.
- Gramsci, A. (1986). *Cuadernos de la cárcel*. Tomo 4. México, Era.
- Gramsci, A. (1999). *Cuadernos de la cárcel*. Tomo 5. México, Era.
- Gramsci, A. (2000). *Cuadernos de la Cárcel*. Tomo 6. México, Era.
- Granja, M. A., y Manzano, L. S. (2022) El presupuesto e industria para la defensa ecuatoriana, una mirada del antes y después de la constitución de Montecristi. *Revista de la Academia de Guerra del Ejército Ecuatoriano*, 15(1), 76-133.
- Hale, C. A. (1991). Ideas políticas y sociales en América Latina, 1870-1930. En: Bethell, L. (ed.). *Historia de América Latina 8. América Latina: cultura y sociedad, 1830-1930*. Crítica, Barcelona, 1-64.
- Harnecker, M. (2003). *Venezuela. Militares junto al pueblo*. Madrid, El Viejo Topo.
- Harvey, D. (2005). El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión. *Socialist Register* 2004. Buenos Aires, CLACSO, 99-129.
- Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid, Akal.
- Hernández, C. E. (2020). El gobierno interino de Bolivia clausura la Escuela Antiimperialista de las FFAA. *Infodefensa*, Consultado en: <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3129051/gobierno-interino-bolivia-clausura-escuela-antimperialista-ffaa>

- Hernández, I (2019). *De Bolívar a Marx, trayectoria ideológica de la revolución bolivariana*. México, Proyecto Literal.
- Herrera, D. (2020). *El siglo del Americanismo: Una interpretación histórica y geoestratégica de la hegemonía de los E.U.* México, Akal.
- Ibarra, H. (2016). El eclipse de la revolución ciudadana ante las elecciones de 2017. *Ecuador Debate* (99), 7-14.
- IISS (2000-2017). *The Military Balance*. Londres, Taylor & Francis.
- Infodefensa (2011). El jefe del Comando Sur de EEUU visita Ecuador. *Infodefensa*, consultado en: <https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/3145860/jefe-comando-sur-eeuu-visita-ecuador>
- Irwin, D. y Micett, I. (2008). *Caudillos, militares y poder. Una historia del pretorianismo en Venezuela*. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello.
- Jácome, F. *Fuerza Armada, Estado y Sociedad Civil en Venezuela*. Caracas, ILDIS.Oficina en Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert.
- Jiménez, R. (2021). Doctrina de Seguridad Nacional en Ecuador: Influencia y relaciones Estado-Fuerzas Armadas. *Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa*, 6(1), 22-39.
- Kaplan, M. (1969). *Formación del Estado Nacional en América Latina*. Santiago, Editorial universitaria.
- Kaplan, M. (1996). *El Estado latinoamericano*. México, UNAM.
- Klein, Herbert S. (1992) Bolivia, desde la guerra del Pacífico hasta la guerra del Chaco, 1880-1932. En Bethell, L. (ed.). *Historia de América Latina 10. América del Sur, 1870-1930*, Baelona, Crítica.
- Klein, Herbert S. (2015). *Historia mínima de Bolivia*. México, El Colegio de México.
- Kuijt, Dirk. (2012). Las Fuerzas Armadas en América Latina, antes y hoy. *Ciencia Política*, 7(14), 94-112.
- Laime, J. O. (2004). Crisis del Estado de 1952, consolidación de la democracia y emergencia de nuevos movimientos sociales (1982-1999). En Cajías (coord.). *Bolivia, Su historia. Tomo VI. Constitución, desarrollo y crisis del estado de 1952*, La Paz, Coordinadora de Historia-La Razón.



- Lara, J. S. (2010). *Breve historia contemporánea del Ecuador*. Bogotá, FCE.
- Linares, M. M. (2010). Interculturalidad en las Fuerzas Armadas?. *Revista Integra Educativa*, 3(1), 173-195.
- López Portillo, F. (1986). *El perezjimenismo: Génesis de las dictaduras desarrollistas*, México, UNAM.
- Machado, D. y Zibechi, R. (2016). *Cambiar el mundo desde arriba: Los límites del progresismo*. La Paz, CEDLA.
- Maduro, N. (2014). Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, (6156 Extraordinario)*. Imprenta Nacional. (19-41).
- Maduro, N. (2017) Decreto con rango, valor y fuerza de Ley N°7 mediante el cual se dicta el presupuesto para el ejercicio económico financiero 2017, en el marco del Estado de excepción y emergencia económica. *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, (6263 extraordinario)*. Imprenta Nacional.
- Marini, R. M. (2008). Dialéctica de la dependencia. *América Latina, dependencia y globalización. Fundamentos conceptuales Ruy Mauro Marini*. Bogotá, Siglo del Hombre-CLACSO.
- Mendieta, P. (2014). La Guerra Federal. En Barragán, R., Lema, A. M., Mendieta, P. (coords.). *Bolivia, Su historia. Tomo IV. Los primeros cien años de la República 1825-1925*, La Paz, Coordinadora de Historia-La Razón.
- Mendieta, P. (2014). La modernización del sistema político. En Barragán, R., Lema, A. M., Mendieta, P. (coords.). *Bolivia, Su historia. Tomo IV. Los primeros cien años de la República 1825-1925*, La Paz, Coordinadora de Historia-La Razón.
- Mendieta, P. y Lema, A. M. (2014). Los liberales enfrentan un nuevo siglo. En Barragán, R., Lema, A. M., Mendieta, P. (coords.). *Bolivia, Su historia. Tomo IV. Los primeros cien años de la República 1825-1925*, La Paz, Coordinadora de Historia-La Razón.
- Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa (2008). *Hacia una nueva política de seguridad interna y externa*. Quito, Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa.

- Ministerio de Defensa Nacional (2014). *Agenda política de la Defensa 2014-2017*. Quito, Ministerio de Defensa Nacional.
- Ministerio de Defensa Nacional (2017). *Plan estratégico institucional de la Defensa 2014-2017*. Quito, Ministerio de Defensa Nacional.
- Ministerio de Defensa. (2010). *Bases para la Discusión de la Doctrina de Seguridad y Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia*. La Paz, Ministerio de Defensa.
- Ministerio de Defensa. (2016). *Plan estratégico institucional del Ministerio de Defensa 2016-2020*. La Paz, Ministerio de Defensa.
- Ministerio de Economía y Finanzas (2022). *Ejecución presupuestaria*. Quito, consultado en: <https://www.finanzas.gob.ec/ejecucion-presupuestaria/>
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2022). *Ejecución presupuestaria*. La paz, Consultado en: [https://sigep.sigma.gob.bo/sigep\\_publico/faces/SFprEjecucionPresupuestaria](https://sigep.sigma.gob.bo/sigep_publico/faces/SFprEjecucionPresupuestaria)
- Ministerio de Finanzas (2010). *Manual de procedimientos del sistema de presupuestos*. Quito, consultado en: [https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/A2\\_MANUAL\\_PROCED-SISTEMA\\_PRESUPUESTO.pdf](https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/A2_MANUAL_PROCED-SISTEMA_PRESUPUESTO.pdf)
- Ministerio de Planificación del Desarrollo (2016). *Lineamientos metodológicos para la formulación de los planes estratégicos de las Fuerzas Armadas*. La Paz, Ministerio de Planificación del Desarrollo.
- Modonesi, M. (2015). Fin de la hegemonía progresista y giro regresivo en América Latina. Una contribución gramsciana al debate sobre el fin de ciclo. *Viento Sur*, (142), 23-30.
- Molina F. (2020). El Gobierno de Bolivia advierte a una semana de las elecciones de que “las Fuerzas Armadas están listas”. *El País*. Consultado en: <https://elpais.com/internacional/2020-10-12/el-gobierno-de-bolivia-advierte-a-una-semana-de-las-elecciones-de-que-las-fuerzas-armadas-estan-listas.html>
- Molina, F. (2018). Patria o muerte. Venceremos. El orden castrense de Evo Morales. *Nueva Sociedad* (278), 119-129.

- Moncayo, V. M. (2012). ¿Cómo aproximarnos al Estado en América Latina?. En Thwaites Rey, M. (ed.). *El Estado en América Latina: Continuidades y rupturas*, Santiago, CLACSO, 19-49.
- Morales, E. (2010). Vivir Bien no es lo mismo que Vivir Mejor. Entrevista al Presidente Evo Morales Ayma, con motivo de la aprobación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En Ministerio de Relaciones Exteriores (ed.). *Vivir Bien. Mensajes y documentos sobre el Vivir Bien 1995-2010*. La Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores, 9-10.
- Mouffe, C. (1998). Hegemonía, política e ideología. En Martín del Campo, J. L. (coord.). *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina* (Seminario de Morelia). México, Siglo XXI, 125-145.
- Müller Rojas, A. (2003). La nueva cara de la Fuerza Armada. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, 9(3), 179-204.
- Muñoz Pandiella, L. (2020). El Gobierno de Bolivia militariza las calles ante las marchas convocadas por los cocaleros. *France 24*. Consultado en: <https://www.france24.com/es/20200117-bolivia-gobierno-cocaleros-marchas>
- Negroponte, J. (2007). *Annual Threat Assessment and U.S. National Security Challenges*. Washington, Department of State, consultado en: <https://2001-2009.state.gov/s/inr/rls/79065.htm>
- Nesbet M, F. (2010). *Influencia militar reformista en Latinoamérica (1992-2007). Casos de Ecuador, Perú y Venezuela*. Tesis de Maestría, México, UNAM.
- Nesbitt, W., Packard, R., Trass, K. y Goodman, M. (1997). *U.S. National Security Strategy for South America*. Washington, National War College.
- Núñez, J. (2012). El país de Quito: de tierra de conquista a Patria criolla. En: Borrero, A. L. (ed.). *Historia de Ecuador y América Latina: Estudio de casos*. Cuenca, Universidad de Cuenca.
- O'Donnell, G. (1996). *El Estado burocrático-autoritario*. Buenos Aires, Belgrano.

- Ordoñez, C. D. (2016). *Las Fuerzas Armadas en el período de la Revolución Ciudadana (2007-2016)*. Programa de Maestría en Relaciones Internacionales, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar.
- Padilla F, A. (2019). Venezuela entre la hegemonía y la contra-hegemonía. *Textos e debates* 32(1), 175-198
- Paz, J. J. y Cepeda, M. (2015). El “socialismo del siglo XXI” en Ecuador. *Boletín del THE-taller de historia económica*. Quito, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Peixoto de Oliveira, Renata. (2017). La reconfiguración neoliberal en su vertiente neoconservadora: desafíos y retos para las democracias latinoamericanas. En Vidal de la Rosa (coord.). *Política latinoamericana contemporánea*. Universidad Autónoma Metropolitana, 613-644.
- Pérez, D. (2018). Fuerzas Armadas en Ecuador. Ideología, políticas públicas y diálogo civil militar. En Namihas, S. (ed.). *El nuevo rol de las fuerzas armadas en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú*. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú-Konrad Adenauer Stiftung, 101-138.
- Pino Iturreta, E. (2018). El siglo XIX o los “tumbos” del republicanismo. En Pino Iturrieta, E. (Coord.) *Historia mínima de Venezuela*. México, COLMEX, 87-140.
- Plan V (2018). ¿Ecuador en la red del Comando Sur de Estados Unidos?. *Plan V*, consultado en: <https://www.planv.com.ec/historias/sociedad/ecuador-la-red-del-comando-sur-estados-unidos>
- Ponce Silva, K. y García Macías, P. (2018). Continuidad del pensamiento marxista en A. Gramsci. Hegemonía y grupos hegemónicos en Ecuador (2007-2017). *Revista Economía* 70 (111), 95-110.
- Portelli. H. (1977). *Gramsci y el bloque histórico*. México, Siglo XXI.
- Primicias (2021). ELN: Esta es la información que el fiscal colombiano entregó a Ecuador. Quito, *Primicias*, Consultado en: <https://www.primicias.ec/noticias/lo-ultimo/fiscal-colombiano-viaja-ecuador-supuesto-aporte-andres-arauz/>

- Quintero M, I. (2018). El siglo XX: conquista, construcción y defensa de la democracia. En Pino Iturreta, E. (Coord.) *Historia mínima de Venezuela*. México, COLMEX, 141-231.
- Quintero, C. E. *La Doctrina Militar para la seguridad y defensa de Venezuela. Revisión a partir de las actuales formas de violencia política en las relaciones internacionales*. Trabajo Especial de Grado. Caracas, Universidad Central de Venezuela.
- Rea Campos, C. R. (2016). Complementando racionalidades: la nueva pequeña burguesía aymara en Bolivia. *Revista mexicana de sociología*, 78 (3), 375-407.
- Reuters. (2008). La cúpula militar de Ecuador dimite en una pugna con Correa. *Reuters*, consultado en: <https://www.reuters.com/article/oestp-politica-ecuador-militares-idESLAR97088720080409>
- Roca, J. L. (2011). *Ni con Lima ni con Buenos Aires. La formación de un Estado nacional en Charcas*. La Paz, Institut français d'études andines.
- Rocabado, J. (2012). La seguridad ciudadana en Bolivia: ¿hay espacio para las Fuerzas Armadas?. *URVIO, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*, 25-40.
- Rocabado, J. (2018). Las Fuerzas Armadas de Bolivia en un contexto internacional en transformación, 2006-2018. En Namihás, S. (ed.). *El nuevo rol de las fuerzas armadas en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú*. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú-Konrad Adenauer Stiftung, 139-170.
- Rodríguez, Frank. (2011). Marcos Pérez Jiménez y Gustavo Rojas Pinilla: Dos modelos de dictaduras desarrollistas en América Latina. *Anuario de Historia Regional y de las Fronteras*, (16), 317-328
- Romano, S., Lajtman, T., García Fernández, A. y Tirado, A (2019). *EE.UU. y la construcción del golpe en Bolivia*. CELAG.
- Romero R, Y. (2020). *Civiles y militares en la Revolución Bolivariana*. Tesis de licenciatura, México, UNAM.
- Romero, C. (2006). *Las relaciones de seguridad entre Venezuela y Estados Unidos: entre la diplomacia y el conflicto*. Caracas, Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.

- Romero, R. (2014). ¿Escuela de las Américas o Escuela de Violadores de Derechos Humanos?. *Estudios Centroamericanos*, 69(739), 301-319.
- Rouquié, A. (1984). *El estado militar en América Latina*. México, Siglo XIX.
- Rouquié, A. y Suffern, S. (1997) “Los militares en la política latinoamericana desde 1930”. En, Bethell, L (ed.). *Historia de América Latina 12. Política y sociedad desde 1930*, Barcelona, Crítica, 281-341.
- Roux, R. (2002). Subalternidad y hegemonía. Gramsci y el proceso estatal. *Veredas*, 38 (39), 147-158.
- Safford, F. (1991). Política, ideología y sociedad. En Bethell, L. (ed.). *Historia de América Latina 6. América Latina Independiente 1820-1870*. Crítica, Barcelona, 42-104.
- Salazar Lohman, H. (2013). *La formación histórica del movimiento indígena campesino boliviano: los vericuetos de una clase construida desde la etnicidad*. Buenos Aires, CLACSO.
- Sánchez Vazquez, A. (1983). La ideología de la “neutralidad” ideológica en las ciencias sociales. En: *Ensayos marxistas sobre filosofía e ideología*. México, Océano, 139-164.
- Santos, B. De Sousa (2010). *Refundación del Estado en América Latina: Perspectivas desde una epistemología del Sur*. México, Siglo XXI.
- Santos, N. (2017). Genealogía y modernización de las fuerzas armadas en el Ecuador. *Ciencia Política*, 12(24), 51-75.
- Schavelzon, S. (2012). *El nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Etnografía de una Asamblea Constituyente*. La Paz, CLACSO-Plural.
- Schoettler, W. V., Rezende da Silva, A., Chavero, P. y Ugo Santander, C. (2022). Geopolítica regional y soberanía nacional: la salida de la base militar estadounidense de Manta en Ecuador en 2009. *Revista Humanidades e Inovação*, 9(17), 175-187.
- Seelke, C. (2014). *Bolivia: In Brief*. Washington, Congressional Research Service.
- SIPRI (2022). Arms Transfers Database. Solna. Consultado en: <https://www.sipri.org/databases/armstransfers>
- Southcom (s.f.). *History*. Consultado en: <https://www.southcom.mil/About/History/>

- Soux, M. L., Seoane de Capra, A. M., Barragán, R., Claire, R. A., Siñani, R. M. (2014). Independencia: Un complejo y largo proceso. En Soux, M. L. (coord.). *Bolivia, Su Historia. Tomo III. Reformas, rebeliones e independencia 1700-1825*, La Paz, Coordinadora de Historia-La Razón.
- Stavridis, James. (2007). *Posture Statement od Admiral James G. Stavridis, United States Navy Commandes, United States Southern Command*. Washington, Southcom, consultado en: [https://www.globalsecurity.org/military/library/congress/2007\\_hr/070321-stavridis.pdf](https://www.globalsecurity.org/military/library/congress/2007_hr/070321-stavridis.pdf)
- Stefanoni, P. (2009). Álvaro García Lienra: Pensando Bolivia entre dos siglos. En Stefanoni, P. (coomp.) *La potencia plebeya. Acción colectiva e identidades indígenas, obreras y populares en Bolivia*, Bogotá, Siglo del Hombre-CLACSO, 9-26.
- Telesur (2014). Grupo militar de EE.UU. deberá salir de Ecuador hasta fines de abril. *Telesur*, consultado en: <https://www.telesurtv.net/news/Grupo-militar-de-EE.UU.-debera-salir-de-Ecuador-hasta-fines-de-abril-20140425-0025.html>
- Tibocha, A. M. y Jaramillo-Jassir, M. (2008). La Revolución Democrática de Rafael Correa. *Análisis Político* 21(64), 22-39.
- Tirado S, A. (2019). *Venezuela, Más allá de mentiras y mitos*. Madrid, Akal.
- Trinkunas, H. A. (2005). *Crafting Civilian Control of The Military in Venezuela. A Comparative Perspective*. Chapel Hill, The University of North Carolina Press.
- Trinkunas. H. A. (2005). The Crisis in Venezuelan Civil-Military Relations: From Punto Fijo to the Fifth Republic. *Latin American Research Review*, 37(1).
- Vanhulst, J. (2015). El laberinto de los discursos del Buen Vivir: entre Sumak Kaway y Socialismo del siglo XXI. *Polis [En línea]* (40).
- Vásquez, W. y Rezende, A. (2020). La reconstitución de la política por la Revolución Ciudadana en el Ecuador: Hegemonía, discurso y política internacional previos a la toma del poder. *Revista Eletrônica do Programa de Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Violência*. 29(1), Brasilia, 154-176.

- Vázquez, J. Z. (1997). Liberales y conservadores en México: diferencias y similitudes. *Estudios Interdisciplinarios De América Latina Y El Caribe*, 8(1).
- Vera Rios, M. (2013). El ejército ecuatoriano, modernización y proyección hacia el futuro. *El ejército Nacional*, (193), 4-9.
- Viceministerio de Planificación y Desarrollo para la Defensa (2022). *Industria militar*. Consultado en: [http://www.mindefensa.gob.ve/viplanificacion?page\\_id=59](http://www.mindefensa.gob.ve/viplanificacion?page_id=59)
- Wallerstein, I. (2005). *Análisis de sistemas-mundo: Una introduccion*. México, Siglo XXI.
- Whitehead, L. (2002). Bolivia, 1930-1990. En Bethell, L. (ed.). *Historia de América Latina 16. Los países andinos desde 1930*, Barcelona, Crítica.
- Wilhelm, C. (2000). *Posture Statement of General Charles E. Wilhelm, United States Marine Corps Commander in Chief, United States Southern Command*. Washington, Southcom, consultado en: [https://irp.fas.org/congress/2000\\_hr/00-03-23wilhelm.htm](https://irp.fas.org/congress/2000_hr/00-03-23wilhelm.htm)
- Zavaleta, R. (2003). Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia (1932-1971). En Gonzalez Casanova, P. (coord.). *América Latina: historia de medio siglo. 1. América del Sur*. México, Siglo XXI.
- Zavaleta, R. (2009). El Estado en América Latina. En: *La autodeterminación de las masas*, Bogotá, Siglo del Hombre-CLACSO, 321-355.